

**CUADERNOS
DEL INSTITUTO
ANTONIO DE NEBRIJA**

**CUADERNOS
DEL INSTITUTO
ANTONIO DE NEBRIJA**

**DE ESTUDIOS SOBRE
LA UNIVERSIDAD**

7

2004

**UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
EDITORIAL DYKINSON**

Directora:

Adela Mora Cañada (Univ. Carlos III)

Redacción:

Carolina Rodríguez López (Univ. Carlos III) y Manuel Martínez Neira (Univ. Carlos III)

Consejo Asesor:

P. Alonso Romero (Univ. de Salamanca), A. Álvarez de Morales (Univ. Autónoma de Madrid), M. Á. Bermejo Castrillo (Univ. Carlos III), G. P. Brizzi (Univ. Bolonia), J. R. Cruz Mundet (Univ. Carlos III), E. Fernández García (Univ. Carlos III), E. González González (Universidad Nacional Autónoma de México), P. Grossi (Univ. di Firenze. Italia), E. Hernández Sandoica (Univ. Complutense), R. L. Kagan (John Hopkins University. USA), M.^a E. Lage de Resende (Univ. Federal de Minas Gerais. Brasil), Dámaso de Lario, E. López-Aranguren Quiñones (Univ. Carlos III), M. Lucena (Univ. de Alcalá de Henares), E. Martínez Ruiz (Univ. Complutense), A. Mazzacane (UNISTORIA. Italia), G. Peces-Barba Martínez (Univ. Carlos III), J. L. Peset Reig (CSIC), M. Peset Reig (Univ. de València), A. Rodríguez de las Heras (Univ. Carlos III), M. Rodríguez Piñero (Univ. de Huelva), L. E. Rodríguez-San Pedro Bezares (Univ. de Salamanca), A. Romano (Univ. di Messina. Italia), M.^a Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos (Univ. Carlos III), J. M. Scholz (Max-Planck-Institut. Alemania), D. Soto Arango (Univ. de Tunja. Colombia), J. Urrutia Elejalde (Fundación Urrutia Elejalde) y E. Villalba Pérez (Univ. Carlos III).

Esta edición se realiza gracias al patrocinio del Banco Santander Central Hispano

Publicación incluida en el catálogo Latindex

© Edita: Instituto Antonio de Nebrija de estudios sobre la universidad
Universidad Carlos III de Madrid
C/ Madrid, 126 - 28903 Getafe (Madrid) España
Tel: 916 249 797 - Fax: 916 249 517
e-mail: anebrija@der-pu.uc3m.es
Internet: www.uc3m.es/uc3m/inst/AN/anebrija.html

Suscripciones y venta: Editorial Dykinson, S.L.
Meléndez Valdés, 61 - 28015 Madrid
Tels. (+34) 915 44 28 46 / (+34) 915 44 28 69
e-mail: info@dykinson.es
<http://www.dykinson.es>
<http://www.dykinson.com>
Diseño de cubierta: Emilio Torné.

Depósito legal: M. 46.047-1998
ISSN:1139-6628

ÍNDICE

	<u>Págs.</u>
ESTUDIOS	
La historia del derecho romano de Castillejo. A propósito de su reimpresión. <i>Consuelo Carrasco García</i>	11
El doctorado en derecho privado en la Universidad de Sevilla. La lógica del presente sobre los hechos del pasado. <i>César Hornero Méndez</i>	35
La Universidad de Marañón. <i>Antonio López Vega</i>	65
Contexto doctrinal de las primeras cátedras de derecho del trabajo en España. <i>M.^a José María e Izquierdo</i>	91
Sobre los orígenes de la enseñanza de la historia del derecho en la universidad italiana. <i>Manuel Martínez Neira</i>	117
Notas sobre la historia de la enseñanza del derecho en Estados Unidos. <i>Ana María Merico-Stephens</i>	155
El nacimiento de la prensa estudiantil en la ciudad de Valencia. <i>German Perales Birlanga</i>	173
El plan republicano en la facultad de derecho de Madrid. <i>José M.^a Puyol Montero</i>	197
La historia antigua en la enseñanza: los ejercicios públicos de historia literaria en los Reales Estudios de San Isidro. <i>Mirella Romero Recio</i>	235

BIBLIOGRAFÍA

<i>Annali di Storia delle università italiane</i> (Carolina Rodríguez López)	265
J. Claret Miranda, <i>La repressió franquista a la Universitat de Barcelona</i> (Raúl Aguilar Cestero)	266
J. R. Cruz Mundet, <i>Archivos Universitarios e historia de las Universidades</i> (Pablo Marín Escudero).....	269
J. L. Llaquet de Entrambasaguas, <i>La Facultad de Cánones de la Universidad de Cervera</i> (Ramon Aznar i Garcia)	271
M. Martínez Neira, J. M. Puyol Montero y C. Rodríguez López, <i>La Universidad Española 1889-1939. Repertorio de legislación</i> (Antonio Merchán Álvarez).....	272
P. Marzal Rodríguez, <i>Los claustros de doctores y catedráticos del Estudio general (1675-1741)</i> (Manuel Martínez Neira).....	275
A. Mora Cañada y C. Rodríguez López (eds.), <i>Hacia un modelo universitario. La Universidad Carlos III de Madrid</i> (Esmeralda Muñoz Sánchez e Isidro Sánchez Sánchez)	275

	<u>Págs.</u>
J. Murilo de Carvalho, <i>A Escola de Minas de Ouro Preto. O peso da Glória</i> (Carolina Rodríguez López)	279
I. Naso (ed.), <i>Alma felix universitas studii taurinensis. Lo Studio generale dalle origini al primo cinquecento</i> (Manuel Martínez Neira)	282
M. Gigliola Di Renzo Villata (ed.), <i>Formare il giurista. Esperienze nell'area lombarda tra Sette e Ottocento</i> (Manuel Martínez Neira)	284
C. Schoukens (ed.), <i>Archives, universités, monde étudiant: une mémoire en construction</i> (José Ramón Cruz Mundet)	285
E. Signori, <i>Minerva a Pavia. L'ateneo e la città tra guerre e fascismo</i> (Carolina Rodríguez López)	286

VARIA

Actividad del Instituto.....	291
Resúmenes.....	295
Publicaciones recibidas	301
Presentación de originales	303

ESTUDIOS

LA HISTORIA DEL DERECHO ROMANO DE CASTILLEJO. A PROPÓSITO DE SU REIMPRESIÓN

Sumario: 1. Preliminares.—2. La persona.—3. La obra: un antes y un después.

1. *Preliminares*

El pasado año tuve la oportunidad de hacer una recensión, en esta misma revista, al epistolario de Max Radin, editado por Carlos Petit¹. Entonces, como ahora, las cartas se erigían en documento precioso para el conocimiento de la persona y la obra de un jurista, a la vez que nos aproximaban a la comprensión del estado de la ciencia jurídica en un determinado momento y lugar². En aquella ocasión las cartas sirvieron para darnos a conocer más de cerca la personalidad de un romanista judeo-americano, Max Radin (1880-1950), facilitándonos, asimismo, ahondar en el estado de la romanística europea de la primera mitad del siglo XX. Supimos, de este modo, de algunas de las vicisitudes, profesionales y personales, por las que pasaron eminentes juristas como los alemanes Ernst Levy (1881-1968), Fritz Schulz (1879-1957), Wolfgang Kunkel (1902-1981); los franceses Paul Collinet (1869-1938), André Giffard (1876-1958), François Gény (1861-1959); los ingleses William W. Buckland (1859-1946), Francis de Zulueta (1878-1958), Herbert Felix Jolowicz (1890-1954), y los italianos Pietro Bonfante (1864-1932) y su discí-

¹ Véase C. Petit, *Max Radin. Cartas romanísticas (1923-1950). Estudio y edición con una nota de lectura sobre «California y el Derecho romano»*, Napoli, Jovene editore, 2001. Mi recensión en *Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad*, n.º 6 (2003), pp. 278-284.

² Acerca de la aceptación de los epistolarios como fuente de importancia para la historia del pensamiento jurídico Véase C. Petit, «‘Je südlicher desto barbarischer’. El Gayo auténtico de Cristina Vano», *Initium. Revista catalana d’història del dret*, n.º 6 (2001), pp. 423-436.

pulo Pietro Ciapessoni (1881-1943), Giovanni Pacchioni (1867-1946), Vincenzo Arangio-Ruiz (1884-1964), Salvatore Riccobono (1864-1958), entre muchos otros.

Imposible es mencionar a españoles, pues ningún español se encontraba entre los romanistas con quienes Radin, desde el continente americano, intercambiaba periódica información acerca de novedades editoriales, asistencia a congresos, colaboración en publicaciones periódicas, u otras cuestiones que pudiesen afectar a una ciencia jurídica viva³.

En el caso de la obra que da lugar al presente escrito, *Historia del Derecho romano*⁴, ha sido la correspondencia del jurista español José Castillejo y Duarte (1877-1945) la que ha servido al profesor Abellán Velasco para acercarse y acercarnos a la personalidad de este catedrático de Derecho romano, maestro de eminentes romanistas como Urcisino Álvarez Suárez⁵ o Álvaro d'Ors⁶, creador⁷, ade-

³ Francis de Zulueta (1878-1958) aunque de origen español, ejerció su magisterio como jurista en Oxford (*Professor of Civil Law* 1919-1948). Entre sus trabajos en materia romanística destacan varias publicaciones sobre la compraventa romana. Estudioso y editor del *Liber pauperum* de Vacario. Véase W. H. Beck, «Francis de Zulueta», *Tulane Law Review*, n.º 33 (1958-1959).

⁴ J. Castillejo, *Historia del Derecho romano. Política, Doctrinas, Legislación y Administración*, Edición facsímil con un estudio preliminar de Manuel Abellán Velasco, Madrid, Dykinson, 2004.

⁵ Ursicino Álvarez Suárez (1907-1980). Catedrático de Derecho romano en la Universidad Central de Madrid, marcó con su obra *Horizonte actual del Derecho romano*, publicada en Madrid en 1944, un hito en la investigación romanística. Véase A. D'Ors, «nota necrológica», *AHDE* 51 (1981), pp. 824-825. Sobre la obra *Horizonte actual del Derecho romano*, véase recensión de Hernández-Tejero, *AHDE* 15 (1944) pp. 787-793.

⁶ Álvaro d'Ors (1915-2004). Catedrático de Derecho romano en las Universidades de Granada (1943), Santiago de Compostela (1944), Coimbra y, desde 1961, de la Universidad de Navarra. Miembro del Consejo de dirección de diversas revistas (*Emerita*, *Anuario de Historia del Derecho español*, *IURA*, *Internationale des Droits de l'Antiquité*, entre otras). Maestro de eminentes romanistas, y autor de una abundante producción de literatura jurídica (*Presupuestos críticos para el estudio del Derecho romano*, *Introducción al estudio de los documentos del Egipto romano*, *Epigrafía jurídica de la España romana*, *Papeles del oficio universitario*, son algunas de sus obras). Véase R. Domingo, «Álvaro d'Ors (1915-2004). *In memoriam*», Navarra, 2004, pp. 17-23; M. J. García Garrido, «Recordando a Don Álva-

más, junto con otros, en el seno de la Institución Libre de Enseñanza, de la Junta para la Ampliación de Estudios, y coetáneo de algunos de esos juristas extranjeros antes mencionados.

En su extenso estudio preliminar (61 páginas) a este facsímil de la edición de 1935, Manuel Abellán hace un minucioso retrato del perfil personal y profesional de José Castillejo. Con ello, además de facilitarnos una mejor y más completa inteligencia de la mencionada obra *Historia del Derecho romano*, ha puesto de manifiesto cuál era el estado de la romanística española en el primer tercio del siglo XX, permitiéndonos caer en la cuenta de por qué entre los interlocutores de Radin era difícil encontrar a un investigador español, aunque algunos como Castillejo, pero no sólo él⁸, tuviesen méritos más que sobrados para ello⁹.

En efecto, muchas circunstancias hacían poco propicia en esos años la situación en España, para el cultivo de la investigación romanística. Por una parte, por la concepción de la Universidad que entonces imperaba, en la que primaba la función docente sobre la

ro», Álvaro d'Ors, *In memoriam*, Navarra, 2004, pp. 49-54; M. Talamanca, «Álvaro d'Ors, romanista», Álvaro d'Ors, *In memoriam*, Navarra 2004, pp. 55-61.

⁷ La Junta para la Ampliación de Estudios fue creada por R.D. de 11 de enero de 1907, siendo Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes Amalio Gimeno. En este momento sería nombrado Secretario de la misma D. José Castillejo, cargo que ostentaría hasta 1934.

⁸ Véase A. d'Ors, «Pro domo», *Labeo. Rassegna di diritto romano*, n.º 1, (1955), pp. 383-384, quien hace mención del historiador del Derecho Eduardo de Hinojosa, autor de una magnífica *Historia del Derecho romano*, y a Manuel Traviesas. Véase asimismo, J. L. Parrondo Pardo, «Horizonte actual del Derecho Romano», en *Estudios en Homenaje al profesor Ursicino Álvarez Suárez*, Madrid, 1978, pp. 363-365.

⁹ Se podría hacer la salvedad de que Castillejo como romanista no tiene una gran producción científica, siendo en el campo de la organización de la investigación donde desarrolló una importante labor. Véase R. Domingo, «Un siglo de Derecho romano en España», *Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca II*, Napoli, 2001, pp. 487-509. De hecho su única obra romanística es la *Historia del Derecho romano* que motiva estas páginas, pues aunque elaboró otro trabajo, sus «Notas para el estudio de la *legis actio sacramento*», trabajo que presentó en la oposición a la cátedra de Derecho romano de la Universidad de Sevilla, éste no fue objeto de publicación. Véase M. Abellán, *Estudio preliminar*, cit., p. XXVI.

investigadora¹⁰, por otra, por la resistencia al contacto con nuevas orientaciones metodológicas, como es el caso de la Escuela histórica del Derecho¹¹. También, por las trabas que se ponía a las estancias de los investigadores en el extranjero, estancias que habrían facilitado esos contactos¹², así como por la falta de medios aptos para una docencia seria¹³, y por los obstáculos a la introducción de reformas¹⁴. Que en semejante situación¹⁵, se gestase una obra como

¹⁰ A. d'Ors, «Pro domo», cit., p. 383.

¹¹ Significativa a este respecto es la epístola que José Castillejo dirige a su padre desde Alemania el 1 de agosto de 1903 «Creo que la Universidades españolas seguirán por mucho tiempo con sus asignaturas y sus programas, sus exámenes y sus dómynes. A esto tendré que acomodar mis trabajos, aunque en la medida de mis fuerzas mantenga siempre el espíritu revolucionario y me una a cuantos europeos encuentre en España en protesta continua contra semejante estado [...]. En cuanto al fondo, lo principal que de aquí sacaré será aprender a trabajar. Dudo mucho que yo encuentre público en España para los trabajos de Derecho germánico». Véase M. Abellán, *Estudio preliminar*, cit., p. XVIII.

¹² Situación que padeció personalmente José Castillejo, a quien le fue denegada por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes una subvención solicitada el 6 de abril de 1906 con el fin de ampliar estudios en Alemania; y ello pese a lo sugestiva que resultaba la memoria que presentó para la obtención de dicha ayuda: « José Castillejo y Duarte [...] expone, que para continuar sus estudios en Derecho privado general y de Derecho romano le sería sumamente útil visitar las universidades alemanas. Tiene en ellas lugar un renacimiento de los estudios que no encuentra semejante en ningún otro país. Frente a la dirección nacional germanista que coronan con sus recientes trabajos Brunner, Crone y Gierke, aparece la colosal de pandectistas y romanistas, obra que tan de cerca nos toca y tanto nos interesa...». Véase M. Abellán, *Estudio preliminar*, cit., p. XXI donde se recoge el texto íntegro.

¹³ Interesante es traer a colación la misiva que Castillejo dirige a Manuel Bartolomé Cossío desde Sevilla el 24 de febrero de 1908, para darle cuenta del hecho de no haber encontrado en la biblioteca de la Universidad de esta ciudad, ningún ejemplar de las Instituciones de Gayo. Véase M. Abellán, *Estudio preliminar*, cit., p. XXXIII, n. 117.

¹⁴ Es el caso de algunas de las propuestas docentes de Castillejo, que no siempre gozaron de buena acogida. Muchos problemas tuvo, entre otras cosas, por negarse a la realización de exámenes como medio de evaluación; por su negativa, también, a la imposición por parte del profesor de un libro de texto único; por la primacía que en sus clases otorgaba a los casos prác-

la de Castillejo, mucho más que un manual de Historia del Derecho romano, hace doblemente valiosos los méritos que la adornan. Por su estructura, y por su abundante y bien documentada información, que se ofrece al lector siempre pasada por el cedazo de una profunda reflexión. Pese a ello, la mencionada *Historia del Derecho romano* no es demasiado conocida ni, en consecuencia, suficientemente valorada por quienes cultivamos esta disciplina¹⁶. De ahí que merezca especial elogio el esfuerzo realizado por Manuel Abellán Velasco para reimprimirla, glosando, además, la figura de su autor. Con ello ha contribuido a saldar una deuda de gratitud que la romanística española tenía con José Castillejo. Pero, vayamos paso a paso.

2. *La persona*

Como anticipábamos, el instrumento del que se ha servido Manuel Abellán para proceder al retrato de Castillejo como romanista, pues sus actuaciones al frente de la Junta para la Ampliación de Estudios y la Institución Libre de Enseñanza, aunque mencionadas, son relegadas a un segundo plano, ha sido su correspon-

tos; por su fomento del trabajo individualizado con los alumnos, y por su aventura de proceder a la lectura en clase de textos sin traducir (latín, francés, entre otros).

¹⁵ A diferencia de lo que había ocurrido en otros períodos de nuestra historia; piénsese en el siglo XVI y en el estrecho contacto de algunos de nuestros más eminentes juristas con las corrientes imperantes «más allá de los Pirineos». Este es el caso del filólogo Antonio de Agustín (1517-1586), de cuyos trabajos en torno al manuscrito florentino de las Pandectas se hicieron eco los investigadores del continente europeo. Véase J. A. Arias Bonet, «Los estudios del Derecho romano en España», *Labeo. Rassegna di Diritto romano*, 5 (1959), pp. 258-261. Véase, también, E. de Hinojosa, *Historia del Derecho romano según las más recientes investigaciones*, Madrid, 1880, p. 9.

¹⁶ Significativo es al respecto, el hecho de que ningún ejemplar de esta obra hubiese entre los fondos bibliográficos del Instituto de Estudios Jurídicos (organismo que se subrogó en las tareas de organización de la investigación de la Junta para la Ampliación de estudios) que, como legado, recibió la Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid. Véase M. Abellán, *Estudio preliminar*, cit., p. V, n. 8.

dencia¹⁷. Correspondencia que ofrece noticias de casi toda la vida de José Castillejo, y que tiene como principales destinatarios, o en su caso remitentes, a su padre, Daniel Castillejo, y a Francisco Giner de los Ríos, figura clave en la vida de Castillejo¹⁸, así como a otras personalidades como el historiador y jurista Rafael de Altamira, o a Julián Martínez, de la *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*. También a Manuel Bartolomé Cossío, Laureano Díez Canseco y Leopoldo Palacios, institucionistas todos como Castillejo, entre muchos otros. Misivas éstas que han sido publicadas bajo la supervisión de uno de los hijos de Castillejo, David Castillejo Claremont¹⁹.

La personalidad que estas cartas muestran, ya desde los primeros años de su formación académica, es la de un alumno concienzudo, interesado no sólo en llevar a buen término sus estudios en Derecho y Filosofía y Letras, licenciaturas ambas que conseguiría, y con muy buenas calificaciones, en 1899 y 1900 respectivamente²⁰, sino que nos presentan a una persona interesada por la cultura toda. Preocupada por el logro de una formación integral, que llevaría al joven Castillejo a asistir a clases de sociología y otras materias en el Ateneo, impartidas por eminentes figuras de la época como Azcárate, Menéndez Pelayo o Leopoldo Alas, y a acudir, asimismo, a las

¹⁷ Se ha optado por tratar con mayor detenimiento el período de la vida de Castillejo que se extiende hasta 1910, período de su formación como jurista y profesor de Universidad, que el que transcurre a partir de esa fecha, años en los que la JAE y la ILE ocuparon la mayor parte de su tiempo. Véase M. Abellán, *Estudio preliminar*, cit., p. XL.

¹⁸ Este primer encuentro tuvo lugar el 8 de noviembre de 1900. A partir de entonces la relación entre ellos fue tan estrecha que «marcaría el devenir personal y académico de José Castillejo hasta la muerte de Giner, y con posterioridad a ella, ya que Castillejo fue uno de los promotores y continuadores de las ideas y la obra de Giner de los Ríos en orden a la renovación de la pedagogía y la enseñanza en España». Véase M. Abellán, *Estudio preliminar*, cit., pp. X y XV.

¹⁹ *Epistolario de José Castillejo. I. Un puente hacia Europa-1896-1909. II. El espíritu de una época-1910-1912. III. Fatalidad y porvenir 1913-1937*, Madrid, Editorial Castalia, vol. I (1997), Vols. II y III (1999).

²⁰ De todo ello ofrece prolija información M. Abellán, *Estudio preliminar*, cit., pp. VI-VII, n. 12, donde recoge el extracto del expediente académico de José Castillejo, tanto en la licenciatura de Derecho, como en la de Filosofía y Letras (asignaturas y calificaciones obtenidas).

sesiones de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, donde tendría la oportunidad de conocer a importantes juristas y políticos del momento²¹.

Preciso es decir que cuando años más tarde acudiese al Ateneo lo haría como orador; además de que en la *Revista General de Legislación y Jurisprudencia* (sección «Revista de Revistas») se haría cargo, desde 1903 a 1907, de las recensiones de las publicaciones alemanas, algunas de temas estrictamente jurídicos como por ejemplo la titulada *Sobre el llamado derecho de revisión de los parientes en el proyecto de Código civil húngaro*, pero también de otras materias como la relativa a *El patrimonio. Determinación jurídica de algunos conceptos económicos fundamentales*²².

Esta avidez de Castillejo por lograr una formación «más que jurídica» puede responder, además de a una inquietud personal, al hecho de haber cursado sus estudios de Jurisprudencia al amparo de los planes de estudio de la Universidad liberal en los que, junto a materias estrictamente jurídicas, los alumnos habían de cursar otras de formación general²³. Así se refleja en el expediente académico de Castillejo en el que se hace referencia a la realización de unos «Estu-

²¹ Véase M. Abellán, *Estudio preliminar*, cit., p. VIII, n. 14 donde refiere una carta de Castillejo a su padre fechada el 26 de marzo de 1897 «El año que viene, teniendo aprobado ya el primer curso de Derecho civil, podré entrar en la Academia de Jurisprudencia, donde hay también muy buenas discusiones».

²² Véase M. Abellán, *Estudio preliminar*, cit., p. XXIV, n. 55.

²³ Es el plan de estudios de 1845 conocido como «Plan Pidal» el que instaaura por primera vez —aunque tenía su origen en un reglamento de 1821— el requisito, para quienes querían acceder a la Facultad de Jurisprudencia, de haber obtenido el título de bachiller en filosofía, además de haber cursado lengua latina, literatura y filosofía durante un año en las facultades de Filosofía o Institutos superiores. Acerca de este plan de estudios de 1845. Véase M. Peset Reig, «El plan Pidal de 1845 y la enseñanza en las Facultades de Derecho», *AHDE* 40 (1970), pp. 613-651. Rasgos fundamentales del mismo eran la secularización de la enseñanza, así como su gratuidad. Respecto de las facultades de Jurisprudencia, el plan de 1845 vino a recoger las líneas fundamentales de los planes anteriores, si bien otorgándoles un matiz humanista a los estudios, al ampliar el estudio del Derecho romano a dos cursos (primer año: «Prolegómenos del Derecho». Segundo año: «Continuación del Derecho romano»), y los ya mencionados preliminares de lengua latina, literatura y filosofía.

dios preparatorios» en los que se incluyen asignaturas como Metafísica, Literatura general española e Historia crítica de España. En éstas, como en las jurídicas, sus calificaciones serían brillantes²⁴.

En lo que a su formación como jurista y como filósofo se refiere, hay que añadir que en ambas obtendría el grado de doctor. Así, con una tesis sobre *Consideraciones de la codificación civil en Alemania* se doctoró en Derecho el 30 de junio de 1902²⁵, obteniendo el premio extraordinario de doctorado tras la realización de un examen sobre el tema *Contrato de trabajo. Principios para una legislación en esta materia*. Asimismo, con un estudio sobre *La educación en Inglaterra* se doctoraría en Filosofía y Letras unos años más tarde, en 1915²⁶.

Ahora bien, estos logros, lejos de suponer una meta en su recorrido para conseguir ser «un hombre culto y, a partir de ahí, un especialista serio», principio que guía todas sus actuaciones, como él mismo reconoce expresamente a su padre en una carta de 6 de

²⁴ Acerca de los planes de estudios liberales véase M. Martínez Neira, *El estudio del Derecho. Libros de texto y planes de estudio en la Universidad contemporánea*, Madrid, Universidad Carlos III/Editorial Dykinson, 2001, p. 150. Distingue Manuel Martínez Neira dentro de los planes de la Universidad liberal, dos períodos: primeros planes liberales (1842-1880), y segundos planes liberales (1883-1900). Acerca de ellos considera que: «Ambos coinciden en que la formación no es meramente técnica. Detrás de esta opción seguramente se encontraba una idea sobre el jurista, que era concebido como algo más que un simple técnico del derecho, que se imaginaba como clase dominante en la burocracia y en la política, en la empresa y en el bufete. Era una sociedad elitista y la cultura señalaba la superioridad de una clase rectora, y de alguna manera la legitimaba». Recordemos que Castillejo cursó sus estudios de licenciatura en derecho durante el período 1893-1899.

²⁵ No fue éste el trabajo previsto inicialmente para la obtención del grado de doctor, sino otro titulado *La forma contractual en el Derecho de sucesiones*. Curiosamente, este último no le sirvió para doctorarse en Derecho, si bien fue premiado en un concurso convocado por la Universidad Central para honrar la memoria del catedrático de Derecho civil Augusto Comas. Véase M. Abellán, *Estudio preliminar*, cit., pp. XII y XIII.

²⁶ J. Castillejo, *La educación en Inglaterra*, Colección Universidad de Madrid. Tesis inédita presentada en la Universidad de Madrid, Facultad de Filosofía y Letras, 1915. Véase M. Abellán, *Estudio preliminar*, cit., p. XLVIII, n. 140.

diciembre de 1903²⁷, son sólo los primeros pasos de una larga andadura que a partir de este momento ampliaría su recorrido a tierras extranjeras. Destacan como hitos en ese recorrido los que a continuación resaltamos por considerar que van a tener reflejo en la obra *Historia del Derecho romano*.

En 1903 obtuvo, tras superar con éxito los correspondientes ejercicios en la Universidad de Oviedo, una beca o pensión de un año de duración (abril 1903-abril de 1904), para realizar estudios en Alemania, concretamente, en las Universidades de Berlín y Halle²⁸. Durante esta estancia, en la que tendría como profesores a Otto von Gierke y Joseph Kohler, profundizaría en el estudio del Derecho privado y de los fundamentos filosóficos. Estancia que aprovechó para «preparar un esquema para unas oposiciones de Derecho romano, así como materiales para estudios de Derecho civil desconocidos en España, algunos de ellos referentes a la cuestión social». Trabajó, asimismo, «en la prehistoria del Derecho y en el Derecho comparado de los pueblos bárbaros y primitivos». Treinta años más tarde, cuando publique su *Historia del Derecho romano*, tratará en su primer capítulo de la «Prehistoria romana», y entonces tendrá oportunidad de servirse de los trabajos sobre Creta, sobre Mesopotamia, y sobre la civilización egipcia realizados cuando apenas contaba veintisiete años²⁹.

En mayo de 1904, interesado en profundizar en el aspecto social y económico del Derecho privado³⁰, regresa de nuevo a Alemania (Universidad de Halle), aconsejado por Giner de los Ríos, para asistir, en esta ocasión, a las clases del jurista y filósofo Rudolf Stamm-

²⁷ M Abellán, *Estudio preliminar*, cit., p. XX.

²⁸ La mencionada pensión, además de facilitarle la ansiada ampliación de estudios en el extranjero, le permitiría, tras dicha estancia y una vez presentada la correspondiente memoria de la misma, ingresar en el escalafón de los profesores auxiliares de Universidad y, a partir de ahí, la posibilidad de aspirar a una cátedra (art. 11 del R.D. de 18 de julio de 1901). Véase M. Abellán, *Estudio preliminar*, cit., p. XVI, n. 39.

²⁹ Véase J. Castillejo, *Historia del Derecho romano ... cit.*, pp. 21 y ss.

³⁰ Véase M. Abellán, *Estudio preliminar*, cit., p. XXV, n. 60 «En cada rama del derecho, de la política, de la economía, de la ciencia, del arte y de la Administración se da una cuestión social, o mejor dicho, un reflejo, un aspecto del problema social humano, parte a su vez del problema general de la vida», escribe Castillejo a su padre en abril de 1904.

ler (1856-1938). Fruto de esta experiencia verá la luz en 1904, en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, la publicación *Un curso con Stammler*, en la que muestra la metodología seguida por el jurista y filósofo alemán para la docencia del Derecho romano. Como era de esperar, el aprendizaje no se queda aquí, por el contrario contiene un *plus* a juzgar por cuanto relata Castillejo a Giner en una epístola de 25 de mayo de 1905 «Mañana vamos invitados al privatinimum de Stammler: ¡para leer a Kant!»³¹.

Una vez más aconsejado por Giner, y como consecuencia de la primera estancia alemana mencionada (1903-1904), en la que fue alumno de Kohler, iniciará la traducción de la obra de éste *Filosofía del derecho e historia universal del Derecho*; traducción que concluiría en 1910³².

El interés de Castillejo por la filosofía era patente. Así, en sus años vallisoletanos en los que coincidió con Laureano Díez Canseco, catedrático de Derecho natural, cuenta en distintas cartas que dirige tanto a su familia como a Giner de los Ríos, que «todas las tardes se reunían ambos para tratar de Filosofía del Derecho [...]. Tenían en mente hacer una clase en común con los chicos leyendo a Aristóteles»³³.

Tantos fueron sus intereses y tan interdisciplinar la formación que adquirió dentro y fuera de España que, creyéndose preparado para desempeñar las tareas docentes consustanciales a ellas, firmó las oposiciones a cátedra en materias tan distintas como: Economía y hacienda pública (Valladolid 1903), Historia del Derecho (Universidad Central de Madrid 1909), Sociología (Universidad Central de Madrid 1910), Política Social y Legislación Comparada del Trabajo, y Derecho Civil Español Común y Foral 1º y 2º (Universidad Central de Madrid 1916).

3. *La obra: un antes y un después*

Una vez que conocemos tantos detalles acerca de la persona estamos en mejores condiciones de comprender su obra y aprehender los matices de la misma. Y esto es, sin duda, mérito de Manuel Abe-

³¹ Véase M. Abellán, *Estudio preliminar*, cit., p. XXXVI, n. 98.

³² Véase M. Abellán, *Estudio preliminar*, cit., p. XII, n. 25.

³³ Véase M. Abellán, *Estudio preliminar*, cit., p. XLIV, n. 123.

llán Velasco quien, a modo de espejo, ha contribuido a poner frente a frente a Castillejo y su *Historia del Derecho romano*.

En efecto, todo este bagaje de conocimientos y experiencias descritas tenía que dejar, necesariamente, su impronta en una obra de madurez, vital e intelectual, como es la *Historia del Derecho romano* de José Castillejo. Finalizada para su publicación cuando éste contaba cincuenta y ocho años, es mucho más que un resumen, así la califica su autor³⁴, de la historia política y de las fuentes del Derecho de Roma.

Imbuido Castillejo de los principios de la Escuela histórica según los cuales es imposible comprender el presente de un pueblo y de su Ordenamiento jurídico desconociendo su concreto pasado, su devenir histórico, y todos aquellos factores que influyen en éste³⁵; y estando capacitado, como pocos otros, para abordar una exposición de la historia del Derecho romano que se ajustase a esos parámetros, su obra incorpora abundantes «referencias a los factores sociales, económicos, filosóficos y religiosos que han contribuido a formar las reglas del Derecho y son indispensables para interpretarlas»³⁶. Y ello con el auxilio de disciplinas como la Sociología, la

³⁴ Véase J. Castillejo, *Historia de Derecho romano ...*, cit., p. 6.

³⁵ Como es de todos sabido, la Escuela histórica del Derecho, encabezada por Savigny (1779-1861) se caracteriza por su profundo respecto a la historicidad de los fenómenos sociales y jurídicos. A diferencia del *Iusnaturalismo* para el que el Derecho consiste en un sistema de leyes naturales con validez universal, y de la *Science du droit*, que ve el Derecho como el producto de un legislador racionalista, la Escuela histórica adoptó como premisa metodológica una visión histórica de los Ordenamientos jurídicos que implica considerar el Derecho como manifestación del espíritu del pueblo, del *Volkgeist*, y resultado de la evolución histórica. Esta vocación historicista de la Escuela Histórica se habría hecho explícita ya al inicio de la obra de Savigny *Über den Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft* (1814), y se materializó en la fundación en 1814 de la *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft*, y la publicación, ese mismo año, del primer volumen de su *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter*. Véase *La Escuela histórica del Derecho (documentos para su estudio por Savigny, Eichorn, Gierke, Stammler)* (trad. del alemán por R. Atard, Madrid, 1908). Véase C. Carrasco García, «La *exceptio non numeratae pecuniae* en los tratados de pandectas del siglo XIX: una aproximación al método de la pandectística y sus resultados», *Labeo. Rassegna di Diritto romano*, n.º 49, (2003), pp. 160-194.

Geografía y Topografía, la Economía o la Filosofía, y sirviéndose, asimismo, de instrumentos tan distintos como las inscripciones y papiros o la numismática³⁷.

Así, la *Historia del Derecho romano*, circunscrita a la exposición de lo que desde Leibtniz se denomina «historia externa»³⁸, es un trabajo de quinientas veintisiete páginas dividido en cuatro grandes capítulos referidos a cada una de las etapas políticas que vivió Roma en sus trece siglos de historia (orígenes y monarquía; república; principado y monarquía absoluta), más un quinto dedicado a la transmisión y cultivo del Derecho romano.

Ahora bien, en el desarrollo de cada uno de ellos hasta llegar a la exposición de la organización política o constitucional, y de las consiguientes fuentes de producción jurídica, Castillejo pone de manifiesto su visión unitaria de la historia.

Así, cuando en el capítulo primero, que principia con una referencia a la prehistoria romana, se refiere a la estructura social, —consciente de que la organización política cambia a medida que lo hace la sociedad—, se detiene en la exposición de las diferencias entre patricios y plebeyos, la clientela, las gentilidades, las curias y las antiguas tribus. Lo mismo ocurre cuando refiere el régimen económico de esta época arcaica, recreándose en la descripción de los centros urbanos, la tierra y el trabajo, la industria y también el comercio. Para la época republicana, en materia de política económica, introduce referencias a la moneda y el crédito. Interesante es su exposición en el capítulo cuarto, dedicado a la monarquía absoluta, acerca del edicto de precios de Diocleciano. Como no podía ser de

³⁶ Ello con el propósito «de ensanchar el horizonte tradicional de estos estudios, y engarzarlos en el cuadro general de las ciencias históricas». Véase J. Castillejo, *Historia del Derecho romano...*, cit., p. 7.

³⁷ Véase J. Castillejo, *Historia del Derecho romano...*, cit., p. 5. «Cualesquiera que sean sus rasgos comunes, los sistemas de Derecho que conocemos han sido producto de complejos y peculiares factores: raza, historia, geografía, topografía, clima, economía, religión, influjo de otras civilizaciones que han contribuido a formar, para cada tiempo y cada pueblo, una conciencia colectiva acerca de lo que es justo o injusto».

³⁸ G.W. Leibnitz, *Nova methodus discendae docendaeque jurisprudentiae*, Leipzig 1748, II, § 29 «*Jurisprudentia historica vel interna vel externa: illa ipsam jurisprudentiae substantiam ingreditur, haec adminiculum tatum est requisitum*».

otro modo, especial atención dedica a la exposición de las corrientes filosóficas y teorías políticas; más de dieciocho páginas en el capítulo segundo en las que, partiendo de la evolución del pensamiento filosófico griego (Sócrates, Platón y Aristóteles), y sus teorías acerca de la organización política, expone con detalle la utilización de éstas para interpretar la organización constitucional romana, esto es, la *res publica* como constitución mixta³⁹, y ello tanto por parte de autores griegos (Polibio, s. II a. C.), como romanos (Cicerón s. I a. C.). También en el capítulo tercero relativo al principado, refiere con minuciosidad las teorías filosóficas de cínicos, estoicos y epicúreos. Asimismo tienen su lugar en la *Historia del Derecho romano* de Castillejo las cuestiones religiosas (culto al emperador; cultos orientales; aparición y efectos del cristianismo).

Se va a distanciar, de este modo, de la mayoría de los tratados que hasta ese momento habían sido utilizados en España para la docencia del Derecho romano. Generalmente obra de civilistas que, considerando el Derecho romano como «fundamento del Derecho vigente», habían de abordar la exposición de su historia como preámbulo a las Instituciones justinianas, si bien limitándose a referir la organización constitucional y las fuentes del Derecho; sin ninguna consideración de otros factores de índole social, económica, filosófica o religiosa que pudieron haber condicionado ese Ordenamiento.

Este es el caso de la obra de Gómez de la Serna⁴⁰, a la que, dicho esto, no se le puede negar el mérito de haber fomentado el prestigio del Derecho romano en España⁴¹. Y es que, efectivamente, ayuna la

³⁹ Véase J. Castillejo, *Historia del Derecho romano...*, cit., pp. 142 y ss.

⁴⁰ P. Gómez de la Serna, *Curso histórico-exegético del Derecho Romano comparado con el español*, 2 vols., Madrid, 1848; 2ª ed. 1856; 3ª ed. 1863. Se compone esta obra de dos partes: I. Introducción histórica al estudio del Derecho romano. II. Instituciones del emperador Justiniano. La primera de ellas se divide en cuatro capítulos: 1. Desde la fundación de Roma hasta las Leyes de las Doce Tablas. 2. Desde la publicación de las Doce Tablas hasta Cicerón. 3. Desde Cicerón hasta el período de Alejandro Severo. 4. Desde Alejandro Severo hasta Justiniano. En todos ellos sigue el mismo esquema: Orígenes del Derecho, Estado del Derecho, Cultura del Derecho.

⁴¹ R. Domingo, «Un siglo de Derecho romano en España...», cit., p. 487. Estos son algunos de los elogios que del Derecho romano hace Gómez de la Serna en el prólogo a su *Curso histórico-exegético...*, cit.: «Monumento colosal en que están aglomerados la experiencia de siglos, y los trabajos científicos de varones eminentes, es la legislación madre, y a la vez

romanística española de mediados del XIX de obras que facilitasen su docencia, excepción hecha de las clásicas del holandés Vinnio (1586-1657) y el alemán Heinecio (1681-1741), anteriores al hallazgo de las *Instituta* de Gayo, es justo reconocer que el *Curso histórico-exegético de Derecho romano* de Gómez de la Serna sirvió, sin duda, para colmar esa laguna. Junto a ésta estaba el *Curso completo elemental de Derecho romano* de Ruperto Navarro Zamorano, Rafael Joaquín de Lara y José Álvaro de Zafra⁴² que, igualmente, se estructuraba en dos partes («Historia interna del Derecho romano-historia externa o antigüedades»). Entre las de autores extranjeros, la *Explicación histórica de la Instituta del emperador Justiniano*, de Joseph Louis Elzèar Ortolán, y los *Elementos del derecho romano*, del alemán Ferdinand Mackeldey, cuyo contenido era, según reza la portada de la edición española de 1845, «La teoría de la Instituta, precedida de una introducción al estudio del mismo derecho»⁴³; como las demás, se limitaba a la exposición de formas de gobierno y fuentes del derecho⁴⁴. A principios del siglo XX apareció la *Introducción al estudio de las Instituciones de Derecho romano* del civilista Felipe Clemente de Diego⁴⁵. La *Historia del Derecho romano* de Castillejo, por sus contenidos y método, va a suponer una quiebra en esta tradición.

un depósito inagotable de doctrinas para el filósofo, para el arqueólogo, para el filólogo y para el historiador»; «Más que ley de un pueblo lo es del género humano»; «Su enseñanza es reputada como base del estudio de la jurisprudencia. Pero para nosotros no es sólo un modelo; es además bajo cierto aspecto una parte de nuestro Derecho nacional»; «El Derecho romano, pues, ó bien se le considere bajo el aspecto científico, ó bien bajo el puramente práctico, es indispensable al jurista español, que sin él ni conocerá la ciencia a que se dedica, ni podrá penetrar en los orígenes de las leyes, ni comprenderá su filosofía, ni su sentido verdadero, ni será por lo tanto capaz de aplicarlas con acierto».

⁴² R. Navarro Zamorano-R. J. de Lara-J.A. de Zafra, *Curso completo elemental de Derecho romano*, 2 vols., Madrid, 1842.

⁴³ F. Mackeldey, *Elementos del Derecho romano*, Madrid, 1845.

⁴⁴ Obras como las *Lecciones de historia de la legislación romana desde los tiempos más remotos hasta nuestros*, de José María Antequera y relativa exclusivamente a la Historia externa, se caracterizaban por ser muy elementales. J. M. Antequera, *Lecciones de historia de la legislación romana desde los tiempos más remotos hasta nuestros días*, Madrid, 1845; 2ª ed. 1855.

De la utilización de las obras citadas para la docencia del Derecho romano junto con las de Vinnio⁴⁶ y Heinecio⁴⁷, en la segunda mitad del XIX, tenemos conocimiento gracias al sistema de listas vigente en la Universidad liberal española de 1845 a 1868⁴⁸; práctica ilustrada de prescribir los libros con que debía estudiarse cada materia⁴⁹. De su uso a comienzos del siglo XX tenemos noticia a tra-

⁴⁵ F. Clemente de Diego, *Introducción al estudio de las instituciones de Derecho romano*, Madrid, 1900.

⁴⁶ A. Vinnius, *Institutionum Imperialium libri IIII notis illustrati; accedunt in eosdem libros Iohann Gottlieb Heineccii. I. C. Recitationes, et syntagmatis antiquitatum romanarum compendium suis locis particulatim appositum. In usom scholae valentinae*. 4 vols., Valencia 1789-1790. Valencia 1826.

⁴⁷ J. G. Heineccius, *Tratado de las antigüedades romanas para ilustrar la jurisprudencia*, arreglado según el orden de las Instituciones de Justiniano, traducción de Francisco Lorente, 2 vols., Madrid, 1845; *Tratado de las antigüedades romanas para la ilustración de la jurisprudencia, dispuesto según el orden de las Instituciones de Justiniano*, traducción de Carlos Dicenta y Blanco, 3 vols., Madrid, 1845; *Elementa iuris civilis secundum ordinem Institutionum*, Leipsik, 1758 *Elementa iuris civilis secundum ordinem Pandectarum*, Madrid, 1807, 2 vols., Madrid 1836 *Recitationes in elementa iuris civilis secundum ordinem Institutionum*, 2 vols., Madrid, 1836 (1846, 47, 48, 49); *Historia iuris romani*, Madrid, 1808; Valencia 1825.

⁴⁸ El *Curso histórico-exegético del Derecho romano comparado con el español*, de Gómez de la Serna aparece en las listas de los libros prescritos para la docencia del Derecho de los años 1850, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 64, 67. La edición escolar de Vinnius *Institutionum Imperialium libri III ...*, cit., que incorpora las obras de Heinecius, aparece como obra prescrita en las listas de 1852, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 64 y 67. Véase M Martínez Neira, *El estudio del derecho...*, cit., p. 43.

⁴⁹ Si durante la edad media y gran parte de la moderna los estudios jurídicos se hacían directamente sobre los textos romanos o canónicos, fundamentalmente, la Ilustración, y su racionalismo trajo consigo un nuevo método y un nuevo instrumento: el libro de texto. Véase M. Martínez Neira, *El estudio del derecho...*, cit., pp. 16 y 30. Según los planes de estudio podía variar el máximo de libros prescritos por asignatura. Así por ejemplo, el «Plan Pidal» de 1845 prescribía un máximo de seis, otorgando preferencia, para el Derecho romano, a los libros en lengua latina. Véase M. Martínez Neira, *El estudio del Derecho*, cit., p. 21. El plan de 1850 (art. 39) reducía a tres el número de libros que debían aparecer en la lista de recomendados, bajo el pretexto de la uniformidad de la enseñanza en todos los centros universitarios. Véase M. Martínez Neira, *el estudio del Derecho ...*, cit., p. 27. Un decreto de 21 de octubre de 1868 declararía la absoluta libertad de textos.

vés del epistolario de Castillejo, pues cuando Giner de los Ríos le escribe en 1904 para recomendarle bibliografía con la que preparar su oposición a cátedra, le dice en tono irónico, «¡Admírese usted, las obras que consultan los candidatos españoles son, Ortolan⁵⁰, Laserna!⁵¹». Él, por el contrario le aconseja los trabajos de algunos de los más importantes representantes de la Escuela histórica: Savigny, Puchta, Hugo.

Estos trabajos no debían ser muy tenidos en cuenta por nuestra romanística, a pesar de la existencia de traducción española de alguno de ellos, como es el caso del *Sistema del Derecho romano actual* de Savigny⁵², a juzgar por los programas con los que algunos candidatos concursaban a las cátedras de Derecho romano. Así, cuando en 1905 Castillejo oposita a la cátedra de Sevilla lo hace con un programa de cincuenta y cinco lecciones, según el cual, a la «Introducción histórica» (doce lecciones), se suma la exposición de las «Instituciones», para la que se sigue el orden expositivo del «Plan de Savigny»; lo mismo hará, aunque con alguna variante, cuando en 1920 oposite a cátedra en la Universidad Central de Madrid. Ahora bien, sabemos que cuando salió a oposición en 1913 la cátedra de Derecho romano que había dejado vacante Castillejo en Valladolid, el candidato que la cubrió lo hizo presentando un programa de la asignatura que comprendía ciento setenta y una lecciones, de las que cuarenta eran de Historia y Derecho público, y las ciento treinta y una restantes, de Derecho privado. Para la exposición de éste se seguía, todavía, el sistema de las Instituciones justinianas. Esta es otra manifestación de la resistencia que, todavía a comienzos del siglo XX, oponía parte de la romanística española a los avances que experimentaba la ciencia jurídica más allá de los Pirineos⁵³.

⁵⁰ J. L. E. Ortolan, *Explicación histórica de la Instituta del emperador Justiniano*, 2 vols., Madrid, 1847; Barcelona 1847 (aparecerá como lectura indicada para el seguimiento de la asignatura de Derecho romano en las listas de 1846, 48, 49, 50 y 51).

⁵¹ Véase M. Abellán, *Estudio preliminar*, cit., p. XXXI.

⁵² F. C. Savigny, *Sistema de Derecho romano actual*, traducción española de Jacinto Mesía y Manuel Poley, Madrid, 1878.

⁵³ Véase M. Abellán, *Estudio preliminar*, cit., p. XXXIII; p. XLVII, n. 138. A. Álvarez de Morales, «La creación de las cátedras de Historia del Derecho en 1883», *Estudios de Historia de la Universidad española*, Madrid, 1993, pp. 349-351, donde refiere la valoración del historiador del Derecho

Retomando cuanto decíamos acerca de las singularidades de la *Historia del Derecho romano* es preciso destacar, que todos los capítulos incorporan, tras cada uno de los epígrafes indicados con números arábigos, un amplio catálogo de bibliografía específica del tema desarrollado. Con ello viene a colmar Castillejo la ya exhaustiva referencia bibliográfica con la que da inicio su obra. Indicaciones bibliográficas que se corresponden con los siguientes apartados: I. *Libros sobre Historia general*⁵⁴. II. *Libros sobre Historia del Derecho público romano*⁵⁵. III. *Revistas*⁵⁶.

Entre las obras, de distinto carácter, citadas por Castillejo, encontramos títulos de autores tanto alemanes, como franceses, como ingleses o italianos, pues del cultivo de todas estas lenguas se había preocupado Castillejo desde sus primeros años de formación, tal y como se desprende de cuanto nos relata Manuel Abellán Velasco al glosar su trayectoria vital⁵⁷. Interesante es traer a colación algunos de los comentarios de Castillejo a su padre a este respecto. Así, en carta del mes de noviembre de 1900 (recordemos que en esta

Rafael de Ureña en 1898, acerca del éxito de la reforma de las Facultades de Derecho de 1883 en la que él mismo colaboró: «En la licenciatura, los estudios históricos, puede decirse que aún no han arraigado. El estudio del Derecho romano —salvo honrosísimas excepciones— reduce a un examen elemental de la legislación justiniana en lo que respecta al Derecho privado, como preparación para el estudio del Derecho civil vigente y la Historia del Derecho patrio».

⁵⁴ Enciclopedias y diccionarios de la antigüedad clásica: diccionarios que recogen la cultura de Grecia y Roma y enciclopedias sistemáticas sobre gramática, historia de la literatura, del arte o del derecho. Libros de orientación sobre fuentes históricas y bibliográficas. Inscripciones y papiros. Tratados de Historia general romana. Geografía y Topografía. Descripciones y síntesis de la cultura romana.

⁵⁵ Enciclopedias y diccionarios de Derecho. Bibliografía de publicaciones sobre Derecho romano. Textos originales de legislación y jurisprudencia romana. Palingenesia o reconstrucciones de las obras originales uniendo fragmentos dispersos. Diccionarios especiales para leer o interpretar los textos legales romanos. Índices de interpolaciones. Tratados de Historia del Derecho público romano y de las fuentes del Derecho. Derecho penal y procesal. Economía y hacienda. Monedas. Religión y filosofía. La vida privada y costumbres.

⁵⁶ Revistas históricas y Revistas de Historia del Derecho.

⁵⁷ Véase M. Abellán, *Estudio preliminar*, cit., p. X, n. 20.

fecha acaba de obtener la licenciatura en Filosofía y Letras, un año después que la de Derecho) le dice «[...] fui a ver a Soms con el cual he convenido trabajar el francés y el alemán». En otra epístola del día 11 de ese mismo mes le refiere: «Yo sigo con mis idiomas y mi Filosofía del Derecho [...] He recogido noticias de anuncios de oposiciones ..., pero entiendo que hoy por hoy lo esencial es ponerme al corriente en los idiomas, y a ello me dedico con preferencia». En una carta que data de 9 de febrero de 1901 cuenta «[...] ya voy traduciendo del alemán, a razón de una página por día». Más adelante (12 de mayo de 1905) escribe «Las dificultades del alemán son enormes, pero no hay más que tener constancia [...]. El ser cosa difícil hará más meritorio, y más raro poseerla». También acerca de sus primeros contactos con la lengua italiana tenemos noticias a través de su epistolario (29 mayo de 1901) «Pero ahora resulta que tengo que revisar unos libros en italiano así que ahora mismo voy a hablar con Soms y a meterle el diente a ese nuevo idioma [...]. Aquí el que maneja el alemán, el inglés, el francés y el italiano, sobre todo el primero y los dos últimos, es el capitán de su promoción». En la misma idea insiste en una epístola dirigida a su padre el 23 de abril de 1904 «El que conoce idiomas no es por ello hombre culto, pero tiene un medio importante para ello».

Como podemos comprobar, entre los autores extranjeros citados por Castillejo se encuentran algunos de aquellos romanistas europeos coetáneos suyos, con quienes el judeo-americano Radin mantenía fluida correspondencia, y a los que hacíamos referencia al comienzo de este estudio. Es el caso del alemán Ernst Levy del que Castillejo cita, por poner un ejemplo, su *Ergänzungsindex zu Ius und Leges*⁵⁸, el francés Paul Collinet y su *Bibliographie des travaux de Droit romain en langue française*⁵⁹.

Más concretamente, entre las obras relativas a la Historia del Derecho romano consultadas por Castillejo para llevar a cabo la elaboración de su manual, y que se hallan entre la bibliografía recomendada están: la *Storia del Diritto romano* de Pietro Bonfante⁶⁰, el

⁵⁸ E. Levy, *Ergänzungsindex zu Ius und Leges*, Weimar, 1930.

⁵⁹ P. Collinet, *Bibliographie des travaux de Droit romain en langue française*, París, 1930.

⁶⁰ P. Bonfante, *Storia del Diritto romano*, Milano 1923. Castillejo cita esta edición de 1923, la tercera, pues la primera es de 1902. Pietro Bonfante (1864-1932). Jurista italiano, discípulo de Vittorio Scialoja, profesor

Corso di Diritto romano de Giovanni Pacchioni⁶¹, o el *Corso di Storia del Diritto romano* de Vincenzo Arangio-Ruiz⁶². También la *Historical introduction to the study of Roman Law* del inglés Herbert F. Jolowicz⁶³.

Estos trabajos, cuyas primeras ediciones datan de principios del siglo XX, se caracterizan, como no podía ser de otro modo, por estar imbuidos de los planteamientos de la Escuela histórica del Derecho que había calado con fuerza en Europa, y por ello manifiestan, como lo hace la *Historia del Derecho romano* de Castillejo, ese afán por no olvidar en la exposición de la «historia externa» del Derecho romano los factores sociales, religiosos o económicos que afectan al cuerpo social para el que va a regir ese Ordenamiento jurídico. Basta comprobar los índices de estas obras para darse cuenta de ello. La extensión de las mismas, en torno a las quinientas páginas, está en consonancia con los planes de estudios que para esas fechas estaban vigentes en Italia y Alemania. Según éstos, se explicaba

de Derecho romano de Camerino (1888), Macerata (1889), Mesina (1890), Parma (1895), Turín (1901), Pavía (1903) y Roma (1917), y de Historia del Derecho mercantil en Milán. Autor de numerosas publicaciones. E. Rabel, «In memoriam», ZSS 53 (1933), pp. 647-649.

⁶¹ G. Pacchioni, *Corso di Diritto romano*, vol. 1. *La costituzione e le fonti del diritto*, Torino, 1919. Existe edición anterior de 1905. Giovanni Pachioni (1867-1946). Jurista italiano. Discípulo de Vittorio Scialoja. Profesor de Derecho romano en Camerino, Insbruck y Turín. Profesor de Derecho civil en Milán y de Derecho internacional en el Cairo. Además enseñó en Oxford (1931) y Leipzig (1934). Véase C. Grasetti, «Giovanni Pacchioni», *Studi in onore di Giovanni Pacchioni*, Milano, 1939.

⁶² V. Arangio-Ruiz, *Storia del Diritto romano*, Napoli, 1931. Vincenzo Arangio-Ruiz (1884-1964). Jurista italiano, discípulo de Carlo Fadda. Profesor de Derecho romano en Camerino (1907), Perugia (1909), Cagliari (1910), Messina (1912), Nápoles (1921, 1940), El Cairo (1930) y Roma (1946). Autor de numerosas publicaciones. Véase G. Pugliesse, «Vincenzo Arangio-Ruiz», *IURA* 15 (1964), pp. 203-218.

⁶³ H. F. Jolowicz, *Historical introduction to the study of roman law*, Cambridge, 1932. Herbert Felix Jolowicz (1890- 1954). Jurista y filólogo inglés. Se formó en Londres, Cambridge y en Alemania bajo el magisterio de Otto Lenel y Ludwig Mitteis. Fue profesor de Derecho romano en Oxford (1920) y Londres (University College, 1924). Regius Professor of Civil Law en Oxford (1948). Fue autor de numerosas publicaciones. Véase P. W. Duff, «H. F. Jolowicz», *IURA* 6 (1955), p. 537.

separadamente, en el primer año de estudio, un curso de Historia, y otro de Instituciones (además de un curso monográfico que se impartía el segundo año de la licenciatura). Esto permitía, evidentemente, dedicar a la denominada «historia externa» una atención mayor que la que se podía dar en España donde, desde 1883, el Derecho romano venía constituyendo la materia de un único curso que aunaba la exposición de la Historia y las Instituciones⁶⁴. Preciso es recordar al respecto, que si los planes de estudio que rigieron para la Universidad española desde 1845 a 1883, muchos y variados⁶⁵, manifestaron una constante, esto es, el mantenimiento de la enseñanza del Derecho romano en dos cursos académicos, en el año 1883, siendo ministro de Instrucción pública Germán Gamazo Calvo, se consideró oportuno llevar a cabo una serie de reformas en las facultades de Jurisprudencia, reformas entre las que destaca la reducción del Derecho romano a un solo curso. Desde esta fecha hasta 1953, en que se publica el último plan general de estudios para todas las universidades, la docencia del Derecho romano abarcará un solo curso académico⁶⁶. Con la Ley de Reforma Universitaria de 25 de agosto de 1983 (actualmente sustituida por la Ley Orgánica de Universidades de 26 de diciembre de 2001⁶⁷) cada universidad pudo adoptar el suyo propio⁶⁸. Algunas como la Universidad Carlos III de Madrid, en la que llevo a cabo mi función docente, redujeron esa docencia a un cuatrimestre en el que hay que impartir los conteni-

⁶⁴ Véase P. Fuenteseca, «Observaciones sobre el futuro del Derecho romano en España», *Estudios en homenaje al Profesor Francisco Hernández-Tejero II*, Madrid, 1992 (publ. en 1994), pp. 211-214.

⁶⁵ Estos planes son los de los años 1845 y su reglamento; 1847, 1850 y reglamento de 1851; Reglamento de estudios de 1852, la Ley de Instrucción Pública de 1857 (conocida como «Ley Moyano»); el Programa general de estudios de 1858; Plan de la Facultad de Derecho de 1866; la Nueva organización de 1868, el Decreto de 1874, la Reforma del plan de estudios de 1880 y Plan de 1883. Véase M. Martínez Neira, *El estudio del derecho...*, cit.

⁶⁶ Después de éstos vinieron los experimentales de 1965, para las Facultades de Valencia y Sevilla, al que se acogió también la Autónoma de Madrid, aunque luego adoptó el de 1953. Por otra parte, en 1966 estrenó nuevo plan la Facultad de Santiago de Compostela.

⁶⁷ Ley Orgánica 21/000045 de Universidades.

⁶⁸ Sobre el proceso de reforma hasta 1992 Véase F. F. De Buján, *La reforma de los estudios de Derecho. El nuevo plan de estudios: su valoración y análisis histórico comparado*, Madrid, 1992, pp. 129-245.

dos relativos a la asignatura «Derecho romano y su recepción en Europa» (Historia e Instituciones).

Retomando las observaciones que el estudio detenido de la obra de Castillejo merece, es preciso es llamar la atención acerca de las escasas, y por ello significativas referencias, que en ella existen a bibliografía española. Concretamente, en el elenco bibliográfico con el que da comienzo la obra, la mención es nula. Sólo citará Castillejo tres títulos de autores españoles y lo hará, por primera vez, en el capítulo segundo dedicado a «La República», al final del epígrafe sexto dedicado a «Las fuentes del Derecho»; la obra en cuestión es *Los bronce de Osuna* y su autor Rodríguez de Berlanga⁶⁹. Las otras dos referencias se incluyen en el capítulo quinto y último, en el epígrafe dedicado a «El Derecho romano en la época moderna» y son: *Introducción al estudio de las Instituciones de Derecho romano* de Francisco Clemente de Diego⁷⁰ y la *Historia del Derecho romano* de Eduardo de Hinojosa⁷¹.

La ausencia de esta última en el elenco de tratados sobre Historia del Derecho público romano, recomendados por Castillejo al comienzo de su obra, y el hecho de que se refiera únicamente a ella en la bibliografía del último capítulo, es una circunstancia que nos resulta llamativa. Y ello porque entendemos que ésta podría considerarse el precedente más venerable de la bibliografía española de finales del siglo XIX, del que se pudo servir Castillejo en el momento de componer su *Historia del Derecho romano*. La estancia de investigación de Eduardo de Hinojosa en Alemania le permitió tener contacto directo con algunos de los miembros de la Escuela histórica del Derecho, de lo que existe claro reflejo en su obra. De ella hay que destacar, no sólo las selectas citas a pie de página en las que se recogen polémicas y opiniones de los más prestigiosos romanistas del momento (Savigny, Puchta, Ihering, Mommsen, entre otros), sino también las guías bibliográficas sobre Historia de Roma

⁶⁹ Rodríguez de Berlanga, *Los bronce de Osuna*, Málaga, 1873; *Los nuevos bronce de Osuna*, Málaga, 1876.

⁷⁰ F. Clemente de Diego, *Introducción al Estudio...*, cit.

⁷¹ E. de Hinojosa y Naveros, *Historia del Derecho romano según las más recientes investigaciones*, Madrid, 1880. Eduardo de Hinojosa y Naveros (1852-1919), Catedrático de Historia antigua y media de España en la Universidad Central de Madrid. Véase M. Abellán, *Estudio preliminar*, cit., pp. LVI y ss.

y Antigüedades romanas donde se encuentran las aportaciones fundamentales existentes en la Europa de su tiempo⁷².

Además de por el valor intrínseco de la obra, resulta llamativa esta referencia tan sucinta por parte de Castillejo, cuando había sido éste el libro que él recomendaba a sus alumnos para el estudio de la Historia de Derecho romano⁷³, y el que le había aconsejado a él Giner cuando tuvo que preparar en 1905 su cátedra de Derecho romano para la Universidad de Sevilla⁷⁴.

Queremos hacer mención para finalizar, al destino que, tras su publicación, siguió la obra de Castillejo. Ya hemos hablado al comienzo de estas páginas de lo poco conocida que es, lo que podría justificarse, como apunta Manuel Abellán, por el hecho de haber visto la luz apenas un año antes del estallido de la guerra civil, además de por el ostracismo al que fue condenado su autor. Sea como fuere, lo cierto es que las obras que aparecen los años inmediatamente posteriores a la contienda en materia de Derecho público romano, —con esa palingenesia de la romanística que protagonizan José Arias Ramos (1894-1968)⁷⁵ y Juan Iglesias (1917-2003)⁷⁶, entre

⁷² M. Abellán, *Estudio preliminar*, cit., p. LIX.

⁷³ Véase M. Abellán, *Estudio preliminar*, cit., p. XXXVII en donde refiere el contenido de las cartas enviadas por Castillejo a Giner de los Ríos en el mes de octubre de 1905 «Mis alumnos estudian la Historia de Hinojosa y el Geist des r. A. de Ihering. Hasta ahora sólo voy dando clases de Derecho romano. Pronto empezaremos las Instituciones según el método de Stammler. La semana que viene leeremos las Instituciones de Gai».

⁷⁴ Véase M. Abellán, *Estudio preliminar*, cit., p. XXX.

⁷⁵ José Arias Ramos (1894-1968). Catedrático de Derecho romano de las Universidades de Santiago de Compostela, Salamanca y Valladolid y, posteriormente magistrado del Tribunal Supremo hasta su muerte el 15 de noviembre de 1968. Véase A. d'Ors, «José Arias Ramos», *AHDE* 38 (1968); M. Abellán, *Estudio preliminar*, cit., p. II, n.2.

⁷⁶ Juan Iglesias (1917-2003). Catedrático de Derecho romano de las Universidades de Oviedo, Valladolid, Salamanca y Barcelona. Miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación española y de la Academia de Nápoles. Autor de numerosas publicaciones en materia de Derecho romano: *En torno fideicomiso familiar catalán* (1952); *Derecho romano. Instituciones de Derecho privado* (1950); *Derecho romano y esencia del Derecho* (1957); *Estudios. Historia de Roma. Derecho romano. Derecho moderno* (1968), son algunas de sus numerosas

otros—, se caracterizan por dar preferencia a la «historia interna» o Derecho privado, quedando relegada la «historia externa» a, en palabras de Arias Ramos, «necesario dintel para un curso de Instituciones»⁷⁷. De este modo, los tratados que a partir de este momento se elaboren sobre esta parte de la materia Derecho romano, verán considerablemente reducidos sus contenidos. Tanto Arias Ramos como Iglesias⁷⁸, incluyen en sus obras, no obstante, la *Historia del Derecho romano* entre la bibliografía recomendada.

Algunos años más tarde cobraría auge de nuevo, entre la romanística española, una línea de investigación de corte publicista, que comenzó a otorgar más importancia a la Historia externa. Lideraba esta corriente Pablo Fuentesecca con sus *Lecciones de Historia del Derecho romano*, publicadas en 1963⁷⁹, siendo, asimismo destacables, la obra *Derecho público romano y sistema de fuentes* de Armando Torrent⁸⁰; la *Introducción histórica al derecho romano* de Jesús Daza⁸¹; el *Derecho público romano y recepción del Derecho romano en Europa* de Antonio Fernández de Buján⁸²; la *Introducción histórica al Derecho romano* de Juan de Churruca⁸³; la *Historia del Derecho romano* de Juan Miquel⁸⁴ y la *Historia del Derecho romano y su recepción en Europa* de Javier Paricio y Alejandrino Fernández

publicaciones. Véase R. Domingo, «Juan Iglesias (1917-2003)», *Revista de Estudios histórico-jurídicos. Sección noticias*. XXV (2003), Valparaíso, pp. 583-585.

⁷⁷ J. Arias Ramos, *Derecho público romano e historia de las fuentes*, Valladolid, 1940. Véase nota preliminar.

⁷⁸ J. Iglesias, *Derecho romano. Historia e instituciones*, Barcelona, 1994. La primera edición es de 1958. Con distinto título y algunas variantes apareció una anterior de 1950-1951. Véase prólogo de la edición citada de 1994.

⁷⁹ Véase también, P. Fuentesecca, *Historia del Derecho romano*, Madrid, 1987.

⁸⁰ A. Torrent, *Derecho público romano y sistema de fuentes*, Zaragoza 1995.

⁸¹ J. Daza, *Iniciación histórica al Derecho romano*, Madrid, 1997 (3ª ed.).

⁸² A. Fernández de Buján, *Derecho público romano y recepción del Derecho romano en Europa*, Madrid, 2004 (7ª ed.).

⁸³ J. Churruca- R. Mentxaca, *Introducción histórica al Derecho romano*, Bilbao, 1997 (8ª ed.).

⁸⁴ J. Miquel, *Historia del Derecho romano*, Barcelona, 1990 (2ª ed.).

Barreiro⁸⁵. En la mayoría de ellas se percibe la *damnatio memoriae* de la que nos habla Manuel Abellán a propósito de la figura de José Castillejo. Es por ello de agradecer su esfuerzo al reimprimir su *Historia del derecho romano*, en un acto de reconocimiento de su autor.

Consuelo Carrasco García
Universidad Carlos III de Madrid

⁸⁵ A. Fernández Barreiro-J. Paricio, *Historia del Derecho romano y su recepción en Europa*, Madrid, 2000 (5ª ed.).

EL DOCTORADO EN DERECHO PRIVADO EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA (1955-1985). LA LÓGICA DEL PRESENTE SOBRE LOS HECHOS DEL PASADO*

Sumario: 1. Planteamiento metodológico (y algo más).—2. Los hechos *en su lugar descanso* (en el pasado).—3. Conclusión (*por ahora y siempre*): las limitaciones del historiador (*o dejar las cosas como fueron*).

1. *Planteamiento metodológico (y algo más)*

El propósito inmediato y evidente de este trabajo —luego hablaremos de otros propósitos mediatos y más interesantes— es la pre-

* Este texto tiene su origen en la comunicación presentada en el Seminario en Homenaje al Profesor Mariano Peset «La Enseñanza del Derecho en el siglo XX», organizado por el Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad, de la Universidad Carlos III de Madrid, los días 22 y 23 de septiembre de 2003. Este seminario me ofreció la ocasión de conocer *de cerca* a quienes tenía la oportunidad de contemplar *desde lejos* y sobre todo por sus productos. La posibilidad de asistir y participar en una de sus actividades me permite felicitar con aún más fundamento al equipo dirigido por la Profesora Adela Mora Cañada. Por otro lado, muchas de las contribuciones realizadas en este Seminario, ponencias y comunicaciones, han sido publicadas en la «Biblioteca del Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad», como volumen número 10: *La Enseñanza del Derecho en el siglo XX. Homenaje a Mariano Peset*, Edición de Adela Mora, Universidad Carlos III de Madrid, Editorial Dykinson, Madrid, 2004.

En la presentación de la comunicación tuve también la oportunidad de dejar constancia de mi satisfacción por participar en un Seminario en homenaje al Profesor Mariano Peset. Para la mayoría de los historiadores del Derecho este homenaje es obvio y merecido. Para mí, que me dedico al Derecho civil, al Derecho privado, este homenaje es igualmente merecido y desde aquí le rindo mi modesto y particular tributo. No caeré en el lugar común, en la vulgaridad, de aludir a la importancia de la Historia del Dere-

sentación y el análisis de los estudios de doctorado en Derecho privado en la Universidad de Sevilla, en el periodo comprendido entre 1955 y 1985. Lo que aquí se expone es el primer esbozo, pobre e inacabado, de un trabajo más extenso, que cronológicamente pretendemos que se remonte a varios años atrás cuando todavía sin existir la posibilidad de colacionar el grado de doctor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla se impartían cursos (o *cursillos*) monográficos de doctorado, al amparo de la Ley de Ordenación Universitaria de 29 de julio de 1943¹. También en ese posterior desarro-

cho para los juristas positivos (si es que hay otros *no* positivos: distinción de por sí un tanto horrible), creo que este tipo de homenajes no necesita de justificaciones, pero para los reticentes, sobre todo de mi gremio, un dato concreto: el Profesor Peset es el autor de *Dos ensayos sobre la Historia de la propiedad de la tierra* (2ª edición), Madrid 1988, imprescindible para cualquiera que se embarque en el estudio del *derecho de los derechos*.

Por último, y a modo de justificación, cuando presenté esta comunicación, no dudé en autocalificarme como un *intruso* en un seminario de este tipo, dada mi pertenencia al área de conocimiento de Derecho civil. Mi concurrencia a este seminario se explica sólo por el convencimiento que albergo de que la ciencia jurídica —aunque el Prof. González Alonso, se encargó de poner provocativa y convenientemente en duda esta afirmación, al estilo del mejor Ihering (véase la recopilación de escritos: *¿Es el Derecho una ciencia?*, Editorial Comares, Granada 2002), en el inicio de su inolvidable intervención sobre *La historia del derecho en la segunda mitad del siglo XX*—, el estudio del Derecho y pretenciosamente añadiré de *eso* que se denominan las ciencias sociales, sólo pueden concebirse de manera interdisciplinar y compartida. Que nosotros estemos *en el presente* y que los historiadores estén *en el pasado* es, si se me permite, una simplicidad. A todo ello debe añadirse una razón de utilidad bien entendida. Hace mucho tiempo que entendí que los historiadores en general y también los historiadores del Derecho nos llevaban mucha ventaja. Mucha ventaja por lo que se refiere a la reflexión metodológica y al conocimiento del propio trabajo. A diferencia de lo que sucede en otros países, la doctrina iuscivilista, iusprivatista en general, está muy poco preocupada por estas cuestiones. Las aportaciones en este sentido son muy escasas, con las consecuencias negativas de un empobrecimiento progresivo. Todo lo que sea contagiarse de esa preocupación metodológica no puede ser más que bienvenido y deseado para la propia disciplina y por qué no trasladado en la medida de lo posible.

¹ En efecto, la impartición de estos cursos en Sevilla comienza mucho antes, a mediados de la década de los cuarenta. En el acta de la junta de facultad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, celebrada

llo al que nos referíamos queremos que este trabajo llegue hasta la *actualidad* (o hasta lo que es la actualidad por ahora, dado que *acecha*, parece, una nueva reforma de los estudios de Doctorado), cuando la autonomía universitaria se pretende plena y sobre todo cuando

el 10 de diciembre de 1946 se recoge el siguiente acuerdo: «A continuación se aprueba el proyecto para la organización de los estudios de Doctorado en derecho, en colaboración con la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, dando validez, a tales efectos, a los cursos que en esta última se expliquen por Catedráticos de esta Facultad, y previa aprobación de la junta de esta última, interesando de la superioridad se extienda este Doctorado a los licenciados en Derecho por cualquier Facultad Americana». Posteriormente, en el Acta de la Junta de Facultad del 29 de septiembre de 1947 se aprobará la impartición de los que parecen ser los primeros «cursillos cuatrimestrales para los estudios de Doctorado». En concreto, se prevén los siguientes: «Nomología Canónica Indiana», a cargo del Prof. Manuel Giménez Fernández, «Derecho Constitucional Indiano», a impartir por el Prof. Manuel Giménez Fernández, «Historia del Derecho Indiano», por el Prof. Antonio Muro Orejón, «Procesos de ejecución», por el Prof. Faustino Gutiérrez-Alviz, «Historia de las ideas e Instituciones políticas españolas hasta el fin de la Edad Media», por el Prof. Ignacio M^a Lojendio e Irure, y «La Legislación indiana en la segunda mitad del siglo XVI», por el Prof. Juan Manzano Manzano.

Poco tiempo después una referencia a esta iniciativa se encuentra en la guía de la *Escuela de Estudios Hispano Americanos de Sevilla*, Sevilla 1951, pp. 9 y 10: «Porque la Escuela, ni aún después de aparecer el decreto en que se la integraba en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, perdió su contacto con la vida activa universitaria. Incluso desde el punto de vista legal, permaneció unida a la Universidad. Una disposición ministerial que figura también en este folleto, determinó que los cursos monográficos de Doctorado, organizado en nuestro centro, y dirigidos por profesores de la Facultad de Derecho se consideraban equiparables a las enseñanzas que deben cursarse para obtener el título de Doctor en Derecho. Aún más, se concedió a la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla el privilegio de que los licenciados en cualquier Universidad americana, podían presentar sus tesis doctorales y recibir la investidura del grado de Doctor en Derecho por la Universidad Hispalense, ante un Tribunal nombrado por el Rector, en el cual deberán figurar al menos dos catedráticos de Derecho, miembros de la Escuela». Orden de 6 de febrero de 1947 sobre cursos monográficos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla (B.O. 3-III-1947): Ilmo Sr.: A propuesta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, favorablemente informada por el Rectorado correspondiente, Este Ministerio ha resuelto: 1.º Los cursos

esa nueva Universidad refundada a mediados de los ochenta, conoce el reinado de un nuevo *monarca*, el *Departamento* frente a la hegemonía y preponderancia hasta entonces de la *Facultad* o del Centro. La configuración de los que pasan a denominarse *programas de doc-*

monográficos organizado por la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, previamente aprobados por la Junta de la Facultad de Derecho y a cargo de catedráticos numerarios de ésta, tendrán plena validez a los efectos del Doctorado de dicha facultad, sin perjuicio de los cursos, que, independientemente de estos se organicen por la misma de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente. 2.º A los efectos de su validez académica, se abrirá en la Facultad de Derecho de la citada Universidad, una matrícula especial para los referidos cursos, de acuerdo con las normas generales que rigen sobre la materia. 3.º En los referidos cursos monográficos podrán matricularse los Licenciados en Derecho por cualquier Facultad americana, los cuales, previa a la aprobación de un mínimo de seis cursillos cuatrimestrales, libremente elegidos entre los explicados en la Escuela, podrán recibir el Doctorado en Derecho, una vez presentado un trabajo monográfico de investigación, que será sometido a la aprobación de un Tribunal formado por dos catedráticos de Derecho pertenecientes a la Escuela y por otros tres de la misma Facultad, elegidos entre los titulares de las asignaturas iguales o análogas a las que corresponda el tema de la tesis. Dicho Tribunal será designado por el Rectorado de la Universidad de Sevilla y aprobado por el Ministerio de Educación nacional; y 4.º Las cátedras de Historia del Derecho Indiano e Historia de la Iglesia e Instituciones canónicas-hispanoamericanas continuarán con el régimen que establece el artículo 12 de Decreto de 11 de enero de 1946. Dios guarde a V. I. Muchos años. Madrid 6 de febrero de 1947. Ibáñez Martín. Ilmo. Sr. Director General de Enseñanza Universitaria.»

En el año de publicación de esta guía (1951) la vinculación entre la Facultad de Derecho y este centro del CSIC, fundado en 1942, está en su apogeo. Así se desprende del hecho de que figuren entonces, entre los Jefes de Investigación (p. 29), además de los habituales y *previsibles* por americanistas Muro Orejón (entonces Vicedirector) y Manzano Manzano, profesores tan significativos en la Facultad de Derecho como Manuel Giménez Fernández, Catedrático de Derecho canónico, y Alfonso de Cossío y Corral, Catedrático de Derecho civil, o entre los Colaboradores, el no menos significativo Ignacio María de Lojendio e Irure, Catedrático de Derecho político (incluso entre los Colaboradores honorarios son varios los profesores de la Facultad que se citan: Miguel Royo Martínez, Catedrático de Derecho civil, Mariano Aguilar Navarro, Catedrático de Derecho internacional, y Faustino Gutiérrez-Alviz y Armario, Catedrático de Derecho procesal [p. 30]). Esta colaboración no es meramente nominal, sino que alcan-

torado está en manos de los nuevos departamentos universitarios, programas que como se sabe permitirán, también por lo que se refiere al doctorado, una mayor especialización por áreas de conocimiento. Lamentablemente, como era nuestro propósito original para este trabajo, no hemos llegado hasta este periodo. Y hay que lamentarlo porque precisamente la configuración autónoma y soberana de estos programas por parte de los departamentos puede ilustrar bastante bien aquello que constituye, lo adelantamos ya, el propósito

za hasta la producción científica del centro, como se demuestra en el hecho de que varios de ellos formen parte de los Consejos de Redacción de las publicaciones periódicas de la Escuela: *Anuario de Estudios Americanos* o *Revista Estudios Americanos*. Esta estrecha vinculación se pondrá de manifiesto también, en los años sucesivos, en la publicación de monografías de profesores de la Facultad de Derecho: del mencionado Giménez Fernández serán varias: *Las bulas alejandrinas de 1493 referentes a las Indias*, Sevilla, 1944; *Las doctrinas populistas en la independencia de Hispanoamérica*, Sevilla, 1947; *Hernán Cortés y su revolución comunera en la Nueva España*, Sevilla, 1948; *Bartolomé de las casas*. Tomo I: *El Plan Cisneros-Las Casas para la reformación de las Indias*, Sevilla, 1953; *Bartolomé de las Casas*. Tomo II: *Política inicial de Carlos I en Indias*, Sevilla, 1960; del Catedrático de Derecho natural Francisco Elías de Tejada y Spínola dos trabajos: *Las doctrinas políticas de Raimundo de Fariás Brito*, Sevilla, 1953, y *El pensamiento político de los fundadores de Nueva Granada*, Sevilla, 1955; de su discípulo Carlos López Núñez, *Horizonte y doctrina de la Sociología Hispano-Americana*, Sevilla, 1953; de Agustín de Asís Garrote dos: *Bartolomé Herrera*, Sevilla, 1954, e *Idea sociopolíticas de Alonso de Polo (El Tostado)*, Sevilla, 1955; y del Profesor de Derecho político Manuel Romero Gómez, *La Constitución Británica*, Sevilla, 1960. Treinta años después, para contraste, la guía que se publica en 1981 con el título de *Escuela de Estudios Hispano-Americanos*, demuestra que esta vinculación entre la Facultad de Derecho y la Escuela va decayendo de forma paulatina y progresiva hasta ser en la actualidad prácticamente inexistente.

De forma general, sobre la relación en dicho periodo entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad, véase G. Pasamar Alzuria, *Historiografía e ideología en la postguerra española: La ruptura de la tradición liberal*, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1991, pp. 46 a 60. En concreto, señala como la Ley de Ordenación Universitaria de 1943, que representa el ideario propio de la época —en su opinión «refleja un interés monolítico centralista, elitista y politizador»— se caracterizó por sus escasas referencias a la investigación y por una especie de remisión general en esta materia al CSIC (p. 23).

fundamental de este trabajo (y de aquel más extenso en el que debe tener su continuación): la reconstrucción *intelectual* —que no administrativa— de la conformación de estos estudios. Parece claro que hasta 1985 los estudios de Doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, como vamos a tener ocasión de comprobar, no pasan de ser, por lo que se refiere a los cursos de Doctorado, más que un elenco de cursos —*cursillos* en muchos casos—, impartidos casi exclusivamente por los catedráticos, respondiendo a unos criterios para la elección de las materias sobre las que versaban estos cursos no muy variables. Estos criterios, por otra parte fácilmente adivinables o previsibles, iban desde inmediatas y recientes novedades legislativas, pasando por trabajos en curso de realización o trabajos recién finalizados y publicados —obviamente propios—, hasta una mera profundización en algunas cuestiones, no necesariamente novedosas (la repetición del mismo curso será una constante en algunos) y poco más. A partir de 1985, se asiste a la oportunidad, desconocida hasta entonces, de poder ofrecer un Doctorado científicamente coherente y *pensado* por cada área de conocimiento o, en su caso, cuando se trata de áreas modestas —en tamaño administrativo y en presencia de asignaturas, entiéndase—, por agrupaciones de éstas. Que haya sido así, o al menos que haya sido formalmente planteado así no puede negarse. Cosa distinta es que se haya logrado o que se haya verdaderamente intentado².

² En desarrollo del art. 31 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, se promulga el Real Decreto 185/1985, de 23 de enero, por el que se regula el tercer ciclo de estudios universitarios y la obtención y expedición del título de Doctor y otros estudios postgraduados. De forma resumida, éste supone una nueva configuración de los estudios de Doctorado, novedad que puede sintetizarse, de un lado, en la asunción por parte del Departamento del protagonismo en la promoción e impartición de los Programas de Doctorado (art. 2) y, de otro, en la concepción de estos como un conjunto de cursos y seminarios con unos contenidos pre-determinados: sobre metodología y técnicas de investigación, sobre contenidos fundamentales y aquellos que tengan relación con campos afines (art. 3). Sobre esta nueva regulación del Doctorado a partir de la LRU, véase A. Merchán Álvarez, *Centro y periferia: el Doctorado en Derecho durante el siglo XX*, pp. 437-440, trabajo que constituye básicamente su ponencia en el Seminario en Homenaje a Mariano Peset, publicado en el volumen resultante del mismo. La regulación actual por medio del Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, por el que se regulan el tercer ciclo de estudios universitarios,

Debe advertirse también que este trabajo está sugerido (o provocado) en parte por el reciente libro del Profesor Antonio Merchán Álvarez, *Doctores iuris de la Real Fábrica de Tabacos* (Sevilla, 2002)³. El objetivo de esta comunicación no es recontar lo que el Prof. Merchán hace bastante bien: una enumeración comentada de las tesis doctorales leídas en la Facultad de Derecho Universidad de Sevilla, a partir de la que denomina «progresiva autonomía en los estudios de Doctorado»⁴. Como el mismo afirma, desde las tesis doctorales pretende proyectarse hacia los estudios de Doctorado. En este sentido, refiriéndose específicamente a la primera etapa de estos, de 1955 a 1985, la etapa que se delimita por la posibilidad de la defensa de las tesis doctorales en la propia Universidad en la que se rea-

la obtención y expedición del título de doctor y otros estudios de postgrado, no habría supuesto una gran novedad en lo que se refiere a la configuración de estos programas de Doctorado y al protagonismo de los Departamentos en su propuesta y coordinación (cfr. art. 2).

³ Un trabajo de marcado carácter informativo y con un tono que roza en ocasiones, entendiéndose bien, lo *sentimental*, algo que en ningún momento oculta el autor; incluso desde la misma dedicatoria del libro: «A mis colegas los Doctores *iuris* de la Real Fábrica de Tabacos en el V centenario de nuestra Universidad Hispalense». El trabajo de Merchán, como señala en la introducción, forma parte de una línea de investigación más amplia y ambiciosa sobre la ciencia jurídica en la Universidad de Sevilla durante el siglo XX (*Doctores iuris*, cit., p. 18). Un paso más en esta senda sería la ponencia presentada en el Seminario, ahora publicada como acaba de señalarse, y en la que parte de algunos de los aspectos abordados en el trabajo anterior, pero centrándose en la realización de una síntesis histórica sobre la evolución del Doctorado en Derecho en nuestro país a lo largo del pasado siglo.

⁴ A. Merchán Álvarez, *Doctores iuris*, cit., p. 17. Esa autonomía, a la que ya hemos aludido, señala Merchán, se habría producido en dos etapas, de muy diversa intensidad. La primera, que supone ya una cierta descentralización, significativa pero tenue, de los estudios de Doctorado, provocada por la Ley de Ordenación Universitaria de 1943, y que como hemos visto permitía la impartición de cursos de Doctorado en Universidades periféricas, y que va a acentuarse a partir de 1954, cuando se permite la colación del grado de doctor en todas las universidades es posible (Real Decreto de 25 de junio de 1954). La segunda etapa, a partir de 1985, donde la autonomía es casi definitiva al amparo de la Ley de Reforma Universitaria de 1983, se inaugura por el Real Decreto de 23 de enero de 1985 por el que se regula el llamado a partir de entonces tercer ciclo.

lizan los cursos y la Ley de Reforma Universitaria, señala que, por esta fácil acotación, «podremos estudiarla con más perspectiva y en muchos aspectos constituye un ciclo bastante completo de la evolución de los estudios de Doctorado en Derecho en la Universidad de Sevilla; como lo representa el hecho de que podamos seguir detalles muy interesantes del currículo académico, político o social de los doctores, sus directores y la trascendencia científica de su obra»⁵.

Si algo puede objetarse, en nuestra opinión, al planteamiento de Merchán Álvarez es su carácter marcadamente *personalista*, a lo que responden, por ejemplo, esas presentaciones biográficas de algunos de los *maestros*, intercaladas recurrentemente en el texto. No puede discutirse que aquella universidad es una universidad personalista —o si prefiere: *más* personalista que la actual—, donde el gran protagonista es el *Señor Catedrático, señor de la vida y de la muerte*, académicamente hablando, de su entorno. A pesar de esta realidad inobjetable, se echa en falta quizá la que podría denominarse como *perspectiva institucional*, o al menos la constatación de si existió o no alguna iniciativa común por parte de la Facultad —que era quien podía hacerlo entonces; luego ese propósito lo asumirá el Departamento— para procurar cierta coherencia a los estudios de doctorado. Como veremos, la institución que los acoge, la Facultad, se limitará a organizar los cursillos pero en absoluto a sugerir o procurar cualquier suerte de proyecto común o compartido. Extraño hubiera sido lo contrario. No obstante, la sola constatación de este hecho creemos que dice bastante sobre un modo de concebir la enseñanza universitaria, vigente hasta una época bastante cercana (por no pensar que permanece todavía)⁶.

⁵ A. Merchán Álvarez, *Doctores iuris*, cit., p. 18.

⁶ A lo más que llega Merchán a este respecto es a una insistente *geometría comparatista* entre las áreas de conocimiento (*Doctores iuris*, cit., pp. 27 a 32). Nosotros, por nuestra parte, hemos tratado de sustraernos en la medida de lo posible a los aspectos biográficos de los protagonistas de estos hechos, ya sean principales (profesores de los cursos, directores de tesis y doctores) o secundarios (alumnos de los cursos de Doctorado). Con ello no negamos su importancia, simplemente le concedemos en este punto de nuestro trabajo un menor *valor* del que Merchán parece atribuirles. De otro modo, ello nos obligaría a un replanteamiento del mismo en perspectiva biográfica, que resultaría todo menos sencillo. En el anunciado desarrollo posterior de este estudio no renunciamos a ello.

Hay que insistir también en que los hechos que se analizan en este modesto trabajo tienen una entidad bastante relativa. Están coloreados de unos más que evidentes tintes de localismo y particularismo que aconsejan ser prudentes a la hora de extraer consecuencias más o menos generales. No es ese nuestro propósito. Tenemos claro que con este trabajo no queremos sólo realizar un estudio *microhistórico*, como sería la presentación de unos estudios de Doctorado en una de las principales universidades españolas, circunscritos específicamente a dos materias que se adscriben al llamado Derecho privado. O mejor, podríamos decir —con cierto riesgo asumido, en todos los sentidos— que esto por sí solo es de un interés bastante discutible. Es más, se puede correr el riesgo de caer en un burdo y simple *memorialismo*, que alegrará desde luego las nostalgias de unos cuantos, pero que contribuirá poco al mejor conocimiento del pasado. Somos conscientes de las ventajas que puede presentar este tipo de historia. Sus defensores y valedores ya se encargan de ello, con bastantes y sentidas razones⁷. Lo cotidiano, lo local, lo particular componen lo general, lo universal, aportan el valor de lo inmediato y no deben despreciarse tan tajante y rápidamente como hacen algunos. En este sentido, el conocimiento de

⁷ Nos referimos como es obvio a la *buena* microhistoira . De la *otra*, hay innumerables muestras; a modo de ejemplo, véase M. J. Peláez, *Historia de la Facultad de Málaga*, AHDE 1997, Tomo LXXVII, Volumen I, pp. 573-591. Sobre la microhistoria, por todos, archiconocido, véase C. Ginzburg, *El queso y los gusanos. El cosmos según un molinero del siglo XVI*, Muchnick Editores, Barcelona, 1981. Las conocidas palabras con las que se inicia el prefacio quedarán como un auténtico manifiesto de esta corriente historiográfica: «Antes era válido acusar a quienes historiaban el pasado, de consignar únicamente las «gestas de los reyes». Hoy día ya no lo es, pues cada vez se investiga más sobre lo que ellos callaron, expurgaron o simplemente ignoraron. «¿Quién construyó Tebas de las siete puertas?» pregunta el lector obrero de Brecht. Las fuentes nada nos dicen de aquellos albañiles anónimos, pero la pregunta conserva toda su carga» (p. 9). De forma resumida y para una aproximación sintética, véase también del mismo Ginzburg, *Microhistoria: dos o tres cosas que se de ella*, Manuscris 1994, núm. 12, pp. 13-42, así como G. Levi, *Sobre microhistoria*, en Burke, P. (ed.), *Formas de hacer Historia*, Alianza Universidad, Madrid, 1993, pp. 119-143. Muy completo, para auténticos interesados, el documentado trabajo de J. Serna y A. Pons, *Cómo se escribe la microhistoria. Ensayo sobre Carlo Ginzburg*, Frónesis Cátedra Universitat de València, Madrid, 2000.

cómo se articulan los estudios de Doctorado en una determinada materia, en una Universidad y en un tiempo concretos puede contribuir sin duda a conformar el conjunto de los estudios de Doctorado en España en ese periodo. Pero fuera de todo esto —insistimos, de un más que relativo interés—, si también nos interesa la cuestión es porque permite traer a colación lo que no dudamos en calificar como un verdadero *peligro metodológico*, uno de esos que acechan casi permanentemente al historiador empeñado en reconstruir el pasado. Ese peligro consiste en la aplicación de la lógica del presente sobre los hechos que sucedieron en el pasado. Ese peligro se presenta como una verdadera tentación a la *comodidad*, ya que el historiador que se conduce exclusivamente así, desde la seguridad del presente, no tiene que reconstruir ni las categorías del periodo que estudia, ni la lógica y la coherencia de los hechos en su propio contexto; le basta con aplicar las actuales —que pueden ser hasta propias y asumidas y no sólo contempladas en otros— al pasado que estudia y analiza. Son historiadores que conciben la Historia de un modo falsamente continuista: el presente está diseñado en el pasado y es el pasado del futuro⁸. A cualquiera que estudie el Doctorado en Derecho privado en la Universidad de Sevilla, entre los años 1955 y 1985, seguro que le asalta la tentación de atribuir la coherencia y la lógica que presiden, que parecen presidir al menos, el Doctorado desde 1985, cuando los Departamentos individualmente o agrupados promueven y convocan sus propios programas de Doctorado.

⁸ Cualquier reflexión sobre la difícil *conjugación* e interrelación (*interdependencia*) de los *tiempos históricos*: pasado, presente y futuro, pensamos que pasa por uno de los maestros de la historiografía del último cuarto del siglo xx: Reinhart Koselleck, autor del conocido *Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos*, Paidós, Barcelona, 1993, y de *Los estratos del tiempo: estudios sobre la historia*, Paidós, Barcelona, 2001. Los seguidores de su pensamiento están de enhorabuena por la reciente publicación de la traducción un trabajo anterior (1975): *historia/Historia*, Trotta, Madrid, 2004 (traducción e introducción de Antonio Gómez ramos). Los retrasos en la entrega de los trabajos tienen algunas ventajas: en este periodo de mora se ha publicado además, entre nosotros, un interesante libro de J. Aróstegui, *La historia vivida. Sobre la historia del presente*, Alianza, Madrid, 2004. En él plantea, en la primera parte (pp. 19 a 193), lo que denomina «La historización de la experiencia», que concibe como una «historia del presente», a partir de una consideración de éste, del presente, como «tiempo real de la historia».

Lo contrario no significa presentar el Doctorado en dicho periodo como una mera acumulación circunstancial de cursos monográficos y tesis doctorales. Eso paradójicamente sería aplicar la misma lógica *a sensu contrario* —una especie de «*hoy tiene su coherencia, antes no la tenía*»—. De lo que se trata, insistimos, es de reconstruir esta realidad en sus propias circunstancias y con su propia coherencia⁹. Sólo así trabajos modestos como éste y otros más ambiciosos pueden contribuir al conocimiento del clima cultural de toda una época¹⁰.

⁹ Creemos sinceramente que al trabajo de Merchán no puede achársele este planteamiento. Sería injusto atribuírselo, ya que en ningún momento acomete un análisis que intente localizar hilos conductores o coherencias buscadas en la elaboración de las tesis doctorales realizadas en el periodo que describe. No lo hace claramente pero sí lo insinúa al menos, siempre de forma muy liviana, por ejemplo, al presentar las tesis doctorales defendidas en la Universidad de Sevilla divididas por materias, o cuando señala el propósito general de su libro: «Lo que se pretende, en definitiva, es una exposición sobre quiénes han sido los Doctores en Derecho durante la segunda mitad del siglo XX en la Facultad de Derecho de Sevilla; y sobre todo cuántos y cuáles fueron los temas que se abordaron y por consiguiente constituyeron el objeto de investigación para alcanzar el grado de doctor, presentados de manera sistemáticamente adecuada dentro del espectro geométrico del saber jurídico. Y al hilo de ello quiénes fueron los directores de dichas tesis doctorales y los grupos o familias científico-jurídicas que se originaron con este motivo en la Facultad de Derecho hispalense, durante la etapa en que su sede fue la fábrica de tabacos, que a mi modo de ver representa la Edad de oro de su historia científica» (*Doctores iuris*, cit., p. 17).

Como muestra de esta forma de proceder, en nuestra opinión bastante artificiosa, véase recientemente J. M. Pérez-Prendes, *Consideraciones sobre el influjo del Krausismo en el pensamiento jurídico español*, en Enrique M. Ureña/Pedro Álvarez Lázaro, *La actualidad del Krausismo en su contexto europeo*, Editorial Parteluz, Fundación Duques de Soria, Universidad Pontificia de Comillas, Madrid 1999, pp. 187-216.

¹⁰ Se trata además de un modo de operar sobre el pasado muy extendido en la llamada historia cultural (sobre ésta, véase P. Burke, *Formas de historia cultural*, Alianza Editorial, Madrid, 1999). No nos referimos a la historia cultural *a la grande*, esto es, la de los clásicos Burkhardt o Huizinga, sino a otra más raquítica. Por ejemplo, en el análisis de periodos o de generaciones, o incluso trayectorias intelectuales personales es muy frecuente un análisis *desde el presente*, que puede resultar deformante y hasta

Finalmente, otras dos aclaraciones más. En primer lugar, en cuanto al ámbito estudiado nos hemos circunscrito al Doctorado en Derecho privado¹¹ y de forma más concreta a los dos sectores del ordenamiento jurídico que prácticamente lo agotan: el Derecho civil

peligroso. Que esto se haga en memorias o en autobiografías intelectuales por parte de los propios protagonistas resulta humanamente comprensible: la idea de que aquello que se hizo respondía a un plan preconcebido parece que engrandece el propio recorrido intelectual. Se trata de excluir a toda costa cualquier sensación de improvisación o casualidad. Las cosas sucedieron así porque se trató de que fueran así, y no por extrañas circunstancias o por mero azar (lo que se considera una *vulgaridad*). Sea como fuere, este modo de enfrentar la historia, los hechos del pasado como si estuviesen sostenidos por una trama invisible (*silenciosa*) que le proporciona la lógica *que deseamos que tengan*, no deja de ser peligroso por deformante. En este sentido, creemos que el ejercicio de *reconstrucción* de un periodo de nuestra historia cultural que realiza últimamente J. Gracia, *La resistencia silenciosa. Fascismo y cultura en España*, Anagrama, Barcelona, 2004, puede adolecer, en una de las posibles lecturas del trabajo, de este vicio. Es el riesgo de descubrir indicios de *bondad* (oposición al Régimen) en trabajos inencontrables, en conferencias con poco público y hasta en frases sueltas. Se trata, a pesar de todo, de un brillante trabajo, recomendable para adentrarse en la *verdadera* historia cultural e intelectual del franquismo y sobre todo para desterrar esa imagen lineal de la misma tan asentada y lamentablemente indiscutida hasta ahora.

¹¹ A. Merchán Álvarez, *Doctores iuris*, cit., p. 65, lo considera un planteamiento tradicional y en gran parte superado pero que resulta «muy comunicativo por ilustrativo» y por tanto útil para organizar el listado de tesis doctorales leídas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Por mucho que tantos se empeñen en considerar en crisis esta clásica distinción sigue siendo útil, como se demuestra en este caso en el que nos sirve al menos para mirar al pasado selectivamente. Se trata, no obstante, de una distinción que hemos aprendido ya *en crisis*, siempre relativizada o cuestionada su importancia y sobre todo bajo la denuncia de la incapacidad de los tradicionales criterios que han pretendido establecerla para imponerse claramente, haciéndola absoluta y definitiva. Los tiempos de la huida hacia el Derecho privado (la del Derecho administrativo) duran ya bastante —incluso el fenómeno ha experimentado, experimenta, una intensidad muy variable—; como duran también los de la publicación de algunos sectores del Derecho privado. Pero sigue estando más que justificado el uso de una distinción en la que debe reconocerse que hay mucho de mimetismo y de repetición irreflexiva. Esos criterios distintivos tradicionales (los sujetos, el interés) a los que antes nos referíamos son puestos en

y el Derecho mercantil¹². Las aportaciones en cuanto a número de cursos de Doctorado y de tesis doctorales son bastante desiguales, claramente superiores las de la primera de las áreas. Se trata de un planteamiento bastante artificioso y formalista, que incluso, como apunta Merchán¹³, puede resultar muy convencional y hasta raquí-

duda con críticas tradicionales que necesitan también *ser dudadas*. Conviene revisar unos y otras y conviene acaso ensayar nuevos criterios. Necesariamente ello puede conducir a una reubicación, e incluso a una reconfiguración, de los diversos sectores materiales del Derecho. Por todos, véase últimamente G. Alpa, *Derecho público «y» Derecho privado. Una discusión abierta*, RDP 1999, pp. 11-43. Sobre el Derecho público y el Derecho privado en este periodo en nuestro país, véase S. Muñoz Machado, *De la II República al siglo XXI. Las transformaciones del Derecho en setenta años*, REDA 2002, núm. 66, esp. pp. 99 a 104, dedicadas a «La evolución del Derecho público y del Derecho privado en el periodo franquista».

¹² La presencia del Derecho internacional privado es bastante escasa. El hecho de que hasta principios de los años ochenta no se produjese la escisión oficial de los dos Derechos internacionales, público y privado, tal y como los conocemos hoy, explica en parte esta escasez, dado el escoramiento hacia el primero de los titulares de la cátedra. Al respecto, véase A. Merchán Álvarez, *Doctores iuris*, cit., p. 124.

¹³ Véase A. Merchán Álvarez, *Doctores iuris*, cit., p. 36. En efecto, pueden calificarse de este modo, como tesis de Derecho privado, algunas realizadas en este periodo en las áreas de Derecho romano, de Derecho canónico o de Historia del Derecho. Merece reseñarse este último caso donde José Martínez Gijón, Catedrático de la disciplina en Sevilla desde mediados de los sesenta, tuvo una perceptible inclinación hacia la Historia del Derecho privado (al respecto, véase C. Petit, *El jurista y el mercader. Estudios de José Martínez Gijón [1932-1997]*, en J. Martínez Gijón, *Historia del Derecho mercantil. Estudios*, Universidad de Sevilla, 1999, pp. 11-22). Así lo demuestra la tesis de Bartolomé Clavero, *Historia Institucional del mayorazgo castellano*, (1972), o las de Derecho de Familia realizadas bajo su dirección: *La filiación natural en el derecho histórico español*, de Enrique Gacto Fernández (1968), o *La tutela de los huérfanos en el derecho castellano leonés desde la época hispano-romana hasta fines del siglo XV*, de Antonio Merchán (1975). Siempre en el campo del Derecho privado, también con dirección de Martínez Gijón, se realizaron varias tesis de Historia del Derecho mercantil: Juan Antonio Alejandre, *La quiebra en el Derecho histórico español anterior a la Codificación* (1969), Raquel Rico, *El ejercicio del poder social en las Reales Compañías de Comercio con América* (1978), o *Las compañías mercantiles en Bilbao (1737-1829)*, de Carlos Petit Calvo (1979).

tico, ya que algunas tesis, por su tema podrían encuadrarse en dos o más áreas de conocimiento y desde luego podrían recibir la calificación de tesis *de Derecho privado*.

En segundo lugar, hay que hacer una referencia a las fuentes documentales utilizadas. Entre 1955 y 1985 el Doctorado en Derecho, tanto los cursos como la tramitación previa y defensa de las tesis doctorales, depende organizativamente de las Facultades. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla se conservan en el archivo de su secretaria una serie de carpetas, organizadas por años o por periodos de estos, con las que se puede reconstruir bastante fidedignamente los cursos de Doctorado impartidos en el centro en este periodo. La documentación es bastante desigual de un año a otro, sobre todo por lo que respecta a los programas de los diversos cursos (el número de los que se conservan es bastante escaso). Para establecer el listado de cursos de Doctorado de Derecho privado nos hemos valido básicamente de los anuncios de su celebración, en los que se declaraba abierto el plazo de matrícula para ellos. Estos comunicados se publicaban en el tablón de anuncios de la Facultad, siempre entre octubre o noviembre¹⁴. Dicho listado sin embargo, como se verá, no es completo. También ayuda a su establecimiento la secuencia de comunicaciones entre la Dirección General de Enseñanza Universitaria, el Rectorado y el Decanato, secuencia que se repite a lo largo de todo este periodo¹⁵. Por lo que se refiere al listado de tesis doctorales, su establecimiento es

¹⁴ En la recopilación de los cursos de Doctorado hemos manejado también el Legajo 2022 del Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla, que recoge las «Actas de exámenes» de estos en el periodo 1947-1956.

¹⁵ En el Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla pueden reconstruirse algunas de las comunicaciones que sobre los cursos de Doctorado tienen lugar entre la Facultad, el Rectorado y la Dirección General de Enseñanza Universitaria, a lo largo de las décadas de los cincuenta y los sesenta (Legajo 3691-4: «Registro de documentos. Salidas» y Legajo 3692-1, correspondiente al «Libro de Salida de correspondencia»).

No es el momento de estas cuestiones, pero resulta indudable que la descentralización del Doctorado será meramente geográfica, ya que administrativamente los cursos y los profesores que los impartían debían ser aprobados por la Dirección General de Enseñanza Universitaria. Sobre la situación anterior, véase C. Petit, *La Administración y el Doctorado: centralidad de Madrid*, AHDE 1997, Tomo LXXVII, vol. I, pp. 593-613.

bastante sencillo a partir del Libro registro de tesis existente en la Facultad¹⁶.

2. *Los hechos en su lugar descanso (en el pasado)*

Los hechos que describimos suceden a lo largo de treinta años en una Universidad que se puede *explicar*, como todo lo que sucede hasta entonces España, en una determinada clave política. No descubrimos nada nuevo. La Universidad y la Ciencia se articulan entonces *políticamente*. A partir de los años cincuenta la maquinaria está montada y preparada y ya sólo hay que hacerla funcionar. La Universidad —no en su población flotante, los estudiantes, pero sí en sus elementos permanentes, los profesores y el personal de administración y servicios— está definitivamente *tomada*. Con esa seguridad, parece que es posible descentralizar el Doctorado, hasta el punto de que pueda obtenerse el grado en las Universidades periféricas. La de Sevilla, su Facultad de Derecho responde inmediatamente:

En Junta de facultad celebrada el día 18 del actual se acordó por unanimidad solicitar de la superioridad la concesión necesaria para conferir el Grado de Doctor en esta Facultad, toda vez que los cursillos monográficos para el Doctorado vienen cursándose en esta desde hace más de cinco cursos.—Dios guarde a V.M.E. muchos años. Sevilla, 22 de marzo de 1954. El Decano.

Este escrito del Decano de la Facultad de Derecho inaugura una nueva época en los estudios de Doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Sabemos además que se trata de una iniciativa institucional, de la propia Universidad, ya que días antes hay un saluda del Rector en el que, de conformidad con lo acordado por la Junta de Gobierno, le recuerda «que solicite esa Facultad cuanto antes, la autorización para poder conferir el grado de Doctor». Es evidente que las autoridades académicas sevillanas lo tienen claro. Lo que hasta entonces ha sido la simple impartición

¹⁶ A. Merchán Álvarez, *Doctores iuris*, cit., pp. 171 a 213, lo recoge prácticamente en su integridad, añadiendo algunos datos interesantes, como él de la publicación posterior como libro de la tesis.

de unos cursos que podrían culminar o no con la defensa de la tesis doctoral y la colación del grado de doctor en Madrid, cobra en ese periodo ahora otro cariz mucho más atractivo a priori para los posibles doctorandos. No sólo pueden impartirse los cursos sino que también puede defenderse la tesis doctoral en la propia Universidad. Una gran novedad que debe suponer alguna diferencia cualitativa con lo que viene sucediendo hasta entonces con estos cursillos, al menos por lo que se refiere a su configuración, así como respecto de la elección de los temas sobre los que se realizan las tesis. El Secretario del centro así lo indica a través de una nota hecha pública por medio del tablón de anuncios:

Por Decreto de 25 de junio de 1.954 le ha sido concedida a esta facultad el poder otorgar el Grado de Doctor, habiéndose reorganizado por ello el Sistema de cursillos monográficos precisos para el mismo.—En el tablón de anuncios de la facultad se encuentran expuestas las normas para estos cursillos, estando abierto el plazo de inscripción hasta el próximo 15 de los corrientes.—Sevilla, 1 de octubre de 1955 el Secretario.

A esta nota se adjunta el anuncio de los cursos con indicación de la apertura del periodo de matrícula y de su duración, un modelo de comunicación que permanecerá prácticamente inalterado durante más de treinta años. La principal novedad que se introduce es la triple distinción de los cursos de doctorado como de Derecho público, de Derecho privado o comunes a ambos Derechos, una distinción que alcanzará sólo hasta el curso 1957-1958:

Cursos Monográficos del Doctorado Curso 1955-56

Concedida la posibilidad de otorgar el Grado de Doctor a esta Facultad, ha sufrido reorganización el sistema de los cursillos monográficos del doctorado. Se mantiene el mismo número de cursillos que tienen que ser aprobados, es decir, seis, y se establece la siguiente modificación:

Los Licenciados que preparen o vayan a preparar tesis de Derecho privado, sólo podrán matricularse en cursillos de Derecho privado o en cursillos comunes a Derecho público y privado.

Cursillos del primer cuatrimestre

Derecho público:

Sr. Dr. D. Ignacio M^a de Lojendio: «La política de la población».

Sr. Dr. D. Mariano Aguilar: «Tribunales Internacionales y procedimiento internacional»

Sr. Dr. D. Manuel Francisco Clavero: «Lo contencioso administrativo»

Sr. Dr. D. Antonio Muro : «Fuentes del Derecho Indiano» (Debe tenerse en cuenta que este cursillo es sólo la primera parte, estando obligado los que se matriculen en él, a hacerlo igualmente en la segunda parte o cursillo del segundo cuatrimestre, así como a presentar un trabajo monográfico al catedrático).

Cursillos comunes de Derecho público y Derecho privado:

Sr. Dr. D. Ramón Carande: La política de Fomento en España bajo los Borbones y en especial la reforma agraria de Carlos III.

Sr. Dr. D. Manuel Giménez Fernández: «Instituciones canónicas hispano-americanas»

Sr. Dr. D. Francisco Elías de Tejada: «Sociología Bantú».

Sr. Dr. D. Faustino Gutiérrez-Alviz: «La Casación civil».

Los cursillos del 2º cuatrimestre serán los siguientes: De Derecho público: «La población indiana en el siglo XVI», Dr. Manzano.— «Instituciones jurídicas indianas», Dr. Muro.— De Derecho privado: «El negocio jurídico», Dr. Royo Martínez.— «Comunidad e indivisión en el Derecho privado romano», Dr. Pelsmaeker.— Comunes a Derecho público y privado, Doctrina de la restitución canónica (a mano, ya que aparece tachado «la población indiana en el siglo XVI, Dr. Giménez. Fernández.

Los programas correspondientes a estos cursillos del primer cuatrimestre están en la Secretaría de la Facultad a disposición de los Sres. Licenciados interesados.

La matrícula para dichos cursillos del primer cuatrimestre está abierta desde el primero de octubre hasta el día 15 del mismo mes.

Lamentablemente no se nos da cuenta de las razones en que se fundamenta esta opción organizativa. No existe en la Junta de Facultad donde se aprueban dichos «cursillos» una justificación intelectual de este modo de configurarlos. Lo que sí se observa ya es una notable descompensación entre el Derecho publico y el Dere-

cho privado. Este último estará representado sólo por civilistas y durante mucho tiempo, en alguna medida, por romanistas. Con carácter general, debe destacarse la presencia de los cursos de Derecho Indiano, cursos impartidos en la Facultad de Filosofía y Letras, una presencia constante desde los años cuarenta que se mantendrá hasta los setenta¹⁷. También debe destacarse que la impartición de los cursos corresponderá casi en exclusiva a los Catedráticos. Esto tiene una explicación *estamental* y *económica*. Estamental en el sentido de que se trata de una Universidad muy jerarquizada y en la que el Catedrático asume las funciones más preeminentes, tanto desde el punto de vista académico como administrativo. A ello debe unirse una razón económica, ya que estos cursos son retribuidos aparte del sueldo propio. No es de extrañar por tanto que los primeros en hacerse con este encargo docente y con este extra económico fuesen los Catedráticos de la Facultad.

Por tanto, son dos los hechos que nos interesan para observar y analizar qué sucede en este periodo: cursos de doctorado y tesis doctorales, ambos de Derecho privado, en la delimitación que proponemos. De los primeros, los que durante mucho tiempo, hasta 1985, fueron cursos, cursillos monográficos del doctorado, y que hoy se agrupan bajo los llamados «Programas de Doctorado», como ya se ha señalado, nos interesa descubrir sobre todo si sus contenidos responden a un planteamiento previo o son simplemente un aluvión de coincidencias, es decir, si los concretos cursos ofrecidos no son sino la aplicación o la continuación de aquello que él que lo imparte tiene más a mano. La detección de esto puede ser relativamente fácil, por ejemplo, si se hace coincidir el título del curso con una obra reciente o con un trabajo que aparecerá inmediatamente con posterioridad a su impartición. En muchos casos, y también son fáciles de detectar, responden a novedades legislativas. En otros se tratará simplemente, al menos eso parece, de una mera amplia-

¹⁷ La presencia del Prof. Antonio Muro Orejón, Catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras será permanente e ininterrumpida. Una presencia además monotemática, o más bien bitemática, ya que repetirá prácticamente los dos mismos cursos: «Fuentes del Derecho Indiano» e «Instituciones jurídicas indianas». La explicación institucional de dicha presencia hay que localizarla en la vinculación existente, ya señalada, entre la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, del CSIC, y la Facultad de Derecho.

ción de las lecciones que se explican en la docencia *normal*, no de doctorado.

Por lo que se refiere a las tesis doctorales —que es la cuestión sobre la que se ha centrado Merchán Álvarez y en él que hemos podido percibir precisamente *cierta* preocupación por localizar alguna coherencia en los temas elegidos¹⁸—, o más concretamente, los temas de las tesis doctorales, estos pueden ofrecernos una panorámica sobre dos cuestiones. De un lado, la consideración de la tesis doctoral como culminación de un proceso formativo lógico, una de cuyas fases, la inicial para ser más precisos, son los cursos de Doctorado. De otro, la tesis doctoral como reflejo o formando parte de un proceso intelectual de más alcance: el del director de la tesis que proyecta en ella sus preocupaciones intelectuales.

Pero veamos estos hechos, que permanecen inalterados en el pasado:

Elenco de cursos de Doctorado de Derecho civil entre 1955 y 1985¹⁹

AÑO	CURSO	PROFESOR
1956	<i>El negocio jurídico</i>	<i>Dr. Miguel Royo Martínez</i>
1957	<i>Los ejecutores testamentarios</i>	<i>Dr. Miguel Royo Martínez</i>
1958	<i>Nuevo Régimen del Registro foncier</i>	<i>Dr. Miguel Royo Martínez</i>
1959	<i>La Ley de reforma del Código Civil</i>	<i>Dr. Miguel Royo Martínez</i>
1960	<i>La reforma del sistema inmobiliario francés</i>	<i>Dr. Miguel Royo Martínez</i>
1960	<i>La Sociedad de Gananciales</i>	<i>Dr. Alfonso de Cossío y Corral</i>
1961	<i>Las codificaciones de los Derechos forales</i>	<i>Dr. Alfonso de Cossío y Corral</i>
1962	<i>El Derecho agrario y la reforma del campo andaluz</i>	<i>Dr. Juan Jordano Barea</i>
1962	<i>Las nuevas Leyes agrarias españolas</i>	<i>Dr. Juan Jordano Barea</i>
1963	<i>Las formas jurídicas de explotación de la tierra</i>	<i>Dr. Juan Jordano Barea</i>
1964	<i>Economía y Derecho civil</i>	<i>Dr. Alfonso de Cossío y Corral</i>
1965	<i>La cooperación agraria</i>	<i>Dr. Juan Jordano Barea</i>

¹⁸ Véase A. Merchán Álvarez, *Doctores iuris*, cit., p. 35.

¹⁹ Los huecos existentes en el cuadro se deben a la inexistencia de cursos en esos años o a la imposibilidad de encontrar documentación en esos años.

AÑO	CURSO	PROFESOR
1966	<i>Las sociedades de explotación de la tierra</i>	<i>Dr. Juan Jordano Barea</i>
1966	<i>Las sociedades agrarias protegidas</i>	<i>Dr. Juan Jordano Barea</i>
1967	<i>Economía y Derecho</i>	<i>Dr. Alfonso de Cossío y Corral</i>
1968	<i>El dinero en Derecho Civil</i>	<i>Dr. Alfonso de Cossío y Corral</i>
1968	<i>Interpretación de los contratos</i>	<i>Dr. Juan Jordano Barea</i>
1969	<i>Dialéctica jurídica</i>	<i>Dr. Alfonso de Cossío y Corral</i>
1970	<i>La Interpretación de los negocios jurídicos</i>	<i>Dr. Juan Jordano Barea</i>
1972	<i>La filiación</i>	<i>Dr. Alfonso de Cossío y Corral</i>
1973	<i>Dialéctica del Derecho de propiedad</i>	<i>Dr. Alfonso de Cossío y Corral</i>
1973	<i>Principios generales del Derecho y la doctrina legal</i>	<i>Dr. Alfonso de Cossío y Corral</i>
1974	<i>La apariencia del debido y la posesión</i>	<i>Dr. Juan Jordano Barea</i>
1974	<i>La rescisión de los contratos</i>	<i>Dr. Alfonso de Cossío y Corral</i>
1975	<i>La Reforma de 1975 del Código Civil</i>	<i>Dr. Alfonso de Cossío y Corral</i>
1976	<i>Interpretación de las normas jurídicas</i>	<i>Dr. Juan Jordano Barea</i>
1977	<i>La responsabilidad civil del médico</i>	<i>Dr. Juan Jordano Barea</i>
1978	<i>Simulación del negocio jurídico</i>	<i>Dr. Juan Jordano Barea</i>
1979	<i>Familia y Constitución</i>	<i>Dr. Juan Jordano Barea</i>
1979	<i>Reforma del Derecho de Familia</i>	<i>Dr. Ángel M. López y López</i>
1980	<i>Reforma del Código civil en materia de matrimonio</i>	<i>Dr. Juan Jordano Barea</i>
1984	<i>Aspectos jurídico-privados de la Ley de Reforma Agraria Andaluza</i>	<i>Dr. Juan Jordano Barea</i>

Elenco de cursos de doctorado de Derecho mercantil entre 1955 y 1985 (mucho más escaso que el anterior)

AÑO	CURSO	PROFESOR
1960	<i>Las modificaciones dela capacidad de la mujer casada y su repercusión en la órbita mercantil</i>	<i>Dr. Manuel Olivencia Ruiz</i>
1961	<i>Ante una posible reforma del Derecho concursal español</i>	<i>Dr. Manuel Olivencia Ruiz</i>
1962	<i>Acción cambiaria</i>	<i>Dr. Manuel Olivencia Ruiz</i>
1963	<i>Ordenación bancaria</i>	<i>Dr. Manuel Olivencia Ruiz</i>
1965	<i>El seguro obligatorio del automóvil</i>	<i>Dr. Manuel Olivencia Ruiz</i>

AÑO	CURSO	PROFESOR
1966	<i>La ley uniforme sobre la compraventa</i>	<i>Dr. Manuel Olivencia Ruiz</i>
1967	<i>Reforma de la sociedad anónima</i>	<i>Dr. Manuel Olivencia Ruiz</i>
1968	<i>Reforma del protesto</i>	<i>Dr. Manuel Olivencia Ruiz</i>
1969	<i>Seguro de responsabilidad Civil</i>	<i>Dr. Manuel Olivencia Ruiz</i>
1978	<i>El Derecho mercantil y la Constitución</i>	<i>Dr. Manuel Olivencia Ruiz</i>

En lo referente a los otros hechos, las tesis doctorales, su establecimiento a partir del mencionado Libro registro de la Facultad de Derecho y, sobre todo, a partir del trabajo de Merchán Álvarez, resulta bastante fácil.

Tesis de Derecho civil. 1955-1985

NÚM.	TÍTULO	AÑO	AUTOR	DIRECTOR
1	El contrato ganadero de reposición: su naturaleza jurídica	1955	Infantes Florido, José Antonio	Cossío y Corral, Alfonso de
2	El derecho real de subhipoteca	1956	Gullón Ballesteros, Antonio	Cossío y Corral, Alfonso de
3	El artículo 1124 del código civil español: (la cláusula resolutoria tácita	1957	Fernández Cantos, José Luis	Cossío y Corral, Alfonso de
4	La acción subrogatoria	1958	Gómez Calero, Juan	Cossío y Corral, Alfonso de
5	El Fuero del Baylio. Estudio histórico-jurídico de la institución	1961	Madrid del Cacho, Manuel	Cossío y Corral, Alfonso de
6	La adopción: derecho comparado	1963	Pizarro Rodríguez, Ángel	Cossío y Corral, Alfonso de
7	Las mejoras fundiarias	1969	Álvarez Fuentes, Manuel	Jordano Barea, Juan B.
8	La posesión de estado familiar	1970	López López, Ángel M.	Jordano Barea, Juan B.
9	En torno a la sustitución fideicomisaria	1970	Cossío Martínez, Manuel de	Jordano Barea, Juan B.
10	Cuestiones prejudiciales sobre el estado civil de las personas	1972	García Hirschfeld, José Luis	Jordano Barea, Juan B.
11	El contrato atípico de arrendamiento de automóviles	1972	Moreno Álvarez, Javier	Jordano Barea, Juan B.
12	La reserva ordinaria	1973	León-Castro Alonso, José Ricardo	Cossío y Corral, Alfonso de
13	La doble venta a través de la jurisprudencia	1974	Molina García, Antonio	Jordano Barea, Juan B.
14	La representación aparente: una aplicación singular del principio de protección de la apariencia	1977	Gordillo Cañas, Antonio	Jordano Barea, Juan B.
15	Los pactos de separación de hecho en derecho común tras la Ley de 2 de mayo de 1975	1980	Valpuesta Fernández, María del Rosario	López y López, Ángel M.
16	Estructura patrimonial y personalidad jurídica de la sociedad civil	1981	Capilla Roncero, Francisco de Sales	López y López, Ángel M.

NÚM.	TÍTULO	AÑO	AUTOR	DIRECTOR
17	La Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de préstamos usurarios y su tratamiento en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo	1983	Codes Anguita, José Luis	López y López, Ángel M.
18	La responsabilidad por actos dañosos de la administración pública sometidas al derecho privado	1984	Verhoeven, Charles Louis	López y López, Ángel M.

Tesis de Derecho mercantil. 1955-1985

NÚM.	TÍTULO	AÑO	AUTOR	DIRECTOR
1	El marco jurídico de las cooperativas agrarias españolas de comercialización: revisión y nueva perspectiva	1971	Rafael Carbonell de Masy	Olivencia Ruiz, Manuel
2	Aspectos jurídicos de las operaciones de ventas con primas	1974	Font Galán, Juan Ignacio	Olivencia Ruiz, Manuel
3	La obligación de intereses en el Derecho mercantil español	1985	Morán Bovio, David	Olivencia Ruiz, Manuel

Estos hechos ofrecen algunas claves de análisis, necesariamente *microhistóricas*. En primer lugar, por lo que se refiere a los cursos de Doctorado, básicamente los de Derecho civil²⁰, pueden destacarse los siguientes extremos, algunos de ellos ya apuntados:

Primero, es muy evidente el protagonismo en cuanto a su impartición de los Catedráticos de la disciplina, una nota característica que dura prácticamente hasta los años ochenta, en que los programas de Doctorado suponen, entre otras cosas, el acceso generaliza-

²⁰ En Derecho mercantil puede extrañar la inexistencia de cursos hasta 1960. Las razones hay que buscarlas en el hecho de que se trata de una de las cátedras que sufre los efectos duraderos de la Guerra Civil. En 1936 el Rector de la Universidad de Sevilla es Francisco Candil Calvo, Catedrático de Derecho mercantil en su Facultad de Derecho. Aunque no he verificado todavía estos datos, Candil sobrevive pero sufre un proceso de depuración, reintegrándose sin embargo a la Facultad. No impartirá ningún curso de Doctorado. Si el Prof. Candil sufre una postergación *de hecho*, no lo sabemos, pero por ejemplo es habitual —y esto sí lo he podido comprobar— su inasistencia a las Juntas de Facultad que se celebran en ese periodo.

do a la docencia de Doctorado de profesores de otras categorías profesionales²¹.

Segundo, la elección de los temas respondería a esas razones antes apuntadas. Pesa bastante, como se detecta con facilidad, esa inmediatez legislativa ya referida, lo que supone el planteamiento de cursos al hilo de algunas reformas normativas. Pero hay mucho también de preferencias personales no determinadas necesariamente por el legislador, si se quiere *intemporales*, lo cual puede verificarse comprobando que es aquello que publican en dicho período estos profesores. Lo primero explica, por ejemplo, el curso impartido por Royo Martínez en 1959, sobre la Ley de 24 de abril de 1958 (Jefatura) por la que se modifican determinados artículos del Código civil, o el ofrecido en 1962 por Jordano Barea sobre «Las nuevas Leyes agrarias españolas», así como los impartidos por Cosío y Corral en 1975 sobre «La Reforma de 1975 en el Código Civil» y por López y López y otra vez por Jordano Barea sobre las reformas operadas en el Derecho de familia como consecuencia de la promulgación de la Constitución Española de 1978: «Reforma del Derecho de Familia» y «Reforma del Código civil en materia de matrimonio», en 1979 y 1980 respectivamente. En cuanto a las preferencias personales, éstas como decimos son fácilmente detectables. Por ejemplo, que Royo Martínez, Catedrático de Derecho civil prematuramente desaparecido, se ocupe a mediados de los cincuenta de «Los negocios jurídicos» no puede extrañar. Son los años de bonanza entre nosotros de esta categoría conceptual —una bonanza que tendrá, en cierto modo, su culminación en la publicación en 1971 del *El negocio jurídico* de Federico de Castro²²—. En

²¹ Ello será el resultado no como pueden pensar algunos inconvenientemente de la pretendida *democratización* de los departamentos universitarios a partir de mediados de los ochenta, efecto de la promulgación de la LRU, sino del notable incremento de los cursos de Doctorado en el seno de los programas de Doctorado. De unos cursos para todo el centro, en los que estaban representadas casi todas las cátedras con uno o dos cursos, se pasa a unos programas, prácticamente por materia, en los que de forma obligada se amplía el número de estos, lo que conduce obviamente a que no puedan ser asumidos en exclusiva por los catedráticos.

²² El negocio jurídico, como es de sobras conocido entre los privatistas, es una categoría en crisis hace mucho tiempo, tanto que para algunos es una crisis como la del teatro, que hay quien la remonta a su misma

el mismo sentido, los intereses científicos de Jordano Barea se ponen de manifiesto en los cursos que imparte. Así, de la interpretación, materia a la que dedicó, en su versión testamentaria, una conocida monografía²³, se ocupa directamente en tres cursos: 1968: «La interpretación de los contratos», 1970: «La interpretación de los negocios jurídicos» y 1976: «La interpretación de las normas jurídicas».

En todo caso, de la contemplación de los cursos de Doctorado ofrecidos no se adivinan ni deducen propuestas pensadas, en las que se busque una continuidad científica y una coherencia, por ejemplo, con las tesis doctorales inspiradas y dirigidas por estos profesores. Aunque quizá pueda intuirse alguna excepción: en 1974 Jordano Barea imparte un curso sobre «La apariencia del debido y la posesión» y en 1977 defiende bajo su dirección el Prof. Gordillo Cañas, en la actualidad Catedrático de Derecho civil en la Universidad de Sevilla, su tesis «La representación aparente: una aplicación singular del principio de protección de la apariencia»; o también, como se ha señalado, parece existir cierta continuidad entre el hecho de que el Prof. López y López, en 1979 se ocupe en un curso de la reforma del Derecho de Familia y al año siguiente la Prof^a. Valpuesta Fernández realice la defensa de su tesis doctoral dedicada a «Los pactos de separación de hecho en derecho común tras la Ley de 2 de mayo de 1975». Pero quizá la más clara excepción sea la continuidad que se aprecia en la atención que

creación en la Grecia antigua Sea como fuere, no debe ser tan intensa dicha crisis, al menos entre nosotros, cuando a la lejana traducción de los clásicos Cariota-Ferrara (*El Negocio jurídico*; trad. del italiano, prólogo y notas de Manuel Albaladejo, Aguilar, Madrid, 1956) y Betti (*Teoría General del Negocio Jurídico*, trad. Antonio Martín Pérez, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1959), ha seguido ya en los años noventa la de *El negocio jurídico* de otro italiano ilustre como es Francesco Galgano (Tirant Lo Blanch, Valencia, 1992, trad. de Francisco de P. Blasco Gascó y Lorenzo Prats Albentosa), y más recientemente de *El negocio jurídico* del alemán Werner Flume (Fundación cultural del Notariado, Madrid, 1998, trad. de José María Miquel González y Esther Gómez Calle).

²³ *Interpretación del testamento*, Bosch, Barcelona, 1958. Éste y otros trabajos han sido recogidos últimamente por el autor, sin duda uno de nuestros mejores especialistas en la materia, en *El testamento y su interpretación*, Editorial Comares, Granada, 1999.

presta al Derecho agrario, *de moda* entonces en España —moda tardía, como muchas entre nosotros²⁴—. Los seis cursos que en ese periodo dedica a la materia son demostrativos por sí solos de una tendencia y de un ambiente que explican entre otras cosas que en el Plan de estudios de 1965 de la Licenciatura en Derecho que se aprueba y se implanta con carácter provisional en las Facultades de Derecho de Valencia y Sevilla se incluya como asignatura el Derecho agrario, formando parte de la especialidad de Derecho privado.

En lo relativo a los otros hechos tenidos en consideración, las tesis doctorales, es inevitable la referencia a dos parámetros: el número de las defendidas y los temas sobre los que éstas son elaboradas. En cuanto al número, la comparación entre un área y otra, entre las defendidas en Derecho civil y en Derecho mercantil, arroja un balance claramente favorable para la primera. Este dato puede darnos, no obstante, una impresión equivocada. Este dato —que puede originar una lectura *sobrevenida*, desde el presente, tiene mucho que ver con lo que será nuestra propuesta *metodológica*— podría llevar a cualquiera a la conclusión de que el área de Derecho mercantil es un páramo improductivo, por lo que se refiere a la generación de doctores. Esto no es exactamente así, como explica bien Merchán Álvarez²⁵, teniendo en cuenta que muchos de los doctores obtienen el grado en Bolonia. A pesar de todo, el número de tesis defendidas en el área de Derecho civil

²⁴ Precisamente en ese periodo publica J. B. Jordano Barea, *Derecho civil y Derecho agrario*, RDP 1964, pp. 721-731. Diez años antes se había publicado el conocido trabajo de Federico de Castro, *El Derecho Agrario de España. Notas para su estudio*, ADC 1954, pp. 577-404. No sabemos si el considerado uno de los padres del agrarismo, el Prof. Giangastone Bolla, a requerimiento del cual parece que De Castro redactó este trabajo, fue consciente de las *cargas de profundidad* que contra el Derecho agrario vertió el autor en el mismo. Las diferencias entre un trabajo y otro son significativas. Sobre todo marcan el periodo —los años sesenta— en que el Derecho agrario en España conocerá ese importante impulso al que nos referíamos. Sobre el Derecho agrario en la actualidad, véase A. Ballarín, *Del Derecho agrario al Derecho agroalimentario*, en *Estudios de Derecho civil en homenaje al profesor Dr. José Luis Lacruz Berdejo*, Vol. I, Barcelona 1992, pp. 155-190, y J. F. Delgado de Miguel, *Derecho agrario de la Unión Europea*, Oviedo 1996, esp. pp. 45-70.

²⁵ A. Merchán Álvarez, *Doctores iuris*, cit., p. 146.

es superior de forma notoria y es, sobre todo, significativamente notable en el conjunto de tesis defendidas en la Facultad en ese periodo, en todas las áreas de conocimiento²⁶. Este resultado puede afirmarse que forma parte de la *normalidad* del centro y que es consecuencia de la configuración del plan de estudios de la Licenciatura en el que es evidente su importancia. Lo anormal y extraordinario hubiese sido un similar número de tesis defendidas en Derecho canónico o en Derecho internacional, por citar dos áreas minoritarias.

Sobre los temas de las tesis doctorales podemos decir lo mismo: poca coherencia y en este caso con una incoherencia añadida, la de su poca continuidad respecto de los cursos de Doctorado. Que las tesis doctorales se realicen al margen del contenido de estos, viene a reforzar la impresión señalada sobre el carácter puntual y aislado de los mismos. Un solo dato confirma esta conclusión. Como se ha observado, en los años sesenta Jordano Barea muestra un evidente gusto por el Derecho agrario, interés deducible, entre otras cosas, por los cursos de Doctorado que imparte en dicho periodo. Sin embargo, a pesar de este dato tan contundente, las tesis doctorales dirigidas por él que se defienden en la Facultad en esos años no reflejan su convencido iusagrarismo. En definitiva, las tesis doctorales reflejan un Doctorado asistemático y casi nos atreveríamos a decir que *caprichoso*. La propia historia de cada tesis doctoral estamos casi seguros que reflejaría en su origen circunstancias de lo más variadas y hasta caprichosas. Pero con ello no estaríamos sino cayendo en lo que queremos denunciar: en una condicionada observación del presente desde el pasado. La conciencia de esto es lo que nos impide compartir la conclusión que alcanza Merchán²⁷ sobre la determinada coherencia que se deduce de todo este panorama doctoral: «Las agrupaciones por áreas conjugadas con las referencias personales de los Directores, permiten definir grupos de investigación doctoral, con menor o mayor cohesión, dentro de la Facultad, pero que a veces permiten hablar de Maestros y de auténticas Escuelas».

²⁶ A. Merchán Álvarez, *Doctores iuris*, cit., pp. 130 a 136.

²⁷ A. Merchán Álvarez, *Centro y periferia*, cit., p. 441.

3. *Conclusión (por ahora y siempre): las limitaciones del historiador o dejar las cosas como fueron*

Contemplaciones como las que aquí se realizan ponen a prueba el oficio del historiador²⁸. En un objeto histórico como el que se analiza en este trabajo, contemporáneo (presente, si se prefiere) y cultural, la prueba duplica su dificultad. Cuando los hechos no son cercanos sino lejanos el historiador gana en perspectiva —si bien es obvio que pierde en la medida en que encuentra mayor dificultad para hecerse con los hechos tal y como fueron—. A ello debe añadirse que se trata de unos hechos culturales, de unos hechos cuyas motivaciones y elementos conformadores pertenecen a un territorio difícilmente aprensible y explorable como es el del intelecto. Pero no son —y en eso digamos que se obtiene cierta ventaja— unos hechos aisladamente culturales. No se trata de la trayectoria de un poeta marginal o de un intelectual *de provincias*, en el que el protagonista lo es también de las circunstancias que le rodean, sino que se trata de unos hechos culturalmente institucionales, que suceden en una institución característica y regulada: la Universidad, en la que se desarrolla además buena parte de la vida cultural de dicho periodo. Ello, que no dificulta el acercamiento, sí puede en cambio deformarlo en una determinada dirección. En suma, un humilde *rinconcito* de nuestra historia universitaria pone a prueba el oficio del historiador empeñado en reconstruir las cosas como fueron. Ese historiador que, como nos recuerda recientemente Gaddis²⁹, se sitúa *de espaldas*, contemplando el paisaje del pasado, el paisaje de la Historia. Ese historiador, que en esa posición da la espalda al presente, se encuentra sometido a una *limitación* y a un *peligro*.

Ambos extremos han sido apuntados ya, además como especialmente acusados en los historiadores del pensamiento o en ese ya no

²⁸ El término *oficio* no debe tomarse con connotaciones peyorativas. Quien así lo hiciese demostraría una ignorancia bastante acusada. Para los reticentes vaya toda la autoridad reconocida de M. Bloch, *Apología para la historia o el oficio de historiador*, Fondo de Cultura Económica, México, 1998, y su uso consciente por parte de E. Moradiellos, *El oficio de historiador*, Siglo XXI de España Editores, Madrid, 1999.

²⁹ La imagen que nos ofrece Gaddis sobre el historiador y su oficio está realmente conseguida. Véase J. L. Gaddis, *El paisaje de la historia. Cómo los historiadores representan el pasado*, Anagrama, Barcelona, 2004.

tan novedoso género que es la historia de la cultura, del que la historia de la universidad sería una especie de subgénero. La reconstrucción del pasado cultural resulta siempre arriesgada y limitada. La superación de la historia en clave *rankiana*, puesta de manifiesto, entre otras cosas, en la diversificación de los objetos históricos, enriquecedora de por sí, tienes sus riesgos. Lo importante es ser conscientes de la existencia de estos e intentar asumirlos. En esta simple asunción hay ya un cierto grado de superación y sobre todo un enriquecimiento de la labor del historiador. Paradójicamente, puede pensarse, la limitación enriquece. En definitiva, no se trata más que de las limitaciones propias de *cualquier* historiador respecto de *cualquier* objeto histórico; limitaciones que por supuesto se especializan en la concreción de cada uno de estos. La reconstrucción en este caso de los estudios de Doctorado en Derecho privado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla en un periodo concreto será necesariamente limitada y aproximada. Ello no supone desmerecer las conclusiones que se alcancen, sino simplemente estar abiertos a su permanente revisión.

Y ello lo pensamos porque si algo acecha al historiador, como auténtico peligro, es la distorsión que le llega de *su* presente. En concreto, la aplicación de una lógica que obtiene del presente sobre los hechos del pasado. A conjurar este riesgo, es de sobras conocido, se han dedicado páginas y páginas por parte de la historiografía. Menos son las que se han dedicado a denunciarlo en la historia cultural donde las *zonas oscuras* en la reconstrucción de los hechos son mucho mayores y más peligrosas. El establecimiento de la *verdad histórica* es siempre difícil, admitiendo por supuesto la imposibilidad de que ésta coincida *exactamente* con la Verdad. Una dificultad que se acrecienta en el ámbito en el que nos estamos moviendo. El acceso a las razones de los protagonistas, al origen de sus decisiones, alcanzar su sentido y establecer su explicación, es imposible, ya que el historiador se encuentra necesariamente limitado de un modo no puede ni debe compensarse con una lógica del presente. Como hemos insistido, no es ésta la visión de estos hechos que nos suministra Merchán Álvarez, pero también hemos insistido en que se detectan algunos elementos en los que se descubre un excesivo *comparatismo* entre el pasado y el presente³⁰. Con ello no

³⁰ Sobre esta cuestión, véase M. Detienne, *Comparar lo incomparable. Alegato a favor de una ciencia histórica comparada*, Ediciones Península, Barcelona, 2001.

estamos reivindicando —sería pretencioso y absurdo— considerar incomparable el Doctorado en Derecho privado en la Universidad de Sevilla entre 1955 y 1985. Sólo planteamos lo conveniente de su consideración aislada, en el pasado. Sólo así creemos podrá llevarse a cabo una *verdadera* reconstrucción de cómo fueron las cosas.

Todo ello no significa —sería la impresión de primera mano— que deba renunciarse a cualquier suerte de análisis sobre los hechos del pasado inmediato, pensando entre otras cosas que su inmediatez los invalida como objeto de análisis histórico. Obviamente no deben plantearse así las cosas. Más bien al contrario, debe aprovecharse dicha inmediatez en aras de un bien entendido *continuismo* —no de ese, peligroso, empeñado y obsesionado porque las piezas del pasado encajen perfectamente en el presente³¹— y sobre todo en contar con un mayor número de fuentes con las que reconstruir el pasado. Es obvio que el documento no basta y que el rompecabezas tiene otras piezas: el testimonio personal, la trayectoria intelectual e incluso el espacio donde los hechos se desarrollaron. A pesar de ello será siempre un conocimiento limitado, pero será también —y no decimos nada nuevo, como no hemos dicho nada nuevo a lo largo de este trabajo— un conocimiento que puede contribuir a la comprensión del presente y a la explicación (no a la anticipación: de eso se ocupan *otros*, menos serios) del futuro inmediato³².

³¹ Sobre este *peligroso* continuismo y para una reflexión sobre el papel del historiador, la Historia del Derecho y del jurista positivo, del estudio del Derecho positivo, véase Grossi, *El punto y la línea (Historia del derecho y derecho positivo en la formación del jurista de hoy*, Acto solemne de Investidura como Doctor Honoris Causa del profesor Dr. D. Paolo Grossi, Universidad de Sevilla 1998, pp. 19-30. Ese denunciado continuismo es el que encontramos hoy desgraciadamente en la romanística, de forma mayoritaria desde luego en la española, empeñada en justificar su utilidad e incluso en salvar jurídicamente a Europa. A todos estos continuistas les convendría la lectura de M. Bretonne, *Derecho y tiempo en la tradición europea*, Fondo de Cultura Económica, México, 1999.

³² En este sentido, concluye J. M. Jover Zamora, *Historiadores españoles de nuestro siglo*, (antes en *Corrientes historiográficas en la España contemporánea*, en AA. VV., *Once ensayos sobre la Historia*, Madrid, Fundación Juan March, 1976, pp. 215-247), Real Academia de la Historia, Madrid 1999, p. 308, que «El historiador sabe, por razón de su propio oficio, que cuando se han intentado exponer las líneas generales de un proceso estrictamente contemporáneo, es decir, actual, no caben «conclusiones», preci-

Quizá la mejor manera de concluir (por ahora) sean las palabras de Jesús Vallejo³³ que también desde un pequeño recodo del pasado nos advierte: «..., los historiadores nos asomamos a mundos extraños, lejanos no en el espacio pero sí en el tiempo. Conocemos de ellos testimonios fragmentarios, y solemos estimar que sabemos lo suficiente para entenderlos. Pero ¿cómo podemos de verdad valorar la potencialidad de nuestros instrumentos de acceso, de nuestros términos, de nuestros conceptos, de nuestros métodos? ¿No sucederá que a veces sabemos sólo lo equivalente a una proposición y a una conjunción? ¿No resultará que el aumento cualitativo de nuestros conocimientos sirva únicamente para convertirnos en expertos en proposiciones, conjunciones o artículos, y ni siquiera sospechemos los sustantivos y los verbos».

César Hornero Méndez
Universidad Pablo de Olavide

samente porque el proceso continúa hoy mismo, en el quehacer que sirve de contexto al trabajo mismo del autor. No es momento de incurrir en juicios supletorios de los del valle de Josafat contra los que se levantara en sus *Combats pour l'Histoire*, la mordaz ironía de Lucien Febvre. Pero quizá quede dentro de la tarea que me ha sido encomendada al proponerme unas páginas sobre el tema que figura en la cabecera de este ensayo, el indicar unos vacíos sobre los cuales es muy probable que haya de verterse parte del trabajo de los historiadores españoles en un futuro inmediato».

³³ Véase J. Vallejo Fernández de la Reguera, *Ejemplo del catalogador riguroso*, Penepole. Revista de História e Ciências Sociais, n° 25 (Dezembro 2001), pp. 171-174.

LA UNIVERSIDAD DE MARAÑÓN

Sumario: 1. Marañón universitario.—2. El pensamiento universitario de Gregorio Marañón.—3. Conclusiones.

El pensamiento de Gregorio Marañón (1887-1960) acerca de la Universidad de su tiempo —con excepción de su crítica al sistema de elección del profesorado y los testimonios de su labor como maestro universitario—, es uno de los aspectos que menos han tratado los investigadores¹. El objetivo de este trabajo es analizar las principales pautas de ese pensamiento —al que en adelante me refe-

¹ Los distintos biógrafos de Gregorio Marañón se han referido someramente a su andadura universitaria como estudiante, el influjo que sobre él ejercieron determinados profesores, sus triunfos académicos, publicaciones, magisterio, labor académica y científica en el Instituto de Patología Médica, etc., en este sentido quienes han detallado de modo más minucioso estas cuestiones han sido F. J. Almodóvar y E. Warleta en *Marañón o una vida fecunda*, Espasa-Calpe, Madrid, 1952. Entre los estudios dedicados exclusivamente a su pensamiento universitario destacan la ponencia de Arturo Fernández-Cruz, «Marañón y la Universidad de España», *Homenaje a Marañón*, Universidad de Madrid, 1970, pp. 21-48, que se centró en su itinerario como discípulo y como maestro; la conferencia que dictó José Botella Llusá, *Gregorio Marañón. El hombre, la vida, la obra*, Publicaciones del Centro Universitario de Toledo, Universidad Complutense, Colección «Toledo Universitario», 1972, que resumió el pensamiento universitario de Marañón en cuatro aspectos, separación Universidad-política, crítica de las oposiciones, batalla al examen y ruptura de la rigidez de los escalafones docentes; y la ponencia de Julio Ortiz Vázquez, «Marañón, maestro. El magisterio clínico en su tiempo y en el nuestro» recogido en *Marañón, actualidad anticipada. Homenaje ofrecido por la Universidad Complutense con motivo del primer centenario de su nacimiento*, Eudema, Madrid, 1988, pp. 93-112, que se refirió a su concepto del magisterio universitario. Entre los testimonios de discípulos que recuerdan aspectos de su personalidad destaca el de Vicente Pozuelo Escudero, *Marañón y su obra en la medicina. Visión de un discípulo directo y personal*, Biblioteca Nueva, Madrid, 1999.

riré como *pensamiento universitario*—, para lo cual me detendré, en primer lugar, en su itinerario académico y, posteriormente, abordaré el análisis detallado de dicho pensamiento. En este estudio, se va a profundizar en esta cuestión aportando documentación inédita y contextualizando su pensamiento en las circunstancias históricas en las que Marañón reflexionó sobre la Universidad.

1. *Marañón universitario*

Gregorio Marañón estuvo vinculado a la Universidad a lo largo de toda su vida. Desde que inició el curso Preuniversitario (1902-03) hasta su fallecimiento en marzo de 1960, fue uno de los referentes de la Universidad española. Analizando su expediente académico se comprueban sus altas calificaciones que le llevaron a obtener el Premio Extraordinario de Licenciatura en 1909². De entre sus profesores hay que destacar, por la influencia que tuvo sobre su pensamiento universitario y científico, a Santiago Ramón y Cajal³. Al finalizar la carrera de Medicina se matriculó en las asignaturas de doctorado⁴ y, en 1910, realizó su viaje de estudios pensionado a Francfort, donde trabajó en el Laboratorio de Investigaciones Biológicas que dirigía Ehrlich —que terminaba por entonces las investigaciones que supusieron un gran avance en el remedio de las enfer-

² Cf. Archivo Histórico Universidad Complutense de Madrid, Caja 406, Expediente «*Marañón y Posadillo, Gregorio*»; o, Archivo General de la Administración (en adelante AGA), Educación, Caja 31/16127, Legajo 910/58. En su licenciatura Gregorio Marañón obtuvo ocho Matrículas de Honor, tres Sobresalientes, nueve Notables y siete Aprobados. En aquella época el Premio Extraordinario se obtenía tras un examen entre los mejores alumnos de cada promoción —en su caso el tema fue «Tratamiento quirúrgico de los derrames pleurísticos»—.

³ En su primer curso de Licenciatura asistió a la asignatura de Histología impartida por éste, en la que obtuvo Notable. Pedro Laín Entralgo, *Gregorio Marañón, Vida, Obra, Persona*, Espasa-Calpe, Madrid, 1969, pp. 18-22, destaca otros profesores universitarios que tuvieron influencia en Gregorio Marañón (Dres. Olóriz, Madinaveitia, Alonso Sañudo y San Martín).

⁴ Cf. Archivo Histórico UCM, Caja 406...; AGA, Educación, Caja 31/16127.... Las asignaturas que cursó en 1909-10 fueron: Historia de la Medicina (Notable), Análisis Químico, Antropología y Psicología Experimental (Aprobado).

medades infecciosas, sobre todo, en el combate contra la sífilis—, y también estuvo adscrito al Laboratorio de Química Fisiológica donde conoció al Profesor Embden que lo dirigía⁵. Entonces era frecuente que los alumnos universitarios brillantes realizaran viajes de ampliación de estudios pensionados fuera de España⁶. En estos años el destino más prestigioso en medios científicos era Alemania, donde Marañón entró en contacto con la bibliografía extranjera y conoció las corrientes de investigación científica más vanguardistas. Desde entonces, en sus trabajos de especialización médica hay presencia considerable de bibliografía foránea y es también frecuente su relación con profesores e investigadores nacionales y extranjeros, con el objeto de intercambiar publicaciones y de presentarse mutuamente a diferentes discípulos⁷. Tras su periplo por el exterior, Marañón elaboró su tesis doctoral que defendió el 20 de enero de 1911 y por la que obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado⁸. Desde entonces, impulsó la disciplina endocrinológica en España.

Pronto comenzó su relación con el sistema de elección del profesorado. En mayo de 1911, ganó por oposición —en la que obtuvo el número 1—, un puesto de médico de la Beneficencia Provincial⁹. Posteriormente, el 9 de octubre de 1912, solicitó al ministro de Instrucción Pública que se le permitiera presentarse a una plaza de auxiliar del sexto grupo de la facultad de Madrid¹⁰, auxiliaría que obtuvo, siendo desde entonces ayudante de la sala de disección adscrita a la cátedra del Dr. Olóriz. En 1924, presentó una instancia donde solicitaba ser nombrado profesor agregado. El 30 de junio de ese año, la junta

⁵ Archivo Real Academia Nacional de Medicina, *Expediente Gregorio Marañón*.

⁶ La mayoría de ellos iban pensionados por el Ministerio de Instrucción Pública —caso de Marañón— o por instituciones como la Junta de Ampliación de Estudios —creada con este fin en 1907.

⁷ Algo documentado en su epistolario recogido en la Fundación Gregorio Marañón.

⁸ Cf. Archivo Histórico UCM, Caja 406... «*La sangre en los estados tiroideos*», calificada con Sobresaliente.

⁹ Real Academia de la Medicina. *Expediente*...

¹⁰ Instancia manuscrita recogida en AGA, Educación, Caja 31/16127.... (La normativa acerca de estas auxiliares estuvo recogida en la Gaceta de Madrid en el RD de 12 de enero de 1912 y en la RO de 12 de octubre de ese mismo año).

de facultad la resolvió positivamente, por lo que fue nombrado profesor agregado de Patología y Clínica Médica sin mediar oposición¹¹. Su beligerancia contra el sistema de oposiciones fue pública y notoria desde su conocida disputa con Royo Villanova en 1920. Éste, era el presidente de un tribunal de oposiciones para la Cátedra de la Clínica Médica en la Universidad de Barcelona. El tribunal concedió la cátedra a un opositor recomendado por Alejandro Lerroux, perjudicando al joven y brillante Dr. Carlos Jiménez Díaz. Marañón se hizo eco de esta injusticia publicando un artículo polemizando con la decisión del tribunal en *El Liberal*¹². Se produjeron algunos altercados y Royo Villanova le acusó en el Senado de alentar los desordenes estudiantiles. Marañón quiso desafiarlo públicamente pero, tras la mediación de algunas personalidades, la cuestión no llegó a más¹³.

Su presencia pública y su relevancia social fue notoria al menos desde que, en el verano de 1918, se desarrolló en España una pandemia gripal que llevó a la Dirección de Sanidad y al Ministerio de la Gobernación, a encargar a los doctores Marañón, Pittaluga y Ruiz Falcó un estudio oficial para buscar una solución sanitaria al problema¹⁴. El prestigio del Dr. Marañón era ya notable, por lo cual fue

¹¹ AGA, Educación, Legajo 15050/12. Marañón solicitaba dicha plaza acogiéndose a lo dispuesto en el artículo 4 del RD de 30 de septiembre de 1902. El 16 de julio de 1924 el Vicerrector envió una nota al Subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública notificándole la decisión de la Junta. El 20 de agosto de 1924, desde el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, se notificó por RO el nombramiento puntualizando que dicho nombramiento era «gratuito y no da más derecho al nombrado que los que le reconocen los Reales decretos mencionados».

¹² *El Liberal*, 4 de marzo de 1920.

¹³ Todos estos acontecimientos los refiere detalladamente en su biografía Marino Gómez-Santos, *Gregorio Marañón*, Plaza Janés, Barcelona, 2001, pp. 130-137.

¹⁴ Los tres médicos se dirigieron en viaje oficial a Francia y allí visitaron diferentes hospitales, además del Instituto Pasteur. El patólogo Cushing les recomendó visitar la instalación que dirigía Almroth Wright, el gran bacteriólogo, en Boulogne-sur-mer, donde conocieron al Dr. Fleming —al que Marañón acogería años más tarde en su Cigarral de Toledo, cuando Fleming ya era una celebridad mundial—. Conocieron también a otros destacados profesionales como Widal o Babinski. A su vuelta a España se repartieron por todas las ciudades y aldeas, fototipias con consejos para prevenir y combatir la enfermedad.

nombrado consejero de Sanidad, en 1919, y de Instrucción Pública, en 1920. En adelante, su prestigio público fue rubricado por ser el médico que trataba a algunos miembros de la Familia Real y a destacadas personalidades de la sociedad madrileña.

Marañón gozaba, ya desde mucho antes, de reconocimiento en medios médicos y universitarios. Al ganar la plaza de médico de la Beneficiencia Provincial en 1911, pidió como destino el servicio de las salas de enfermedades infecciosas —cuya jefatura estaba entonces vacante—, situado en unas salas abuhardilladas en la última planta del Hospital General de Madrid, donde trabajó hasta 1913. En aquellas salas, como consecuencia de las deficientes condiciones higiénicas, los contagios se multiplicaban. En 1913, ayudado por Sor Ventura Pujadas —superiora del Hospital—, y por la marquesa de Perinat, inauguró un pabellón de infecciosos, situado en el patio central de dicho Hospital General¹⁵. Allí desarrolló su trabajo sobre enfermedades infecciosas hasta que, en 1925, se finalizaron las obras del Hospital del Rey donde se trataría a estos enfermos —por lo que, posteriormente, se llamó Hospital de Enfermedades Infecciosas—.

En esos años tuvo, políticamente, una destacada relevancia como consecuencia de su enfrentamiento con la Dictadura de Primo de Rivera. En 1924, con motivo de la llegada de los restos mortales de Ángel Ganivet a Madrid, Marañón y otros intelectuales, como Américo Castro o Jiménez de Asúa, intervinieron en la sesión necrológica que se celebró en el Paraninfo de la Ciudad Universitaria, donde denunciaban la actitud represora de la Dictadura. La sesión fue suspendida durante la celebración del acto, al intentarse leer una carta de Unamuno que criticaba la política de Primo y de la que, previamente, se habían repartido 5.000 copias entre los alumnos asistentes¹⁶. La ten-

¹⁵ El pabellón de infecciosos era, según algunos testimonios, un lugar decoroso aunque no lujoso. Allí, anteriormente, se habían almacenado enseres hospitalarios. Construido en madera, el principal beneficio que se obtuvo para los enfermos con este traslado, fue la mejora higiénica. Aspectos relatados en *Veinticinco años de labor. Historia y bibliografía del profesor Gregorio Marañón y del Instituto de Patología Médica del hospital de Madrid*, Espasa-Calpe, Madrid, 1935 (y reflejados por Marino Gómez-Santos, *Gregorio Marañón...*, pp. 81-82).

¹⁶ Lo referido a estos sucesos viene relatado en Marino Gómez-Santos, *Gregorio Marañón...* pp. 243-270. Este autor, narra detalladamente la correspondencia entre Marañón y Unamuno referida a estos sucesos.

sión en la Universidad continuó creciendo en los meses siguientes. En 1925, poco antes de ser inaugurado el Hospital del Rey, Marañón presentó su dimisión como director del mismo para el que había sido propuesto. Esta dimisión se produjo por las imposiciones que, sobre la orientación del nuevo hospital, trataba de imponer Martínez Anido —vicepresidente y ministro de la Gobernación del Directorio Civil—. De este modo, continuó su trabajo científico —ya al margen del Hospital del Rey—, en su Departamento de Patología Médica¹⁷. En 1926, Marañón y otros intelectuales organizaron un acto paralelo al que presidió el dictador en la inauguración del monumento a Santiago Ramón y Cajal —obra de Victorio Macho—. Primo concedió la medalla «Plus Ultra» a Cajal y publicó la carta de agradecimiento que el Nobel le envió. Destruyó así el argumento de los intelectuales, que pretendían esgrimir la figura y el prestigio de Cajal, contra las actitudes de la Dictadura. Este proceso de tensión llegó a su punto culminante con el famoso encarcelamiento de Marañón. El motivo, la *Sanjuanada*. Como se sabe consistió en una conspiración contra la Dictadura en la que participaron coroneles de Cataluña, Valencia, Aragón, Cádiz, Madrid, el famoso general Weyler y algunos políticos. Marañón fue encarcelado entre el 23 de junio y el 23 de julio de 1926, acusado de participar en ella y se le impuso una multa de 100.000 pesetas¹⁸.

En los años siguientes, con la caída de la dictadura primorriverista en enero de 1930, y el advenimiento de la Segunda República, en abril de 1931, Marañón alcanzó un gran protagonismo que se

¹⁷ Sus discípulos han calificado como determinante la intervención de Marañón en la construcción del Hospital del Rey. También han señalado cómo no recibieron ayuda oficial para la dotación del Departamento de Patología Médica, cuyo pabellón se renovó y amplió sucesivamente hasta 1931, gracias al impulso —también económico—, del mismo Marañón. Cf. *Veinticinco años de labor. Historia...*, pp. 11-15.

¹⁸ Durante su período en la cárcel tradujo *El Empecinado*, libro original de Federico Hardman —traducción que, posteriormente, se publicaría con el título *El «Empecinado» visto por un inglés*, Ruiz, Madrid, 1926—. Está recogido en *Obras Completas*, Vol. V, Espasa-Calpe, Madrid, 1975, pp. 7-84. Entre 1966 y 1977 se publicaron los diez volúmenes que componen sus *Obras Completas*. La edición corrió a cargo de Alfredo Juderías y de Pedro Laín Entralgo que escribió su prólogo. En adelante al referirme a ellas sólo señalaré las iniciales OC, el volumen correspondiente y las páginas a las que se refiere la cita.

debió, fundamentalmente, a que, desde tiempo atrás, había impulsado, junto a Ortega y Gasset y Pérez de Ayala, la *Agrupación al Servicio de la República*. Durante la República Marañón obtuvo diversos reconocimientos académicos, el que aquí nos interesa es su nombramiento como catedrático¹⁹. Por entonces, la Diputación Provincial de Madrid —presidida por Salazar Alonso—, de la que dependía el Departamento de Patología Médica, subvencionó unas obras de ampliación y mejora y otorgó, a ese Departamento, el título de Instituto de Patología Médica. Los trámites para la creación de la cátedra de Endocrinología —que iba a ser materia propia del Doctorado—, se sucedieron a lo largo del mes de julio de 1931²⁰. El día 20 de este mes, el Ministerio de Instrucción Pública se mostró favorable a «nombrar [...] a D. Gregorio Marañón y Posadillo, Catedrático de *Endocrinología* del período del Doctorado de la expresada Facultad [de Medicina de la Universidad Central], con el haber anual de 12.000 pts, que percibirá con cargo al cap. 9.º, artículo

¹⁹ Entre otros reconocimientos importantes, destaca su elección como académico numerario de las Reales Academias de la Lengua, de la Historia y de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Marañón fue miembro de cinco Academias. Su nombramiento para estas tres, entre 1932 y 1936, puede ser interpretado como consecuencia de su relevancia social, cultural y política. En algunas de estas Academias tendría una labor destacada en los años sucesivos. Así, en la Española colaboró activamente en la incorporación de términos científico-médicos en el Diccionario. Algunos de sus trabajos históricos más destacados —como por ejemplo, el *Conde Duque de Olivares* y *Antonio Pérez*— llegarían años más tarde. Por el contrario, en la Academia de Medicina —donde había tomado posesión en 1922—, apenas se limitó a contestar algunos discursos de ingreso e, incluso, en años posteriores, mantuvo alguna discrepancia pública con la labor que allí se desempeñaba.

²⁰ El día 4, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, sección Universidades, emitió una resolución que decidía que, por la importancia de la especialidad de Endocrinología y la escasez de personal con la suficiente preparación científica y docente en esta disciplina, procedía a nombrar un Catedrático de reconocido prestigio —aunque no perteneciera al profesorado titular de la Universidad—. Para proveer esa plaza, la facultad de Medicina de la Universidad Central, la Academia Nacional de Medicina y el Consejo de Instrucción Pública debían presentar, por separado, a un candidato. Las tres instituciones propusieron al Dr. Gregorio Marañón. Cf. AGA, Educación, Legajo 15050/12. Marino Gómez-Santos, *Gregorio Marañón...*, pp. 344-346, relata estos acontecimientos.

único, conceptos 1.º y 2.º de la vigente Ley de Presupuestos»²¹. El 4 de agosto tomó posesión de dicha cátedra, que aparecía por primera vez en España.

En aquel Instituto de Patología Médica desarrolló su labor científica y académica, allí impartió esta disciplina, trabajó junto a sus discípulos y dirigió diferentes investigaciones. Por su instituto aparecieron importantes figuras del panorama científico nacional e internacional que, invitados por Marañón, impartieron allí conferencias. En colaboración con el uruguayo Dr. Collazo creó, en 1932, el Seminario de Medicina Experimental, en el que se realizaban tesis doctorales y se discutían trabajos clínicos y de experimentación.

Con el estallido de la Guerra Civil española se produjo el exilio de muchos intelectuales, científicos y profesionales liberales, entre ellos, Marañón. Desde finales de 1936, que salió de España, y mediados de 1943, cuando regresó a Madrid, estuvo, fundamentalmente, en París. Entre esos años realizó dos viajes a Latinoamérica (a principios de 1937, a Uruguay, Argentina, Chile y Brasil, y en agosto y septiembre de 1939, a Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay y Brasil), donde impartió conferencias en las Universidades y centros académicos más importantes de esos países²². Durante la contienda civil fue mirado con recelo por ambos bandos. Los republicanos consideraban que había dejado de apoyar su causa y les había traicionado. Los nacionales no terminaban de fiarse de él por su pasado liberal y republicano. Desde el Gobierno —ya instalado en Valencia—, Marañón fue separado de su condición de catedrático por orden del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes del 25 de mayo de 1937. Cuando terminó la Guerra Civil, el nuevo régimen impulsó la depuración de medios académicos y culturales. Con este motivo, el Ministerio de Educación Nacional declaró cesantes a todos los miembros del personal docente que no se presentaran en el plazo establecido sin justificación. En 1939, dicho Ministerio emitió una nota donde se informaba de que, Gregorio Marañón y Posadillo no se había presentado

²¹ Orden de 4 de julio de 1931. Cf. AGA, Educación, 15050/12.

²² Como por ejemplo, en el Ministerio de Salud Pública de Montevideo, en la facultad de Medicina de Santiago de Chile, en la Academia Nacional de Medicina y en el Teatro Politerama de Buenos Aires, en la facultad de Ciencias Médicas y en la Academia Nacional de Lima, en el limeño Rotary Club, en la Academia Peruana de la Lengua, en la Universidad del Cuzco, etc.

a servir su cargo de profesor de la facultad de Medicina de la Universidad de Madrid, por lo que se le abriría el expediente reglamentario correspondiente. Finalmente, no se le abrió dicho expediente pues, según aparece manuscrito en el informe abierto por el jefe del negociado del Ministerio para que se le aplicara la normativa —informe de fecha 9 de septiembre de 1939—, se indica: «dado el tiempo transcurrido sin resolución, la dirección general informa de nuevo, que se debiera por quien haya lugar, hacer llegar al Dr. Marañón al convencimiento de que conviene pida la excedencia por más de un año y menos de 10. Esto lo facilitaría todo. 31/7/40». Y, una anotación posterior, en este caso mecanografiada señala, «Archivado por Orden verbal del Sr. Ministro, de fecha de hoy. Madrid, 3 de agosto, de 1940. El Jefe de la Sección». Tras asegurarse de que sería respetado por el régimen franquista, regresó del exilio. El Ministerio incorporó de nuevo la disciplina de Endocrinología a las ofertadas por la facultad de Medicina, resolviendo que fuera Marañón quien la impartiera²³. Marañón reinició su labor académica en el curso 1946-47, pronunciando la lección inaugural del curso oficial de Endocrinología de la facultad de Medicina.

Desde su regreso hasta su fallecimiento en 1960 su presencia universitaria volvió a circunscribirse a su labor en la cátedra de Endocrinología. Desde ella, fue creando una escuela que consolidó el estudio de esta disciplina en nuestro país²⁴. Esta consolidación se vio truncada con su fallecimiento. En febrero de 1960, se convocó una nueva oposición para profesores adjuntos a la cátedra de Endocrinología. El 27 de marzo de ese mismo año, falleció Gregorio Marañón. Se produjo entonces una situación excepcional ya que, dicha cátedra —entonces vacante— fue considerada por el Ministerio inherente a su persona, debido al proceso normativo por el que había sido creada²⁵. Entre tanto, el proceso habitual de la oposición siguió su curso —publicación de la relación de candidatos y tribu-

²³ Cf. AGA, Educación, 15050/12. La reincorporación de la Endocrinología en la enseñanza de Doctorado se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 1 de noviembre de 1945.

²⁴ Consecuencia de ello se convocó, en abril de 1950, una plaza de profesor adjunto a su cátedra que obtuvo Vicente Pozuelo Escudero. Cf. AGA, Educación, 15055/3.

²⁵ Proceso relatado anteriormente, relativo a la Orden de 4 de julio de 1931.

nal, y convocatoria para el ejercicio, el 9 de diciembre de ese año—. El vicerrector de la Universidad Central tuvo que dirigirse al director general de Enseñanza Universitaria explicándole que se debía suspender la convocatoria ya que la disciplina de Endocrinología «[...] ha sido suprimida de la Enseñanza, por fallecimiento del Catedrático que la desempeñaba y siendo esto así, no debe haber Profesores Adjuntos en una disciplina que ha sido extinguida»²⁶. Así fue. Posteriormente, la cátedra de Endocrinología reapareció en 1969.

Como se ha mostrado, Marañón estuvo vinculado a la Universidad hasta el día de su fallecimiento. En 1957, al cumplir 70 años —edad reglamentada de jubilación—, el claustro de la facultad de Medicina, solicitó al rector que elevase su petición al director general de Enseñanza para que se permitiera a Marañón continuar ejerciendo su cátedra con carácter extraordinario. El rector así lo hizo y dicha gracia fue concedida, de modo que, el Dr. Marañón continuó su labor en la cátedra de Endocrinología hasta su muerte, en marzo de 1960²⁷. Como consecuencia de su prestigio científico y académi-

²⁶ Cf. AGA, Educación, Legajo 15055/3. Dicha anulación se publicó en el Boletín Oficial del Estado de 23 de enero de 1961.

²⁷ Cf. AGA, Legajo 15050/12. Destaco de esta nota el apartado IV donde los miembros del claustro que suscriben la petición, fueron algunas de las más distinguidas personalidades de la Medicina española del siglo XX: «[...] 4º. Que en último término y para obviar las dificultades administrativas, puede ser nombrado Catedrático extraordinario de su asignatura el mismo día de su jubilación para no perder la continuidad. Con nombramientos semejantes, después de haber cumplido los setenta años, han sido agraciados D. Ramón M^a Aller Ulloa y D. Eugenio D'Ors. Abierta la Sesión, se dio lectura al citado escrito y el Claustro tomó el acuerdo de trasladarlo a V. M. E., con el ruego de que lo elevase a la Superioridad, para dar estado oficial a lo que en el mismo se solicita, que en definitiva es que llegado el momento de la jubilación del Prof. D. Gregorio Marañón y Posadillo sea nombrado Catedrático Extraordinario de Endocrinología de esta Facultad de Medicina [...]. Significando a V. M. E. que este Decanato se adhiere al acuerdo tomado en el Claustro. “Los Clausúrales firmantes del escrito son los siguientes: D. Francisco Martín Lagos, D. José M.^a del Corral, D. Benigno Lorenzo Velázquez, D. Pedro García del Villar, D. Carlos Jiménez Díaz, D. José Casas, D. Antonio Vallejo Nágera, D. Guillermo Núñez, D. Alfonso de la Peña, D. Francisco Orts Llorca, D. Juan José López Ibor, D. Ciriaco Laguna, D. José A. Palanca, D. Rafael Vara López, D. Fernando de Castro, D. Julián Sanz Ibáñez, D. Carlos Gil y Gil, D. José Botella, D. Buenaventura Carreras,

co, dictó conferencias en centros académicos de todo el mundo y fue nombrado por algunas Universidades Doctor *honoris causa*²⁸. Pero no sólo estuvo unido a la Universidad por sus ocupaciones científicas, también le preocupó la Universidad como institución, veamos los principales aspectos de su pensamiento universitario.

2. *El pensamiento universitario de Gregorio Marañón*

Al detallar los principales parámetros del pensamiento universitario de Gregorio Marañón, hay que señalar, en primer lugar, en qué momentos cronológicos se refirió y desarrolló este pensamiento. Como se ha constatado, su itinerario en la Universidad española, estuvo influido por las circunstancias políticas de cada momento. Por ello, es imprescindible hacer hincapié en el contexto en que se produjeron las principales reflexiones acerca de la situación universitaria.

Fue, fundamentalmente, durante el período que la historiografía ha venido denominando *primer franquismo* (1939-1956/59), cuando dedicó algunas de sus reflexiones, escritos y discursos a la situación universitaria española²⁹. Parece lógico deducir que dicha

D. Pedro Laín Entralgo, D. Fernando Enríquez de Salamanca, D. Gerardo Zabala, D. José Gay Prieto, D. Manuel Bermejillo, D. Pedro Trobo, D. José San Román, D. Daniel Mezquita, D. Alfonso de la Fuente y D. Pedro García Graz». Lo que tengo el honor de transcribir a V. I., y al propio tiempo este Rectorado, complacidísimo, hace suya la petición de la Facultad de Medicina [...]. Documento fechado el 1 de Septiembre de 1956.

²⁸ La Sorbona de París en 1934, la de San Antonio de Cuzco en 1939, o las lusas de Oporto, en 1946, y de Coimbra, en 1959.

²⁹ Cabe destacar, *Vocación y ética y otros ensayos*, Espasa-Calpe, Madrid, 1936; «1953: Se discute en todo el mundo sobre enseñanza» en *Efemérides y Comentarios (1952-1954)*, Espasa-Calpe, Madrid, 1955; *La Medicina en nuestro tiempo*, Espasa-Calpe, Austral, Buenos Aires, 1954. Y, de modo más breve en «Bandera verde», en Merchán González, *El hombro doloroso*, Salvat, 1951, Madrid (OC, I, pp. 329-331); «El claro maestro», *Gaceta Médica Española*, n.º 5, año XXVI, mayo de 1952 (OC, IV, pp. 863-864); «La Enseñanza en el mundo actual», *Gaceta Médica Española*, n.º 3, año XXVII, Madrid, marzo de 1953 (OC, IV, pp. 887-890); Discurso Inaugural del Centro de Investigaciones Biológicas el 8 de febrero de 1958 (OC, II, 571-573), etc.

situación, derivada de la Guerra Civil, fue uno de los acicates de su pensamiento. Tras la depuración del profesorado universitario, el régimen de Franco trató de implantar una nueva cultura e ideología en los medios académicos. Cuando Marañón retomó su cátedra en 1943, en la Universidad española había una fuerte presencia de la cultura *falangista* —al menos hasta la derrota del Eje, en 1945— y católica —sobre todo a partir de la Ley universitaria de 1943—. Los principios católicos impregnaron la docencia universitaria al menos hasta bien entrada la década de los sesenta. Marañón, que había apoyado a la España «nacional» durante la guerra, formó parte de aquella corriente de pensadores que buscaron recuperar la cultura liberal que el franquismo había querido erradicar tras la contienda civil³⁰. Ya en la década de los cincuenta, la recuperación de esa cultura liberal se reflejaba en la reedición de libros como los de Unamuno, Machado u Ortega y Gasset. Más significativamente, con la presencia en la Universidad de personalidades como los liberales de antaño —Ortega y Gasset, Dámaso Alonso, Menéndez Pidal, etc.—, los representantes del falangismo «liberal» —Dionisio Ridruejo, José Luis López Aranguren, José Antonio Maravall, Pedro Laín, Antonio Tovar, etc.—, u otras nuevas personalidades que en las siguientes décadas tuvieron un gran protagonismo en el mundo universitario y cultural español —Juan Velarde, Enrique Fuentes Quintana, Eduardo García de Enterría, Manuel Jiménez de Parga, Enrique Tierno Galván, Julián Marías, Jaume Vicens-Vives, José María Jover Zamora, Miguel Artola, etc³¹—. Marañón fue uno de los principales protagonistas de esa recuperación de la cultura liberal. En estos años publicó algunos de sus mejores libros y desarrolló algunas de sus principales líneas de pensamiento, como el que aquí nos ocupa. Insertado en esta corriente cultural siguió muchos de los tra-

³⁰ Para una visión global de la cultura en la época, Juan Pablo Fusi, *Un siglo de España. La cultura*, Marcial Pons, Madrid, 1999, pp. 99-125.

³¹ Acerca de la Universidad española durante el primer franquismo hay algunas publicaciones, entre las que cabe destacar las que recogen J. J. Carreras Ares y M. A. Carnicer (eds.), *La Universidad española bajo el régimen de Franco (1939-1975)*, Zaragoza, 1991. Y para la situación en la Universidad de Madrid en estos años, Carolina Rodríguez López, *La Universidad de Madrid en el Primer Franquismo. Ruptura y continuidad (1939-51)*, Editorial Dykinson, Biblioteca del Instituto Antonio Nebrija de la Universidad Carlos III, núm. 6, Madrid, 2002.

bajos de esos nuevos protagonistas del mundo universitario y, con muchos de ellos, mantuvo contacto frecuente³².

Fue su discurso de ingreso en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, pronunciado en 1947 y dedicado a Cajal —su antecesor en el sillón académico—, donde, de modo sintético, expuso las principales pautas de su pensamiento científico y universitario³³. Que se ocupara de la cuestión universitaria sobre todo en estos años del primer franquismo, no quiere decir que en los años de la Dictadura de Primo de Rivera, de la Segunda República y del Exilio, no tratase temas relacionados con la Universidad, pero, durante estos años se refirió, fundamentalmente, a cuestiones de la actualidad de entonces —como a terciar en la ya señalada tensión entre intelectuales y Primo de Rivera, el debate sobre la construcción de la Ciudad Universitaria³⁴, o la violencia en la Universidad en los meses precedentes al estallido de la Guerra civil³⁵—. Durante su exilio, con motivo de sus viajes por Latinoamérica, realizó alguna referencia a lo que iban a ser las principales líneas directrices de su pensamiento universitario. Pero fue a partir del discurso señalado dedicado a Cajal, cuando la situación universitaria ocupó un lugar importante en sus ensayos y reflexiones.

El ambiente científico y material en que Cajal desarrolló su investigación, estuvo siempre presente en las reflexiones de Mara-

³² Dato que se corrobora al examinar la nómina de su epistolario privado, donde aparecen muchas de estas figuras.

³³ *Discurso leído en el acto de su recepción por el Excmo. Sr. D. Gregorio Marañón y contestación del Excmo. Sr. D. Pedro de Novo*, Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Madrid, 1947 (está también recogido en otras publicaciones como, *Marañón, actualidad anticipada. Homenaje...*, pp. 313-356; también en OC, II, pp. 165-208, publicación ésta que, al ser la más extendida, será la que emplearé en adelante con objeto de facilitar su consulta).

³⁴ Sobre esta cuestión Marañón se pronunció en un artículo publicado en *El Debate* el 5 de marzo de 1924, donde se adhirió al proyecto de erección de la Ciudad Universitaria que impulsó el Dr. Recasens y abogó por el futuro emplazamiento de la Ciudad Universitaria en Moncloa (frente a aquéllos que se mostraban partidarios de ubicarla en Alcalá de Henarés).

³⁵ Con este motivo, el 16 de mayo de 1934 publicó, en *El Sol* —y el día 19 de ese mismo mes, en *El Siglo Médico*—, el artículo «Sobre el fuero universitario», donde denunciaba que los destrozos producidos por los estudiantes les hacían indignos del fuero universitario.

ñón acerca de la ciencia y de la Universidad española³⁶. Al referirse a la situación universitaria española la relacionaba, como muchos otros intelectuales, con el escaso desarrollo científico de nuestro país. Como es sabido, una de las grandes polémicas del momento fue la de la ciencia española³⁷. Mientras unos defendían la tesis optimista, que alababa apologéticamente la obra de los científicos españoles —entre sus principales baluartes se situaban Menéndez Pelayo y Juan Peset—, otros sostenían la tesis pesimista que reconocía la debilidad de la ciencia española, doliéndose de ella y manifestando con crudeza sus causas. Marañón estuvo más cercano a esta tesis pesimista, situando su origen en el Padre Feijoo y considerando a Ramón y Cajal como su principal baluarte. Marañón se refirió a la obra científica española, como una obra modesta, pudiendo «citarse nombres ilustres, sobre todo entre los naturalistas; mas es innegable que la aportación española a la investigación experimental es notoriamente inferior a la de los grandes países de Europa»³⁸. Sin embargo, consideraba que la grandeza y aportación de una nación al saber universal no se medía exclusivamente por su aportación a las ciencias experimentales y, en este sentido, España había aportado al mundo «cultivadores de aquellas ciencias que, como alguien dijo, pueden crearse paseando y con las manos en los bolsillos: pensadores, teólogos, naturalistas, descubridores más que geógrafos»³⁹. Mientras Cajal consideraba como causas del retraso científico español en los siglos anteriores la incapacidad del español para la ciencia, el clima mediterráneo como impropio para el desarrollo de una investigación científica, la pereza del español y, las concepciones religiosas como trabas al desarrollo de las ciencias naturales, Marañón consideraba, simplemente, que en España apenas había existido afán científico en las centurias pretéritas⁴⁰.

³⁶ Influyó mucho en el pensamiento universitario de Marañón el testimonio que dejó Santiago Ramón y Cajal en *Recuerdos de mi vida*, Fortanet, Madrid, 1901.

³⁷ Las referencias a esta cuestión en la obra de Marañón pueden consultarse por ejemplo en «Cajal» en OC, II, pp. 168-172; «Menéndez Pelayo y España (Recuerdos de la niñez)» en OC, IX, pp. 439-440, etc.

³⁸ «Cajal» en OC, II, p. 168.

³⁹ «Cajal» en OC, II, p. 170.

⁴⁰ «Cajal» en OC, II, pp. 172-177.

Para Marañón, el déficit científico de la Universidad española tenía como causas, en primer lugar, la existencia de una contraposición entre humanismo y técnica. Entonces era habitual identificar universidad técnica, con modernidad y progreso y, universidad humanista, con tradicionalismo retrógrado. Para Marañón, ambas facetas eran necesarias para el avance del conocimiento humano. Sin embargo, en aquellos años predominaba lo técnico sobre lo humanista, como a su vez, en otros períodos de la historia, había predominado lo humanista sobre lo técnico⁴¹. En segundo lugar, que la ciencia no había sido tratada como preocupación nacional. La principal manifestación de ello había sido el insuficiente apoyo económico que, hasta entonces, había tenido la investigación científica española⁴². En tercer lugar, que en España no se daba el ambiente científico adecuado. Para que se produjera un desarrollo científico acorde a los tiempos, era necesario imbuir a la Universidad de un ambiente científico elevado ya que, «así como el artista brota fácilmente de medios incultos, el sabio, si se exceptúa el fenómeno insólito del genio, necesita un ambiente colectivo para florecer»⁴³. Y, finalmente, consideraba que, como consecuencia de esa inexistencia de medios y de ambiente en la Universidad española no había fructificado el pensamiento científico que sí se había producido en otras naciones avanzadas. Señalaba que las investigaciones de aquellos tiempos, reflejadas en las principales revistas internacionales, se centraban, fundamentalmente, en análisis estadísticos, en la aplicación técnica a cuestiones concretas de un problema científico, en

⁴¹ A esta cuestión se refirió con ocasión de su nombramiento como Doctor *honoris causa* por la Universidad de Coimbra, en 1959 (OC, II, pp. 603-605).

⁴² En este sentido, denunció la deficiente dotación de recursos materiales con que se contaba para la investigación en la Universidad. Prueba de ello es que, en alguna ocasión, Marañón tuvo que invertir sus propios recursos económicos para la adquisición de algún material necesario para el desarrollo de la investigación en el Instituto de Patología Médica.

⁴³ «Cajal» en OC, II, p. 176. Además, los avances de las técnicas experimentales de las últimas décadas, hacían imprescindible articular la investigación científica mediante equipos de colaboración que siguieran determinadas líneas de investigación. Esto último era, para Marañón, una dificultad añadida pues, en aquellos años, la Universidad española adolecía de ese espíritu de colaboración necesario entre investigadores.

el estudio pormenorizado de diferentes casos clínicos, etc. Sin negar la utilidad de todo ello, demandaba la necesidad de que hubiera investigadores en las Universidades dedicados, exclusivamente, al pensamiento científico teórico o abstracto, así como existían pensadores humanistas.

Lo que estaba claro para Marañón era que, para solucionar el problema universitario, que él extendía a los otros dos grados de enseñanza y a la situación científica, había que conciliar ciencia y técnica, con humanismo. Esa disociación se había producido con la llegada de su generación al mundo científico y universitario, con ellos se había perdido «el sentido humanista de universal curiosidad que es indispensable al verdadero hombre de ciencia»⁴⁴. Algo que, a su juicio, también había sucedido en las sociedades modernas avanzadas. Sin embargo, «la técnica y el humanismo no representan, como muchos creen, una contradicción, una pugna, con clima espiritual diferentes; sino sólo una encrucijada entre dos fuerzas distintas, y añadiría yo: una encrucijada inevitable y fecunda»⁴⁵. De este modo, la solución que Marañón proponía, consistía, fundamentalmente, en imbuir a la Universidad de un *espíritu universitario* que hiciera

amar a la verdad sobre todas las cosas y sin dogmatismos; a la verdad, que puede estar en muchas partes y, muchas veces, en los estratos más humildes de la investigación; en amar a la verdad sobre todas las cosas, y no hay fórmula más eficaz que la enseñanza, alada, no facciosa, de la religión, porque Dios, Él mismo lo dijo, es la Verdad; en desear la sabiduría que da el vivir generoso y el comercio, mediante la lectura, incensurada, con los grandes espíritus, pero abominando de la erudición por la erudición; en saber dudar, haciendo de la duda el arma eficaz y renovada de la verdadera ciencia y de la verdadera fe; en respetar sin esfuerzo, como por un reflejo natural, el orden compatible con la santa libertad del pensamiento, y la libertad compatible con el orden; en ser tolerante con todo aquello con que no estamos conformes; en tener la curiosidad siempre alerta, y, en fin, en manejar con soltura los instrumentos y las técnicas del saber, los

⁴⁴ Discurso en la Facultad de Ciencias Médicas de Lima a la que había sido incorporado como profesor honorario, 23 de agosto de 1939 (OC, II, pp. 367-372).

⁴⁵ «La Universidad de Coimbra» en OC, II, p. 604.

medios, en los que está, y no en un utópico fin, la sabiduría verdadera⁴⁶.

Concretamente, para imbuir la Universidad de ese *espíritu universitario* se debía enseñar, más que conocimientos, modos de conducta y aprendizaje, ya que los únicos conocimientos esenciales eran aquéllos que servían de base común a toda cultura inicial⁴⁷. De este modo, la Universidad debía enseñar, simplemente, un conjunto de actividades y actitudes que eran los que constituían ese *espíritu universitario* que demandaba. Además, para solucionar la situación universitaria, era necesario que la ciencia fuera, verdaderamente, una preocupación nacional, para lo que era indispensable una mayor inversión económica. La investigación se había encarecido extraordinariamente⁴⁸. Consciente del enorme gasto que suponía, abogó por una mayor inversión económica no sólo estatal sino también a través de la iniciativa privada —tanto fortunas particulares como industriales y empresariales—. En España se había olvidado durante demasiado tiempo que «la única partida de los presupuestos que es siempre reproductiva y el único derroche que acaba siendo económico, son los que se invierten en favorecer a la sabiduría»⁴⁹. Esta mayor inversión económica favorecería el crecimiento de un ambiente científico adecuado que evitase que los investigadores realizasen su obra en el extranjero. Marañón era partidario de que los investigadores completasen su etapa formativa en territorio foráneo, pero propugnaba que el Estado garantizase

⁴⁶ *Efemérides y comentarios (1952-1954)*..., p. 58 (OC, IX, p. 604). Queda aquí reflejado cómo el pensamiento de Marañón ligaba, por un lado, el concepto tomista y trascendental tan en boga en la Universidad de entonces y, por otro lado, la libertad de pensamiento propia de ese liberalismo que impulsaban algunas personalidades universitarias de entonces y a las que me he referido anteriormente.

⁴⁷ Esta idea de modos de aprendizaje y conducta parece que Marañón la recoge de la obra de Ramón y Cajal, *Reglas y consejos sobre investigación científica*, Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en Madrid el 5 de diciembre de 1897 (Espasa-Calpe, Madrid, 1941).

⁴⁸ Marañón consideraba que, por entonces, el único país que había dotado a sus investigadores de las condiciones económicas necesarias para llevar una vida digna y poder dedicarse *full time* a su labor era Estados Unidos.

⁴⁹ «Cajal» en OC, II, p. 195.

que, tras completar su formación en el exterior, regresasen en condiciones favorables para poder desarrollar su obra en España. De este modo, influirían sobre las nuevas generaciones de investigadores y generarían escuelas científicas de gran nivel⁵⁰. En esta preocupación de Marañón influyó la situación universitaria derivada de la Guerra Civil. Como consecuencia de sus convicciones políticas y de las dificultades económicas surgidas tras la contienda civil en España, y tras la Segunda Guerra Mundial en Europa, muchos investigadores y hombres de la Universidad optaron por desarrollar su labor, fundamentalmente, en América Latina y Estados Unidos. Marañón se postuló a favor de recuperar las figuras universitarias que permanecían fuera del país obviando incluso, si fuese necesario, sus convicciones políticas, y así lo manifestó en su discurso de ingreso en la Academia de Ciencias cuando —con presencia de autoridades civiles, militares, eclesiásticas y académicas—, señaló que «ninguno de los deberes culturales del Estado español supera en urgencia al de rescatar para la Universidad patria a nuestros grandes investigadores, una vez que han terminado su obra de formación y de primera creación en el extranjero; y si para rescatarlos hubiera que sacrificar algunas consideraciones momentáneas, políticas, nunca como entonces estaría mejor empleado el patriotismo, que al fin y al cabo es sacrificio y, en este caso, sólo sacrificio de amor propio»⁵¹. Para un desarrollo próspero de la ciencia en España, el país necesitaba un período duradero de paz y de colaboración que contribuyera a generar ese *espíritu universitario* que propugnaba.

Si se transformaba la Universidad siguiendo estas pautas, Marañón no dudaba que se generaría también el pensamiento científico que echaba en falta. Mas, pese a todo, lo fundamental era que «la Universidad no serviría para nada, si no dejara una huella profunda de ética intelectual y social en los que pasan por sus claustros. Lo otro, las ideas, los métodos, las técnicas, son flor de primavera que irremisiblemente caerá y se renovará»⁵². La finalidad de *la Uni-*

⁵⁰ Resulta evidente, en este sentido, la influencia que sobre el pensamiento marañoniano ejerció su propia experiencia vital. Como se señaló anteriormente, realizó su viaje de estudios a Francfort pensionado por el Ministerio.

⁵¹ «Cajal» en OC, II, p. 189.

⁵² OC, II, p. 369.

versidad de Marañón debía ser enseñar esos modos de conducta y de aprendizaje regidos por criterios éticos.

En su análisis de la situación universitaria, es necesario referirse a su crítica al sistema de elección del profesorado. *Leit motiv* de su vida académica, se manifestó en repetidas ocasiones contra del sistema de oposiciones vigente en la Universidad. No sólo durante el primer franquismo, cuando hemos visto que desarrolló su pensamiento universitario, sino desde el comienzo de su vida académica, criticó el modo de elección del profesorado, que era, en palabras de Marañón, la vergüenza y el *cáncer* fundamental de la Universidad española⁵³. Las reformas educativas habían chocado, una y otra vez, con este aspecto sin haberlo resuelto. Para Marañón, este sistema tenía una serie de consecuencias nocivas en la Universidad española. En primer lugar, la oposición y su método no valoraban el saber verdadero, ni la pedagogía del aspirante, sino, simplemente, su memoria, su capacidad expositiva y su brillantez dialéctica. Dentro de las aptitudes que debían tener los profesores universitarios, las que priorizaba el sistema de oposición no eran las fundamentales para la enseñanza. Así, este método eliminaba a personas con aptitudes pedagógicas que eran incapaces de someterse a estos ejercicios y, por el contrario, favorecía el acceso a las plazas universitarias de personas inadecuadas para la docencia. En segundo lugar, el método de oposición conllevaba, con cierta frecuencia, un desatino personal impropio de ambientes universitarios. En ocasiones se producía entre los contendientes —y, con cierta frecuencia, también entre los miembros de los tribunales y entre las diferentes escuelas en litigio—, la pérdida de los mínimos modales de educación exigibles en el medio universitario. Y, finalmente, el peor mal que se derivaba de la oposición era que «la fundamental y cotidiana tarea de la Universidad la realizan los hombres de talla media, bien preparados y con profunda vocación. Son los que forman la cordillera de donde surgirán las altas cimas; y esos utilísimos ingenios que no tienen

⁵³ No me extenderé en su aversión a las oposiciones pues ha sido reflejada por la mayoría de los estudiosos de Marañón, por ejemplo Luis Sánchez Granjel, *Gregorio Marañón. Su vida y su obra*, Guadarrama, Madrid, 1960, pp. 78-79; o, Julio Ortiz Vázquez, «Marañón, maestro», en *Marañón, actualidad...*, pp. 98-100, etc. Haré hincapié únicamente, en aquellas cuestiones que articulan su pensamiento universitario, que es lo que aquí me ocupa.

otro acceso que la oposición, son diezmados por ésta»⁵⁴. Estos ejercicios eran realizados, en condiciones óptimas, en la juventud de los opositores, cuando el aspirante desarrollaba, más que el saber verdadero, su ambición y su capacidad para triunfar.

La solución que Marañón propuso para administrar el acceso a las plazas universitarias fue que el proceso empleado fuera electivo. Para él, lo óptimo era que un grupo de personas cualificadas eligieran a los nuevos profesores universitarios, valorando sus muchos años de colaboración en equipos de investigación y sus aptitudes pedagógicas. De este modo «el maestro sólo puede ser elegido entre aquellos que tengan probada, con un largo sacrificio de dedicación al saber y al enseñar, la vocación de maestro. Ni oposiciones palabreras, ni concursos decididos con espíritu caciquil, ni influencias amparadas en las ideologías políticas; sino religioso respeto a la eficacia ya probada»⁵⁵. En varias ocasiones manifestó su confianza en la desaparición de las oposiciones y alabó, como ejemplo a seguir, el sistema de elección de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde se seguía el sistema electivo⁵⁶.

⁵⁴ «Cajal» en OC, II, p. 205.

⁵⁵ «La Enseñanza en el mundo actual» en OC, IV, p. 889. En el epistolario personal de Gregorio Marañón apenas se encuentran cartas donde se solicite la intercesión de Marañón ante tribunales de oposiciones a plazas universitarias y sí a favor de ese sistema electivo, así lo señaló por ejemplo, en una carta a Antonio Tovar donde argumentaba «Vea Vd. lo ocurrido con ese gran Instituto de Medicina que el Estado ha construido para Jiménez Díaz. Éste, que es un gran maestro, ha sido toda la vida, uno de los más entusiastas propugnadores de la oposición. Y ahora, al tener en sus manos un instrumento adecuado para investigar y enseñar, no ha pensado ni un sólo momento en elegir sus colaboradores por oposición sino entre los que sabe que le pueden ayudar de verdad» —Carta dirigida por Marañón a Antonio Tovar el 20 de agosto de 1955, Archivo Fundación Gregorio Marañón, Correspondencia de Marañón, Caja 3.

⁵⁶ Hay que aclarar que, cuando Marañón se refería al sistema electivo del CSIC, no significaba que las plazas de investigador no se obtuvieran por oposición, sino que el Consejo promovió la recuperación de brillantes investigadores españoles que realizaban su labor en el extranjero, invitándoles a presentarse a esas plazas para incorporarlos a los centros de investigación españoles (de este modo volvieron a España investigadores vinculados al Centro de Investigaciones Biológicas como Alberto Sols, Antonio Fernández de Molina, Margarita Salas, David Vázquez, Julio Rodríguez

Esta cuestión fue también objeto de debate en su tiempo. A los argumentos de Marañón, se contrapuso que habían existido en la Universidad grandes maestros que habían sido buenos opositores —como Menéndez Pelayo, Cajal u Ortega y Gasset— y habían accedido a sus respectivas cátedras. Marañón señaló que, cuando estas personalidades se presentaron a las oposiciones, su prestigio era tal, que no tuvieron dificultades para obtener sus plazas universitarias. Otro de los argumentos que se esgrimieron contra las tesis de Marañón fue que la oposición evitaba la injusticia y la corrupción. Sorprende que en estos años del franquismo Marañón se mostrase conforme con esto y señalase el poco efecto que tenían las cartas de recomendación en los tribunales de oposición y la casi total inexistencia de injerencia política en estos ejercicios —cuando se conoce que era una práctica bastante común durante la Dictadura.

Coherentemente con su crítica a las oposiciones, también se oponía al examen. Creía que el examen, cualquiera que fuese, «no puede informar de la formación intelectual del estudiante, ni mucho menos de lo que más importa: de su vocación y de su capacidad moral»⁵⁷. Así, lo único que evaluaba el examen era la capacidad de reacción del estudiante ante las preguntas que se le presentaban y no lo verdaderamente importante, si había adquirido modos de aprendizaje y de conducta, algo únicamente verificable por el contacto directo entre profesor y alumno.

Su crítica al sistema de elección del profesorado tuvo como trasfondo su experiencia de alumno y profesor universitario, de ahí su preocupación porque las plazas universitarias fuesen ocupadas por personas con aptitudes pedagógicas. Marañón distinguió entre tres categorías de profesores universitarios, los que no enseñan nada, los que enseñan lo que saben y, los mejores, «los que enseñan no las cosas que saben, sino los modos de aprender las cosas de la naturaleza»⁵⁸. La cualidad que más valoraba en el maestro universitario fue la claridad. En la docencia la elocuencia era, para él, inocua ya que «la palabra brillante es como un dulce anestésico para el cere-

Villanueva, Manuel Losada, Miguel Rubio, Carlos Asensio, etc.) Cf. Discurso inaugural del Centro de Investigaciones Biológicas, 1958 (OC, II, pp. 571-573).

⁵⁷ *Efemérides y comentarios (1952-1954)*..., p. 60 (OC, IX, p. 605).

⁵⁸ Gregorio Marañón, «Bandera verde» en Miguel Merchán González, *El hombre doloroso*, Salvat, 1951, Madrid (OC, I, pp. 329-331).

bro del que aprende. Es mucho más fácil seguir la idea cuando ésta es expresada por una palabra exacta, pero natural y escueta y aun levemente premiosa. El secreto de la enseñanza oral reside en que la palabra del maestro sea tan llana que ni sirva de obstáculo al pensamiento ni de nube fastuosa que embote el perfil riguroso de cada idea»⁵⁹. Así, el profesor que enseñaba con claridad reducía «a su quinta esencia cada problema»⁶⁰, presentándolo escuetamente en el menor tiempo posible. La labor del maestro, además, debía buscar la realización de una enseñanza integral, es decir, aquélla que instruyese al discípulo en su totalidad, desde el caudal de conocimientos básicos, hasta cómo cuidar los utensilios de trabajo. Para llevar a cabo esa pedagogía integral, era imprescindible que el maestro dedicase tiempo diario a sus discípulos. Y, para que fuese completa la enseñanza, debía escribir un pequeño libro, que resultase un epítome o manual práctico en manos de sus alumnos⁶¹.

También se ocupó de la relación del profesor y el discípulo investigador. Señaló que la obligación del buen maestro era velar porque su discípulo desarrollase un pensamiento propio, sin aspirar a que

⁵⁹ «El claro maestro», *Gaceta Médica Española*, núm. 5, año XXVI, mayo, 1952. También en OC, IV, pp. 863-864.

⁶⁰ Esta cita corresponde a una Conferencia que dictó el 14 de diciembre de 1955, en el Colegio Mayor hispanoamericano Nuestra Señora de Guadalupe de Madrid, titulada «México y España» y que está recogida en OC, III, pp. 813-822 —la cita corresponde a la página 816—.

⁶¹ Gregorio Marañón, «El pequeño manual» en Reynaldo dos Santos, *Iniciación a la urología clínica*, Espasa-Calpe, 1946, Madrid (OC, I, pp. 263-266). Marañón manifestó desde muy pronto su preocupación por la escasez de manuales en español, así se puede entender su participación con Hernando en la dirección del *Manual de Medicina Interna*, (cuyo primer tomo fue editado por los hermanos Ruiz en Madrid en 1916). Este manual estaba elaborado, exclusivamente, por autores españoles. Su segundo volumen, no vio la luz a causa de que algunos colaboradores se retrasaron en la entrega de los capítulos. Sí se publicó, en 1920, un tercer volumen en el que Marañón se ocupó de las enfermedades de las glándulas de secreción interna (otros autores que participaron en estos volúmenes fueron Gustavo Pittaluga, Novoa Santos, Pi y Suñer, Romero Lozano, Ruiz Falcó, Tello, Sanchis Banús, etc. Se puede considerar como epítome de Marañón su *Manual de Diagnóstico Etiológico*, Espasa-Calpe, Madrid, 1943 —Manual reeditado frecuentemente desde entonces (segunda edición de 1945, tercera de 1946, quinta de 1951, sexta de 1951, etc.)—.

éste fuese una mera copia del suyo⁶². Así, el maestro debía entender la curiosidad y animosidad del discípulo, alentando en él su amor a la ciencia y, de este modo, favorecer la formación de un buen científico⁶³. Como consecuencia de todas estas consideraciones también distinguió entre el sabio y el maestro. A su juicio, mientras el sabio vive obsesionado por llegar el primero a la meta y desea acaparar toda la gloria, el maestro se muestra generoso con sus discípulos, mostrándoles todo lo que sabe y compartiendo con ellos sus temas de investigación⁶⁴.

Tampoco escapó a su análisis la referencia a los alumnos, criticando a los estudiantes de buen expediente académico. Basaba su crítica a los *números uno*, en que esas buenas calificaciones lo único que demostraban era que sabían realizar buenos exámenes por su sintonía con la mediocridad del ambiente universitario⁶⁵. Consideraba como buen estudiante, aquel que desarrollaba su propio pensamiento y obra, aumentando y dirigiendo su saber de modo independiente del ambiente universitario de aquella época, lo que, inevitablemente, conllevaba unas calificaciones poco brillantes en ese contexto.

Para Marañón, la enseñanza debía dotar al estudiante de una base común de cultura y orientar su pensamiento para que pudiera realizar una obra propia. Por ello, censuraba a aquellos profesores universitarios que trataban de encorsetar los conocimientos de sus alumnos, ciñéndolos a sus propios conocimientos. Veía evidente que lo que sabe el profesor universitario es siempre parcial y personal, y que la principal misión del maestro era mostrar ese *espíritu universitario* que propugnaba y que se plasmaba en fomentar el espíri-

⁶² «La Enseñanza en el mundo actual», *Gaceta Médica Española*, número 3, año XXVII, Madrid, marzo de 1953 (OC, IV, pp. 887-890).

⁶³ «Sobre las Academias», *Boletín de la Sociedad Geográfica Nacional*, tomo LXXII, núm. 12, Madrid, diciembre de 1932, pp. 707-724 (OC, II, pp. 279-290).

⁶⁴ «Cajal» en OC, II, pp. 187-191.

⁶⁵ Cuando criticó los grandes expedientes académicos, llegó a señalar en alguna ocasión que, los números uno que había obtenido a lo largo de su vida académica, le suponían una pesadumbre. Es evidente que exageraba un poco y que lo que quería era hacer hincapié en que un buen expediente académico no es sinónimo de un gran discípulo, investigador u hombre de ciencia.

tu crítico en los alumnos, es decir, «modos de conducta; modos de aprender, que no es recibir los hechos y prenderlos en la memoria, sino buscarlos por uno mismo, saber criticarlos, dudar de ellos cuando es preciso y acaso prescindir aiosamente de lo que parecía verdad. Y junto con esto, lo que importa es salir de la Universidad con el alma definitivamente recta»⁶⁶.

3. Conclusiones

Gregorio Marañón estuvo vinculado a la Universidad a lo largo de toda su vida y desarrolló su pensamiento universitario, fundamentalmente, durante el período conocido como primer franquismo. En esos años formó parte de aquellos pensadores que trataron de recuperar la cultura liberal que el régimen había tratado de erradicar al llegar al poder.

Como muchos intelectuales del período, Marañón tomó parte en la discusión de esta cuestión que fue uno de los grandes debates de la época. Su pensamiento universitario recibió varias influencias. La más decisiva de ellas fue la del recuerdo de la figura y la obra de Santiago Ramón y Cajal. Para Marañón, la pedagogía cajaliana, no sólo cambió la Historia de la Medicina, sino que alteró la evolución de toda la cultura y de la ciencia en España⁶⁷. Considerado miembro de la *generación del 14*, su pensamiento también se vio influido por el de Ortega y Gasset, aunque con algunas diferencias. Entre estas, hay que señalar en primer lugar, diferencias estrictamente cronológicas y, por tanto, contextuales. Mientras Ortega se ocupó de esta cuestión, principalmente, en el período anterior a la Guerra Civil Española, Marañón lo hizo tras la contienda civil. Y, en segundo lugar, y más importante, a diferencia de Marañón, Ortega priorizaba como la labor fundamental de la Universidad, la enseñanza de las profesiones por encima de la formación de investigadores. Además, para Ortega, la actividad docente tenía como fundamento

⁶⁶ «La Enseñanza en el mundo actual» en OC, IV, p. 887.

⁶⁷ En la ciencia médica su legado fue la formación de una saga de discípulos que, a su vez, fueron maestros de otros tantos y que llegaron a alcanzar la mayoría de las disciplinas médicas —y citaba Marañón entre estos discípulos cajalianos, algunos célebres, como Pío del Río Hortera, Nicolás Achúcarro o Francisco Tello—.

al aprendiz, mientras que para Marañón era el profesor universitario⁶⁸. Es necesario destacar también la influencia que ejerció sobre el pensamiento universitario de Marañón la corriente escolástica vigente en la Universidad española durante el primer franquismo.

Como se ha dicho en este estudio, Gregorio Marañón dedicó a esta cuestión diferentes artículos, trabajos, conferencias e importantes discursos. En ellos, analizó las principales deficiencias de la situación universitaria y abogó por la creación de un *espíritu universitario* que llevara a conciliar ciencia y técnica, con humanismo. Se ha destacado su crítica al sistema de elección de profesorado y su apuesta decidida por un sistema electivo, donde se primasen las capacidades pedagógicas de los candidatos. Esta postura era idealista, dado que su vida académica se desarrolló en una Universidad donde el déficit del sistema de oposiciones resultaba evidente, como mostraron sus propias denuncias.

Finalmente, se han detallado las cualidades y aptitudes que debían atesorar tanto profesores como alumnos universitarios para imbuir la Universidad del *espíritu* que él propugnaba. De este modo, el principal objetivo del buen maestro universitario debía ser enseñar a sus alumnos modos de conducta y aprendizaje. Y el del alumno, desarrollar su propio pensamiento.

Antonio López Vega
Becario de la Fundación Ramón Areces

⁶⁸ José Ortega y Gasset, *Misión de la Universidad*, Revista de Occidente, Alianza Editorial, Madrid, 1982, pp. 39-41 y 53-72. Ortega sintetizó su pensamiento acerca de la Universidad española en una conferencia que tuvo lugar en el paraninfo de la Universidad Central, el 9 de octubre de 1930, y que fue publicada en *El Sol*, los días 12, 17, 19, 24 y 26 de octubre y, el 2 y 9 de noviembre, de ese mismo año.

CONTEXTO DOCTRINAL DE LAS PRIMERAS CÁTEDRAS DE DERECHO DEL TRABAJO EN ESPAÑA

Sumario: 1. La cuestión social.—2. El problema de la denominación.—3. Autonomía científica del derecho laboral.—4. Autonomía jurídica.—5. Autonomía docente.

El Derecho del trabajo es una disciplina que vino haciéndose camino a lo largo de unas cuantas décadas comprendidas entre la segunda mitad del XIX y la primera del XX hasta conseguir un hueco propio. Se trata de una asignatura que en su origen no se puede enclaustrar únicamente en las aulas universitarias y, menos aún, en las facultades de derecho. De hecho, la primera cátedra de Derecho del trabajo no se convocó en una de ellas, sino en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central en 1947. La plaza fue ocupada, eso sí, por un jurista, Eugenio Pérez Botija. Unos años después, en 1954, se convocaba la primera cátedra en la Facultad de Derecho y fue ocupada por Gaspar Bayón Chacón.

La dotación de estas cátedras se debió a factores de toda índole que sin duda requieren un estudio profundo, pero sobre todo a la incongruencia que producía la ausencia de esta asignatura del derecho como rama jurídica autónoma en los estudios universitarios frente a la realidad jurídico-social. Por este motivo, antes de hablar de cómo se fue gestando la autonomía docente, es necesario aludir, aunque sea brevemente, a la científica o doctrinal, así como a la jurídica y realizar una pequeña introducción.

1. *La «cuestión social»*

Los edictos de Turgot de 1776 y más adelante las leyes revolucionarias¹ rompieron, en la Francia del XVIII, los antiguos vínculos

¹ La ley de Allarde (2-7 de marzo de 1791), la ley de Chapelier (14-17 de junio de 1791). Le Chapelier abolió los gremios y deslegitimó las nue-

de los trabajadores manuales con las corporaciones típicas del Antiguo Régimen: propiedad absoluta, igualdad frente a la ley y libertad de contratar y de contratarse, proclamaban los revolucionarios. Proclamas aparentemente benéficas para promocionar las pequeñas propiedades, pronto evidenciaron que también producían serios inconvenientes. El trabajo quedaba liberado de los yugos del pasado y con él el empresario y el trabajador; comenzaba, en palabras de García Oviedo, «la era del contrato»², el cual, asentado exclusivamente sobre la voluntad humana, se convierte en el instrumento jurídico que permite la asociación del capital y del trabajo. Huelga decir que estas medidas liberalizadoras beneficiaron inmediatamente a los propietarios tanto de tierras como de comercios o empresas. Al no tener que doblegarse ante las condiciones impuestas por los antiguos gremios y asociaciones, el dueño de una fábrica o de una propiedad podía no sólo escoger al obrero que iba a contratar, sino que, además, decidía las condiciones del contrato. Por su parte y, aparentemente, también el trabajador obtenía ventajas con este nuevo orden jurídico; gozaba de libertad para contratarse. De esta forma, el trabajador dejó de encontrarse en contacto íntimo con su antiguo patrón y la relación pasó de ser entre dos hombres a ser entre un hombre y el capital.

Además, el enorme coste de la maquinaria industrial, la utilidad de producir en grandes cantidades, el interés de ahorrar en los gastos generales de instalación y manutención para poder competir más ventajosamente, hicieron posible que los capitales se adueñaran de la incipiente industria. Paralelamente, creció el número de trabajadores que acudió pidiendo empleo, entre otras cosas por la poca pericia que se necesitaba para manejar determinadas máquinas³. Semejantes circunstancias impulsieron, en el campo laboral, la

vas asociaciones profesionales obreras con el argumento de que era a la Nación a quien correspondía proporcionar empleo a los que lo necesitaran para vivir y socorros a los enfermos.

² C. García Oviedo, «Consideraciones jurídicas acerca del derecho del trabajo», *Revista General de Legislación y Jurisprudencia* (en adelante, *RGLJ*), 164 (1934), 5-35.

³ E. Pérez Botija, *El derecho del trabajo, concepto, substantividad y relaciones con las restantes disciplinas jurídicas*, Madrid, 1947, pp. 2 y ss. Esta obra fue publicada por la editorial Revista de Derecho Privado como parte de la serie G, destinada a manuales de Derecho, Economía y Hacienda.

ley de la oferta y la demanda, pero con su perfil más cruel, producido por el desequilibrio entre una demanda de trabajadores masiva y una oferta de trabajo indiscriminada que no distinguía entre hombres, mujeres y niños salvo a la hora de pagar. Ante todo esto, cobijándose en la independencia y autonomía individual consagrada en los códigos, la ley callaba. El contrato individual, como arrendamiento de servicios y eje de la organización social propuesta por el código civil de 1804, agotaba la representación del trabajo dependiente y omitía todo lo relativo a la efectividad de la relación; ambas partes eran libres para fijar el salario y la modalidad de la prestación. Como dice Cazzetta, «el vacío jurídico que se produce por la remisión a la autonomía privada hace que, después del libre contrato, la organización y la disciplina de la fábrica estén confiadas a la sola voluntad del empresario»⁴.

La indignidad de tal situación impuso la búsqueda de remedios, además de una plural reacción social. Dos aparecieron espontáneamente, el regreso atemperado hacia las antiguas asociaciones o corporaciones y una aplicación menos rigurosa de los principios de la Revolución Francesa. Muchos fueron los que pidieron la intervención de la ley como único remedio para devolver a los trabajadores la dignidad perdida. Mientras tanto, la asistencia filantrópica particular o religiosa y las sociedades de socorros mutuos de carácter voluntario mitigaban leve y parcialmente, siempre desde la óptica paternalista y arbitraria de la caridad, las situaciones de desamparo que la beneficencia no lograba cubrir⁵.

Los trabajadores, por su parte, buscaron en sí mismos la solución al problema a través de las asociaciones. No se abandonaron a

Había obtenido en 1945 el premio Marvá y fue presentada por su autor como memoria en la oposición a cátedra en la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central en el año 1947. He cotejado la memoria de oposición en Archivo General de la Administración (en adelante, AGA), Educación, cajas 4078/79 con dicha obra y son iguales. En realidad no es nada nuevo, el propio autor lo desvela, «según hemos de ver en posteriores capítulos de esta memoria». E. Pérez Botija, *El derecho...*, p.114. Esta obra será en adelante la referencia fundamental de este trabajo.

⁴ G. Cazzetta, «Trabajo y empresa», en M. Fioravanti (ed.), *El Estado moderno: instituciones y derecho*, Madrid, Trotta, 2003, pp. 137-158.

⁵ E. Borrajo Dacruz, *Introducción al Derecho del trabajo*, Madrid, 2003, p. 87.

los beneficios que esa nueva legislación les podía proporcionar, comenzaron a reunirse, primero en coligaciones temporales y después en permanentes, a pesar de la hostilidad y punibilidad que éstas arrastraban. Al principio, el acuerdo de los trabajadores iba encaminado a negar el trabajo en condiciones ínfimas, complementando esta medida con la huelga defensiva. Pero en un segundo momento, el acuerdo fue permutándose en algo más consciente, más firme y se encaminó no sólo a defenderse sino a conquistar. Fue entonces cuando comenzó a perfilarse el concepto de contrato colectivo. Hay contrato colectivo cuando varios obreros en lugar de aceptar o denegar una oferta de trabajo, abandonando sus individuales necesidades, se conciertan entre sí en busca de un tratamiento equitativo de su trabajo y encargan a algunos que expresen al empresario esa voluntad concordada y determinar con él las condiciones futuras. El empresario por su parte, promete que no hará condiciones distintas o, por lo menos, inferiores a éstas. De esta manera, el contrato individual, privado, fue paulatinamente sustituido por el colectivo⁶.

Ambas presiones, la opinión pública y la obrera, condujeron en todos los países occidentales a las primeras leyes protectoras del trabajo, frecuentemente con tintes paternalistas. Con ellas comenzaron a trazarse ligeras limitaciones a la libertad de los empresarios, protegiendo a los obreros de los accidentes de trabajo, regulando el empleo de mujeres y niños, imponiendo precauciones para evitar condiciones insalubres en los lugares de trabajo y en las habitaciones económicas, prohibiendo el salario en especie o la imposición por parte del empresario al obrero de comprar en determinados establecimientos, introduciendo el descanso dominical, reglamentando el derecho a la huelga. Es decir, se fue formando un conglomerado de leyes cuyo fin era, en un sentido muy amplio, la regulación de todo aquello que estuviera relacionado con el trabajo.

Consecuentemente, durante finales del XIX, el trabajo o, mejor dicho, toda la problemática social que éste arrastraba fue suscitando la atención de un gran número de juristas, economistas y sociólogos, porque a todos ellos competía. El derecho laboral y, por ende,

⁶ J. Martínez Reus, «Revista de Revistas Jurídicas», *RGLJ*, 113 (1908), 481-487, comenta a L. Romanelli, «El contrato colectivo de trabajo», en *Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie*, Milán, Octubre, (1908).

su origen es la fusión, la síntesis de tres elementos: el social, el jurídico y el económico⁷. El debate decimonónico sobre individualismo o socialismo, sobre libertad o intervencionismo estatal, no es otra cosa que una de las consecuencias de esta realidad⁸. Y no sólo eso, la incapacidad del derecho del siglo antepasado para abarcar y delimitar el derecho social era patente en todos los países occidentales con independencia de las teorías económico-políticas que se aplicasen. En palabras de Posada «es indudable que en todas partes, con y sin socialismo organizado, existe una gravísima cuestión jurídica en todo el orden de relaciones que supone la vida económica»⁹.

Las soluciones propuestas eran variadas y dispares. Posada apuesta por la ética al definir al «hombre honrado», que no tiene porqué ser el venerado «hombre de familia» del Código civil, como medio para solucionar esa desincronización entre las leyes y la realidad social. Es necesaria, dice el autor, una orientación científica del derecho hacia la ética y una renovación de los intereses que el derecho debe proteger pasando a primer plano el supremo interés humano, y no los intereses individualistas que defiende el derecho civil¹⁰. La argumentación quizá parezca algo utópica, pero muestra el distanciamiento que había entre el derecho y la sociedad.

Encontramos voces que, en la búsqueda de soluciones al problema obrero, exigen a los gobiernos tomar medidas más profundas educando a los individuos. Sin descuidar las leyes encaminadas al

⁷ G. Cazzetta, «Leggi sociali, cultura giuridica ed origini de la scienza giuslavoristica in italia tra otto rnovecento», en *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* (en adelante QF), 17 (1988), 156-262.

⁸ P. Dorado, «Noticias Bibliográficas», en *RGLJ*, 87 (1985), 120-121, comenta a A. J. de Johannis, *Sui rapporti tra capitale e lavoro*, Florencia, 1895. Aunque seguidor de la escuela clásica individualista económica, de Johannis considera al trabajador, que no tiene propiedades materiales, como una propiedad individual y como tal hay que tutelarle y defenderle otorgándole leyes sobre salarios, contratos, etc.; P. Fiore, «El individualismo y el socialismo o la lucha entre los derechos del individuo y los de la sociedad en la vida política, económica e internacional», *RGLJ*, 57 (1880), 85-101.

⁹ A. Posada, «Un ensayo de legislación social», *RGLJ*, 99 (1901), 465-482.

¹⁰ A. Posada, «Sobre el aspecto jurídico del problema social», *RGLJ*, 92 (1898), 70-87.

mejoramiento de las clases proletarias, los estados deben destinar una parte importante de sus presupuestos a la cultura, a las escuelas, a los aprendizajes bien remunerados¹¹.

Efectivamente, el conflicto era ante todo social. Las relaciones entre sociología y derecho cada vez se iban tornando más íntimas. El cambio jerárquico en los problemas políticos, el carácter social del derecho administrativo, la orientación que iba tomando el derecho civil como un derecho eminentemente económico, industrial y la aplicación del método comparativo en una amplísima esfera etnográfica son claros ejemplos de ello. El estudio de la acción de la sociología sobre el derecho comenzó por parte de los sociólogos y economistas, más que de los juristas. Por ello opinaba Posada que pocos de ellos eran los que llegaban al fondo de la cuestión. Aparte de que no todos los juristas admitían esa interconexión entre el fenómeno jurídico y el social, a algunos les repugnaba esa especie de democratización del derecho resultante del influjo social. Con todo, la relación era evidente y admitida por la mayoría. La bibliografía que encontramos desde finales del XIX sobre la «cuestión social» es abundantísima¹².

Este «descubrimiento de lo social», como lo denomina Cazzetta, evidencia a principios del XX la caducidad de esa rígida y simple dicotomía decimonónica entre individuo y Estado. Las tradicionales categorías jurídicas ya no servían como alojamiento para la nueva pluralidad social¹³. Ese individualismo del XIX se irá transformando, en mayor o menor medida según el modelo político-eco-

¹¹ V. Pérez González, «Apuntes sobre la cuestión social», *RGLJ*, 100 (1902), 567-582; 101 (1902), 5-25; V. Pérez González, «La cuestión social. Señuelos y paliativos», *RGLJ*, 102 (1903), 533-543.

¹² Por citar algunas: E. Stocquart, «Los orígenes y el desarrollo de la legislación industrial y social en Inglaterra», *Revue de Droit public et de la Science politique*, (1896), 457-468; E. Rancés, «Legislación obrera. El salario», *RGLJ*, 101 (1902), 548; R. Fernández Villaverde, «La cuestión social y el derecho civil», discurso leído en la inauguración del curso 1900-1901 en la Real Academia de jurisprudencia y legislación, *RGLJ*, 97 (1900), 365-388; 98 (1901), 131-144 y 361-381; 99 (1901), 78-119; J. Canalejas, «La cuestión obrera», *RGLJ*, 103 (1903), 508-573; V. Santamaría, «El descanso dominical», *RGLJ*, 103 (1903), 26-56; J. Gascón y Marín, «La ley de coligaciones y huelgas», *RGLJ*, 103 (1903), 433-440; E. Dato, «Leyes protectoras del trabajo», *RGLJ*, 114 (1909), 5-28.

¹³ G. Cazzetta, «Trabajo...», p. 145.

nómico de cada país, en un sistema «en el que el trabajo ya no es una mercancía, propiedad privada del trabajador, sino una función social, un deber ante la sociedad y para la sociedad»¹⁴.

Como ya se ha indicado, esta problemática social ya venía desde mediados del XIX produciendo una amplia y variadísima bibliografía, por lo que se puede decir que en los años veinte del siglo pasado, existía ya una densa y apretada doctrina sobre lo que hoy llamamos derecho del trabajo o derecho laboral, pero que en sus orígenes era concebido como la «cuestión social». Innumerables monografías, artículos, tratados y revistas van perfilando el contenido y la sustantividad de esta nueva rama del derecho, desperdigada en ese momento entre las demás disciplinas jurídicas¹⁵. Sin embargo, en España por lo menos, la aparición de numerosas doctrinas o teorías económicas, jurídicas y sociales sobre los problemas que entraña la relación laboral, por muy brillantes que fueran, no era suficiente para dotar a esta materia de la autonomía científica. La proliferación y dispersión de leyes laborales era abrumadora, pero tampoco eran suficientes; todavía quedaba mucho camino por recorrer.

¹⁴ E. Borrajo Dacruz, *Introducción...*, p. 88.

¹⁵ Es descriptivo, en este sentido, el análisis que hace Tormo Camallonga a través de la *RGLJ*. La revista fue creada por Reus a mediados del XIX y aunque Tormo Camallonga comienza su análisis a principios del XX sus apreciaciones pueden aplicarse también a los años anteriores. Pues bien, hace notar que hasta 1923 no hay ningún apartado o capítulo que se denomine «Derecho social». En efecto, como él dice, cualquier artículo que tuviera que ver o que estar relacionado con el mundo del trabajo, ya fuera de tipo doctrinal, comentario de alguna ley laboral, etc., se podía encontrar invariablemente en cualquiera de los otros capítulos de la revista. En el que se ubicaban con más frecuencia era en el destinado a Filosofía del derecho, aunque no siempre, vid. C. Tormo Camallonga, «Sobre los inicios en la enseñanza del derecho del trabajo», en Adela Mora (ed.) *La enseñanza del Derecho en el siglo XX, Homenaje a Mariano Peset*, Universidad Carlos III-Dykinson, Madrid, 2004, 517-541. Efectivamente, la dedicación de la revista al derecho social fue *in crescendo* porque en la segunda decena del XX, aparece en la revista un apartado a cargo de A. Posada, que termina consolidándose con el nombre de «Crónica social», destinado a informar al lector sobre cualquier cuestión social: legislación, bibliografía, Instituto de Reformas Sociales, Organismo Internacional de Trabajo, etc.

2. *El problema de la denominación*

Uno de los problemas que había que abordar era el de la denominación de este nuevo derecho, derecho laboral, del trabajo, obrero, industrial o social son los nombres preferidos por la doctrina para su identificación. Se plantea Pérez Botija la importancia de la elección del nombre, no sólo desde el punto de vista científico, sino práctico: «Científicamente porque de ella depende el contenido de la misma y desde el punto de vista jurídico-positivo, porque si existen una normas generales que regulan el trabajo y unos órganos que se encargan de aplicarlo (Inspección y Jurisdicción del Trabajo), según la visión que se elija, tendrán determinadas competencias»¹⁶.

Si al principio la denominación que imperaba era la de «derecho social» o «leyes sociales», con el tiempo la mayoría de los autores fueron inclinándose por otras. Ninguna de ellas, según Gallart, era perfecta como expresión para designar esta rama jurídica. Algunas por exceso, otras por defecto y otras por impropias. Pero la que más repugna a este autor es la de social: «no existe rama alguna de la enciclopedia jurídica que carezca de carácter social y, por tanto, reservar para cualquiera de ellas el privilegio de tal denominación, es caer en confusionismo»¹⁷. De la misma opinión es Royo Martínez, que considera que todo el derecho es social porque su razón de ser es precisamente regular la sociedad¹⁸.

Por el contrario, autores como Martín Granizo, Rothvoss o García Oviedo escogieron el término «social» en contraposición al de «trabajo» por varias razones: no todos los trabajos están regulados por este derecho —refiriéndose al intelectual—. Por el contrario, hay normas proteccionistas sobre la vivienda, seguros sociales, etc., que quedan fuera de lo estrictamente laboral¹⁹. También es muy empleado el término social para designar las leyes que conforman este derecho al llamarlas leyes sociales y la Sala quinta del Tribunal Supremo se llama «de lo social» y no del trabajo. A pesar de todo,

¹⁶ E. Pérez Botija, *El derecho...*, pp. 35 y ss.

¹⁷ A. Gallart Folch, *Derecho Español del trabajo*, Barcelona, 1936, pp. 13 y ss.

¹⁸ M. Royo Martínez, «Una innovación necesaria en la carrera de Derecho», *RGLJ*, Madrid, 61 (1932), 754-757.

¹⁹ L. Martín Granizo, M. González Rothvoss, *Derecho social*, Madrid, 1935; C. García Oviedo, *Tratado del Derecho Social*, Madrid, 1934, p. 11.

Pérez Botija rechaza esta última denominación y, siguiendo a Castán, cree que la acepción restringida del derecho social como derecho del trabajo hay que rechazarla por «inútil y perturbadora». ¿Para qué emplear una denominación vaga y confusa, cuando hay otras que pueden reflejar con más propiedad y aproximada exactitud el contenido de esta disciplina?²⁰ Considera sinónimo de derecho del trabajo el de derecho laboral, neologismo cuya paternidad atribuye a Castán²¹.

Atendiendo a la definición que propone Pérez Botija, el derecho del trabajo es «el conjunto de principios y normas que regulan las relaciones de empresarios y trabajadores y de ambos con el Estado, a los efectos de la protección y tutela del trabajo»²².

Lo cierto es que con el tiempo fue consolidándose la acepción de derecho del trabajo o derecho laboral escogida por Pérez Botija como la más adecuada en contraposición a social. Para Borrajo Dacruz utilizar la expresión «derecho social» es inapropiada. Todo el derecho, en cuanto que regula las relaciones sociales, es social. Si el derecho laboral está compuesto de una parte por derecho estatal (legislación) y de otra, por derecho social (costumbres, usos sociales positivizados, etc.) ¿por qué denominarlo derecho social? En la génesis y evolución de cualquier derecho positivo se pueden apreciar ambos tipos de normas y ninguno de ellos es conocido por esta acepción. Por último, si se atiende al fin de este nuevo derecho, se percibe que está inspirado en ideas de justicia, pero también en otras ramas del derecho como el civil o el penal se detecta esta tendencia²³.

3. *Autonomía científica del derecho laboral*

Hubo un tiempo en el que se consideraba que las relaciones patrimoniales entre los empleados y los empleadores, entre el dueño de la fábrica y sus obreros, entre el comerciante y sus dependientes,

²⁰ E. Pérez Botija, *El derecho...*, p. 40.

²¹ J. Castán Tobeñas, «El Derecho social. En torno a los diversos criterios de definición y valoración de esta nueva categoría jurídica», *RGLJ*, 169 (1941), 513-538.

²² E. Pérez Botija, *El derecho...*, p. 71.

²³ E. Borrajo Dacruz, *Introducción...*, p. 60.

podrían estudiarlas los especialistas del derecho común. El Código civil y el de comercio dedicaban al particular algunos capítulos. Los civilistas y mercantilistas se ocuparon de realizar construcciones científicas sobre el nacimiento, cumplimiento, interpretación o extinción de las obligaciones laborales. En caso de conflicto, el derecho procesal civil se encargaba de solucionarlos y si entrañaba delito se acudía al derecho penal. Pero llegó un momento en que esto era insuficiente. Las normas sociales desbordaban estos campos jurídicos²⁴. Por otra parte, paulatinamente fue incrementándose la intervención del Estado en materias laborales. Razones de utilidad pública, interés general, salubridad, acuerdos internacionales, conveniencias políticas, intereses fiscales, etc., justificaban esta intromisión. Se iba formando una política social y un ordenamiento laboral.

La regulación del trabajo como materia común se hallaba repartida en distintos campos, no sólo jurídicos. En ninguno de ellos encajaba a la perfección, por separado ninguno era suficiente para cubrir toda la problemática laboral, pero necesitaba de todos para desarrollarse óptimamente. Por ejemplo, la figura jurídica y fundamental del derecho de trabajo es el contrato de trabajo, pero este contrato es distinto de la figura contractual privada que respeta o representa las libertades individuales. Tiende a estar sujeto a unas normas de interés general que no puede contravenir. Además, uno de los principios básicos del derecho del trabajo es la irrenunciabilidad de derechos, el carácter tuitivo de la ley laboral que aboga por el más débil en la relación contractual-laboral. Por otro lado en el contrato de trabajo no son sólo las partes las que fijan su contenido; el derecho civil aportaría su construcción abstracta, con todas sus complicaciones en cuanto a nacimiento, interpretación, extinción, etc., de la relación. El derecho administrativo se ocuparía de las innumerables limitaciones que por razones de interés general constriñen el libre arbitrio de industriales, comerciantes, trabajadores, etc., así como de los servicios públicos sociales. De los conflictos laborales se encargaría el derecho procesal. A pesar de todo, siempre quedaban aspectos de este nuevo ámbito jurídico sin regular²⁵.

²⁴ E. Pérez Botija, «La autonomía del derecho del trabajo», *Revista de Trabajo*, Madrid, julio-septiembre (1945), 369-381.

²⁵ E. Pérez Botija, «La autonomía...», pp. 372 y ss.

En definitiva, ¿en qué campo del derecho había que ubicar al derecho de los trabajadores? ¿se trataba de derecho privado o público? ¿era quizá un derecho mixto? ¿gozaba de los suficientes requisitos para ser considerado autónomo? Todas estas preguntas eran las que en esencia venían discutiéndose por la doctrina. Ciertamente, para alcanzar la autonomía científica, era necesario encontrar respuestas y, precisamente eso, la diversidad y multiplicidad de ellas era lo que la obstaculizaba²⁶. Para Pérez Botija, las respuestas a estas cuestiones no eran suficientes, había que encontrar una unidad, era necesario una acción de conjunto, metódica y sistemática. Pero veamos primero esas posturas y la opción que elige Pérez Botija.

Pocos años antes de ganar la cátedra, afirmaba Pérez Botija que la determinación de la naturaleza jurídica del derecho laboral no estaba todavía resuelta en la dogmática del derecho español. Se trataba de una rama del derecho, difícil y complicada, que originaba multitud de conflictos que se resolvían en una jurisdicción especial. Este hecho era para Pérez Botija un dato clarísimo de la especialidad de la materia. «Muchas de las dificultades técnicas que presenta la aplicación del derecho del trabajo podrían ser solucionadas teniendo presente su naturaleza jurídica, es decir, cuál sea el carácter de la norma que se trata de aplicar: si se trata de un precepto dispositivo o imperativo, si es una norma de orden público o abandonada a la voluntad individual»²⁷. Consideraba que no había que confundir el problema de la naturaleza jurídica de la normas laborales con el de la autonomía o sustantividad de la rama que regulaba y, menos aún, con el de su especialidad. «Lo que da autonomía o sustantividad científica a una disciplina no es la bibliografía más o menos extensa —aunque la valora como un signo más— sino el haber logrado una sistemática que, además de ofrecer una estructura orgánica de aquélla, posibilite su estudio o investigación. Asimismo, esa sistemática implica la existencia de una unidad de doctrina, informada por unos principios generales comunes a una legislación amplia e importante que justifica estudios especializados». Es cierto —continuaba— que la totalidad de las normas del derecho laboral podrían comprenderse en otros campos jurídicos,

²⁶ G. Cazzetta, «L'autonomia del diritto del lavoro nel dibattito giuridico tra fascismo e repubblica», en *QF*, 28 (1999), 511-629.

²⁷ E. Pérez Botija, *Naturaleza jurídica del derecho del trabajo*, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1943, p. 8.

pero no sería conveniente dispersar su estudio, requiere un estudio unitario y especializado²⁸.

La opinión de Pérez Botija sobre el estadio científico-doctrinal del derecho laboral en España no era aislada sino generalizada. Tampoco se trataba de una situación únicamente española. En Italia, donde los estudios estaban más avanzados con una rica y controvertida doctrina y donde ya existían cátedras en las universidades destinadas a esta rama del derecho desde varios años atrás, seguían embarcados en un rulo doctrinal que, a mediados de siglo seguía sin resolverse. Para Cazzetta los años que discurren tras la caída del fascismo en el paso a la democracia están marcados en Italia por un vacío doctrinal importante²⁹. Ciertamente, las circuns-

²⁸ E. Pérez Botija, *Naturaleza...*, pp. 13 y ss.

²⁹ Los signos que delatan más claramente la discontinuidad doctrinal entre el periodo fascista y la republica, en cuanto a derecho laboral se refiere, son la libertad sindical y la libertad constitucional. Por lo demás, había un vacío científico-doctrinal grande en los años cuarenta y cinco que había que cubrir para marcar más esas diferencias. Considera que la situación era bien distinta a los primeros años del XX: en el advenimiento de la época fascista, el panorama doctrinal era joven, pero ello beneficiaba precisamente a la implantación del derecho corporativista. El desarrollo del derecho del trabajo como rama científica autónoma se encontraba todavía en una etapa de juventud. En el momento de la caída del fascismo, la situación es distinta: la revista especializada, la enorme cantidad de estudios sobre el derecho corporativo la existencia de enseñanzas universitarias estables, mostraban un recorrido difícil de anular y, al mismo tiempo, imposible de mostrar como presupuesto puramente científico de la disciplina para edificar en la democracia. Más allá del abandono de la expresión de «derecho corporativo» a favor de «derecho del trabajo», la revuelta política del 1943/1944 imponía una necesaria redefinición de los espacios de autonomía del derecho laboral y su confrontación con los consolidados en el pasado. Sin embargo, —sigue diciendo el autor—, tras la caída del fascismo, el debate sobre la autonomía científica de la disciplina se encerró sobre sí mismo en la simple y rígida distinción entre derecho público y derecho privado. Superar aquella trinchera resultaba, en aquél momento de tránsito, imposible. La política privatista y publicista mostraban posturas diversas e irreconciliables. Lo único que les unía era la eliminación del referente corporativista tal como se concebía durante el fascismo, éste era el dato que se imponía y que, de cualquier modo, unía las diversas prospectivas; a partir de ahí comenzaban las discrepancias. La búsqueda de un pasado doctrinal de la disciplina, anterior al fascismo, con

tancias italianas de esos años eran distintas a las nuestras, pero sirva como ejemplo de que, a pesar de los largos años de andadura doctrinal, todavía no se había dicho la última palabra.

Poco después de lanzar esa afirmación sobre la dogmática española, se celebra la oposición en la facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Pérez Botija ratifica su opinión, aunque presenta una relación de las opciones doctrinales más importantes y la escogida por él³⁰:

a) Consideración como derecho *sui generis*, distinto del público y del privado.

Para algunos, ni derecho público, ni derecho privado, sino un derecho intermedio. El derecho laboral sería una tercera categoría a la que se podía denominar derecho social. El contrato de trabajo es distinto del civil y del mercantil, el pacto colectivo no encaja con el perfil de los tipos clásicos de potestad reglamentaria. Pérez Botija no comparte esta teoría, más bien, la rechaza firmemente y afirma que no es necesario recurrir a ellas para defender la sustantividad del derecho del trabajo. Considera que la tesis de una naturaleza *sui generis* está superada, aunque sí que reconoce la especialidad y autonomía de esta nueva rama del derecho.

b) Desintegración del derecho del trabajo.

Opuesta a la anterior, la teoría desintegradora considera que el derecho del trabajo no ha alcanzado la necesaria unidad y debe distribuirse en las zonas de origen. Algunos pretenden fragmentarlo

el fin de perfilarlo y utilizarlo para el futuro, agudizó la distinción hasta el punto de proponer recorridos diferentes para las características, publicistas o privatistas, de la disciplina. Buscaron en la historia certeza, pureza científica todavía utilizable en el presente. Del pasado, cada uno procuraba separar, extraer soluciones técnicas o teóricas para diseñar el presente y, naturalmente, delineando el proyecto del presente, cada uno reconstruía e inventaba su pasado. Así las cosas, el tema de la relación entre derecho del trabajo científicamente autónomo y leyes del estado, entre individualismo o intervencionismo volverá a replantarse en la transición de los años cuarenta. El sentido del vacío doctrinal se confundió —en esos años— con la idea de la libertad reconquistada, G, Cazzetta, «L'autonomia...», pp. 511 y ss.

³⁰ E. Pérez Botija, *El derecho...*, pp. 131 y ss.

dividiéndolo en campos diversos; derecho del trabajo y legislación social o excluyendo de su seno materias como la seguridad social o sindicatos, policía del trabajo. En opinión de Pérez Botija, esta teoría es incongruente porque se podría pensar que los partidarios de estas fórmulas serían aquellos que conciben el derecho del trabajo como el derecho del contrato o relación laboral. Mas no es así, ya que muchos de éstos se ocupan después en sus estudios de cuestiones de policía, mientras que otros, que ofrecen definiciones o conceptos más amplios, eluden esos temas. Considera que esta teoría podría estar justificada por razones docentes o de economía metódica, pero no por motivos científicos. Dentro de esta postura habría que incluir otra, según Pérez Botija, mucho más compleja. Es la que acude al carácter de las normas para su clasificación. Así, por ejemplo, se dice que son distintas las disposiciones que reglamentan el trabajo, normalmente más imperativas, que las que regulan la relación laboral. Tampoco con éstos está de acuerdo el autor, «tales disposiciones —se refiere a las que regulan el trabajo— no siempre se oponen a la autonomía de voluntad, aunque sean normas de orden público. Por el contrario, las normas que regulan la relación laboral obligan a veces rígidamente a trabajadores y empresarios»³¹.

c) Unidad del derecho del trabajo.

En su opinión, la unidad del derecho de los trabajadores está por encima de la índole jurídica de cada uno de los elementos que lo integran. Es cierto que en torno a este derecho se aglutinan normas semejantes a otras de distintas ramas, pero eso no implica que se deban descomponer, ya que normalmente son interdependientes y no cabe pensarlas aisladas. Uno de los ejemplos en los que basa su argumentación son las cuotas de los seguros sociales que están obligados los empresarios a satisfacer, «son obligaciones jurídico-administrativas (derecho público) pero nacen del contrato (derecho privado), aunque sea del contrato laboral. Ambas clases de relaciones son inseparables, las del seguro social no surgirían sin la relación laboral, y ésta es impensable sin aquélla, ya que la sustenta y sirve de fundamento»³². También dentro de las relaciones directas entre las empresas y su personal aparecen esferas perfectamente defini-

³¹ E. Pérez Botija, *El derecho...*, p. 133.

³² E. Pérez Botija, *El derecho...*, pp. 134 y ss.

das como derecho público y como derecho privado. Por ejemplo el tema de las horas extraordinarias; únicamente el empresario es el que puede decidir ampliar las horas de trabajo de su empresa, es decir se trata de un acto privado, pero será la Administración la que tenga que concederle un permiso para hacerlo y los términos del mismo. Aquí nos encontraríamos ante un acto una resolución administrativa de derecho público que atiende a los beneficios que puede reportar dicha ampliación al empresario, a los trabajadores y al Estado, esto es, intereses privados y públicos. Por último corresponde al trabajador la decisión individual.

d) Doctrinas monistas y doctrinas dualistas o mixtas.

Por último, nos presenta aquellas direcciones doctrinales —preferentemente italianas— que, sin dejar de reconocer la sustantividad del derecho del trabajo creen que éste pertenece al campo del derecho privado. En Alemania hay teorías que sustentan lo contrario. En España hay de todo. A favor de la tesis privatista nos encontramos a Hernández Gil y en la publicista a Gascón y Marín, Jordana de Pozas, Martín Granizo y González Rothvoss. La tesis dualista o mixta se mantiene por diversos autores, desde Castán a Hernaiz³³.

Otra cuestión que, para Pérez Botija, refuerza la independencia científica del derecho laboral es la de inspirarse en principios propios, peculiares y distintos de los principios generales del derecho. Hay que tener presentes los años en que se escribe esta memoria. El autor distingue entre principios político-jurídicos, es decir, aquéllos que son más políticos que jurídicos, más programáticos que normativos y los principios generales, obra de los juristas, ciencia y esencia del derecho, esto es los estrictamente jurídicos. Los primeros se hallan codificados en el Fuero del Trabajo y Fuero de los Españoles. Los segundos hay que detraerlos de la dogmática del derecho positivo³⁴.

Refiriéndose a los primeros mantiene que, puesto que el Fuero del trabajo es un conjunto de principios generales de derecho en el orden económico-social, la consideración de estos principios como informadores del derecho laboral significaría una manera de aplicar en el ordenamiento positivo el espíritu del Fuero. Por

³³ E. Pérez Botija, *El derecho...*, pp. 137 y ss.

³⁴ E. Pérez Botija, *El derecho...*, pp. 143 y ss.

su parte, continúa la argumentación, el Tribunal Supremo ha declarado expresamente el carácter puramente programático de las declaraciones del Fuero y, por ende, estima necesaria una ley o disposición concreta que desarrolle el sentido y alcance de los derechos que en potencia son definidos por aquél. Pérez Botija adopta una postura ecléctica y considera que el Fuero es un texto político, lo compara con la parte dogmática de una constitución política. «En la propia terminología del Fuero aparece el vocablo «declaramos» y la palabra «carta», y además, en el tecnicismo de la articulación, en lo que pudiéramos llamar parte dispositiva, no aparece el tono imperativo o de mando propio de los preceptos ordinarios, sino el carácter declamatorio y programático propio de los textos constitucionales como formulación de una ética nueva»³⁵.

Por otro lado, el Fuero es una declaración de principios, por lo que habrá que otorgarle algún valor jurídico y no sólo político. El autor alude a sentencias del Tribunal Supremo, a resoluciones del Ministerio de Trabajo y a opiniones de los autores para defender una u otra postura y resume: «El Fuero de Trabajo no es una norma secundaria, es un conjunto de principios fundamentales y puede servir de fuente indirecta de interpretación de nuestro derecho laboral»³⁶. Sin embargo, considera que no son éstos los auténticos principios jurídicos del derecho del trabajo, aunque ocasionalmente puedan trascender al derecho positivo, hay otros, en cambio, que ofrecen mayor relieve legal y que son los que constituyen fuente indiscutible del derecho para el juzgador.

- *La irrenunciabilidad de derechos*. El principio de irrenunciabilidad es defendido por la totalidad de los tratadistas del derecho laboral. Mas —dice Pérez Botija— no sólo la doctrina científica, también el derecho positivo formula reglas bien terminantes sobre el particular: en el artículo 36 de la Ley de contrato de trabajo de 1931 se consagra explícitamente el principio general de la irrenunciabilidad al establecerse que es «nulo todo pacto que limite, en daño de cualquiera de las partes, el ejercicio de los derechos civiles o políticos, así como la renuncia hecha por el trabajador,

³⁵ E. Pérez Botija, *El derecho...*, p. 145.

³⁶ E. Pérez Botija, *El derecho...*, pp. 146 y ss.

antes o después de la celebración del contrato, a las indemnizaciones a que tenga derecho por accidentes en el trabajo, perjuicios ocasionados por incumplimiento del contrato o cualesquiera otros beneficios establecidos por la ley». El artículo 64 de la Ley de jurados mixtos establece que «todos los derechos emanados de esta ley y de los acuerdos válidamente adoptados por los organismos mixtos, son irrenunciables».

- *El principio de aplicación de la norma más favorable al trabajador.* Tanto la doctrina científica como la legal ha venido considerando la legislación laboral como una legislación protectora de los trabajadores. Cuando la norma a aplicar es única, el caso está claro. Pero en el caso de que haya pluralidad de preceptos relativos a la misma situación laboral, en principio habría que aplicar la pirámide kelseniana: primero las leyes, después los decretos y por último las órdenes. Mas la jerarquía normativa tiene sus excepciones y una de ellas es en el derecho del trabajo, en el que rige antes el principio de aplicación de la norma más favorable. Puede decirse que este principio tiene carácter universal y en todos los países se mantiene, incluso cambiando los sistemas políticos. Cuando faltan normas a aplicar, se acudirá al contrato como régimen general del trabajo y éste se sujetará a las condiciones mínimas expuestas en las reglamentaciones sobre las condiciones en el trabajo. Éstas podrán ser mejoradas por el contrato o por disposiciones internas de la empresa, pero nunca empeorar.
- *El principio del rendimiento.* Este principio, con el que no parece que comulgue totalmente, hay que interpretarlo, según el citado autor, como un afán de integrar al trabajador en el orden económico nacional. El Fuero del trabajo así se manifiesta en la Declaración I: «el trabajo es la participación del hombre en la producción», más expresamente lo dice la Declaración XI: «la producción nacional constituye una unidad económica al servicio de la Patria...».

Parece, en opinión de Pérez Botija, que la autonomía científica se estaba alcanzando, el derecho laboral gozaba de unidad de materia, de unos principios jurídicos propios y había ya suficiente doctrina que la respaldara. Si a ello se le añade esa unidad del sistema que reclama el autor en su Memoria, ¿no sería más eficaz, recono-

cer la unidad, al mismo tiempo que la extensa variedad, de tales investigaciones, creando una ciencia nueva?³⁷

4. *Autonomía jurídica*

De las metas que tenía que alcanzar el derecho laboral para su independencia, ésta, la autonomía jurídica, era la que probablemente había conseguido antes.

En pleno siglo XIX, la mayoría de los códigos de derecho privado hacían referencia a leyes especiales. Desde comienzos del XX regían en España unas leyes de policía del trabajo de mujeres y niños y unas normas sobre accidentes en el trabajo distintas en cuanto a responsabilidad y principios del derecho civil. La aparición de códigos laborales venía, por otra parte, a colmar las aspiraciones de especialización legislativa. Hay que tener presente que las relaciones laborales se rigen por normas dictadas exclusivamente con este fin, las leyes de accidentes, de jornada, de descanso dominical, de seguridad social, etc., formaban el conjunto legislativo aplicable a un colectivo cada vez mayor, el de los trabajadores, aunque en un principio no todos estaban sometidos al *imperium* de estas normas. Lo cierto es que el carácter tutelar y los efectos que producían distinguían estas normas de las civiles y administrativas. La legislación laboral, dice Pérez Botija, siempre será estatutaria, con sus excepciones, sus particularismos, sus individualizaciones profesionales, sus pactos o acuerdos, sus reglamentos, etc.³⁸

Volvemos al dilema de siempre, determinar la naturaleza jurídica de la norma laboral ¿se trata de un precepto dispositivo o imperativo, es una norma pública que tutela intereses generales o es de carácter privado que protege los individuales? Ciertamente, las normas laborales originan unas veces derechos privados y otras derechos públicos, pero siempre distintos de aquéllos. Pérez Botija considera, quizá por su formación de administrativista, que desde un punto de vista cuantitativo y sustancial se acerca más el derecho laboral al administrativo que al civil. Sin embargo, es partidario de tomar el contrato de trabajo como eje fundamental de la materia,

³⁷ E. Pérez Botija, «Autonomía...», pp. 369 y ss.

³⁸ E. Pérez Botija, «Autonomía...», p. 379.

en lugar de la relación laboral escogida, en cambio, por los germanistas. Considera que si bien es cierto que el contrato de trabajo es una institución distinta, autónoma y diferente del contrato privado, no debe asimilarse a relaciones jurídicas de derecho administrativo, a los actos-condición del sistema reglamentario, en donde la libertad individual tanto de empleados como de empleadores queda notablemente mermada. En el mismo sentido se manifiestan Castán, Valverde, De Diego, o Barassi en Italia. Otros lo ven desde el campo del derecho público, Posada, Palacios, Gascón, Jordana o García Oviedo son ejemplos de ello. En Alemania, Potthoff y Sinzheimer señalan que la legislación laboral no es una mera acumulación de normas administrativo-económicas e instituciones contractuales de carácter privado, sino que también hay un orden moral, interior, unos principios generales y básicos que informan la aparición de aquellos preceptos. Para Pérez Botija el derecho laboral es además una consecuencia de principios políticos, no trata únicamente de resolver la cuestión social, de ordenar las relaciones entre las empresas y los trabajadores. Siempre hay una motivación filosófico-política y una ideología económico-social³⁹.

Por otra parte, las garantías jurídicas que originan esos irrenunciabiles derechos laborales pueden ejercerse a través de la acción o de la sanción, unas veces cabe la vía gubernativa ante la administración, otras la jurisdiccional ante los tribunales; pero no se trata de la jurisdicción ordinaria, sino de una especial.

Es decir, paralelamente estaba alcanzando, aunque con muchas dificultades⁴⁰, la autonomía jurídica. La renovación jurídica forza-

³⁹ E. Pérez Botija, *El derecho...*, pp. 146 y ss.

⁴⁰ En 1926, publicaron varios autores bajo el nombre de «Leyes sociales», los temas de derecho laboral del programa de oposiciones a la carrera fiscal. El derecho social se encuentra en todas partes y especialmente en España en periodo de formación. En cada una de las instituciones rigen diversas disposiciones que se contradicen y modifican, los autores dan al final de cada tema un brevísimo índice de las disposiciones más importantes y un resumen del tema. El libro se convirtió en un indispensable manual de patronos, obreros y abogados, vid. M. González-Rothvoss, J. Casais y Santaló y L. Martín Granizo. *Leyes sociales*, Madrid, 1926. Unos años más tarde, estos mismos autores hicieron lo mismo con los temas laborales del programa de oposiciones a la judicatura, vid. L. Martín Granizo, M. González Rothvoss, *Derecho social. Doctrina y legislación comparada del trabajo*, Madrid, 1932.

da por la aparición del problema social se produjo de una forma parcial y hasta dolorosa, precisamente por las connotaciones políticas que conllevaba. El carácter fragmentario y contradictorio de la legislación, los tanteos jurídicos de los políticos en materia social, sólo alcanzaron a conseguir durante mucho tiempo soluciones parciales del problema⁴¹.

En opinión de Pérez Botija, la legislación reguladora y protectora del trabajo constituye una legislación especial de naturaleza jurídica mixta, ya que no son normas de carácter privado, pero tampoco podríamos denominarlas de carácter público, y de un marcado carácter estatutario⁴².

5. *Autonomía docente*

En opinión de Rodríguez-Piñero, el origen del derecho laboral como disciplina académica se encuentra en España fuera de la universidad⁴³. En efecto, la materia social-laboral se impartía fundamentalmente en instituciones públicas de enseñanza como eran las Escuelas Sociales, centros de formación integrados en la administración con el fin de formar técnicos, educar obreros, etc., esto es, fuera del foro universitario. Considera que «estos centros de formación, integrados en la administración laboral, constituyen una auténtica particularidad de nuestro sistema educativo»⁴⁴. Sin embargo, el fenómeno no se dio solamente en España, porque en la *RGLJ* señala Bernaldo de Quirós que, a finales del XIX (1897), F. Cosentino, en Milán, proyectaba la fundación de una Escuela Superior de Ciencias Sociales. También en Venecia crearon los cursos de Escuela Libre Popular, todas ellas encaminadas a la instrucción y educación de los trabajadores⁴⁵. El éxito de estos proyectos italianos no es lo que interesa reflejar aquí y ahora; lo importante es que, en el caso de España, aquellas Escuelas Sociales fueron las verdaderas difu-

⁴¹ A. Posada, «Un ensayo de legislación social», *RGLJ*, 99 (1901), 465-482.

⁴² E. Pérez Botija, «La autonomía...», pp. 381 y ss.

⁴³ M. C. Rodríguez-Piñero Royo, «La irrupción de nuevos sectores: el Derecho Laboral», *La enseñanza del...*, 443-515.

⁴⁴ M. C. Rodríguez-Piñero Royo, «La irrupción...», p. 447.

⁴⁵ C. Bernaldo de Quirós, en «Crónica jurídica», *RGLJ*, 92 (1898), 164.

soras de las primeras leyes laborales y fue en ellas donde esta disciplina dio sus primeros pasos. En ellas impartieron clase los primeros «laboralistas» y ellos fueron los que hicieron los primeros manuales de la misma⁴⁶.

Más adelante, a través de cursillos monográficos, seminarios, institutos, se fueron estudiando partes de lo que luego formará el derecho laboral, historia sindical, salarios, legislación industrial, derecho social. En unos casos con carácter ordinario, en otros, mediante cátedras extraordinarias, unas veces, dentro de las facultades de Derecho, Ciencias Políticas y Económicas, otras, dentro de las facultades de Filosofía, pero desbordando ya los márgenes jurídico-sociales.

Los juristas estuvieron muchas décadas reclamando la inserción del derecho laboral en los planes de estudios universitarios hasta que se produjo en 1944. En 1921 Jordana de Pozas defendía la inclusión de los estudios de previsión social. Pocos años después, Royo Martínez sugiere, dada la necesidad, según él, apremiante, la conveniencia de «incluir en la carrera de Derecho una asignatura que estudie el aspecto jurídico de la llamada cuestión social o, más concretamente, el derecho corporativo y del trabajo»⁴⁷. El autor propone esta denominación con bastante menos entusiasmo que el que pone en rechazar la denominación de derecho social. Más adelante, se lamenta Castán de la falta de estudios del derecho de trabajo en las facultades de Derecho. «Hoy por hoy —señala— no figura en el cuadro de enseñanzas de la licenciatura, en las facultades de Derecho, el estudio del Derecho del trabajo, y sólo hay, en el doctorado, una cátedra de Política social y Legislación comparada, de escasa eficacia por su contenido extensísimo»⁴⁸. Denuncia también el estado obsoleto en el que se encuentran las Escuelas Sociales, que únicamente renovándose podrán subsistir. Coincide con Pérez Botija en que todavía no se han dado los últimos pasos para la construcción teórica de esta rama del derecho y que para ello es preciso el concurso de todos los organismos universitarios y culturales. Con-

⁴⁶ Para un estudio detallado de la evolución de estas instituciones consultar M. C. Rodríguez-Piñero Royo, «La irrupción...», pp. 447 y ss.

⁴⁷ M. Royo Martínez, «Una innovación necesaria en la carrera de Derecho», *RGLJ*, 61 (1932), 754-757.

⁴⁸ Se refiere el autor a la cátedra creada en 1916 por Real Decreto de 7 de marzo. M. C. Rodríguez-Piñero Royo, «La irrupción...», p. 447.

secuentemente, reclama cátedras de Política económica y Derecho económico, y Política social y Derecho social en los cursos de doctorado en Derecho, pero es, sobre todo, «muy urgente que el Derecho del trabajo de incorpore a las enseñanzas de licenciatura»⁴⁹.

Casi en plena mitad del siglo pasado, el derecho del trabajo se impartía por tanto como asignatura independiente en las Escuelas Sociales y en cursos de doctorado, seminarios, etc., pero estaba ausente en las licenciaturas de Derecho y de Ciencias Políticas y Sociales. Sin embargo, esto no quiere decir que en estas licenciaturas no se estudiasen temas del derecho de los trabajadores; los profesores de Derecho civil dedicaban una parte, aunque no muy extensa, de su programa al contrato de trabajo, los de administrativo hacían lo mismo con las instituciones laborales, también los de Derecho mercantil incluían en sus temarios lecciones de esta disciplina. De hecho, tras su integración en el plan de estudios de 1944⁵⁰ y mientras se dotaron las primeras cátedras, fueron profesores de estas otras disciplinas los que siguieron impartiendo la asignatura, ya como asignatura autónoma.

Al primer profesor que encontramos impartiendo lecciones del Derecho del trabajo es a Calvo Alfageme, catedrático de Derecho mercantil. Figura en su hoja de servicios que durante los cursos 1946-47 y 1947-48 fue el encargado de la cátedra de Derecho del trabajo en la universidad de Valladolid⁵¹. Su asignación a un mercantilista no es de extrañar. Es normal encontrar en los expedientes de

⁴⁹ J. Castán Tobeñas, «El Derecho social. En torno a los diversos criterios de definición y valoración de esta nueva categoría jurídica», *RGLJ*, 169 (1941), 513-538.

⁵⁰ Decreto de 7 de julio de 1944, de Ordenación de la Facultad de Derecho. El decreto desarrollaba la Ley de Ordenación universitaria de 29 de julio de 1943, vid. M. Martínez Neira, *El estudio del Derecho. Libros de texto y planes de estudio en la Universidad contemporánea*, Madrid, Universidad Carlos III-Dykinson, 2001, pp. 146 y ss.

⁵¹ AGA, Educación, leg. 15047/10. Y en el mismo *currículum* manifiesta el autor «Por OM y a propuesta de la facultad de Derecho de Valladolid he estado encargado de la cátedra de derecho del trabajo en esta universidad durante los cursos de 1946-1947 y 1947-1948». Parece ser que el primer profesor español de derecho laboral fue Juan Biolet-Massé, en 1904-6, en la universidad de Córdoba (Argentina), vid. L.A. Despontín, «El primer profesor español de Derecho del Trabajo», *Revista de Derecho del Trabajo*, Madrid, 32 (1959), 22-23.

cátedras de Derecho mercantil de esos años diversas publicaciones de los candidatos referentes al tema laboral, así como algunas lecciones entreveradas sobre ello en los programas que presentaban en las oposiciones⁵².

Esto no quiere decir que fueran los mercantilistas los acaparadores de la nueva disciplina jurídica, también los administrativistas y los civilistas eran los encargados en otras facultades de realizar las tareas docentes de la misma. Recordemos que Pérez Botija era catedrático de Derecho administrativo cuando se presentó a la cátedra de Derecho del trabajo en la Facultad de Ciencias Políticas. Argumenta Pérez Botija en la memoria de oposición que la nueva disciplina interesa especialmente a las facultades de Jurisprudencia, a las de estudios políticos, sociales y económicos. Si el derecho del trabajo tiene un matiz marcadamente político, deberá tenerse en cuenta en los centros dedicados a enseñar e investigar los fines, estructura y modo de actuar del Estado. De la misma forma, por su repercusión económica que afecta a la producción y a la vida de las empresas, tendrá que cursarse en los estudios económicos. También acude a argumentos de tipo profesional y burocrático para defender cátedras de derecho laboral en las universidades. Si la universidad se concibe no sólo como núcleo de cohesión, densificación y preparación cultural, sino también como instituto de formación para la vida práctica, interesa que los futuros magistrados, inspectores, y demás funcionarios técnicos que han de interpretar y aplicar el derecho laboral tengan un contacto en la universidad con esta materia⁵³.

Se plantea si es conveniente unificar o dividir los estudios de derecho laboral. En casi todos los países se implanta la fragmentación. En España, aparte de las posibilidades que permite el nuevo sistema doctoral, en los cuadros de la licenciatura de Derecho figura la asignatura repartida en dos cuatrimestres, y previamente a ellos, aunque ligados a Derecho político, existe una asignatura sobre Teoría de la sociedad. Ello permite una fragmentación, ya que en

⁵² Sirva como ejemplo el de A. Polo Díez, catedrático de Derecho mercantil en Barcelona (1944-46) que presentó en el examen varias publicaciones sobre el Fuero de trabajo y sobre las relaciones laborales, A. Polo Díez, «Del Contrato a la relación de trabajo», *Revista de Derecho Privado*, Madrid, 25 (1941), 288-289.

⁵³ E. Pérez Botija, *El Derecho...*, pp. 195 y ss.

ésta última se abordarían los supuestos sociológicos y dejar para los dos cuatrimestres la teoría jurídica y la legislación laboral. El primer cuatrimestre podría dedicarse a una introducción y parte general, junto con la doctrina de las obligaciones y derechos directamente derivados de la relación laboral, dejando para el segundo el resto de la asignatura y especialmente los seguros sociales.

Otra posibilidad, sugiere el autor, sería establecer una distinción formal y convencional, tratando en uno de los periodos docentes la parte procesal y administrativa y en el segundo, el resto. La división docente de algunas universidades extranjeras y de la española, permite testimoniar la subdivisión de lo político-social y los jurídico-laboral en diversas disciplinas especiales. Es decir, quedan separadas Política social y Derecho del trabajo. También hay cátedras separadas de Seguros sociales y de Derecho procesal del trabajo. Estas subdivisiones pueden servir a los encargados de las cátedras de derecho laboral para ponderar las materias que deben integrar sus programas. Mas no considera necesario que haya de trascender dentro de las facultades de Derecho una mayor división, ya que los cursos especiales y monográficos del doctorado permiten ampliar las investigaciones.

En cambio, en la nueva facultad de Ciencias Políticas y Económicas, lo mismo que en las Escuelas Sociales, sí que parece preciso completar los estudios de Derecho del trabajo con otras especialidades del ramo. En cuanto a la primera, dedica únicamente un cuatrimestre al Derecho del trabajo y otro a la Política social, materias que no deben confundirse y que es, en el caso del derecho laboral, tiempo insuficiente. Además la Política social de la facultad de Ciencias Políticas deberá abordar materias que exceden del área laboral. (por ejemplo, la política social agraria, la inmobiliaria, etc...). Pero es que, además, la asignatura dedicada al derecho laboral se denomina «derecho sindical y del trabajo», materia, la sindical, que por sí sola merece en otras universidades y en las Escuelas Sociales, uno o dos cursos de especialización. Propone que se dediquen dos cuatrimestres a Derecho del trabajo y otros dos a Política social, con posibilidad de incorporar a la licenciatura o al doctorado un curso de derecho sindical.

En cuanto a la facultad de Económicas, es más urgente ampliar y subdividir los estudios sociales y laborales. Según la tesis equivocada de que la política social forma parte de la política económica, se impartían en esta última lecciones de aquélla. Tampoco faltan

teorías de los sociólogos contrarias, que consideran que la política económica no existe y que es parte de la política social, en cuanto que se considera como social toda la actividad del Estado. Pero dejando aparte la sustantividad científica y docente que a su parecer tienen una y otra, defiende Botija que en esta facultad deben ampliarse los estudios laborales. Al fin y al cabo el derecho laboral nació para enmendar errores de la economía clásica. Deberían, pues, intensificarse las enseñanzas de política social, dar al derecho del trabajo la extensión que merece y establecer tres cátedras independientes de Organización sindical, Seguros sociales e Historia de las doctrinas político-sociales.

En el momento en que preparaba esta memoria Pérez Botija, el Derecho del trabajo no era asignatura obligatoria en Económicas, era optativa a elegir entre un conjunto de especialidades como Población, Política y Economía agrícola. A su modo de entender, se ha producido aquí un espejismo académico porque el derecho laboral no es una especialidad de la ciencia económica, es una disciplina instrumental que tiene que conocer el economista. Considera que si se ofrece al alumno la elección entre el Derecho del trabajo y las otras especialidades mencionadas, importantísimas para el economista a la par que más fáciles, la clientela discente del Derecho laboral será en esta facultad mínima.

Con independencia de la programática política española del momento del nacionalsindicalismo, defiende la importancia del derecho sindical para los economistas. De hecho, en todos los países le prestan a la organización sindical especial atención.

Otra rama especial de la política social y del derecho laboral lo constituyen los seguros sociales. Por su constante progreso científico-bibliográfico y práctico, por sus realizaciones, su incursión en el área de los seguros privados, por sus efectos en la seguridad económica de grandes masas de población justificase la consideración de los mismos como disciplina autónoma. Este es el panorama universitario que describe Pérez Botija en su memoria de oposición a mediados del siglo pasado.

María José María e Izquierdo
Universidad Carlos III de Madrid

SOBRE LOS ORÍGENES DE LA HISTORIA DEL DERECHO EN LA UNIVERSIDAD ITALIANA*

Sumario: 1. La estructura de la enseñanza: los planes de estudio hasta la segunda guerra de independencia.—2. De la ley Casati a la gran guerra.—3. El contenido de la enseñanza: temas de estudio y primeros manuales.—4. Una nueva concepción del derecho.—5. El elemento italiano o la nación.—Apéndice.

Cierto, en la «ciencia» existen lugares comunes, es decir, afirmaciones que no se comprueban, que se transmiten de uno a otro sin ser verificadas —a veces, de una generación a otra—, que los estudiantes aprenden de memoria, que los investigadores recogen en sus escritos y que incluso aparecen en los instrumentos de referencia. Y en ocasiones esas «verdades» hay que matizarlas, no tomarlas en su sentido absoluto e incluso rechazarlas. Uno de esos lugares comunes, en Italia, se refiere al origen de la disciplina denominada historia del derecho. Si uno busca en la literatura especializada¹, acude

* Publico aquí las primeras conclusiones de una investigación en curso. Sobre su contenido he podido hablar —por orden cronológico— con Andrea Romano en Mesina, con Aldo Mazzacane en Nápoles y con Gian Paolo Brizzi en Bolonia. El grueso del trabajo lo he desarrollado en Florencia —durante una estancia de investigación en el *Centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno*, a caballo entre la flamante biblioteca Novoli y la vetusta Nacional— donde conversé con Paolo Grossi, Bernardo Sordi y Pietro Costa, así como con Maurizio Fioravanti y Paolo Capellini. Agradezco a todos su hospitalidad y sus consejos, y a Adela Mora su apoyo continuo.

¹ Francesco Calasso, «Il centenario della prima cattedra italiana di storia del diritto», en Íd., *Storicità del diritto*, Milano, 1966, pp. 3-24. El texto reproduce el discurso leído el 12 de octubre de 1957 con ocasión del centenario de la cátedra de historia del derecho de Padua. El tema (un siglo de historiografía jurídica italiana) fue propuesto por Aldo Checchini. Algunas frases ambiguas y, sobre todo, el título dado al ensayo —que quizá no fue puesto por el autor— han ocasionado que muchos identifiquen el centenario de una cátedra concreta con el de la disciplina. Cuando Calasso

a obras de referencia² o a documentos oficiales³ seguramente termine convencido de que las primeras cátedras de historia del derecho italiano fueron las establecidas en 1857 en las universidades de Pavía y Padua, y sin embargo la realidad no es tan simple: en esa fecha ya existían otras cátedras de esta disciplina, desde el setecientos podemos documentar la enseñanza de la materia, pero aun así el año indicado —como veremos— no es vano.

El objeto de estas páginas es precisamente estudiar cuándo, cómo, dónde y porqué surgen los estudios de historia del derecho italiano y cuáles han sido las primeras etapas de su desarrollo. Es decir, ¿qué lugar tuvo la historia del derecho en la construcción del estado liberal italiano?, y para ello analizar ¿cuándo surgen los estudios de historia del derecho?, ¿cómo aparecen en los planes de estudio?, ¿qué orientación tenían?, ¿quiénes son los principales protagonistas del desarrollo de esta disciplina?, ¿qué función jugaba en la formación del jurista, en su educación y, por lo tanto, en la ciencia jurídica?

Para los que nos dedicamos a la historia del derecho español son cuestiones en parte desconocidas, a pesar de que la manera de concebir la asignatura, los manuales, la orientación doctrinal desarrollada en las tierras de Italia influyeron poderosamente en España: facilitar este análisis es precisamente el objetivo de este trabajo⁴.

habla, por ejemplo, del «primer centro de irradiación» se refiere —en mi opinión— a la importancia de Pertile para la historia del derecho italiano y no al nacimiento de ésta.

² «Storia del diritto italiano», *Dizionario storico del diritto italiano ed europeo*, Simone, Napoli, 2000, p. 305.

³ Esquema de reforma de las facultades de derecho y de las estructuras universitarias para las ciencias sociales (primera parte firmada por Corrado Pecorella y titulada «Cenni storici sulle facoltà di giurisprudenza») elaborado por la *Commissione nazionale degli assistenti di giurisprudenza* (1963-1965). Puede verse en *Università di oggi e società di domani. Studi e ricerche condotte dal Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale*, Bari, 1969, pp. 308-332. Ahora en Corrado Pecorella, *Studi e ricerche di storia del diritto*, Torino, 1995, pp. 243-265.

⁴ Frente a los distintos estudios que existen para Francia, Alemania o Inglaterra, no conozco ninguno sobre Italia. Sí contamos con instrumentos útiles para conocer el desarrollo de los estudios jurídicos en Italia: Bruno Paradisi, *Apologia della storia giuridica*, Bologna, 1973; Luigi Berlinguer, «Considerazioni su storiografia e diritto», *Studi storici*, 15 (1974),

Para acercarnos a estas cuestiones propongo detenernos primero en los planes de estudio de derecho, para ver cómo aparece en ellos situada esta materia, y luego acercarnos a su contenido sobre todo a través de los manuales, pero también de algunas monografías y revistas. Aparecerán así los protagonistas de este trabajo, es decir, los profesores que enseñaron y formaron la disciplina, sus inquietudes y debilidades. El marco temporal posee un punto clave: la unificación italiana⁵. La gran guerra y la crisis del sistema liberal cierran el periodo de estos apuntes.

1. *La estructura de la enseñanza: los planes de estudio hasta la segunda guerra de independencia*

Los primeros estudios de historia del derecho fueron realizados por los humanistas del siglo XV que dedicaron sus energías primero al derecho romano⁶ y después al medieval⁷. A continuación encontramos un grupo numeroso de eruditos que trataron distintos aspectos de la historia jurídica, entre ellos sobresale Lodovico Antonio Muratori (1672-1750); mención aparte merece Giambattista Vico (1668-1744)⁸.

pp. 3-56; Ennio Cortese, «Storia del diritto», *Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia*, Milano, 1982, pp. 785-858; Aldo Mazzacane, «Tendenze attuali della storiografia giuridica italiana sull'età moderna e contemporanea», *Scienza & Politica*, 6 (1992), pp. 3-26.

⁵ Recuerdo aquí, para el lector no italiano, algunos de los hechos más importantes de la unificación nacional: 1848-1849, primera guerra de independencia, triunfo de Austria; 1859, comienza la segunda guerra de independencia, anexión de Lombardía al reino de Cerdeña; 1860, anexión de Toscana, Emilia, Sicilia y Nápoles; 1861, proclamación del reino de Italia; 1864, Florencia se convierte en la capital; 1866, tercera guerra de independencia, incorporación del Véneto; 1870, ocupación de Roma, que se convierte en la capital.

⁶ Así, por ejemplo, Flavio Biondo (1388-1463), Lorenzo Valla (1406-1457), Angelo Poliziano (1454-1494), Pomponio Leto (1425-1497), Lodovico Bolognini (1447-1508), Andrea Alciato (1492-1550).

⁷ Así, por ejemplo, Carlo Sigonio (1520-1584), Tommaso Diplovatacio (1468-1541), Guido Panciroli (1523-1599).

⁸ Enrico Besta, *Avviamento allo studio della storia del diritto italiano*, Padova, 1926, pp. 129-149. La estructura del discurso fue diseñada por Antonio Pertile, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codi-*

Sobre este sustrato, en el seno de los cursos de derecho patrio —fundamentalmente—, encontramos ejemplos de enseñanza de la historia del derecho en las universidades italianas ya en el siglo XVIII⁹. Se trataba, en síntesis, de una historia externa del derecho —historia de la legislación se podría llamar propiamente—, con una finalidad eminentemente propedéutica. Esta función práctica favorecía su ámbito local¹⁰.

A partir de 1840, cuando se hizo más fuerte y extenso el movimiento para la unificación italiana, comenzaron a instituirse distintas cátedras de historia del derecho. Las primeras se crearon en Toscana (1840), después vinieron las de Turín (1846), Génova (1848), Cagliari y Sásari (1850), Pavía y Padua (1857). Luego, con la ley

ficazione, 2ª ed., vol. 2-2, Torino, 1898, pp. 449-460. Sobre ella trabajaron: Arri-go Solmi, *La storia del diritto italiano*, Roma, 1922 [= Guide bibliografiche. Fondazione Leonardo per la cultura italiana, núm. 10], pp. 10-12; Pasquale Del Giudice, *Storia del diritto italiano*, vol. 2, Milano, 1923, pp. 377-393.

⁹ En 1736, en Turín, se instituyó una cátedra especial de historia del derecho. En 1747, en Pavía, se creó una cátedra denominada *Historia iuris civilis* y se confió al abogado Pasquale Garoffali. Maria Carla Zorzoli afirma que nunca fue realmente activada y que en 1763 se crea otra denominada *Historia juris et consuetudinum feudalium*: Íd., «La facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia (1535-1796)», en *Studi di storia del diritto*, I, Milano, 1996, p. 395. En esta universidad y en Bolonia durante la república cisalpina (1796-1801) existió una *Storia delle leggi e dei costumi dei popoli*.

¹⁰ Un ejemplo lo encontramos en la obra póstuma de Francesco Forti (1806-1838): *Libri due delle istituzioni civili accomodate all'uso del foro*, 2 vols., Firenze, 1840-1841. En el primer libro Forti se interrogaba sobre cuáles eran las leyes vigentes, cómo debían ser interpretadas y aplicadas. Para ello dedicaba el capítulo tercero de este volumen (pp. 24-556, es decir, quinientas treinta y dos páginas) a las leyes que componen «nuestra» jurisprudencia: las leyes de los romanos, las leyes usadas en los siglos bárbaros, las leyes de los pueblos de Italia entre los años 1000 y 1500, las leyes modernas de los principados italianos y en especial las referidas al gran ducado de Toscana. Forti no trataba de redactar una historia de la legislación sino mostrar al lector la enorme sucesión de leyes que se había producido a partir de Roma; lo que estimaba necesario para la práctica. En efecto, si se lee el segundo volumen o libro de la obra donde el autor trata de distintas instituciones (estado de las personas...) observamos que para el tratamiento de cada cuestión parte del derecho romano. Sobre Forti véase el estudio preliminar de Luca Mannori (ed.), *Tra due patrie. Un'antologia degli scritti di Francesco Forti (1806-1838)*, Firenze, 2003.

Casati (1859), esta disciplina se extendió progresivamente a todas las universidades del reino.

Pasemos ahora a analizar, en concreto, los planes de estudio jurídicos y la enseñanza de la historia del derecho en las distintas universidades antes del proceso de unificación del país¹¹.

Gran ducado de Toscana

En el marco de la reforma del sistema universitario toscano (Pisa y Siena) ordenada por Leopoldo de Lorena —la denominada reforma Giorgini (1838-1841)— con fecha 29 de septiembre de 1840 se dispusieron las cátedras de las distintas facultades. La facultad de derecho de Pisa tenía nueve cátedras, entre ellas una de historia del derecho (*Istoria del diritto*). La facultad de derecho de Siena tenía siete cátedras, entre ellas una de *Istituzioni di diritto romano e storia del diritto*. El 2 de junio de 1841 se dispuso el orden de los estudios jurídicos, que abarcaban cinco años, la historia del derecho se cursaba en cuarto y quinto curso¹².

La cátedra de Siena fue ocupada por Pietro Conticini, que se había formado en Alemania¹³. Aunque enseguida, al obtener en 1843 una cátedra de derecho romano en Pisa, fue sustituido por Leopoldo

¹¹ Mientras no se diga otra cosa, el grueso de las noticias proceden de Mario Ghiron, *Studi sull'ordinamento della facoltà giuridica*, Roma, 1913. Algunas observaciones pueden encontrarse en Maria Gigliola Di Renzo Villata, «Introduzione», en *Formare il giurista. Esperienze nell'area lombarda tra Sette e Ottocento*, edición de Íd., Giuffrè, Milano, 2004, pp. 1-105. No me detengo en los ducados de Módena y Parma.

¹² Sobre la facultad de la Universidad de Siena: Temistocle Mozzani, *L'Università degli studi di Siena. Dall'anno 1839-40 al 1900-01. Notizie e documenti*, Siena, 1902; Floriana Colao, «Momenti dell'insegnamento della storia nell'Università di Siena fra Otto e Novecento», *L'Università di Siena: 750 anni di storia*, Silvana editoriale, 1991, pp. 217-226; Andrea Labardi, *La facoltà giuridica senese e la restaurazione*, Milano, 2000. Sobre la facultad de la Universidad de Pisa: Enrico Spagnesi, *L'insegnamento del diritto a Pisa dal principio del '700 all'Unità*, Pisa, 1999; Danilo Barsanti, *L'Università di Pisa dal 1800 al 1860. Il quadro politico e istituzionale, gli ordinamenti didattici, i rapporti con l'Ordine di S. Stefano*, Pisa, 1993.

¹³ Aldo Mazzacane, «Pietro Conticini», *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 28, pp. 490-494. Con posterioridad, Conticini fue profesor suplente de historia del derecho en Pisa de 1848-1851 (además de titular de *Pandette*).

do Pio Ceccarelli. La cátedra de Pisa fue ocupada por Francesco Bonaini, más conocido por su obra archivística, pero que no deja de tener interés para nosotros¹⁴.

Bonaini, en su introducción al curso 1840-1841, se hacía eco de la novedad de la enseñanza: «per iniziare un insegnamento, su cui sparse gran luce l'ingegno de' nostri, e che per la prima volta si accoglie nelle scuole d'Italia»¹⁵.

Las lecciones no trataban de la historia de la legislación o de la jurisprudencia, sino de historia general del derecho, es decir, de todos los pueblos sin distinción de modernos y antiguos, de latinos y bárbaros. De manera que en su explicación aparecían no sólo las condiciones de las leyes y sus principios científicos, sino también la razón de las disposiciones que situaba en el estado moral y político de los pueblos.

Una historia del derecho así concebida era para Bonaini la parte más noble de la historia general, pues ofrecía la experiencia de la dirección y el mejor ordenamiento de las naciones. Cuanto más amplio fuese su campo de estudio mayor serían las enseñanzas sobre prudencia.

Respetando el protagonismo del elemento romano, subrayaba —en primer lugar— la influencia que recibió de la filosofía griega, el posterior peso del cristianismo y del elemento feudal, la relevancia de las cruzadas para la evolución del derecho, el nacimiento de las ciudades libres y la eclosión de la ciencia jurídica, para concluir con la aparición de los códigos.

Señalaba esenciales para el desarrollo de la historia del derecho los trabajos de Grandi, Tanucci, Dal-Borgo, Muratori, Lupi, Fantuzzi o Marini: «senza dei quali, concedetemi il dirlo, non sarebbe sorta dalla Germania la maggiore opera storica del diritto che in questo secolo apparisse, quella del Savigny»¹⁶. Y así podía concluir su discurso diciendo:

¹⁴ Letizia Pagliai, «Francesco Bonaini: la formazione e l'insegnamento nell'Università di Pisa», *Studi in onore di Arnaldo d'Addario*, vol. 4-2, Lecce, 1995, pp. 1537-1555. Bonaini fue catedrático de Pisa entre 1840 y 1851, pero desde 1848 estaba dispensado de carga docente, que corría a cargo del profesor suplente, Pietro Conticini.

¹⁵ *Prolusione alle lezioni di storia del diritto detta dal professore Francesco Bonaini nell'I. e R. Università di Pisa il giorno 23 gennaio 1841*, Pisa, s.a., p. 3.

¹⁶ Bonaini, *Prolusione*, cit., p. 21.

La storia del diritto deve la sua maggiore illustrazione all'ingegno ed alle cure degli Italiani. Italiani, come tutti noi siamo, coroniamo animosi l'opera de' nostri padri, quella del nostro secolo, e col fatto imponiamo silenzio eterno alla voce maligna, che accusa l'Italia di riposar neghittosa sopra le glorie degli avi.

Precisamente de Savigny, Boniani tomó la otra tarea que nos interesa, su dedicación a la edición de los estatutos municipales y, sobre todo, la realización de un repertorio de éstos. En efecto, el jurista alemán había indicado en su libro sobre la historia del derecho romano en la edad media la necesidad de elaborar un índice crítico de todos los estatutos ya impresos, tarea que fue acometida por el profesor pisano¹⁷.

En la misma reforma Giorgini se instituyó una cátedra de derecho patrio (*Diritto patrio*) cuyo titular fue Giuseppe Montanelli. En su lección inaugural explicó la importancia de esta reforma¹⁸. Cuando nacieron las universidades italianas la doctrina jurídica se reducía al estudio del derecho romano y canónico, pero el progreso de los siglos modernos —decía el profesor pisano— reclamaba una nueva disposición de los estudios. En ella aparecía la materia del derecho patrio, que no se reducía al estudio de las leyes: la ley es una fuente del derecho, pero el derecho más que en ésta se manifiesta en la costumbre y en la doctrina. Por ello estimaba que para enseñar el derecho patrio no se necesitaba un código, pues la formación del derecho era una tarea cotidiana, del pueblo y de los juristas, en la que la parte menos activa correspondía al legislador. Para enseñar el derecho patrio —afirmaba— se necesitaba el método dogmá-

¹⁷ *Statuto della Val d'Ambra del MCCVIII del conte Guido Guerra III e ordinamenti pei fedeli di Vallombrosa degli anni MCCLIII e MCCLXIII degli abbatì Tesaro di Beccaria e Pevano. Preceduti da ricerche critiche intorno ai medesimi e da vari pensieri sulla proposta fatta nel congresso veneziano degli scienziati nel MDCCCXLVII intorno ad una raccolta generale dei nostri statuti di Francesco Bonaini. Si aggiungono alcuni appunti per servire ad una bibliografia degli statuti italiani*, Pisa, 1851. Para el desarrollo posterior de esta tarea véase: Pasquale Del Giudice, «Gli statuti dei comuni italiani e il voto del congresso storico di Milano», en Íd., *Studi di storia e diritto*, Milano, 1889, pp. 64-85.

¹⁸ Giuseppe Montanelli, *Prolusione alle lezioni di diritto patrio dell'avvocato professore — detta il 4 gennajo 1841 nell' I. e R. Università di Pisa*, Pisa, s.a.

tico-histórico-filosófico, es decir, localizar las fuentes de ese derecho, analizar sus causas y expresarlo en norma. Por ello en las páginas sucesivas recorría el desarrollo del derecho romano en Italia y los cambios que aportó la revolución francesa, hasta llegar al debate sobre la oportunidad de un código. La postura de Montanelli era previsible: no estimaba necesario un código sino distintas leyes que fuesen expresión de la sociedad y su elaboración doctrinal. Resulta así patente la interrelación que existía entre historia del derecho y derecho patrio.

La reforma de 28 de octubre de 1851 suprimió la facultad de derecho de Pisa. La cátedra sienesa pasaba a denominarse Historia del derecho romano, de ahí que en 1857 pasase a formar parte de las materias de segundo curso, de los cuatro que componían la carrera. Su titular, Francesco Bonaini, estaba dispensado y la ejerció Giovanni Battista Giorgini¹⁹.

El profesor de Siena compartía los planteamientos de Bonaini y Montanelli. Giorgini se hacía eco del gran avance del método histórico en los últimos siglos, y estimaba que éste había lanzado sobre la historia del derecho una luz nueva e inesperada; permitiendo así el verdadero progreso del derecho. No se trataba sólo de asumir el método crítico, sino de concebir la historia del derecho como historia de la sociedad, de comprender que el derecho —y sobre todo el derecho privado— era producto del pueblo²⁰.

Tuttavia se v'è cosa nella quale il popolo debba veramente tutto a se stesso, è questa il diritto privato. I codici moderni ne quali, tutto il diritto si trova disteso, ordinato, trinciato in capi ed articoli, ci hanno avvezzi a riguardare il diritto come un complesso di precetti scesi dall'alto sulle moltitudini. Questo concetto è materialmente falso. Tutte le istituzioni del diritto privato, che sono un prodotto della libertà colla quale l'uomo dispone del suo, non poterono venire dalla legge, che è il contrapposto della libertà [...] Il diritto si forma come la lingua.

¹⁹ G. B. Giorgini, *Prolusione al corso di storia del diritto del prof. — pubblicata dagli studenti dell'Università di Siena. Della vocazione del nostro secolo allo studio della storia*, Siena, 1859. Previamente enseñó derecho canónico (Íd., *Prolusione di G. B. Giorgini professore d'istituzioni canoniche nella I. e R. Università di Pisa*, Pisa, 1844) y filosofía del derecho (Íd., *Prolusione al corso di filosofia del diritto*, Pisa, 1850).

²⁰ Giorgini, *Della vocazione*, cit., p. 19.

Durante el gobierno provisional de 1859 se dictó el reglamento Ridolfi, aprobado por decreto de 31 julio. La carrera jurídica, dividida en cuatro años, de nuevo podía cursarse en las universidades de Pisa y Siena. Se establecía una cátedra de *Storia del diritto* cuya enseñanza aparecía en el último año. El catedrático de Pisa era Giovanni Battista Giorgini. La cátedra de Siena estaba ocupada por Galgano Vegni, que era profesor suplente²¹.

Reino de Cerdeña

El reino sardo contaba con cuatro universidades, dos en tierra firme (Turín y Génova), otras dos en la isla de Cerdeña (Sassari y Cagliari), así como con una serie de escuelas legales (Aosta, Chambery, Niza, Asti, Casale, Tortosa y Novara).

Con fecha 24 de julio de 1846 Carlos Alberto reordenó el plan de estudio jurídico de Turín²². Las materias de enseñanza estaban divididas en cinco años, cuatro cursos de derecho romano, cuatro de civil y tres de canónico constituían la base de la enseñanza. Junto a ellos en primero aparecía un curso de enciclopedia e historia del derecho (*Enciclopedia e storia del diritto*) confiado a Pietro Luigi Albini²³.

Albini dividía la historia del derecho italiano en tres periodos: legislación romana (753 a. C.-565 d. C.), legislación de la edad media (566-1500) y legislación de la edad moderna (1500-1848)²⁴. Se tra-

²¹ Aunque más tardía, puede orientar sobre su enseñanza: G. Vegni, *Introduzione generale alle scienze giuridiche e storia del diritto*, Siena, 1871.

²² La reforma era fruto de una comisión presidida por Sclopis, quien ya había escrito sobre su necesidad: Íd., *Annali di giurisprudenza*, ottobre 1838, p. 393.

²³ Pietro Luigi Albini, *Per l'inaugurazione della cattedra di enciclopedia e storia del diritto nella R. Università di Torino: discorso dell'avvocato professore P. L. Albini, detto il 6 novembre 1846*, Novara, 1847. Aquí analizaba la utilidad de la historia del derecho y trazaba un cuadro general de la misma, en continuidad con lo que ya había publicado anteriormente: Íd., *Saggio analitico sul diritto e sulla scienza ed istruzione politico-legale di — avv. e prof. di diritto nelle scuole universitarie di Novara*, Vigevano, 1839.

²⁴ Pietro Luigi Albini, *Elementi della storia del diritto in Italia dalla fondazione di Roma sino ai nostri tempi e nella monarchia di Savoia in particolare. Per uso degli studenti di leggi della R. Università di Torino*, Torino, 1847-1848 (en la portada del libro aparece sólo la fecha 1847, pero éste irá

taba de una historia externa —es decir, de las fuentes del derecho y de la ciencia jurídica— y general —es decir, derecho romano y patrio a la vez—; que no carecía de un declarado nacionalismo, como se aprecia en el comentario que hacía a los acontecimientos desarrollados en 1848²⁵:

Un'era novella sorgeva per tutta Italia. Chè libere istituzioni promettevano di svolgere gli elementi di potenza e di prosperità ond'essa è ricca, e rin vigorivano il sentimento dell'indipendenza nazionale mantenuto vivo dalla voce di generosi e gagliardi scrittori. Dalle Alpi al Lilibeo agitava gli animi il bisogno di scuotere la dominazione straniera che da tre secoli s'aggravava sull'Italia.

En su opinión, la historia del derecho estaba constituida por la narración razonada de los orígenes, progresos y cambios de las leyes de uno o más pueblos²⁶. Siguiendo a Leibniz la divide en historia externa e interna (esta última también denominada jurisprudencia cronológica o antigüedad del derecho).

Su valor no estaba en una erudición estéril²⁷. Estaba en una concepción del fenómeno jurídico de raíz historicista. En efecto, para el profesor de Turín, el derecho vigente no era una obra arbitraria sino resultado de la historia, así entre el derecho histórico y el actual existía continuidad, y por ello para conocerlo era necesario el estudio de su historia: las razones del presente estaban en el pasado. Además, debido a los grandes cambios que se estaban viviendo, nunca como entonces había sido tan necesario el conocimiento de

publicándose por pliegos, pues en las últimas páginas se incluye el *Statuto fondamentale* de 1848 para la monarquía saboya.

Para la primera parte del curso había publicado otro manual: Íd., *Enciclopedia del diritto, ossia Introduzione generale alla scienza del diritto*, Torino, 1846. Ese mismo año académico dió a la imprenta otra lección magistral: Íd., *Del bisogno speciale degli studii giuridici nei tempi presenti: prolusione per la riapertura del corso di Enciclopedia e storia del diritto detta il 6 dicembre 1847 nella R. Università di Torino*, s. l., s. a.

²⁵ Albini, *Elementi*, cit., p. 293.

²⁶ Albini, *Saggio analitico*, cit., p. 168. Esta definición se basaba en la obra de Warnkoen, *Histoire externe du droit romain á l'usage des élèves en droit*, Bruxelles, 1836.

²⁷ Albini, *Saggio analitico*, cit., pp. 169 ss.

la historia del derecho. Estas reflexiones debían tener obviamente su reflejo en la academia²⁸.

Esta historia del derecho iría unida a una historia civil, no una historia de guerras y batallas, sino la descripción del cuerpo social en todas sus partes y a la de su desarrollo sucesivo. A su lado aparecería una historia de la ciencia jurídica —en la que Italia ocuparía un puesto primero—, cuyo objeto principal era la biografía de los juristas y el estudio de sus obras²⁹. Por todo esto, la manera en que la escuela histórica consideraba la ciencia jurídica resultaba digna de elogio, aunque no debía excluirse a la filosofía.

Con fecha 16 de julio de 1848 se dictó un reglamento para la Universidad de Génova, muy semejante al de Turín pero con algunos cambios. Para lo que nos interesa, la historia del derecho compartía curso con las instituciones de derecho romano. Un decreto de 9 de octubre de 1856 dictó nuevos reglamentos para Turín y Génova, en ambas la historia del derecho quedaba como una materia del primer año con cinco horas lectivas a la semana. Las universidades de Cagliari y Sassari fueron reordenadas por ley de 11 de mayo de 1850. También aquí aparecía un curso de historia del derecho.

En los años previos a la ley Casati, la cuestión de la instrucción y su reforma fue muy viva. Así, en 1851 se publicó una propuesta de reforma de la enseñanza y en concreto de la jurídica³⁰. Su autor dividía la facultad de derecho en tres carreras: jurídica, administrativa y diplomática. En la primera aparecía una asignatura denominada historia del derecho dividida en dos partes, cada una de un año de

²⁸ Muchas son las páginas que Albini dedica a la instrucción jurídica: a su historia desde Roma en adelante, al análisis comparado con otros países europeos, al método que se debía seguir para ello. Y proponía un plan de estudios ideal en el cual aparecía en primero una historia del derecho romano (*Storia esterna del diritto romano preceduta da una breve storia del diritto in generale*) y una historia civil y eclesiástica (*Storia civil ed ecclesiastica*), en segundo otro curso de la historia civil y eclesiástica y uno de historia del derecho (*Storia del diritto patrio*). Íd., *Saggio analitico*, cit., pp. 244-315. No faltaban reflexiones sobre los libros de textos: Íd., *Saggio analitico*, cit., pp. 316-326.

²⁹ Albini, *Saggio analitico*, cit., pp. 214 ss.

³⁰ A. Casati, *Delle nostre scuole di leggi. Osservazioni di —*, Torino, 1851; sobre todo pp. 51-72.

duración. En una se estudiaría la historia del derecho antiguo, es decir, del derecho romano; en la otra desde Justiniano hasta la promulgación de los códigos.

Provincias de Lombardía y Véneto

En 1850 el ministro austriaco von Thun ordenó una reforma del sistema universitario del Imperio, para acercarlo al régimen de libertad de estudio propio del modelo alemán. El nuevo plan de la facultad de derecho sustituía la enseñanza del derecho natural por la historia del derecho alemán, con ello se pretendía dar una formación conservadora y antirrevolucionaria, es decir, formar juristas leales. Uno de los mentores de estas ideas era George Phillips que fue nombrado catedrático de esta disciplina en la Universidad de Viena³¹.

La reforma fue aplicada gradualmente a las provincias de Lombardía y Véneto. El conde von Thun dispuso que en sus universidades se expusiera el desarrollo del derecho en Italia según los cánones de la escuela histórica alemana, pues no consideraba adecuada la manera como se enseñaba en otras universidades italianas. Los profesores debían ser originarios de territorios italianos pertenecientes al Imperio, hablar perfectamente italiano y alemán, formarse en escuelas alemanas y estar en condiciones de desarrollar una investigación de calidad.

Así, el gobierno austriaco creó en 1857 las cátedras de historia del derecho en las universidades de Pavía y Padua. Y en octubre del mismo año se nombraron los titulares: Gian Maria Bravo para Pavía³², Antonio Pertile para Padua³³. El nuevo plan de estudio de 6 de octubre de 1858 establecía dos semestres de Historia del derecho (*Storia del diritto*) en el segundo curso.

³¹ Francesco Calasso, *Il centenario*, cit. La documentación de esta reforma ha sido publicada: Hans Lentze, «L'insegnamento della storia del diritto nella riforma degli studi universitari promossa dal ministro austriaco von Thun e l'istituzione di una cattedra a Pavia e Padova», *Archivio storico lombardo*, serie 8, vol. 3 (1951-1952), pp. 291-306.

³² Ernesto Suardo, «Gian Maria Bravo primo titolare di storia del diritto italiano all'Università di Pavia», *Archivio storico lombardo*, serie 8, vol. 4 (1953), pp. 308-318.

³³ Sobre Pertile volveremos enseguida.

Estados pontificios

Ocho eran las universidades de los Estados del papa (Roma, Bolonia, Camerino, Perugia, Ferrara, Macerata, Fermo y Urbino)³⁴. Todas regidas por la Bula de León XII dada en 24 de agosto de 1824. La enseñanza del derecho se fundamentaba sobre todo en el derecho canónico y romano, no existía ningún curso de historia del derecho.

Durante el gobierno emiliano provisional de 1859 se dictó el reglamento Cipriani de 30 de septiembre. En el primer y segundo curso, de los cuatro que componían los estudios, aparecía una asignatura denominada Historia y filosofía del derecho.

Reino de las dos Sicilias

Cuatro eran las universidades del reino, tres insulares (Palermo, Catania y Mesina) y una en la península (Nápoles). Hay que esperar a la ley Imbriani de 16 febrero 1861 para encontrar una cátedra de historia del derecho en la Universidad de Nápoles.

En Sicilia, hubo una propuesta en 1850, pero no prosperó. Conocemos el parecer de la Universidad de Catania sobre esa fallida reforma. En lo concerniente a la historia del derecho se decía que esa cátedra no contribuiría a la mejora de los estudios pues su objeto constituía ya una parte inseparable y un elemento necesario para el desarrollo de las otras materias impartidas en la facultad. La enseñanza de esta disciplina por lo tanto no tuvo lugar hasta la implantación de la ley Casati en la isla³⁵.

La siguiente tabla puede facilitar una visión de conjunto de esta enseñanza antes de la ley Casati.

AÑO	CÁTEDRA	UNIVERSIDAD
1840	Istoria del diritto	Pisa
1840	Istituzioni di diritto romano e storia del diritto	Siena
1846	Enciclopedia e storia del diritto	Turín
1848	Istituzioni di diritto romano e storia del diritto	Génova
1850	Storia del diritto	Cagliari/Sassari
1857	Storia del diritto	Pavía/Padua

³⁴ Urbino fue creada en 1826.

³⁵ Vittoria Calabrò, *Istituzioni universitarie e insegnamento del diritto in Sicilia (1767-1885)*, Milano, 2002, pp. 229 ss.

Como se aprecia, los orígenes de esta enseñanza se caracterizan por su pluralidad. En ocasiones esta historia del derecho aparece unida a la del derecho romano, otras a la introducción al derecho —en ambos casos se ubica a comienzos del proceso formativo—. Cuando aparece de manera autónoma, puede situarse en los últimos años de la carrera, como auxilio al derecho patrio, o tras las instituciones de derecho romano, como continuación de su historia.

2. *De la ley Casati a la gran guerra*

El 13 de noviembre de 1859 se dictó la ley Casati (*Legge di riordinamento della pubblica Istruzione e del Personale insegnante*) para el reino de Cerdeña y Lombardía³⁶. Se trataba de un verdadero código de instrucción pública, pero —como sucedió en otros países, por ejemplo, en España— enseguida se vio sometida a una avalancha de reglamentos que la desvirtuaron por un lado y que hacen de la administración de la instrucción pública un terreno movedizo, sometido más a la personalidad del ministro de turno que a un plan orgánico y científico.

En esa ley se establecía las materias que no podían faltar en las enseñanzas de las distintas facultades (art. 51), a ellas cada universidad podía añadir otras y los alumnos podían ordenarlas según su parecer: optaba así por la libertad de estudio. Entre los cursos obligatorios para la facultad de derecho aparecía uno de historia del derecho (*Storia del diritto*).

El 20 de octubre de 1860 se dictó el reglamento de la ley, obra del ministro Mamiani. En el preámbulo o informe del ministro que precede al reglamento (*relazione*), se afirmaba que la verdadera ciencia consistía en analizar una por una todas las partes de un objeto y después reunir las y resumirlas en una síntesis final. Esta era,

³⁶ La ley Casati —debida al conde Gabrio Casati— nació para el reino de Cerdeña y, con el proceso de unificación, se convirtió en ley del Estado nacional, de manera que ordenó la instrucción pública italiana hasta la ley Gentile de 1923.

Para consultar la legislación posterior a la ley Casati resulta de mucha utilidad: Ilaria Porciani (ed.), *L'università italiana. Repertorio di atti e provvedimenti ufficiali. 1859-1914*, Firenze, 2001. Interesa: Gigliola Fioravanti y otros (ed.), *L'istruzione universitaria (1859-1915)*, Roma, 2000.

según el ministro, la misión de la historia del derecho, siempre que se enseñase con luces de alta filosofía y con el propósito de mostrar la interrelación de las ideas y los hechos. Por ello a su enseñanza se añadía la legislación comparada y la codificación. Al mismo tiempo, se estimaba que debía cesar el desorden que producía su ubicación en los primeros años de la carrera, cuando los estudiantes apenas tenían nociones jurídicas. Así, en cuarto y quinto año de la carrera se dispuso una *Storia del diritto, legislazione comparata e codificazione*, con una duración de cuatro semestres en total.

Aunque la ley Casati se había ido extendiendo progresivamente a los nuevos territorios, a medida que éstos se incorporaban al reino de Italia³⁷, el resultado no fue todo lo homogéneo que se quería. Para remediarlo, el ministro Matteucci evacuó una ley sobre tasas y un real decreto fechado el 14 de septiembre de 1862 que aprobaba el reglamento general de las universidades del reino y los de las distintas facultades.

Además de suprimir la libertad de estudio querida por la ley Casati, la nueva ordenación establecía dos licenciaturas en la facultad de derecho: una en ciencias jurídicas y otra en ciencias político-administrativas. En ambas existía una materia de primer año titulada *Introduzione generale alle scienze giuridiche e politico-amministrative, storia del diritto*. Se trataba de una enseñanza anual.

De esta manera la historia del derecho aparecía unida a la introducción y adquiría por ello un carácter propedéutico. Era una introducción histórica a las ciencias jurídicas, que compartía curso con la introducción teórica. La escasez de tiempo facilitaba que se limitase a una mera historia de las fuentes, sacrificando toda parte especial³⁸.

El reglamento Natoli (reglamento para la facultad de derecho), aprobado por decreto de 8 de octubre de 1865, unificaba de nuevo la licenciatura (*laurea*) en derecho. La historia del derecho aparecía en el primer año como *Introduzione allo studio delle Scienze giuridiche e Storia del Diritto*.

³⁷ Excepto la Universidad de Nápoles que se reguló por la ley Imbriani de 1861, como hemos visto.

³⁸ Pasquale Del Giudice, «La funzione e i limiti della storia del diritto nell'insegnamento accademico», *Atti del congresso internazionale di scienze storiche*, vol. 9, Roma, 1905, pp. 49-52.

En la *prolusione* al curso de la Universidad de Pavía, Pasquale Del Giudice explicaba el contenido de esta materia³⁹. La asignatura constaba de dos partes distintas: la introducción a las ciencias jurídicas y la historia del derecho. La primera era una exposición general y sintética sobre el derecho. Tenía por ello carácter propedéutico para el resto de las materias de la carrera pero también para la segunda parte del curso. En ésta se estudiaba la evolución del derecho italiano desde la caída del Imperio romano hasta la codificación.

El decreto Bargoni de 18 de noviembre de 1869, redujo a cuatro años los estudios de derecho. La reforma entró en vigor ese mismo curso 1869-1870. La precipitación de la decisión no permitió una reordenación de las materias: la solución adoptada fue reunir los dos primeros años en uno. Aunque el reglamento de 1865 establecía una duración de cinco años para los estudios de derecho, en la práctica algunas universidades sólo ofrecían cuatro años. De ahí que las universidades, en general, aplaudieron la reducción, pero criticaban algunas disfunciones que ocasionaba la concentración de primero y segundo en un solo año. Por ello el ministerio pidió al consejo superior de instrucción pública su parecer para establecer un nuevo orden de las materias⁴⁰.

³⁹ Pasquale Del Giudice, *Sul concetto storico del diritto. Prolusione al corso d'Introduzione allo studio delle scienze giuridiche e Storia del diritto letta nella Università di Pavia il 7 febbraio 1873*, ahora en *Id., Nuovi studi di storia e diritto*, Milano, 1913, pp. 1-10.

⁴⁰ «Sulla distribuzione degli insegnamenti nella facoltà di giurisprudenza. Relazione al Consiglio superiore della pubblica istruzione dei consiglieri Messedaglia e Giorgini in adunanza del 13 ottobre 1870», *Archivio giuridico*, 6 (1870), pp. 209-229. El informe o relación no entraba en consideraciones mayores sobre lo que se llamaba en Alemania libertad de aprendizaje o de método, es decir, la libertad del estudiante para regular por sí el orden de sus propios estudios. Aunque de manera indirecta apostaba por ella: para muchos —decía— éste es el único sistema racional, ya que se adecua a la diversidad de cada uno. Por otro lado apuntaba que a la hora de hacer la distribución de materias era difícil llegar a una solución única, y denunciaba el problema de las asignaturas divididas en varios cursos: era mejor aumentar el número de horas semanales y reducir las a un solo curso. Aunque en el título se indica que la relación es de los consejeros Messedaglia y Giorgini, ésta aparece firmada sólo por el primero, de ahí que me refiera en general al informe Messedaglia.

Para lo que interesa en esta sede, el consejo —es decir, el consejero ponente: Angelo Messedaglia, profesor de economía política en Padua— reflexionaba sobre la naturaleza compuesta del curso de *Introduzione allo studio delle scienze giuridiche e Storia del diritto*. Y estimaba que las dos partes resultaban difíciles de coordinar, siempre que a la historia del derecho se le dotase de toda su importancia científica, y no se la concibiese como una materia subordinada, como sucedía con frecuencia en los tratados de introducción.

En una facultad de derecho —decía— la historia del derecho debía ocuparse del estudio del periodo cronológico que corre entre la caída del Imperio romano de occidente y el derecho de los códigos, es decir, el que surge con la revolución francesa. Así, el objeto propio de la disciplina sería el «Medio Evo giuridico», es decir, los derechos históricos intermedios entre el derecho romano y el moderno; y debe dedicarse a explicar la formación del derecho moderno para su mejor comprensión y valoración.

Por ello, proponía la separación de la historia del derecho de la introducción, de manera que aquella tornase a su originaria integridad, que había sido violentada por el reglamento de 1865⁴¹. Así se cuidaría mejor su estudio, pues al haberse agregado la historia a la introducción algunos profesores de esta materia se habían desorientado y esto hacía que no abundasen los buenos historiadores del derecho. Así concebida, desde un punto de vista científico, la disciplina de historia del derecho debía ocupar el segundo curso, después de haber estudiado los alumnos en primero las instituciones de derecho romano, que comprendían su historia.

El reglamento Bonghi (especial para la facultad de derecho), aprobado por decreto de 11 de octubre de 1875, recogía en parte estas exigencias. Entre las materias de facultad (art. 3), establecía una historia del derecho (*Storia del diritto*), y disponía el contenido de su enseñanza (art. 4): en el curso de historia del derecho se debía exponer la historia del derecho en Italia desde la caída del Imperio romano de occidente hasta los códigos modernos. El derecho canónico tratado históricamente formaba parte de este curso; la historia del derecho romano, hasta Justiniano, pertenecía a uno de los cursos de derecho romano (*Istituzioni di diritto romano*).

⁴¹ Messedaglia habla del reglamento de 1865, pero en realidad la «integridad» había sido violentada desde el principio, desde el reglamento Mamiani de 1860.

Con la separación de la introducción y la historia del derecho, ésta abandonaba su función propedéutica y aumentaba de hecho su duración. De esta manera podía dedicarse a su finalidad científica, es decir, a mostrar la evolución del derecho⁴².

Otras partes de esta regulación fueron criticadas. De ahí que el ministro encargase a una nueva comisión el estudio del reglamento de la facultad de derecho, el relator fue Francesco Schupfer⁴³. Dos aspectos eran considerados preliminarmente: la falta de autonomía de la universidad y la orientación profesional y no científica de los estudios. En ambos, el reglamento se había separado de la ley Casati. Se aplaudía, por el contrario, salvo alguna excepción, el plan de materias y la libertad de estudio. No hay ninguna novedad sobre la historia del derecho: «Nel corso di storia del diritto è esposta la storia del diritto in Italia dalla caduta dell'Imperio Romano di occidente fino ai moderni codici». Schupfer estimaba superflua la referencia al derecho canónico pues, en su opinión, era obvio que la historia del derecho debía ocuparse también de él.

Por decreto de 8 de octubre de 1876 se aprobó el reglamento de los estudios universitarios del reino, y los reglamentos especiales de las facultades y de las escuelas, dispuestos por el ministro Coppino. Entre las materias de la facultad de derecho se establecía una historia del derecho (*Storia del diritto*) con el mismo contenido que en 1875, menos lo referente al derecho canónico, al existir ahora un curso específico para esa materia: «Nel corso di storia del diritto è esposta principalmente la storia del diritto in Italia dalla caduta dell'Imperio Romano di Occidente fino ai moderni codici.— Nel corso di diritto canonico si espone la storia e la dottrina dell'ordinamento [...]».

El reglamento Coppino, aprobado por decreto de 22 de octubre de 1885, añadió al elenco de materias obligatorias un curso de historia del derecho romano. La historia del derecho aparecía como un curso bienal con la siguiente denominación: *Storia del diritto italiano, dalle invasioni barbariche ai giorni nostri*. En el preámbulo se justificaba la duración del curso por la vastedad de la materia y su papel fundamental para todas las disciplinas jurídicas.

⁴² Pasquale Del Giudice, *La funzione*, cit.

⁴³ «Relazione a S. E. il ministro della Pubblica istruzione della commissione speciale incaricata dello studio del regolamento della facoltà di giurisprudenza», *Archivio giuridico*, 18 (1877), pp. 38-66. El informe está fechado el 28 de julio de 1876.

Questo corso comprende la storia del diritto pubblico e privato (costituzionale, amministrativo, civile, penale e giudiziario) d'Italia per lo spazio di quasi 14 secoli, con un materiale immenso e varie fonti e forme di sviluppo e condizioni di studio, che non può essere costretto in limiti troppo angusti, se vuol servire a qualche cosa, e crediamo possa servire a molto, trattandosi di un insegnamento di cultura generale, che per l'indole sua si collega a quello di tutte le altre discipline giuridiche e politiche, e n'è quasi il fondamento.

El reglamento Nasi, aprobado por decreto de 13 de marzo de 1902, dividió el estudio del derecho en dos bienios. Aunque el ministro estaba persuadido de la necesidad de separar la enseñanza científica de la profesional, y la del derecho privado del público, en la práctica estas ideas sólo aparecían en el preámbulo del decreto. El reglamento suprimió la obligatoriedad de la historia del derecho romano. La *Storia del diritto italiano* —un curso situado en el primer bienio y ahora llamado sólo así— continuaba siendo obligatoria para todos. Esta reducción y la inexistencia de materias históricas en el segundo bienio, motivaron distintas quejas⁴⁴.

Parece que el malestar que ocasionó el reglamento provocó la aprobación por decreto de 26 de octubre de 1903 de uno nuevo, debido también a Nasi. En él reaparece la historia del derecho romano.

El reglamento Boselli —aprobado por decreto de 17 de mayo de 1906— establecía dieciocho materias obligatorias para todas las facultades de derecho. Entre ellas aparecía un curso bienal de historia del derecho (*Storia del diritto italiano*) y otro de historia del derecho romano. Cada facultad podía añadir nuevos cursos así como establecer el orden de los estudios, aunque los estudiantes podían variar este orden salvo en las materias propedéuticas. El reglamento señalaba esas excepciones, así, la inscripción al curso de historia del derecho romano debía preceder al de historia del derecho italiano.

El 9 de agosto de 1910, mediante distintos decretos obra del ministro Credaro, se aprobaron el texto único de las leyes de instrucción superior, el reglamento universitario y los reglamentos especiales de facultad. El texto único establecía cuáles eran las uni-

⁴⁴ Arrigo Solmi, «La funzione pratica della storia del diritto italiano», *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 35 (1903), pp. 250-291; en concreto pp. 287 ss.

versidades italianas, las facultades existentes, así como las materias fundamentales de cada una (art. 15): dieciocho eran las jurídicas, entre las cuales se incluía la historia del derecho. El reglamento para la facultad de derecho señalaba que el curso de *Storia del diritto italiano* era bienal, y que debía cursarse después de la *Storia del diritto romano*. Como en el reglamento precedente, la facultad proponía y publicaba el orden de los estudios, pero después cada alumno era libre de variarlo con ciertas excepciones (como la ya señalada referida a la historia del derecho). Junto a las materias denominadas fundamentales podían establecerse otras complementarias.

La siguiente tabla puede facilitar una visión de conjunto de esta enseñanza desde la ley Casati.

AÑO	CÁTEDRA
1859	Storia del diritto
1860	Storia del diritto, legislazione comparata e codificazione
1862	Introduzione generale alle scienze giuridiche e politico-amministrative, storia del diritto
1865	Introduzione allo studio delle scienze giuridiche e storia de diritto
1875	Storia del diritto
1876	Storia del diritto
1885	Storia del diritto italiano, dalle invasioni barbariche ai giorni nostri
1902	Storia del diritto italiano
1903	Storia del diritto italiano
1906	Storia del diritto italiano
1910	Storia del diritto italiano

La ley Casati incluía la historia del derecho entre las materias fundamentales de la facultad de derecho, su reglamento —el reglamento Mamiani de 1860— le daba un valor de síntesis y la ubicaba al final del itinerario formativo con cuatro semestres junto a la legislación comparada y a la codificación. El reglamento Matteucci de 1862 le daba carácter propedéutico: la situaba en el primer año de la carrera unida a una introducción. Una nueva orientación encontramos en el reglamento Bonghi de 1875: devuelve su integridad a la materia, es decir, la concibe como una enseñanza autónoma y, al mismo tiempo, fija su contenido. En fin el reglamento Coppino de 1885 crea una cátedra de historia del derecho romano y convierte

en bienal la historia del derecho italiano: la orientación historicista adquiere así su máxima extensión. Si 1875 puede considerarse como un año de inflexión, 1885 puede calificarse de culminación.

Como ejemplo, en apéndice puede observarse el desarrollo de la enseñanza de la historia del derecho en la Universidad de Siena⁴⁵.

3. *El contenido de la enseñanza: temas de estudio y primeros manuales*

Ya hemos visto que en 1840 con la creación de la primera cátedra podemos datar el nacimiento de una historia del derecho italiano como ciencia dedicada a estudiar los orígenes y transformaciones del derecho en Italia. Ese mismo año se publicó el primer volumen del libro de Federigo Sclopis. Con Antonio Pertile, la disciplina conoció una refundación en la estela de la escuela histórica alemana, que estuvo ayudada por la reforma de los planes de estudio y por su evolución propia⁴⁶.

Los primeros historiadores del derecho italiano tuvieron que enfrentarse al estudio y publicación de las fuentes. Numerosos eruditos de los siglos XVII y XVIII, junto a distintos historiadores y juristas de la primera mitad del XIX, ya se habían dedicado a esto, pero las ediciones críticas elaboradas en Alemania establecían criterios más rigurosos que debían asumirse. La figura de Augusto Gaudenzi (1857-1916) destaca en esta tarea⁴⁷. Junto al interés por los textos legales aparece el estudio de los documentos medievales, también aquí siguiendo los nuevos métodos de la diplomática desarrollados en Alemania.

Cuando Sclopis y Pertile comenzaron sus investigaciones sobre

⁴⁵ Sería necesario analizar en cada una de las universidades cómo se desarrolló esta disciplina, sólo ofrezco por ahora un ejemplo limitado a la cronología que me permite indagar la fuente utilizada.

⁴⁶ Una aproximación al desarrollo de la disciplina, que me ha servido para concretar estos apuntes puede encontrarse en Arrigo Solmi, *La storia del diritto italiano*, cit., pp. 7 ss. y en Enrico Besta, *Avviamento*, cit., pp. 139 ss.

⁴⁷ Sobre Gaudenzi véase: Francesco Brandileone, «Commemorazione di Augusto Gaudenzi», *Rendiconto delle sessioni dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Bologna, 1917.

las instituciones públicas contaban ya con la ayuda de los estudios realizados por historiadores en la primera mitad del siglo XIX. Aunque de nuevo se enfrentaron a la renovación del método.

Puede observarse una especial preferencia por el estudio de las instituciones privadas. Un territorio reservado a los juristas que hasta la mitad del siglo apenas había sido tratado. Hasta ese momento los estudios se habían dedicado sobre todo al derecho romano. La escuela germanista, sin embargo, se ocupó de reconstruir metódicamente las instituciones primitivas de los pueblos germanos, de manera que al cuerpo del derecho romano se contrapuso el cuerpo del derecho germano. Tarea a la que se dedicaron Pertile, Schupfer y Nani entre otros. Tampoco faltaron numerosos estudios sobre el derecho privado posterior: el estatutario, la doctrina de los juristas y la codificación. Así como otros referidos al derecho penal y procesal.

Estos historiadores se enfrentaron en fin con el florecer de la historia económica, intentando clarificar la historia de las instituciones jurídicas mediante el examen de las condiciones económicas y sociales de un periodo histórico. En esta dirección —que progresó rápidamente en el último tercio del siglo XIX y en la que confluyen juristas y economistas— sobresale la figura de Salvioli.

*

Federigo Sclopis (1798-1878) fue el protagonista de la primera etapa de la historia del derecho italiano, de ahí que con frecuencia aparezca como el fundador de la nueva ciencia. En 1840 comenzó a publicar su historia de la legislación italiana⁴⁸. Dividida en tres volúmenes⁴⁹, anunciaba otro dedicado al estado actual de la legislación italiana que no vio la luz hasta la que podemos denominar

⁴⁸ Federigo Sclopis, *Storia della legislazione italiana*, 3 vols., Torino, 1840-1857. Apareció en la colección *Raccolta di opere utili ad ogni persona educata* dirigida por Giuseppe Pomba. Existe una edición napolitana (1845) de los volúmenes 1 y 2. Y una nueva edición de la obra completa: 3 vols. en 5 tomos, Torino, 1863-1864. Con anterioridad había publicado *Storia della antica legislazione del Piemonte*, Torino, 1833.

⁴⁹ Vol. 1, *Origini*, Torino, 1840; Vol. 2, *Progressi*, Torino, 1844; Vol. 3, *Progressi*, Torino, 1857.

segunda edición de la obra⁵⁰.

Se trataba, en esencia, de lo que denominamos una historia externa del derecho⁵¹. El autor se propuso trazar un esbozo que sirviese de referencia para quien quisiera contemplar el panorama del desarrollo de la legislación patria italiana. De ahí la atención que prestaba a las fuentes, y que acudiese al pasado para ilustrar el presente. Desde esta perspectiva, la narración partía de los orígenes y elementos (romano, bárbaro, canónico) que informaron la alta edad media, para después analizar los progresos acaecidos en la época municipal, de las dominaciones extranjeras y en la contemporánea. El mérito de la obra estaba precisamente en esto, en mostrar un cuadro de las fases de desarrollo del derecho italiano, con la convicción de que «la Storia ci disvela i segreti fondamenti delle costituzioni dei popoli»⁵². Por eso no quiso dedicarse a exponer las distintas leyes que gobernaron los distintos pueblos de la península, sino señalar los principales caracteres de los ordenamientos civiles, indicar el ligamen común existente entre los distintos estatutos, la configuración de la sociedad.

*

El desarrollo del método histórico-jurídico que se produjo en Alemania requería una puesta al día por parte de la historia del derecho italiano; fue la tarea que asumió Antonio Pertile (1830-1895)⁵³. Siguiendo la estela de Sclopis diseñó una monumental historia del derecho italiano en la que, junto a las fuentes, estudió sistemáticamente las instituciones: su publicación comenzó en 1871 y ocupó

⁵⁰ Vol. 1, *Origini*, Torino, 1863; Vols. 2-1 y 2-2, *Progressi*, Torino, 1863; Vols. 3-1 y 3-2, *Dall'epoca della rivoluzione francese, 1789 a quella delle riforme italiane, 1847*, Torino, 1864.

⁵¹ Aunque el autor indicaba que no estaba de acuerdo con la división que parte de Gottfried Wilhelm Leibniz (*Nova methodus discendae docendaeque iurisprudentiae ex artis didacticae principiis*, part. II § 29-30) entre historia interna y externa afirmaba que le interesaba lo que se entiende por esta última. Ya que su finalidad no era escribir toda una historia del derecho italiano, sino preparar el camino para tan gran empresa.

⁵² Vol. 2, *Progressi*, p. vi.

⁵³ Tamassia, *Commemorazione del professore Antonio Pertile*, Padova, 1895, ahora en *Id, Scritti di storia giuridica*, I, Padova, 1964, pp. 685-701.

siete tomos en su primera edición⁵⁴. El autor murió cuando estaba en curso una segunda edición⁵⁵.

Pertile —tomando como modelo la historia de Walter (1794-1879)⁵⁶— se propuso con su obra trazar el esquema y poner las bases de la historia del derecho italiano, y puede afirmarse que lo hizo: durante mucho tiempo su obra fue considerada el esqueleto de la disciplina. Estaba construida sobre el resultado de sus estudios: esto puede considerarse su principal virtud, ya que acudió directamente a las fuentes y mostraba así noticias de primera mano, pero también el punto débil que aprovechó la crítica pues la vastedad de la empresa hacía que existiesen algunas generalizaciones, que no todas las partes estuviesen igualmente tratadas y que incluyese un inmenso aparato crítico que no la hacía adecuada para un

⁵⁴ Antonio Pertile, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, 6 vols., Padova, 1871-1887 (Vol. 1, *Storia del diritto pubblico e delle fonti*, Padova, 1873; Vol. 2-1, *Storia del diritto pubblico e delle fonti*, Padova, 1880; Vol. 2-2, *Storia del diritto pubblico e delle fonti*, Padova, 1882; Vol. 3, *Storia del diritto privato*, Padova, 1871; Vol. 4, *Storia del diritto privato*, Padova, 1874; Vol. 5, *Storia del diritto penale*, Padova, 1876; Vol. 6, *Storia della procedura*, Padova, 1887). Con anterioridad había publicado unas *Note di storia del diritto*.

⁵⁵ Antonio Pertile, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, 2.^a edición, 8 tomos + 1 tomo índice, Torino, 1892-1903 (Vol. 1, *Storia del diritto pubblico e delle fonti*, Torino, 1896; Vol. 2-1, *Storia del diritto pubblico e delle fonti*, ed. de Pasquale Del Giudice, Torino, 1897; Vol. 2-2, *Storia del diritto pubblico e delle fonti*, ed. de Pasquale Del Giudice, Torino, 1898; Vol. 3, *Storia del diritto privato*, Torino 1894; Vol. 4, *Storia del diritto privato*, Torino 1893; Vol. 5, *Storia del diritto penale*, Torino 1892; Vol. 6-1, *Storia della procedura*, ed. de Pasquale Del Giudice, Torino, 1900; Vol. 6-2, *Storia della procedura*, ed. de Pasquale Del Giudice, Torino, 1902; *Indice alfabetico-analitico*, elaborado por Ludovico Eusebio, Torino, 1903).

El autor pensaba que la primera edición ya había logrado sus objetivos, por ello, no modificaba el plan de la obra y se limitaba fundamentalmente a incluir mediante llamadas las novedades bibliográficas. A su muerte estaba en prensa la segunda edición del vol. 1 y se habían publicado los volúmenes 3, 4 y 5. La familia encargó la revisión de los otros volúmenes a Pasquale Del Giudice que utilizó para ello las notas dejadas por el autor y puso al día la bibliografía.

⁵⁶ Ferdinand Walter, *Deutsche Rechtsgeschichte*, 2.^a ed., 2. vols., Bonn, 1857.

uso didáctico⁵⁷.

Cuando publicó su primer volumen, en 1871, ya llevaba muchos años enseñando y algunas de sus ideas y esquemas de trabajo se habían hecho comunes. De ahí que en el tratado reivindicase también su autoría pues —como manifestaba— en ocasiones al defender una postura propia parecía que estaba plagiando.

Con su obra intentaba mostrar a un mayor número de estudiosos que los que frecuentaban su cátedra la importancia del método histórico para el estudio del derecho vigente, y como debía organizarse la enseñanza de la historia del derecho para que fuese eficiente.

En su opinión, la historia del derecho debía servir para perfeccionar el sistema legislativo italiano, de manera que no se copiase el derecho de una u otra provincia (en un momento en que la unificación italiana era tan reciente) sino lo que era común a la generalidad del país, siguiendo así las tradiciones patrias y no copiando del extranjero. Tenía por lo tanto una finalidad práctica: servía para preparar el estudio del derecho, para la recta inteligencia y aplicación del mismo; pues éste era concebido como fruto de una evolución de siglos⁵⁸.

La obra de Sclopis permitía penetrar en la globalidad de la vida jurídica de los italianos, observar su evolución, los atrasos y los progresos, junto a las causas que los originaron: acercándose con igual amor —decía Pertile— a los tiempos nuevos y antiguos, en los que se encontraban las raíces de las instituciones posteriores, y relucía más puro el carácter nacional del derecho italiano. Pero, para que esa historia llegase a tener resultados prácticos de gran relevancia era necesario no limitarse al derecho público, sino analizar también

⁵⁷ Sobre la finalidad y método de la obra escribió en el vol. 1, *Storia del diritto pubblico e delle fonti*, Padova, 1873. Una valoración crítica fue publicada en *Nuova antologia*, 16, p. 738; que fue contestada por Antonio Rinaldi: *Archivio giuridico*, 26 (1881), pp. 450 ss.

⁵⁸ Sobre este argumento reflexionó en varias ocasiones, así: Antonio Pertile, *Un esempio della pratica applicabilità degli insegnamenti della storia del diritto*, Padova, 1886 [= Memoria letta alla r. accademia di scienze, lettere ed arti in Padova nella tornata del 30 maggio 1886, ed inserita nel volumen II, disp. III, degli Atti e memorie]; Íd., *Appendice alla lettura 30 maggio 1886 sulla pratica importanza degli insegnamenti della storia del diritto*, Padova, 1888 [= Memoria letta alla academia di scienze, lettere ed arti in Padova nella tornata del giorno 8 gennaio 1888 ed inserita nel vol. IV, disp. 1 degli Atti e memorie].

el privado y el penal, y no considerar solo su movimiento general, sino seguir paso a paso la suerte de cada institución concreta.

Esta fue la tarea que Pertile se propuso desde que en 1857 se le confió la tarea de introducir la enseñanza de la historia del derecho en esta universidad. Para ello —decía— interrogó las fuentes sin apasionamiento, sin una idea preconcebida, sin manipularlas por razón de novedad, escuela o ambición nacional. Siguió el método de los autores alemanes y con frecuencia llegó a sus mismas conclusiones, pero a través de una vía independiente y con medios distintos, es decir, a través de los materiales italianos.

Como en Alemania, comenzaba su exposición con la caída del imperio romano de occidente. Para Pertile, las más antiguas costumbres italianas parten del derecho romano, y la historia de este derecho —por su importancia— cuenta con una materia independiente. La lucha entre el elemento germánico y el romano resumía su desarrollo.

Dividía la materia en historia externa e interna. La primera es historia de las fuentes, la segunda es historia de las instituciones (de derecho público, privado, penal y procesal). La historia de las fuentes y la del derecho público eran divididas según la historia civil: antigua (bárbaros e imperio carolingio), media (feudal y municipal) y moderna⁵⁹.

*

En 1890 apareció la primera edición del manual de Giuseppe Salvioli (1857-1928) que se autopresentaba como «il primo *Manuale di storia del diritto italiano*»⁶⁰. El autor defendía que ninguna obra de este tipo existía hasta ese momento, y que era necesaria para que

⁵⁹ Un agudo análisis de los distintos criterios de división de la historia del derecho italiano fue realizado por Benvenuto Pitzorno, «Elaborazione scientifica della storia del diritto italiano», *Temi Emiliana*, 6 (1928), utilizó una separata con paginación propia.

⁶⁰ Giuseppe Salvioli, *Manuale di storia del diritto italiano. Dalle invasioni germaniche ai nostri giorni*, Torino, 1890. En sucesivas ediciones pasó a denominarse *Trattato* o simplemente *Storia*. Sobre Salvioli interesan: Pietro Costa, «Il solidarismo giuridico di Giuseppe Salvioli», *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 3-4 (1974-1975), I, pp. 457-494; y Bartolomé Clavero, «Estudio preliminar», en Giuseppe Salvioli, *El derecho civil y el proletariado*, Sevilla, 1979, pp. 9-44.

los jóvenes se enamorasen de la ciencia y se familiarizasen con ella. Por eso quería sintetizar los conocimientos que se tenían sobre la historia del derecho italiano, de manera que apareciesen las grandes líneas, las claves de evolución de las instituciones, difundiendo así el método histórico en las reconstrucciones del derecho.

En el *Archivio giuridico* fue reseñado por Alberto Del Vecchio⁶¹, que se felicitaba por la aparición de este primer manual de historia del derecho italiano. Hasta ese momento —afirmaba— no sabía que libro aconsejar a sus alumnos: descartaba el libro de Forti, que consideraba incompleto y anticuado; el pequeño compendio de Albin, que calificaba de demasiado superficial; la historia de Sclopis, que sólo pretendía mostrar un cuadro general, es decir, no trataba de las instituciones; tampoco estimaba los escritos de Bovio⁶² o Busacca⁶³. Juzgaba la obra de Pertile de indispensable para los especialistas pero inadecuada para los alumnos. Si consideramos las muchas ediciones del libro de Salvioli (la novena es de 1930) podemos concluir que la esperanza que suscitó su aparición no fue vana.

En la tercera edición (Torino, 1899), el autor se esforzó por dar la debida importancia a las relaciones económicas —es decir, a las formas de producción y a la distribución de la riqueza— de manera que los hechos jurídicos no apareciesen aislados, sino unidos a la constitución económica. Se adscribía por lo tanto a la concepción materialista de la historia del derecho

4. *Una nueva concepción del derecho*

Por obra de Berthold Georg Niebuhr el conocimiento histórico en la primera mitad del siglo XIX dejó su puesto de materia auxiliar de la filosofía y pasó a representar la vida y el pensamiento de un pueblo. Las distintas ciencias que tenían un objeto histórico adquirieron así un nuevo vigor⁶⁴.

El método histórico —que fue aplicado a la ciencia jurídica prin-

⁶¹ *Archivio giuridico*, 45 (1890), p. 273.

⁶² Giovanni Bovio, *Sommario della storia del diritto in Italia dall'origine di Roma ai tempi nostri*, Napoli, 1883.

⁶³ Antonino Busacca, *Storia della legislazione italiana: dai primi tempi fino all'epoca nostra*, Messina, 1883.

⁶⁴ Pasquale Del Giudice, *Sul concetto storico del diritto*, cit.

cialmente por Hugo y Savigny— supuso una verdadera renovación del método de estudio y del concepto del derecho. Gracias a él dejó de ser considerado una realidad apriorística para entenderse como manifestación espontánea de la vida de los pueblos.

Para apreciar su influencia, Salvioli propuso situarse a comienzos del siglo XIX y así comparar la ciencia jurídica anterior y posterior al nacimiento de esta escuela⁶⁵. En su opinión, antes sólo se tenían sobre el derecho conceptos teóricos: su historia era considerada como una manifestación de ideas eternas e inmutables. Estas especulaciones establecían categorías ideológicas a las que la historia debía adaptarse. La historia del derecho era concebida por ello como esclava de las concepciones teleológicas. Lo que rebasaba esos conceptos sólo interesaba a eruditos que se afanaban en recopilar datos.

Frente a esta tendencia, alejándose de las críticas de Kant y Hegel, la escuela histórica tomó postura. El derecho no existe, dijo Savigny, existen distintos derechos, cada nación tiene el suyo que es manifestación del espíritu nacional. Se trataba de una visión opuesta a la pretensión de Portalis que quería ordenar la sociedad con su voluntad, como si bastase querer para poder y decretar para realizar. Por el contrario, había que considerar la ley de la continuidad: el derecho muestra la fuerza del tiempo, la experiencia acumulada de generaciones.

Desde su comienzo esta escuela tuvo distintos representantes repartidos por Italia, sobre todo en Toscana, seguramente por ello fueron las universidades de Pisa y Siena las primeras en dotarse con una cátedra de historia del derecho⁶⁶. Pero fue en la segunda mitad del siglo XIX cuando sus «beneficios» se hicieron sentir con fuer-

⁶⁵ Giuseppe Salvioli, «La nuova fase della storia del diritto», *Rivista di storia e filosofia del diritto*, 1 (1897), pp. 3-8. Este primer número de la revista aparece precedido de un *Programma* en el que se indican los motivos de la publicación: la historia y la filosofía del derecho eran las únicas disciplinas jurídicas que carecían de una revista propia, y sin embargo se trataba de dos materias importantes e incluso fundamentales, con numerosos y valiosos especialistas italianos. Este primer artículo firmado por Salvioli, uno de los codirectores de la publicación (el otro era Giuseppe D'Aguanno), muestra con nitidez la finalidad de este periódico.

⁶⁶ Laura Moscati, *Italianische reise. Savigny e la scienza giuridica della restaurazione*, Roma, 2000.

za⁶⁷.

En efecto, en este momento el método positivo propio del campo de las ciencias naturales inundó las ciencias morales, sociales y jurídicas, y contribuyó a sustituir en ellas la idea por el hecho, la deducción por la inducción. De forma que el método experimental o de observación se convirtió en el propio de la historia, de la «ciencia» histórica⁶⁸.

Este nuevo método hizo comprender que el derecho no era una ciencia teórica, sino un proceso orgánico y natural que crece y se desarrolla como los idiomas, las religiones y la literatura —decía Salvioli—. El derecho no surgió como Diana de la cabeza de Júpiter, no es una norma absoluta o una institución genérica, sino un organismo producto de una serie de hechos y de experimentos, ligado a la sociedad, a los usos, a las costumbres, a la misma constitución de cada nación, a los lugares: carece por ello de una existencia aislada e independiente.

Así, con el derecho sucedió lo que ya se había verificado en la reconstrucción de otras realidades sociales, es decir, que la historia fue declarada el único campo de investigación metódica y que la jurisprudencia fue considerada como una ciencia específicamente histórica⁶⁹. Gracias a la historia por lo tanto el derecho se convirtió en ciencia positiva. Desde entonces la historia del derecho dejó de considerarse un instrumento auxiliar para convertirse en base del derecho, en parte orgánica de una ciencia social universal: este historicismo dio lugar al derecho comparado y a la etnología, hizo progresar la ciencia económica y favoreció el nacimiento de la sociología.

Entendámoslo bien, no se trataba sólo de una cuestión episte-

⁶⁷ También en la segunda mitad del siglo las universidades toscanas fueron fermento de este historicismo. Cabe resaltar la constitución en 1877 del seminario histórico-jurídico de Pisa. En su programa se afirmaba que para el progreso de la cultura jurídica nacional era necesario el estudio del derecho según el método histórico. *Archivio giuridico*, 18 (1877), pp. 560 ss.

⁶⁸ Giuseppe Salvioli, «Il metodo storico nello studio del diritto civile italiano. Prolusione al corso di storia del diritto nell'Università di Palermo», *Il circolo giuridico. Rivista di legislazione e giurisprudenza*, 16 (1885), pp. 83-105.

⁶⁹ T. Cuturi, «Delle recenti discussioni sul metodo nello studio del diritto civile italiano», *Archivio giuridico*, 39 (1887), pp. 269-309.

mológica. Como subrayó Besta, el mejor correctivo contra las «peligrosas» construcciones arbitrarias inventadas por especuladores sobre bases racionalistas era la historia del derecho⁷⁰. Esta revolución jurídica estaba en la base de las doctrinas del Estado liberal de derecho, que se construyó como antídoto frente a la inestabilidad revolucionaria que había sufrido Europa en el periodo 1789-1848.

A finales del siglo XIX afloraron grandes novedades en el campo jurídico que, en síntesis, han sido descritas como el abandono de las verdades liberales posunitarias y la emersión de la cultura totalitaria. Pero, como se ha señalado recientemente, deben individualizarse muchos matices en torno a este esquema⁷¹.

Así, Salvioli subrayó los defectos que debilitaron a la escuela histórica y, en parte, destruyeron su eficacia práctica. Cuando se afirmaba que el derecho nace espontáneamente de la conciencia popular no se aportaba ninguna explicación científica: ¿cómo surge y se determina esta conciencia? Las metáforas usadas por sus protagonistas no resolvían los problemas. De esta manera no se construía sobre datos de la experiencia, sino sobre apriorismos⁷². Este era el reto de la historia del derecho. La experiencia acumulada por ella debía servir para la construcción científica del derecho, en concu-

⁷⁰ Enrico Besta, *Avviamento*, cit., p. 1.

⁷¹ Massimo Meccarelli, «Un senso moderno di legalità. Il diritto e la sua evoluzione nel pensiero di Biagio Brugi», *Quaderni fiorentini*, 30-1 (2001), pp. 361-476.

⁷² Investigar sólo para mostrar era poco satisfactorio, pensaba Salvioli: así fue el pasado, pero ¿por qué? A esta pregunta debían seguir nuevas investigaciones, no falsas respuestas como invocar el espíritu del pueblo. Describir no podía ser un pretexto para no explicar. La historia del derecho sólo adquiere valor de ciencia cuando procede con método positivo, es decir, cuando se fundamenta en datos de la experiencia, cuando no da nada por supuesto y entre la multitud de los datos sabe encontrar las leyes que gobiernan el derecho y la vida social. A estos resultados no se llegaba hablando de la sicología de los pueblos (Lazarus) o del egoísmo de los individuos (Ihering): para que una investigación fuera fructífera no se podía aislar el derecho de la realidad, sino que había que relacionarlo —fundamentalmente— con su base económica, y así descubrir el origen y las causas del derecho. Del Giudice (*Studi di storia*, cit., p. 157) señalaba —por su parte— cómo a lo largo del siglo XIX se había prestado atención sobre todo al derecho privado: era necesario —decía— fijarse en el derecho público y en la íntima relación entre las disciplinas sociales y jurídicas.

rrencia con la filosofía⁷³.

En la práctica la escuela histórica era adversaria declarada de cualquier novedad que no viniese fundamentada en el pasado. Savigny invocó su doctrina para rechazar la posibilidad de instituir un nuevo sistema jurídico. Si el derecho natural había sido revolucionario, la escuela histórica fue en general conservadora. Aunque —como agudamente matizó Besta— si por su espíritu conservador podía parecer casi una aliada de la reacción, al estimular los distintos nacionalismos podía convertirse en fermento de novedades⁷⁴.

5. *El elemento italiano o la nación*

A finales del siglo XIX la historia del derecho italiano aparecía —lo hemos visto— como una disciplina consolidada, desde el punto de vista académico y científico. Puede afirmarse que en ese momento era, después de la alemana, la escuela más importante.

Por influencia de Alemania, precisamente, había dado una gran importancia al elemento germánico en el desarrollo del derecho italiano⁷⁵. En parte se debía a una cuestión meramente académica: el derecho romano y su historia pertenecían a otra materia, a los romanistas. Así, el derecho germánico aparecía como la base del derecho italiano, y por ello generalmente los manuales de esta dis-

⁷³ Pasquale Del Giudice, *Sul concetto storico del diritto*, cit.

⁷⁴ Enrico Besta, *Avviamento*, cit., p. 139.

⁷⁵ Fue Schupfer el máximo defensor de la influencia del elemento germánico en el derecho italiano, paradigmática es su obra *Il diritto privato dei popoli germanici con speciale riguardo all'Italia*, Città di Castello, 1907-1909. Su discípulo Nino (Giovanni) Tamassia se hizo eco en un primer momento de esas teorías: Íd., *L'elemento germanico nella storia del diritto italiano. Prolusione al corso di storia del diritto italiano*, Bologna, 1887; ahora en Íd., *Scritti di storia giuridica*, I, Padova, 1964, pp. 1-14. Como Tamassia puso de manifiesto, ya Vico y Muratori llamaron la atención sobre el desarrollo continuo de las instituciones y, por ello, sobre la necesidad de estudiar el derecho bárbaro para comprender la historia del nuevo pueblo italiano. La escuela histórica que surgió de la oposición alemana a las armas y a las leyes francesas fomentó el orgullo nacional de estudiar un derecho propio. Así, junto a los estudios de derecho romano aparecieron los de derecho germánico, y se habló de la unidad primitiva de la gran estirpe aria.

ciplina comenzaban con un capítulo dedicado a ese ordenamiento jurídico⁷⁶. La historia posterior se resolvía en una lucha entre ambos elementos, es decir, entre romanismo y germanismo.

En esta encrucijada aparecen las teorías de Brunner (1880) y Mitteis (1891) sobre la existencia de un derecho vulgar⁷⁷. Esta interpretación permitió a los estudiosos italianos realizar un nuevo examen de las instituciones medievales. Ya desde 1885 Del Giudice y Tamassia advierten en el derecho longobardo la influencia de un derecho romano popular, que hasta ese momento se había identificado con derivaciones del derecho germánico⁷⁸. Comienza así a considerarse la existencia de un derecho vulgar como elemento constitutivo del derecho italiano, lo que restaba claramente protagonismo al derecho germánico. A esta orientación contribuyó el estudio de

⁷⁶ Enrico Besta, *Fonti: legislazione e scienza giuridico. Dalla caduta dell'impero romano al secolo decimoquinto*, vol. 1-1, Milano, 1923 [= Pasquale Del Giudice (dir.), *Storia del diritto italiano*, vol. 1-1].

⁷⁷ Heinrich Brunner, *Zur Rechtsgeschichte der römischen und germanischen Urkunden*, Berlin, 1880. Estudiando algunos documentos italianos, identifica a comienzos de la edad media una serie de desviaciones respecto al derecho romano oficial, que califica de errores y denomina derecho romano vulgar.

Ludwig Mitteis, *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs*, Leipzig, 1891. Estudió algunos documentos greco-romanos de la península balcánica y precisó la existencia de un derecho indígena junto al derecho romano oficial. No se trataba de una interpretación errónea de éste, no era derecho romano sino la expresión directa de un derecho popular.

⁷⁸ Nino Tamassia, «Il diritto nella vita italiana. Prolusione al corso di storia del diritto italiano nella R. Università di Pisa», *Archivio giuridico*, 40 (1888), pp. 40-56; ahora en Íd., *Scritti di storia giuridica*, I, Padova, 1964, pp. 15-29. Aquí reivindicaba el protagonismo del derecho romano en la civilización occidental, y cómo del enfrentamiento entre el elemento romano y germánico nació un nuevo derecho, que se vio enriquecido por la acción de los glosadores y los humanistas. A imitación de la escuela histórica alemana, en Italia la historia del derecho estudiaba con amor —decía Tamassia— las huellas del derecho nacional e intenta reconstruirlo. Por ello concluía que la obra de la historia del derecho era digna de las aspiraciones nacionales, y respondía en todo a las grandes tradiciones de la patria. Aquí descansaba en su opinión la preferencia por la edad media, el periodo que abarcaba las tradiciones, las instituciones que estaban ligadas a la grandeza del pueblo.

documentos del sur de Italia, territorio que no había tenido influencia germánica y en los que se encontraron instituciones hasta ese momento tenidas como tales. Un elemento vulgar que Besta interpretaba como una pervivencia de una conciencia jurídica anterior a Roma, que Roma no había podido modificar y que ahora en el medioevo renacía gracias a las nuevas condiciones sociales y políticas⁷⁹. Un elemento popular que por ello era denominado elemento italiano, producto del espíritu y genio nacional⁸⁰.

El derecho italiano adquiriría así su independencia, ya no bastaba para su explicación la simple enumeración de los elementos romano, germánico y canónico, era necesario tener en cuenta el elemento italiano que había transformando las influencias posteriores⁸¹:

Riconoscendo al diritto italiano una sua propria figura storica, distinta dai suoi elementi costitutivi, provvista di una sua intima anima, commossa da vicende tutte sue proprie e caratteristiche; rivendicando al diritto italiano vigente la sua diretta continuità col passato che solo spiega e giustifica la maggior parte degli istituti attuali [...]

Los defensores de la primacía de este elemento constituyeron así la escuela histórica nacionalista, en oposición a las romanista y germanista existentes hasta entonces⁸². Y esta nueva escuela puede

⁷⁹ Enrico Besta, «La persistenza del diritto volgare italico nel medio evo», *Rivista di legislazione comparata*, 1 (1903); Íd., *Avviamento*, cit., p. 38.

⁸⁰ Arrigo Solmi, «Gli elementi costitutivi del diritto civile italiano», *Temi Emiliana*, 7 (1929), consulto una separata con paginación independiente. Solmi decía que el derecho itálico era una formación del medioevo. Y Giampiero Bognetti negaba que estuviese constituido por restos primitivos: era un sistema en movimiento penetrado de una casi mística virtud de la estirpe.

⁸¹ Arrigo Solmi, *La funzione pratica*, cit., pp. 262 ss. Idea que fue recurrente en su magisterio, así, Íd., *L'unità fondamentale della storia italiana*, Bologna, 1926 (el opúsculo reproduce un discurso pronunciado en presencia del primer ministro italiano). El elemento romano sería dominante en esta formación unitaria. En esta dirección ya se habían pronunciado Sclopis (*Storia*, I, 1863, p. 44) y Giuseppe Maranini («Il diritto romano nella storia del diritto italiano», *Archivio giuridico*, 86, 1921). Desde otra perspectiva: F. Brandileone, «Il diritto romano nella storia del diritto italiano. Prolusione letta il 5 marzo 1921», *Archivio giuridico*, 86 (1921), pp. 6-36.

decirse dominante hasta la gran guerra y la llegada del fascismo, a pesar de las críticas que recibió⁸³. La formación de una Italia unitaria encontraba así un anclaje para su derecho nacional, como había sucedido con otras manifestaciones de su espíritu⁸⁴. Y también en el campo jurídico éste se situaba fundamentalmente en el periodo que corre entre los siglos XII y XV, cuando se formó el derecho común, que al expandirse por Europa hacía patente la superioridad de la civilización italiana⁸⁵.

La historia del derecho pasaba a tener una clara función constitucional⁸⁶. En efecto, en este contexto se afirmaba que la función práctica de la historia del derecho italiano consistía en la reforma y reconstrucción del derecho nacional⁸⁷. Es decir, junto a un deber

⁸² Melchiorre Roberti, «Gli elementi del diritto italiano e la scuola storica nazionalista. Prolusione letta nell'aula magna della R. Università di Siena», *Studi senesi*, 30 (1914), pp. 305-333.

⁸³ Así, Francesco Brandileone (*Il diritto romano*, cit.) denunciaba la imitación acrítica que los investigadores italianos desarrollaban ante todo lo que venía de Alemania, y hacía ver que tanto la teoría del germanismo como la del elemento vulgar —ambas de procedencia alemana— respondían a intereses ideológicos de esa nación, en un intento de ensalzar la civilización germánica por encima de cualquier otra.

Tampoco faltaban defensores de las antiguas concepciones, así, Francesco Schupfer, *I semplicisti nella storia del diritto*, Roma, 1916.

⁸⁴ En efecto, la unidad política abría el amplio campo de la búsqueda de las esencias nacionales. Así, se planteó el problema de una arquitectura nacional. En este debate, Boito propuso adoptar el estilo de la arquitectura medieval, es decir, la de la Italia de los *comuni* como fundamento de la imagen de la Italia unida: Camillo Boito, «Lo stile futuro dell'architettura italiana», en *Íd.*, *Architettura del Medio Evo in Italia*, Milano, 1880.

⁸⁵ Arrigo Solmi, *La funzione pratica*, cit., pp. 266 ss. Besta verá además en la autonomía de lo jurídico frente al Estado la existencia de este verdadero derecho italiano en una Italia no unificada (*Avviamento*, cit., pp. 19 ss.). Véase también Benedetto Crisafulli Zappalà, *Autorità degli'italiani sulla scienza del diritto*, Catania, 1862 (era profesor encargado de *Introduzione generale alle scienze giuridiche politico-amministrative i storia del diritto* en la Universidad de Catania).

⁸⁶ Tras la unificación política se hizo necesario investigar y reconstruir la unidad jurídica, y pronto las historias de los derechos de los antiguos reinos fue sustituida por la historia del derecho italiano: «Programma», *Rivista di storia del diritto italiano*, 1 (1928).

científico que se concretaba en el conocimiento positivo del derecho italiano⁸⁸, la historia del derecho italiano era la encargada de indicar las formas claramente nacionales, de unirlas al ambiente social, de preparar la reforma de algunas instituciones para que respondiesen mejor al genio jurídico del pueblo italiano. Una tarea en la que el historiador estaba llamado a trabajar junto al jurista.

*

Ya en el siglo XVIII, en el seno de las cátedras de derecho patrio y con un fin propedéutico, existía una enseñanza de la historia del derecho. La primera cátedra autónoma de historia del derecho italiano data de 1840, en pleno debate sobre el *risorgimento*. Protagonista de esta primera etapa fue Federico Sclopis. Entre la segunda y tercera guerra de independencia se produjo la recepción de la historiografía alemana y así una refundación de la disciplina que ahora se decía científica. Protagonista de esta segunda etapa fue Antonio Pertile, y enseguida Francesco Schupfer⁸⁹. En el cambio de siglo nos encontramos con una historiografía jurídica italiana sólida y madura —resulta asombroso el desarrollo de esos treinta años—, sólo adelantada por la alemana: puede decirse superior a la francesa y desde luego a la española. Los protagonistas son un

⁸⁷ Arrigo Solmi, *La funzione pratica*, cit.

⁸⁸ Solmi afirma que la decadencia y ruina de un edificio político y jurídico verdaderamente admirable y acabado, como era el derecho romano, permitían continuar la historia de sus fragmentos, que fueron cimiento de una nueva civilización, de un nuevo derecho, junto a otros elementos nuevos traídos de distintas fuerzas sociales. Esta complejidad hacía perfecto el campo científico de la historia del derecho italiano.

⁸⁹ Son escasas las alusiones a Schupfer que aparecen en estas páginas y que revelan su naturaleza de notas incompletas. Para subsanar esta deficiencia véase, al menos: Carlos Calisse, «Francesco Schupfer», *Studii giuridici dedicati e offerti a Francesco Schupfer nella ricorrenza del XXXV anno del suo insegnamento*, vol. 1, Torino, 1898, pp. iii-xv (existe edición facsímil, Roma, 1975). Así como la reseña de los tres volúmenes de este homenaje y otro hecho por la propia revista: «Per Francesco Schupfer», *Studi senesi nel circolo giuridico della R. Università*, 15 (1898), pp. 165 ss. Por último: Francesco Brandileone, «Francesco Schupfer», *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 1(1926), pp. 3-29.

nutrido grupo de profesores (Pasquale Del Giudice, Cesare Nani, Francesco Brandileone, Carlo Calisse, Nino Tamassia, Augusto Gaudenzi, Giuseppe Salvioli, Alessandro Lattes, Federico Ciccaglione, Federico Patetta, Enrico Besta) que han escrito un buen número de manuales, en los que se sintetizan centenares de artículos y monografías.

Estas páginas comenzaban con la pregunta sobre el origen de la enseñanza de la historia del derecho italiano. No era una pregunta ociosa, o motivada por una simple erudición vacía. Por el contrario esos datos nos permiten ahora establecer y caracterizar unos periodos o etapas en la existencia de esta materia.

Podemos identificar una primera etapa que surge en el siglo XVIII y puede calificarse «filosófica», es decir, era una historia del derecho dominada por ideas generales establecidas a priori, de manera que la investigación histórica con frecuencia degeneraba en metafísica. Desde el punto de vista de la enseñanza del derecho este periodo se caracteriza por el predominio del derecho natural como fundamento de la formación de los juristas.

A mediados del siglo XIX por influencia del positivismo podemos situar otra etapa que puede denominarse «filológica», es decir, afañada en el estudio de las fuentes y en la reconstrucción sobre ellas de la evolución del derecho. En los planes de estudio, la historia del derecho italiano ocupará el papel que antes tenía el derecho natural.

Con el cambio de siglo afloraron nuevas perspectivas. Por un lado destaca la corriente denominada materialismo histórico, que tuvo como protagonista a Salvioli. El mismo que propuso la unión de la filosofía y de la historia, es decir, la reunión de las herencias de las dos etapas anteriores. Quería así refundar —retomando de esta manera un camino ya recorrido— la ciencia jurídica, basada en los métodos del positivismo pero con el espíritu de la filosofía.

Por otro lado, fue en estos años cuando se remarcó el protagonismo de las doctrinas de los juristas del derecho común en el discurso histórico, y se propuso este periodo como eje de todo el programa de la asignatura.

En fin, aunque desde su origen puede decirse ligada al nacionalismo, fue a finales del siglo XIX cuando apareció la llamada escuela nacionalista, que hizo del elemento italiano —el derecho vulgar— su clave de interpretación. Que algunos de estos profesores encon-

trasen en el fascismo⁹⁰ y en su proyecto jurídico la culminación de sus aspiraciones era algo previsible, como lo era el final de la familia Trotta⁹¹. *C'est la politique, stupide!*

Manuel Martínez Neira
Universidad Carlos III de Madrid

⁹⁰ Arrigo Solmi, *Storia del diritto italiana*, 3.^a ed., Milano, 1930: «In particolare, ho voluto tener conto, sia pure in modo sommario, delle profonde trasformazioni, che il regime fascista ha portato allo Stato italiano, dopo la rivoluzione dell'ottobre 1922, poichè non si deve dimenticare che il nuovo regime, riprendendo la grande tradizione romana, si riallaccia più intimamente alle forme nazionali, che, nell'ultimo secolo, sotto la spinta di imitazioni straniere, avevano sofferto qualche deviazione; sicchè, per virtù della nuova legislazione di questi ultimi anni (1922-1930), lo sviluppo storico del diritto italiano risulta oggi più conforme ai principî della sua genesi e più prossimo alle vie del suo divenire» (*Prefazione*).

Se puede recordar también su libro titulado *Lo Stato nuovo nella Spagna di Franco*, Milano, 1940; o su prólogo la libro de Juan Beneyto, *El nuevo Estado español. El régimen nacional sindicalista ante la tradición y los demás sistemas totalitarios*, Madrid-Cádiz, 1939. Una relación de su bibliografía: *Studi di storia e diritto in onore di Arrigo Solmi*, vol. 1, Milano, 1941, pp. xv-xxvii.

Giampiero Bognetti [«L'opera storico-giuridica di Arrigo Solmi e il problema dell'oggetto e del metodo della storiografia del diritto italiano», *Rivista di storia del diritto italiano*, 17-20 (1944-1947), pp. 171-199] reclamaba, sin embargo, que no se juzgase toda la obra de Solmi por su biografía política.

⁹¹ Joseph Roth, *La marcha Radetzky*, capítulo 11: —Perdone usted, pero ¿por qué resulta tan inútil servir a la patria como fabricar oro? —Porque la patria ya no existe. —No le comprendo —dijo el señor de Trotta—. —Ya supuse que usted no me entendería —dijo Chojnicki—. Nosotros ya no existimos [...] Nuestro siglo no nos quiere ya. Los tiempos desean crearse ahora Estados nacionales. Ya no se cree en Dios. La nueva religión es el nacionalismo.

APÉNDICE

Universidad de Siena (1840-1901)⁹²

Reforma 29 septiembre 1840 — *Istituzioni di diritto romano e storia del diritto*

Pietro Conticini (1840-1843)

Leopoldo Pio Ceccarelli (1843-1844)

En 1844 la cátedra se desdobra en dos cursos — *Storia del diritto*
Leopoldo Pio Ceccarelli (1844-1851)

[Reforma 28 octubre 1851 — *Storia del diritto romano*]

Giovanni Battista Giorgini (1851-1859)

Reforma 31 julio 1859 — *Storia del diritto*

Galgano Vegni (1859-1862)

Reforma 14 septiembre 1862 — *Introduzione generale alle scienze giuridiche e politico-amministrative, storia del diritto*

Galgano Vegni (1862-1876)

Reforma 8 octubre 1876 — *Storia del diritto*

Galgano Vegni (1876-1887)

Reforma 22 octubre 1885 — *Storia del diritto italiano dalle invasioni barbariche ai giorni nostri*

Galgano Vegni (1887-1891)

Lodovico Zdekauer (1891-1892)

Carlo Calisse (1892-1895)

Federico Patetta (1895-1901)

⁹² Elaboración propia. Fuente: Temistocle Mozzani, *L'Università degli studi di Siena. Dall'anno 1839-40 al 1900-01. Notizie e documenti*, Siena, 1902.

NOTAS SOBRE LA HISTORIA DE LA ENSEÑANZA DEL DERECHO EN ESTADOS UNIDOS*

El contenido del derecho en un momento dado se aproxima mucho a lo que se estima conveniente; pero su forma y método, así como su eficacia, dependen mucho de su pasado.

Oliver Wendell Holmes, Jr.,
The Common Law (1881)

Sumario: 1. Introducción.—2. Los comienzos.—3. El método del caso y su función en la historia de la enseñanza del derecho.—4. La influencia del colegio nacional de abogados y de la asociación americana de facultades de derecho.—5. La enseñanza del derecho en la actualidad.—6. Conclusión.

La enseñanza del derecho en Estados Unidos es un tema enciclopédico. Como indicaba la profesora Adela Mora Cañada en otra ocasión¹, los orígenes de la enseñanza jurídica constituyen una realidad poliédrica, de manera que un tratamiento profundo ocuparía

* Dedico esta reseña al Prof. Dr. Pablo Zapatero de la Universidad Carlos III de Madrid, sin su ayuda y amistad no hubiera tenido la extraordinaria ocasión de visitar esta prestigiosa institución.

Quisiera agradecer, en primer lugar, al Prof. Dr. Manuel Martínez Neira su amable invitación a escribir esta nota, y su atenta y generosa aportación de sugerencias editoriales. Los errores son solos míos. Estoy humildemente agradecida a la Comisión Bi-Nacional Fulbright por la oportunidad que esta beca me ha proporcionado, al Prof. Dr. Tomás de la Quadra-Salcedo y al Instituto Bartolomé de Las Casas por haberme invitado a participar en la vida intelectual de esta universidad.

¹ Adela Mora, «Prólogo», *La enseñanza del derecho en el siglo xx. Homenaje a Mariano Peset*, Madrid, 2004, p. 9.

varios volúmenes. De hecho, sobre el objeto de estas páginas existe una bibliografía abundante que data de los últimos cien años². Con estas notas sólo intento ofrecer al lector español una síntesis de la riqueza que la historia de la enseñanza del derecho en Estados Unidos comprende.

1. *Introducción*

El derecho —tanto en su manifestación legal como jurisprudencial, y quizás también teórica— se concibe en América y Europa continental de manera diferente, y los juristas y abogados ocupan funciones diferentes dentro de esos respectivos sistemas. El derecho americano es en esencia un derecho jurisprudencial y los juristas juegan un papel fundamental en la creación del orden jurídico. Su enseñanza refleja y asume los objetivos que la sociedad se propone alcanzar con su sistema legal, y el abogado es producto de esa formación. Resulta patente que la enseñanza jurídica es una manifestación de la sociedad y la cultura de la cual forma parte. Se ha dicho que no es el derecho el que rige la sociedad, sino que la sociedad rige el derecho. De esta premisa se deduce que la evolución de su enseñanza esta íntimamente vinculada a su evolución histórica³.

² Entre las más destacadas pueden mencionarse: Robert Stevens, *Law School: Legal Education in America from the 1850s to the 1980s*, 1983; Josef Redlich, *The Common Law and the Case Method in American University Law Schools*, 1914; Paul D. Carrington, «The Revolutionary Idea of University Legal Education», *William and Mary L. Rev.*, 31 (1990), pp. 524 ss.; Patrick Atiyah & Robert S. Summers, *Form and Substance in Anglo-American Law: A Comparative Study of Legal Reasoning, Legal Theory, and Legal Institutions*, 1987; Alfred S. Konefsky & John H. Schlegel, «Mirror, Mirror on the Wall: Histories of American Law Schools», *Harv. L. Rev.*, 95 (1982), pp. 833 ss.; Brainerd Currie, «The Materials of Law Study», *J. Legal Educ.*, 3 (1950), p. 331 ss.; Charles R. McManis, «The History of the First Century American Legal Education: A Revisionist Perspective», *Wash. U. L. Q.*, 59 (1981), pp. 597 ss.; Paul D. Carrington, «Butterfly Effects: The Possibilities of Law Teaching in a Democracy», *Duke L. J.*, 41 (1992), pp. 741 ss.; Gene R. Shreve, «History of Legal Education in Law School: Legal Education in America from the 1850s to the 1980s», *Harv. L. Rev.*, 97 (1983), pp. 597 ss.

³ E. Allan Farnsworth, *An Introduction to the Legal System of the United States*, 3.^a ed., 1996, p. 15.

Desde el comienzo de la profesión —que se produce con el establecimiento de las primeras colonias fundadas en el siglo XVII— los abogados han asumido una responsabilidad propia dentro de la sociedad americana: cumplen una función política además de una función profesional. Más allá del campo en el cual ejercen, los abogados americanos⁴ (*attorneys, lawyers*) tienen una obligación perso-

⁴ La palabra «abogado» en el idioma inglés tiene un significado distinto al que se le da en el sistema continental europeo y en otras tradiciones romanistas. En realidad, no tiene una traducción exacta. En Estados Unidos, la profesión es unitaria, parte de una sola institución y tradición. John Henry Merryman, *La tradición jurídica romano canónica*, 1989, p. 191. Si bien la profesión no es monolítica, un abogado es un abogado, sea cual sea su función dentro de la sociedad o su actividad. Actúe como docente, juez, abogado civil, criminal, privado, del estado, del gobierno o miembro de un departamento legal de empresa, ha superado los mismos requisitos formativos e institucionales para obtener el privilegio de ejercer la profesión y de llamarse «abogado». Por lo tanto, los profesores de derecho son abogados, así como lo son los que tienen su propio despacho, como los que deciden ser jueces o los que dedican su vida a servir el interés público dentro de una ONG. En este trabajo utilizo los términos «jurista», «licenciado» u otros por el estilo, intercambiablemente.

Como explico más adelante, los estudios jurídicos comprende cuatro años de educación universitaria genérica, seguidos por tres años de estudios específicos en una facultad especializada en derecho acreditada por el colegio de abogados americanos (*American Bar Association* o ABA) y la asociación de escuelas de derecho americanas (*Association of American Law Schools* o AALS). La carrera de derecho es de postgrado, y el título que se obtiene es el de doctor en derecho (*Juris Doctor*). Al cursar un año más, se puede obtener una especialización en un área concreta, como por ejemplo derecho tributario, y se obtiene una maestría en derecho o *Master of Laws* (LLM). Generalmente, este tipo de maestría se reserva para áreas especializadas, y los LLMs son programas de estudio dirigidos —en su mayor parte— a juristas extranjeros. Aunque el LLM puede tener otras funciones debido a la pugna entre las diferentes facultades de derecho. Los catedráticos son sus principales consumidores. Los motivos por el cual uno elegiría cursar un año más de estudios jurídicos para obtener un LLM sin especialización, son demasiado complejos para ser tratados seriamente en esta nota. Como referencia puede verse, Deborah Jones Merritt y Barbara F. Reskin, «Sex, Race, and Credentials: The Truth About Affirmative Action in Law Faculty Hiring», *Colum. L. Rev.*, 97 (1997), pp. 199 ss.; Larry Catá Backer, «Toward General Principles of Academic Specialization by Means of Certificate or Concentration Programs: Creating a Certificate Program

nal como guardianes del estado del derecho y del proceso democrático. Al mismo tiempo, son funcionarios juramentados de los tribunales, lo cual les impone la obligación moral, ética, profesional y legal de defender las leyes, mantener la profesionalidad y el decoro, y garantizar la integridad del sistema jurídico⁵. Estos principios básicos son fundamentales para mantener la confianza de la sociedad en la integridad y efectividad del sistema legal⁶. Ejercer la profesión —lo cual es considerado un privilegio— implica un nivel de comportamiento más alto que el que se exige al ciudadano común⁷.

in International, Comparative and Foreign Law at Penn State», *Penn. St. Int'l L. R.*, 20 (2001), pp. 67 ss.; James Gordley, Mere Brilliance: «The Recruitment of Law Professors in the United States», *Am. J. Comp. L.*, 41 (1993), pp. 367 ss., en concreto p. 369.

⁵ La profesión docente se considera una de las cuatro profesiones eruditas. La universidad medieval formaba para la profesión docente, jurídica, médica y eclesiástica. Neil W. Hamilton, «The Ethics of Peer Review in the Academic and Legal Profession», *South Tex. L. Rev.*, 42 (2001), pp. 227 ss, en concreto p. 228. Las dos características centrales del concepto medieval de profesión erudita permanecen hasta hoy: (1) una profesión requiere «maestría sobre un cuerpo extenso» de conocimiento y de destrezas que solo se adquieren a través de muchos años de estudio en una universidad; y (2) los principiantes de la profesión deben comprometerse con un ideal social de servicio público, el cual impone obligaciones éticas que no necesariamente obligan al ciudadano común: restringir el interés propio a favor del interés general y poner su conocimiento al servicio del bien común. Stephen F. Barker, «What is a Profession?», *Prof. Ethics*, 1 (1992), pp. 73 ss., en concreto p. 84.

⁶ Macarena Tamayo-Calabrese, Anette Cook, y Shirley Meyer, «La educación jurídica en Estados Unidos, Continuado», *Temas de la democracia*, 7 (2002), pp. 21 ss. Periódico electrónico del Departamento de Estado de Estados Unidos <<http://usinfo.state.gov/journals/jourspa.htm>>.

⁷ Las comisiones estatales de conducta supervisan el comportamiento de los juristas con competencia para ejercer la profesión dentro de su territorio. A su vez, la conducta de la cual se habla está regida por normas éticas establecidas por la corte suprema de cada estado. Aunque existe un código modelo de conducta profesional sancionado por la ABA, *The Model Rules of Professional Conduct*, cada estado tiene la prerrogativa de establecer sus propias normas para aquellos que ejercen la profesión dentro de su territorio. Esto resulta del federalismo americano, pues es uno de los aspectos de competencia estatal y no federal. En su mayor parte, las normas de conducta profesional son muy parecidas a las propuestas por

Esta expectativa proviene de los comienzos de la profesión, establecida antes de la revolución americana de 1776, cuando el abogado era considerado líder moral en su función de instrucción democrática, y miembro de una elite responsable sobre la dirección política del gobierno naciente⁸. Estas ideas fueron tomadas de Montesquieu y su obra *El espíritu de la leyes*, ampliamente leída y asimilada por los revolucionarios. Los fundadores de las colonias, principalmente Thomas Jefferson, acogieron las ideas ilustradas referidas a la función que el derecho cumple en el sostenimiento de una república: la forma republicana de gobierno sólo puede sostenerse en una sociedad en la cual sus ciudadanos amparen su sistema legal y se dediquen a la «virtud pública»⁹. De estas y otras ideas filosóficas del momento, las cuales valoran la inteligencia humana como instrumento de mejora de las condiciones materiales y éticas de la humanidad, procede la valoración inicial de la formación jurídica como un aspecto positivo, y casi esencial, para la instrucción y cultivo de los futuros líderes del gobierno y el progreso de sus ciudadanos¹⁰.

2. Los comienzos

La pedagogía de la ciencia del derecho puede dividirse en etapas que abarcan métodos diferentes, enmarcadas por grandes

la ABA, la cual ejerce una gran influencia en la elaboración de directrices éticas para el ejercicio de la profesión. En las expectativas esenciales de la profesión —integridad, honestidad, decoro, etc.— los códigos estatales son homogéneos. El privilegio de ejercer como abogado implica la responsabilidad de satisfacer todas las demandas sociales según las leyes establecidas. El Código modelo de la ABA puede verse en <<http://www.abanet.org/cpr/disenf/rule18.html>>.

⁸ Carrington, *The Revolutionary Idea*, supra nota 3, p. 526.

⁹ Íd., pp. 527-28.

¹⁰ Montesquieu, en una de las obras más influyentes del pensamiento político contemporáneo, *El espíritu de las leyes* (1748), expone su filosofía y pensamiento sobre las diferentes formas de organización política. Su idea de que los diferentes poderes de un estado, tres según su concepción, no deberían descansar en las mismas manos sino que deberían existir separadamente para evitar la tiranía, es la base ideológica del sistema americano de frenos y contrapesos establecido en la Constitución federal.

libros y grandes docentes. A comentaristas como William Blackstone, James Kent, y Joseph Story, siguieron grandes fundadores, Thomas Cooley, John Norton Pomeroy, y Theodore Dwight. A ellos hay que añadir algunos grandes investigadores como Christopher Columbus Landgell —decano de Harvard y creador del método del caso— y James Barr Ames. Luego vinieron los realistas, los modernos, los posmodernos, y en la actualidad podríamos incluir las instituciones más innovadoras y los catedráticos que aun (por suerte) no han obtenido su puesto merecido en la historia¹¹.

Empezando por los orígenes, los fundadores de la república —en su rechazo al régimen inglés— desecharon las ideas basadas en la aristocracia y el monopolio. En las primeras etapas de la nueva nación, este sentimiento se transformó en una intensa sospecha democrática frente a los privilegios profesionales y a las organizaciones profesionales¹². Existía casi una aversión a la idea de elite y privilegio social. De hecho, en algunas colonias fundadoras, se llegó a prohibir la creación de colegios profesionales. Los primeros «abogados» coloniales fueron generalmente hombres sin una formación específica, que ayudaban a sus amigos en los tribunales auxiliados de algunos conocimientos básicos traídos de Inglaterra¹³.

Este es un aspecto interesante para la evolución de la enseñanza del derecho y su transformación en una titulación académica, pues para algunos críticos se trata de algo que los fundadores habían rechazado. Alexis de Tocqueville, cuando visitó América en la primera mitad del siglo XIX, se sorprendió del lugar privilegiado que los abogados ocupaban en la sociedad. En su libro *La Democracia en America*, describió a los abogados como una clase política superior y parte de la clase social más intelectual¹⁴.

¹¹ Steve Sheppard, «Casebooks, Commentaries, and Curmudgeons: an Introductory History of Law in the Lecture Hall», *Iowa L. Rev.*, 82 (1997), pp. 547 ss., en concreto p. 550.

¹² Robert W. Gordon, «La educación jurídica en Estados Unidos: Orígenes y desarrollo», *Temas de la democracia*, 7 (2002), pp. 21 ss. Periódico electrónico del Departamento de Estado de Estados Unidos <<http://usinfo.state.gov/journals/joursa.htm>>.

¹³ Lawrence M. Friedman, *A History of American Law*, 1973, pp. 84 ss.

¹⁴ Alexis de Tocqueville, *Democracy in America*, cit.

Sin embargo, la profesión tiene orígenes humildes cimentados en metas nobles. La enseñanza del derecho no comenzó de forma institucionalizada a través de las universidades: hasta finales del siglo XVIII no tiene presencia en estas instituciones. Las facultades (*colleges*) de derecho —y el derecho mismo como disciplina académica— no se establecieron formalmente hasta principios del siglo XIX. Antes de esta época, la mayoría de los abogados no tenían ningún tipo de instrucción universitaria (solo una educación secundaria), y varios estados ni siquiera requerían un aprendizaje formal como condición para ejercer la profesión¹⁵. A ella se accedía a través del aprendizaje bajo la tutela de los grandes jueces, letrados, y asesores jurídicos. Hasta el año 1922, ningún estado requería la conclusión de un estudio formal en una universidad o facultad de derecho como condición para ejercer la profesión. La admisión en un colegio profesional dependía exclusivamente del conocimiento poseído.

Algunas universidades americanas comenzaron a ofrecer clases de derecho a sus estudiantes alrededor de 1780, pero éstas se situaban en el primer nivel formativo (*bachelor*) y no formaban parte de una titulación específica, y menos aún de un curso de postgrado como sucede en la actualidad¹⁶. Cuando la educación legal adquirió naturaleza universitaria, la enseñanza del derecho fue controlada y dominada por distintas escuelas de fundación privada, tales como Litchfield en Connecticut, Harvard, Columbia y William and Mary. Aun así, estas escuelas sólo pedían un diploma de estudios secundarios para admitir a los estudiantes, e imponían únicamente uno o dos años de estudios jurídicos. Los docentes de estos estudios eran

¹⁵ Robert Stevens, «American Legal Education: Reflections in Light of Ormrod», *The Modern Law Review*, 35 (1972), pp. 242 ss, en concreto pp. 245-246.

¹⁶ Albert J. Harno, *Legal Education in The United States*, 1953, pp. 51 ss.; M. H. Hoeflich, «Plus ça change, Plus c'est la même chose. The Integration of Theory & Practice in Legal Education», *Temp. L. Rev.*, 66 (1993), pp. 123 ss., en concreto p. 124. En el año 1850, ya había quince facultades de derecho en Estados Unidos; en 1860, había veintiuna; y en 1870, había treinta y una. Harno, *supra*, p. 51. De las treinta y una, doce ofrecían programas de un año, dos requerían un año y medio, y diecisiete requerían dos años para obtener un diploma. Mencionados en Alberto Bernabe-Riefkohl, «Tomorrow's Law Schools: Globalization and Legal Education», *San Diego L. Rev.*, 32 (1995), pp. 137 ss., en concreto p. 139.

generalmente profesionales que trabajaban a jornada parcial. Los estudiantes asistían a conferencias, participaban en clases magistrales y leían tratados o comentarios sobre temas jurídicos¹⁷. No existía ningún tipo de plan de estudios conducente a la capacitación profesional en el derecho.

El gobernador del estado de Virginia, Thomas Jefferson, estableció en 1779 la primera cátedra de derecho en la escuela William and Mary, y designó a su antiguo profesor, George Wythe, como primer catedrático de derecho. Durante la primera parte del siglo, los estudiantes de derecho recibieron una educación bastante amplia. La idea predominante acerca de la enseñanza en estos tiempos era que el estudio de las ciencias jurídicas debería incluir tratados acerca del gobierno, los cuales se consideraban importantes para todos los estudiantes, también para aquellos que no cursaban una carrera en derecho. También en Virginia, George Wythe propuso un modelo de educación jurídica a través del cual los tres poderes del gobierno naciente se estudiaban por partes iguales, sin dedicar mayor énfasis al poder judicial. Su meta era educar a los estudiantes en sus responsabilidades cívicas y entrenarlos para ser ciudadanos al mismo tiempo que abogados.

Y fue así que lentamente se empezaron a institucionalizar los estudios jurídicos. Bajo la dirección de Theodore W. Dwight, la facultad de derecho de Columbia University se convirtió en la primera en alcanzar una posición de preeminencia en el sistema de educación jurídica¹⁸. Columbia mantuvo su posición hasta 1870, cuando Harvard University pasó a ocupar su prestigioso puesto como una de las mejores facultades de derecho de los Estados Unidos¹⁹. La influencia de Harvard —y los métodos de enseñanza innovadores introducidos por el decano Christopher Columbus Langdell— consolidó la postura de la ABA sobre la necesidad de reconocer oficialmente una titulación «científica» en derecho adecuada para la educación universitaria y para la capacitación competente de la profesión²⁰.

¹⁷ Gordon, *La Educación Jurídica*, *supra*.

¹⁸ Shreve, *supra*.

¹⁹ Shreve, *supra*.

²⁰ Véase, Gene R. Shreve, «Law School: Legal Education in America from the 1850s to the 1980s», *Harv. L. Rev.*, 97 (1983), pp. 597 ss., en concreto p. 599.

3. *El método del caso y su función en la historia de la enseñanza del derecho*

Entre 1875 y 1910, la educación jurídica se transformó radicalmente. Durante sus primeras etapas, la enseñanza del derecho se basaba en la lectura de los grandes tratados del derecho común inglés, una práctica copiada del modelo inglés a través de William Blackstone²¹. Las primeras facultades de derecho no buscaban la formación profesional de los estudiantes, sino que éstos pudiesen investigar y estudiar la «ciencia del derecho humano» en una universidad junto a estudiantes de matemáticas, ciencias naturales o de cualquier otra materia.

No resultó sencillo elevar el nivel de formación a través del establecimiento de planes de estudios formales. En sus orígenes, el estudio estaba basado en la memorización del «derecho» y no abarcaba una formación analítica o práctica, lo cual provocó resistencia por parte de los profesionales. La disputa acerca de qué tipo de enseñanza era la más apropiada para formar a un abogado, en gran parte, es una cuestión abierta, que enfrenta a los que defienden las lecciones de habilidades prácticas, por un lado, y las lecciones jurisprudenciales y teóricas, por otro. Aun cuando las escuelas de derecho comenzaron a establecer cursos de derecho apreciados, el sistema de aprendizaje profesional continuó durante décadas, casi hasta 1930; y en la actualidad ha sido formalmente incorporado a los estudios universitarios a través de las «clínicas legales»²². Aun así, en 1910, la revolución metodológica introducida por Langdell, ocasionó que los casos substituyeran los tratados, y las aulas tomaran el lugar de las asesorías jurídicas y los tribunales. Las habilidades analíticas académicas substituyeron al aprendizaje práctico y las experiencias diarias interpersonales²³.

²¹ James B. Thayer, «The Teaching of English Law at Universities», *Harv. L. Rev.*, 9 (1895), pp. 169 ss., refiriéndose al uso casi exclusivo de las famosas escrituras de William Blackstone al comienzo de la educación organizada, W. Blackstone, *Commentaries on the Laws of England*, 1765.

²² Véase, por ejemplo, Arturo López Torres, «MacCrate Goes to Law School: An Annotated Bibliography for Teaching Lawyering Skills in the Classroom», *Neb. L. Rev.*, 77 (1998), pp. 132 ss.

²³ James E. Moliterno, «Legal Education, Experiential Education, and Professional Responsibility», *William and Mary L. Rev.*, 38 (1996), pp. 71 ss, en concreto p. 76.

Existen varias formas de definir lo que es el derecho. Para algunos sería el derecho positivo, es decir, el conjunto de leyes y jurisprudencia; para otros son las proposiciones normativas, es decir, junto a las leyes y jurisprudencia también los principios del derecho; y, por último, además las definiciones y excepciones²⁴. El método de Landgell presuponía que los principios legales podían aprenderse más eficazmente a través de las opiniones de los tribunales de apelación: el estudiante debía descubrir y entender los conceptos legales subyacentes en cada caso. Él introdujo su método como una pedagogía alternativa a las clases magistrales, las cuales —como ya se ha mencionado— se combinaban con los estudios de los tratados clásicos del derecho común inglés²⁵.

La insistencia de Langdell de emplear el método del caso para enseñar el derecho provocó fuertes reacciones desde distintos ámbitos de la profesión²⁶. Como protesta, incluso sus propios alumnos dejaron de asistir a sus clases. La introducción de una teoría legal para reemplazar el método de estudio resultó un cambio demasiado drástico para su época. Pero a pesar de las críticas (y de su decadencia actual entre los profesores más jóvenes e innovadores), Langdell revolucionó e influyó el estudio y la enseñanza del derecho como ningún otro método lo ha logrado hacer. Aunque en la actualidad el método del caso sigue siendo uno de los principales instrumentos pedagógicos en la enseñanza del derecho (aunque ya

²⁴ Alan W. B. Simpson, «Legal Education and Legal History», *Oxford J. Legal. Stud.*, 11 (1991), pp. 107 ss., en concreto p. 107.

²⁵ El método del caso se merece un tratamiento más extenso de lo que es posible darle aquí. Cualquier tema acerca de la pedagogía del derecho se merece más que unos párrafos. Una muestra minúscula de la riqueza de la literatura en esta área puede verse en David Garner, «The Continuing Vitality of the Case Method in the 21st Century», *B.Y.U. Educ. & L.J.*, 2000, pp. 307 ss.; Kurt M. Saunders y Linda Levine, «Learning to Think Like a Lawyer», *U. San Frans. L. Rev.*, 1994, pp. 122 ss.; Steve Sheppard, «Casebooks, Commentaries, and Curmudgeons: an Introductory History of Law in the Lecture Hall», *Iowa L. Rev.*, 82 (1997), pp. 547 ss.

²⁶ Véase, por ejemplo, Josef Redlich, *The Common Law and the Case Method*, 1914, p. 7; Paul D. Carrington, «Hail! Langdell!», *L. & Soc. Inquiry*, 20 (1995), pp. 691; Laura Kalman, «To Hell with Langdell!», *L. & Soc. Inquiry*, 20 (1995), pp. 771 ss.; William P. LaPiana, «Honor Langdell», *L. & Soc. Inquiry*, 20 (1995), pp. 761 ss.; John Henry Schlegel, «Damn! Langdell!», *L. & Soc. Inquiry*, 20 (1995), pp. 765 ss.

no es el único y su utilización ya no es predominante), continúan las disputas entre sus críticos y partidarios²⁷.

Los profesores de derecho han avanzado en sus posiciones iniciales con respecto al estudio y la investigación del derecho, y el lugar que éste ocupa dentro de las demás disciplinas. En la actualidad, existen ambiciosos proyectos de investigación jurídica abiertos a otros ámbitos como la ética, la economía, las ciencias políticas, la historia o la justicia social, lo que ha supuesto un replanteamiento de la jurisprudencia americana en áreas fértiles para la investigación y el desarrollo del derecho. En cierta medida, el estudio del derecho ha vuelto a sus nobles metas originales. Esta breve introducción reivindica la visión de Oliver Wendell Holmes, Jr., para quién el derecho está basado en la experiencia y en las necesidades de la sociedad y de sus instituciones.

4. *La influencia del colegio nacional de abogados y de la asociación americana de facultades de derecho*

En 1850 surgieron las organizaciones nacionales profesionales. En 1878, el colegio profesional fundó la asociación americana de colegios profesionales (*American Bar Association* o *ABA*), que para el año 1900 contaba entre sus miembros con la mayor parte de los juristas más relevantes en la profesión, aunque éstos eran sólo un pequeño porcentaje de todos los abogados en ejercicio. Resulta evidente que la *ABA* comenzó a organizarse y a presionar para elevar el nivel de la práctica. La *ABA* insistió en la necesidad de obtener un título universitario de postgrado, como mínimo de dos años, para obtener la aptitud necesaria para ejercer la profesión, y como preparación mínima para pasar el examen del colegio profesional. A pesar de que las aspiraciones de las facultades de derecho durante esta época eran claramente elitistas²⁸, la pro-

²⁷ Véase, por ejemplo, Arturo López Torres & Mary Kay Lundwall, «Moving Beyond Langdell: an Annotated Bibliography of Current Methods For Law Teaching», *Gonz. L. Rev.*, 35 (2000), pp. 1 ss.

²⁸ Es decir, su disposición era hacia una educación meritocrática, orientada hacia estudiantes provenientes de un cierto privilegio social. La idea de una educación democrática, de libre acceso a la universidad como el modelo establecido en Europa y Latinoamérica, nunca fue, ni lo es hoy, parte de la enseñanza del derecho.

puesta de una formación universitaria específica previa a la admisión a la práctica fue acogida positivamente por los sectores profesionales más importantes.

La ABA pretendía acabar con la práctica incompetente o dudosamente ética, en una época en la que estos temas preocupaban real y palpablemente. La profesión de abogado no contaba con ningún tipo de control externo ni interno y su práctica estaba fuera de cualquier orden. Éstas eran preocupaciones serias ya que la falta de control planteaba problemas de legitimación y confianza por parte de la sociedad. Al mismo tiempo que la ABA intentaba establecerse, los profesores de derecho expresaban las mismas preocupaciones e incitaron a la ABA para que organizase y estableciera una organización honrada y seria que reflejase los altos niveles de la profesión. Los docentes de derecho, a su vez, instauraron su propia organización profesional, la asociación de las escuelas americanas de derecho (*Association of American Law Schools* o AALS), la cual quedó formalmente establecida a comienzos del siglo XX.

Aunque hubo bastante diferencias políticas entre la AALS y la ABA en sus comienzos, ambas organizaciones tenían numerosos objetivos en común. A partir de la década de 1920, trabajaron conjuntamente para influir de manera espectacular, casi excluyente, en la orientación que la enseñanza del derecho debería seguir en Estados Unidos. La AALS, junto con la ABA, pasaron luego a jugar un papel principal en la acreditación de las facultades de derecho, al igual que en el dictamen de los cursos y módulos de enseñanza requeridos para obtener un título de *Juris Doctor*. Desde un principio compartieron el mismo modelo de abogado ideal: un graduado de una facultad de derecho acreditada formado en el método del caso. Durante este proceso, lograron homogeneizar el currículo de estudio y los exámenes de admisión a los colegios profesionales como requisitos para la entrada a la profesión.

La AALS, por su parte, logró también establecer criterios homogéneos para la admisión en las facultades acreditadas, los cuales han sido criticados desde distintos sectores sociales. Para solicitar una plaza en cualquiera de las ciento ochenta facultades de derecho acreditadas por la ABA y la AALS, un estudiante debe realizar un examen de entrada —el *Law School Admissions Test* (LSAT) que es administrado por el *Law School Admissions Council*— y poseer un título universitario. Pero el cumplimiento de estos dos requisitos no es suficiente para asegurarse una plaza en una facultad de derecho.

En un mercado en el que las plazas existentes son muchas menos que el número de solicitantes, la valoración que debe obtenerse es bastante alta²⁹. A su vez, la preparación necesaria para poder competir es generalmente difícil de obtener en los centros de educación que operan en los sectores más pobres de la sociedad. Para una gran parte de la sociedad americana —que no se encuentra en una situación de privilegio económico— este sistema reduce dramáticamente la posibilidad de cursar una carrera de derecho. Este sector demográfico está compuesto en gran medida por inmigrantes y grupos étnicos no favorecidos. Así, el principal problema para un candidato a la carrera en derecho es la admisión en una escuela acreditada. En la actualidad se critican y resultan conflictivos los procedimientos y métodos empleados en la admisión³⁰.

Algunos críticos observan que la posición de las escuelas de derecho más prestigiosas, no hubiera sido posible sin los esfuerzos de estas dos organizaciones y el apoyo de los docentes. Observan que aunque las motivaciones explícitas de ambas organizaciones eran honradas (la elevación de la capacitación y la ética de la profesión), el resultado ha sido una disminución de competitividad entre los distintos grupos étnicos para lograr una plaza en una facultad de derecho. Además, con la aparición de escuelas de derecho a tiempo parcial y otras con programas nocturnos, se reconoció por vez primera que la estratificación de la profesión estaba vinculada a la misma jerarquía de las escuelas. A pesar de ello, los profesionales

²⁹ James R. P. Ogloff, David R. Lyon, Kevin S. Douglas, V. Gordon Rose, «More Than «Learning to Think Like A Lawyer:» The Empirical Research on Legal Education», *Creighton L. Rev.*, 34 (2000), pp. 73 ss.; William D. Henderson, «The Lsat, Law School Exams, And Meritocracy: The Surprising And Undertheorized Role Of Test-Taking Speed», *Tex. L. Rev.*, 82 (2004), pp. 975 ss.; David A. Thomas, «Predicting Law School Academic Performance From Lsat Scores And Undergraduate Grade Point Averages: A Comprehensive Study», *Ariz. St. L.J.*, 35 (2003), pp. 1007 ss.; William C. Kidder, «The Rise Of The Testocracy: An Essay On The Lsat, Conventional Wisdom, And The Dismantling Of Diversity», *Tex. J. Women & L.*, 9 (2000), pp. 167 ss.

³⁰ William C. Kidder, «Does The Lsat Mirror Or Magnify Racial And Ethnic Differences In Educational Attainment?: A Study Of Equally Achieving «Elite» College Students», *Cal. L. Rev.*, 89 (2001), pp. 1055 ss.; Frank René López, «Pedagogy On Teaching Race & Law: Beyond «Talk Show» Discussions», *Tex. Hosp. J. L. & Pol'y*, 10 (2004), pp. 39 ss.

del derecho estuvieron de acuerdo con la existencia de un plan de estudio homogéneo, y con el control que las escuelas de derecho ejercían en la entrada de la profesión.

El control institucional se ejercía también al concluir los estudios. Mientras que la AALS lograba la homogenización del proceso de admisión, las leyes estatales comenzaron a elevar el nivel de los exámenes de admisión a los colegios profesionales. El resultado final de ambos procesos fue la desaparición, casi completa, de las escuelas de derecho no acreditadas y la exclusión de ciertos grupos sociales. En la actualidad sólo existen tres o cuatro estados, California entre ellos, que permiten a uno pasar el examen del colegio profesional sin haber acudido a una escuela de derecho acreditada.

Otra consecuencia de este sistema es el impacto que tiene en las posibilidades de empleo que existen para sus graduados. Cuanto más prestigiosa es la facultad en la que uno se gradúa, más fácil es encontrar un puesto de trabajo. En realidad, los graduados de las diez o quince mejores facultades³¹ tienen la oportunidad de elegir dónde (geográficamente) van a ejercer, con quién, por cuánto tiempo y en qué campo. Lo que significa que cuanto más bajo es el prestigio de la facultad, más difícil es conseguir empleo. Y si la facultad no está acreditada, encontrar un empleo dentro de la profesión resulta casi imposible. Sin duda, este procedimiento ha hecho que la educación y la enseñanza del derecho sean más elitistas, ya que éste es el único portal de entrada a la profesión.

³¹ Existen varias publicaciones que clasifican las ciento ochenta y cinco universidades actualmente acreditadas, una de las más influyentes es la *U.S. News & World Report*, que divide las escuelas de derecho en cuatro grupos (*quartile*). El primero está compuesto por las cincuenta mejores facultades, donde encontramos a Harvard, Yale, Michigan, Columbia, Stanford, Chicago y otras dentro de las diez primeras. Para hablar de estos temas la cultura legal ha adoptado un vocabulario especializado. No es sorprendente escuchar a alguien decir que tal universidad pertenece al segundo grupo y por lo tanto no es tan buena como otra clasificada en el número treinta del primero. Aparentemente, la jerarquía está basada en una serie de requisitos necesarios para ser una universidad «ideal». Cuantos más requisitos cumpla, más alto es su puesto dentro de la clasificación. La explicación del método y la clasificación correspondiente a 2005 en <http://www.usnews.com/usnews/edu/grad/rankings/law/lawindex_brief.php>.

5. *La enseñanza del derecho en la actualidad*

La enseñanza del derecho y el estudio de la titulación han cambiado dramáticamente desde sus inicios. En 2004 existen ciento ochenta y cinco escuelas de derecho acreditadas por la ABA y la AALS. Hoy en día se requieren estudios formales que están prácticamente igualados en cuanto a los requisitos mínimos que deben ofrecerse. Los estudios consisten de un curso de postgrado de tres años, y la admisión en la facultad requiere un grado o título universitario de un mínimo de cuatro años. Para la mayoría de los solicitantes, esto significa una licenciatura, aunque la diversidad del cuerpo de estudiantes incluye doctores, masters y títulos de postgrado en otras especialidades.

Además de un título universitario, como ya se ha mencionado, el solicitante debe tomar y aprobar un examen de entrada. El *LSAT* es un examen estandarizado que depende de una organización independiente, el *Law School Admissions Council*. El baremo de este examen varía entre ciento veinte y ciento ochenta, ciento ochenta es un resultado perfecto, representando el cien por ciento de aptitud. Aunque la mayoría de las facultades no se basan exclusivamente en los resultados de este examen para admitir a un estudiante, la realidad es que para poder ser competitivo como solicitante a una de las escuelas dentro del primer grupo, un alumno debería sacar como mínimo entre 165 y 180 puntos. El resultado de este examen se combina con las notas obtenidas en la carrera universitaria, y los colegios consideran estos dos factores al hacer su selección. La mayoría de las facultades también exigen cartas de recomendación y un ensayo escrito por el estudiante acerca de un tema elegido por la institución.

La competencia es muy fuerte ya que todas las universidades limitan el número de plazas, y los candidatos superan en más de un diez por ciento el número de plazas disponibles. En las mejores universidades, la disponibilidad es menor y el número de solicitantes mayor. Por ejemplo, Yale University solo admite a unos ciento diez alumnos, pero recibe más de tres mil solicitudes. Michigan, por su lado, admite a unos trescientos cincuenta alumnos, y recibe unas cinco mil solicitudes. Estos números varían de año a año y de universidad a universidad.

El estudio es a tiempo completo durante seis semestres o su equivalente. El primer año de la carrera es igual en todo el país. La

ABA y la AALS determinaron que hay cuatro o cinco materias básicas que todo estudiante debe cursar durante su primer año para lograr una competencia mínima y para poder entender la esencia de los cursos siguientes. Estos son: derecho de propiedad (property), derecho procesal civil, derecho de daños y perjuicios (torts), derecho criminal, derecho de contratos (obligaciones contractuales), derecho constitucional, y redacción legal e investigación jurídica. Son obligatorios para todos los estudiantes de primer año y su aprobación es un requisito para pasar al segundo año de la carrera.

Con la excepción del curso en ética jurídica y responsabilidad profesional, el resto de las asignaturas son optativas. Aunque algunas universidades, como Michigan, Columbia y New York University, requieren un curso en derecho internacional como requisito para la graduación, la mayoría de las escuelas dejan libertad completa para la elección de las asignaturas que ofrece. Por lo general, todas las facultades ofrecen asignaturas en los temas que forman parte de los exámenes de los colegios profesionales, las cuales también se consideran materias fundamentales para una instrucción mínima. Entre ellas aparecen: consorcios y herencias, derecho corporativo, derecho tributario, derecho mercantil avanzado, derecho administrativo, reglamentación bursátil, pruebas, procesos, conflictos de leyes, restitución, derecho familiar, derecho internacional, derecho de sociedades mercantiles, derecho laboral, quiebras, derecho constitucional avanzado, historia del derecho, derecho ambiental, derecho de salud, etc. También se ofrecen materias o seminarios especializados de todo tipo.

Hoy en día, las mejores universidades ofertan asignaturas transversales, como derecho y sociedad, derecho y medicina; temas de «perspectiva», como derecho comparado, derecho de la mujer; y cursos de estudios generales, como filosofía del derecho, historia del derecho romano, derecho de las instituciones públicas. Cuantos más recursos financieros tiene una facultad, mayor es su oferta de cursos, prácticas, clínicas, seminarios. Un estudiante tiene la posibilidad de estudiar bajo la tutela de un especialista en un tema de su interés, de participar en programas de aprendizaje fuera de la universidad —como asistente de un juez, por ejemplo—, de prestar sus servicios al ciudadano indigente a través de las clínicas legales, o de organizar una variedad —casi ilimitada— de actividades intelectuales y sociales que aumentan sus conocimientos y su experiencia durante el estudio de la carrera.

Los métodos de enseñanza y las técnicas innovadoras utilizadas para impartir la gran cantidad de asignaturas que se ofertan hoy en día, merecen un tratamiento aparte. Es imposible en esta nota describir siquiera su riqueza y los grandes avances logrados desde la época de Langdell. Quisiera tratar este tema en un futuro próximo con el cuidado y detalle que se merece.

6. *Conclusión*

El propósito principal de la enseñanza del derecho en Estados Unidos es el de capacitar al estudiante para ejercer su profesión. La moraleja que nos muestra su historia es que a pesar de todos los cambios por los cuales ha pasado, y continua pasando, todas sus luchas por su supervivencia, por sus métodos de aprendizaje, por sus procedimientos de admisión, y sus condiciones de entrada, el objetivo de lograr una institución capaz de educar para la profesión en un nivel tal que sus participantes sean ejemplo para el resto de la sociedad nunca ha perdido vigor.

Hoy, como en 1776, el jurista desempeña un papel único en la sociedad americana. Aunque muchas cosas han cambiado, no se ha perdido la orientación de la profesión —con su responsabilidad cívica y moral— hacia la mejora de la condición humana a través del mantenimiento de un sistema legal que responda a las necesidades de la sociedad a través del tiempo. Tal vez esto sea lo que Montesquieu denominaba la «virtud pública». Si la estabilidad del sistema legal y político americano refleja el trabajo de los juristas que, aun de manera imperfecta, siguen luchando por los principios originales, quizás estamos acercándonos al ideal de los fundadores. Si es así, la sociedad cosechará los frutos de ese esfuerzo.

Ana Maria Merico-Stephens
James E. Rogers College of Law
University of Arizona

EL NACIMIENTO DE LA PRENSA ESTUDIANTIL EN LA CIUDAD DE VALENCIA (1846-1923)

Sumario: 1. Los antecedentes.—2. La libertad de prensa. El apogeo de las revistas científico literarias (1881-1883).—3. La intervención de los bachilleres (1889-1895).—4. El letargo (1896-1909).—5. Renacimiento y apogeo (1910-1916).—6. Confesionalidad o independencia 1921).—7. Conclusiones.

Desde la aparición en esta ciudad en 1790 del *Diario de Valencia*, se fue desarrollando un cada vez más amplio abanico de tipologías de prensa y publicaciones periódicas. A la par que el número de cabeceras y el volumen de las tiradas de los diarios de noticias se incrementaba, aparecían los folletines por entregas, que levantaban verdadera pasión entre los lectores, los boletines de distintas sociedades y asociaciones, las publicaciones científicas... y otras que se decían portavoces de los distintos grupos de la sociedad: de los obreros, de los tipógrafos, de los maestros... y también de los estudiantes.

De estas últimas es de las que nos vamos a ocupar a continuación, dedicándonos especialmente a aquéllas que estuvieron más vinculadas con el alumnado de la universidad de Valencia, aquéllas que sus estudiantes crearon ya solos, ya con escolares de otros centros. Es decir, lo que nos va a entretener en las siguientes páginas es la búsqueda de la prensa escolar en la ciudad de Valencia y la participación de los estudiantes universitarios, su aparición, su evolución, sus caracteres comunes y sus diferencias.

El primer caso de una publicación periódica destinada a un público universitario que conocemos se dio en Madrid ya en el siglo XVIII. Con quinientos ejemplares consta la edición en el año de 1789 de unas *Cartas críticas periódicas destinadas a la Facultad de Medicina*¹.

¹ Juan Francisco Fuentes y Javier Fernández Sebastián, *Historia del periodismo español: prensa, política y opinión pública en la España contemporánea*, Madrid, Síntesis, 1997.

Fue más temprana la aparición de prensa universitaria en el distrito de la Central con cabeceras como *El Eco Universitario*², fundado en 1851 por tres jóvenes estudiantes de la facultad de filosofía y letras de Madrid cuyos nombres seguirán largo tiempo unidos al de la facultad de filosofía, de la que serán catedráticos, y a la universidad española: Emilio Castelar, Francisco de Paula Canalejas y Miguel Morayta.

Si hubo en Valencia manifestaciones escritas de la comunidad escolar antes de la época de la Restauración, realmente permanecen hoy ocultas. Para hablar ya de una prensa estudiantil sin lugar a dudas en esta ciudad habrá que esperar a la aparición de *La Amistad Escolar Médica* en 1881. Por esas fechas también se editaron revistas en otros distritos como el de Valladolid, donde se publica *La Universidad* en 1885³.

1. *Los antecedentes*

De la primera mitad del siglo XIX únicamente puede constatarse la existencia de publicaciones dirigidas hacia los universitarios, pero no escrita por ellos. Tal fue el caso de *El amigo de los escolares*, que, autodefinida como «obra periódica de ciencias médicas», fue creada y mantenida en 1846 por Antonio Freán, quien ejercía de médico del cuerpo de sanidad militar.

El autor de esta obra de contenido médico no es estudiante, pero su publicación ya no es una de las múltiples revistas que se proponen ser manifestaciones de los médicos del país, sino que en ella encontramos una publicación periódica destinada directamente al consumo de los estudiantes de la universidad, concretamente los de su facultad de medicina:

[...] mi periódico no es el estandarte de Esculapio ni el eco de la medicina española, ni la prensa médica; no, mis pretensiones son más humildes; y pues que yo he dirigido a tantos alumnos de esta

² Pedro Gómez Aparicio, *Historia del periodismo español*, Madrid, Editora Nacional, 1967, vol. II, p. 543.

³ María Sánchez Agustí, *La educación española a finales del XIX: una mirada a través del periódico republicano La Libertad*, Lleida, Milenio, 2002, pp. 51-52.

escuela y pues que aún vivo entre el juvenil bullicio, he querido aparecer como *Amigo de los escolares*.

Únicamente cuatro números tuvo esta publicación que, en dieciséis páginas de 4º, prometía proporcionar quincenalmente a sus suscriptores retratos profesionales de los más destacados médicos valencianos, casos clínicos relevantes, apuntes de fisiología con traducciones de los más relevantes autores extranjeros y extractos de noticias del asunto médico de España y el extranjero, todo ello por cuatro reales al mes, que se pagaban en la misma casa del autor. Así lo hizo desde su aparición el 15 de noviembre hasta su último número datado en fin de año.

Para localizar el primer caso de una publicación ya elaborada directamente por un estudiante nos trasladamos cinco años para encontrar la obra de un alumno del instituto, Joaquín Soto, quien publicó *El Alumno, semanario de literatura*⁴, cuyo primer número salió en febrero de 1861. Como en otras muchas de las publicaciones del momento, la literatura es la razón de esta publicación, la cual sabemos que tuvo corta vida, pues así nos lo dice Luis Tramoyeres Blasco, pero de la que no conocemos ningún ejemplar.

La que parece que nunca vio la luz fue *El Pensamiento Juvenil*. Se pensó como órgano de la sociedad escolar que se comenzó a organizar nada más se inició el Sexenio, como tuvieron los escolares de otras universidades tales como Madrid o Sevilla⁵. Sin embargo, no se tiene noticia de la existencia de ningún ejemplar de esta publicación, y dudamos que se publicase ya que incluso Luis Tramoyeres lo duda en 1880, cuando escribe su catálogo de periódicos.

Ya nombres universitarios encontramos bastante después en la publicación que naciera como órgano impreso de la sociedad Liceo Literario. Nacería esta sociedad en octubre de 1873 a partir del impulso de cinco jóvenes que, deseando superar las limitaciones del estudio individual, aspiraban a crear un foro de discusión e intercam-

⁴ Luis Tramoyeres Blasco, *Catálogo de los periódicos de Valencia. Apuntes para formar una biblioteca de las publicaciones desde 1526 hasta nuestros días. De la Revista de Valencia 1880-1881*, Valencia, Imprenta Doménech, 1881.

⁵ Ernest Sánchez i Santiró, *Científics i professionals. La facultat de Ciències de València (1857-1939)*, Valencia, Universitat de València, 1998, p. 229.

bio que se abrió a la participación de las personas que compartieran con ellos la afición a las letras, las artes y el estudio.

No podemos decir que fuera esta sociedad exclusiva de los estudiantes, pues nada hemos encontrado que lo diga explícitamente. Sin embargo, estudiantes eran sus cinco fundadores y para estudiantes estaba pensada su organización, ya que contaba con las mismas secciones que facultades se ofrecían en esta universidad, además de las secciones de música y de literatura.

Por esto podemos hablar del boletín de esta sociedad como una revista impresa de los estudiantes de Valencia, aunque nada más hay en ésta que delate un objetivo distinto que el cultivo de las artes, ciencias y letras copiado del ejemplo de otras sociedades ya no de estudiantes, sino de adultos, que con los mismos fines habían sido y eran en la ciudad.

Bajo el título *Boletín Revista del Liceo Literario de Valencia*⁶ salía con una periodicidad mensual, en enero de 1875. En octubre de 1875 su dirección es adjudicada a Constantí Llombart, quien presidió la publicación hasta la extinción de la sociedad en 1876.

En esta publicación los socios del Liceo Literario encontraban el medio de dar mayor extensión temporal y territorial a sus composiciones poéticas y trabajos literarios y científicos. Nada observamos que se refiera a la universidad, nada de defensa de intereses corporativos, nada que muestre un sentimiento de comunidad ni una conciencia de vivir una situación común. Entre sus composiciones poéticas y artículos de divulgación científica no hay alusión a la vida estudiantil ni al carácter escolar de la mayoría de sus miembros.

A la Restauración alfonsina siguió un periodo marcado por la obsesiva búsqueda de la instauración del buen orden, en confrontación a una anarquía que era para los actuales dirigentes, característica propia de la época republicana. Dentro de las líneas en las que se desarrolló esta política se encontraba una notable limitación de las libertades públicas, y entre ellas, la de expresión y prensa.

Como ha expuesto Antonio Laguna⁷, al golpe de estado de Sagunto continuó en materia de medios de comunicación, la impo-

⁶ *Boletín Revista del Liceo Literario de Valencia*, año 1, número I, (enero 1875), Valencia, Imprenta de Piles, 1875.

⁷ Antonio Laguna Platero, *Història de la comunicació: Valencia, 1790-1898*, Universitat de Barcelona, Barcelona, 2001, pp. 225-228.

sición de «una nueva legalidad, primero de excepción y al final de represión», de modo que las medidas excepcionales inmediatas al golpe, que prohibían las publicaciones antimonárquicas y extendían a todas la censura, pasó al orden ordinario al fijarse en la legislación.

El día de fin de año de 1875, al año de la reinstauración, se fijaban las medidas antes excepcionales con la creación de un tribunal especial para delitos de imprenta, y así se mantenía en ley de 7 de enero de 1879, en la que además se establecían considerables tasas sobre la publicación de diarios y revistas. De este modo quedaba bastante vacía la afirmación recogida en la constitución de 1876, en su artículo decimotercero, de que «todo español tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento semejante».

También a las aulas de las universidades y centros de enseñanza alcanzó la política represiva canovista, que en el ámbito de las publicaciones estudiantiles produjo una absoluta ausencia de cualquier manifestación escrita. Pero además de la amenaza de la censura la situación restrictiva afectaba por otra vía a las posibles publicaciones escolares: la burocratización.

La materialización legislativa de este decidido control gubernamental tenía como consecuencia una gran complejidad de los trámites y pasos para poder sacar cualquier publicación periódica. Se hacían necesarios informes, licencias, presentación previa de copias, y otros trámites que frenarían cualquier iniciativa de sacar publicaciones de corta tirada y nula rentabilidad como fueron las escolares, destacando el establecimiento de un pago previo de 500 pesetas de subsidio industrial para los propietarios de periódicos que no pagasen 250 pesetas de contribución territorial, lo que puso en grandes dificultades incluso a muchas publicaciones comerciales⁸.

De este modo, frenados por las restrictivas disposiciones gubernamentales para el establecimiento de periódicos, revistas y publicaciones periódicas, los estudiantes valencianos tuvieron que contentarse inicialmente con utilizar los órganos escritos de otras instituciones de la ciudad de Valencia para dar noticia de sus actividades.

⁸ María Cruz Seoane, *Historia del periodismo en España*, Madrid, Alianza, 1990, tomo II, p. 253.

Así lo hicieron las dos asociaciones estudiantiles que en aquel momento funcionaban, siendo la vía para su expresión la revista *Valencia Ilustrada*⁹. Esta publicación nace con intención de salir semanalmente, del impulso del Ateneo-Casino Obrero que en 1877 se crea esta ciudad, con el impulso inicial de Francisco Vives y Mora.

En la intención de Vives y Mora estaba que *Valencia Ilustrada* no fuese únicamente el medio impreso del Ateneo-Casino, sino que debía acabar convirtiéndose en el semanario cultural de Valencia, donde se recoja la actividad cultural y asociativa de un modo interclasista, de acuerdo a los planteamientos sociales de su impulsor, que se distingue como activo impulsor de la mejora social obrera y de la superación de la cuestión social.

Desde estos planteamientos en las páginas de *Valencia Ilustrada* se propone en su primer número instituirse como portavoz de todas aquellas sociedades científicas, culturales y artísticas, siendo varias las que respondieron al llamamiento. La mayoría de estas sociedades poseían ya sus propios órganos impresos, y simplemente aceptaron participar esporádicamente en las secciones de la revista. Tales fueron los casos de la Sociedad Arqueológica Valenciana o la Sociedad Económica de Amigos del País. Sin embargo, la Sociedad del Estudio del Derecho y la Sociedad Escolar Médica, carentes de sus propios boletines, hicieron de *Valencia Ilustrada* su órgano oficial.

El reflejo de la evolución de la participación de los escolares en esta publicación se puede seguir en la variación de las cabeceras de la revista. Salía la revista el 6 de mayo de 1877 bajo el epígrafe *Valencia Ilustrada. Revista Semanal de ciencias, artes, literatura, industria y comercio*. Y aunque ya en el primer número colaboraba la Sociedad Escolar Médica, no sería hasta a partir de su segundo número cuando ya se añadiría bajo su título originario «*Órgano oficial del Ateneo-Casino Obrero y de las Sociedades del Estudio del Derecho y la Escolar Médica*».

Tal fue la denominación oficial durante doce números de esta revista, por lo tanto durante tres meses. A partir del número catorce de la publicación desaparecía el nombre de las sociedades escolares de su título, aunque su colaboración aún se alargará algo más en el tiempo.

⁹ *Valencia Ilustrada*, Valencia, Imprenta M. Alufre, 1877.

Sin embargo, realmente era excesivo definir la revista como la publicación oficial de esas sociedades escolares. Su participación es bastante limitada. Aparte de la publicación de algún artículo o composición de los socios escolares, las apariciones de las sociedades se limitan a llamadas, resúmenes y convocatorias en la sección de *Corporaciones*. Además estas sociedades se involucraron de un modo bastante diferenciado. La Sociedad Escolar Médica aparece una quincena de veces, sin embargo, la del Estudio del Derecho apenas lo hace tres, limitándose a los primeros meses, cuando la revista se presenta como su órgano oficial.

Aunque en sus primeros meses de vida el director de la publicación se felicitaba de no ser una de esas revistas que desaparece en tres meses, tampoco duró mucho en el espectro editorial. El último número que conocemos coincide tanto en el archivo como en los anuncios en la prensa: tras setenta y un números, *Valencia Ilustrada* desaparece de nuestro seguimiento, y creemos adecuado afirmar que desaparece de la imprenta.

2. *La libertad de prensa: el apogeo de las revistas científico-literarias (1881-1883)*

Llegaba en 1881 la instauración efectiva del turno en el gobierno del Estado y ello se materializaba en una suavización de las limitaciones a la libre prensa. El primer paso fue el indulto general a todas las publicaciones y escritores en 1881, que se consolidaba con la redacción de una nueva ley de prensa en 1883.

Esperando este momento parecían estar muchos grupos de la sociedad, de tal modo que los últimos veinte años del siglo XIX se caracterizan, respecto a la prensa, por una multiplicación de las tiradas, una renovación de los temas e intereses, un precio cada vez más asequible y una diversificación de las presentaciones¹⁰.

Entre los grupos que esperaban este momento podemos situar a los estudiantes, pues fue entonces notable la eclosión de publicaciones escolares. Frente al vacío anterior, nada menos que cinco periódicos elaborados por alumnos de la universidad salieron de la imprenta en el curso 1881-82, el primero tras el cambio de gobierno.

¹⁰ María Sánchez Agustí, *La educación...*, p. 23.

El primer periódico escolar salió vinculado al movimiento asociativo. Como ya hemos visto existieron en la ciudad agrupaciones de estudiantes que se reunían con el fin exclusivo del cultivo de las ciencias y la profundización de los saberes que estudiaban en la universidad. De la mano de una de ellas surgía en marzo de 1881 la primera de las revistas creadas exclusivamente por estudiantes para estudiantes, con el mismo nombre que la sociedad a la que estaba vinculada *La Amistad Escolar Médica*. Un carácter puramente científico define esta primera publicación, que copia el ejemplo de los boletines de las distintas asociaciones culturales de la ciudad, como el Ateneo Científico.

Por lo tanto del movimiento asociativo surgía la pionera de las publicaciones universitarias, inspirada por la concepción de que...

[...] no nos basta que la juventud se agrupe en Sociedades o Ateneos, necesitamos más: necesitamos que la imprenta, ese buril del pensamiento, transmita a otros tiempos y a otros pueblos nuestros conceptos¹¹.

Sin embargo, parece que como portavoz de la asociación, *La Amistad Escolar Médica* tuvo poca vida, pues a finales de año aparecía *El Eco Escolar Médico* que se atribuía la portavocía de aquella agrupación, destinada inicialmente sólo para los socios.

Desapareció, como sabemos, la sociedad Amistad Escolar Médica en el verano de 1882, pero la publicación a la que habían dado a luz sobrevivió a su predecesora. A partir de entonces bajo el mismo título se publica una revista mensual «consagrada al progreso de las ciencias médicas y a la defensa de los intereses escolares».

Después de que *La Amistad Escolar Médica* abriese el camino a las publicaciones escolares, éstas se liberan de la tutela de cualquier asociación en las siguientes cabeceras. A finales del mismo curso *La Enciclopedia Valenciana* y a inicios del siguiente *La Unión Escolar* y la enigmática cabecera ¡X! son ya independientes de cualquier agrupación. Asimismo reniegan estas publicaciones de la división por facultades que viene predominando entre las sociedades escolares. Aunque pueda ser que en sus redacciones dominen los estudiantes de una facultad concreta, así por ejemplo *La Enciclopedia Valencia-*

¹¹ *La Amistad Escolar Médica*, año I, número 1, (15 de marzo de 1881), Valencia, Imprenta Viuda de Ayoldi, actual de M. Manáut.

na es claramente iniciativa de los estudiantes de medicina, se debe simplemente a cuestiones de compañerismo y amistad del grupo fundador, no a restricciones a ningún escolar sea cual sea su centro de estudios, pues se dirigen incluso a los alumnos no universitarios.

Por lo tanto liberados de las asociaciones y de carácter abierto e interdisciplinar, nuevas secciones aparecen en las secciones de las publicaciones con un carácter más lúdico y menos estrictamente científico. La más destacada es la irrupción de la literatura, la mayor de las aficiones de los jóvenes estudiantes. Se convertían en publicaciones científico-literarias, en las que las composiciones de los escolares, en prosa o en verso, sobre los más variados temas, van ocupando cada vez más espacio.

La intención de las nuevas publicaciones de dirigirse a escolares de todos los centros llega a su máxima expresión en la intención de *La Unión Escolar* de ser la única de las publicaciones que dedicada a este público se edite en la ciudad. Por supuesto la existencia de sus dos contemporáneas competidoras muestra el fracaso de su ambiciosa intención. Pero pese a ello una cosa se hacía patente: para aspirar al público más abierto posible es necesario renunciar a cualquier contenido político o tendencia ideológica, siendo además más que recomendable declararlo explícitamente, tanto para evitar malentendidos con las colaboraciones, como sobretodo apaciguar el ojo vigilante de las autoridades, que aún se rigen por las restrictivas disposiciones canovistas.

El apoliticismo aún continuará siendo intención declarada de este tipo de publicaciones por largo tiempo.

Con el fallecimiento de estas diversas publicaciones, que debió producirse a lo largo de 1882, se consumía la irrupción de publicaciones escolares, como de muchas otras profesionales, informativas, y de variada temática, cuya aparición había sido propiciada por la relajación de las medidas restrictivas. Los escolares han mostrado con fuerza su voluntad de crear expresiones escritas de interés científico y de su identidad como colectivo. A partir de ahora las siguientes revistas y los periódicos que vayan naciendo desde las aulas se escalonarán mucho más en el tiempo, y habrá que esperar bastante para ver otra vez lo coexistencia de varias cabeceras de esta naturaleza.

Sin embargo, tras esta primera época ya quedaban establecidas las distintas secciones que iban a convertirse en constantes en las revistas estudiantiles posteriores. Éstas serán:

- La sección científica. Es un espacio abierto a los estudiantes. A ella se pueden remitir los trabajos de los estudiantes sobre las disciplinas que trata la revista. Generalmente estamos hablando de resúmenes de lo oído en la cátedra o de los trabajos y discusiones de las sociedades escolares. Por lo tanto son trabajos de escasa calidad, nula originalidad y carácter superficial, pero que ayudan a los escolares a asentar conocimientos y mejorar su redacción científica.
- La sección literaria. Donde los escolares pueden hacer sus incursiones en la creación literaria pues se dedica fundamentalmente a recoger las composiciones, ya en prosa como en verso, de los estudiantes más aficionados a las letras, que son muchos. Con el tiempo también se publicarán textos de distintos autores españoles, verdaderos ídolos para nuestros escolares.
- La sección de noticias. A la información sobre la normativa, disposiciones y decretos que atañen a la educación se dedicará esta sección. A veces con cierta crítica, pero aún sin un carácter realmente reivindicativo, se dedican todavía a cuestiones concretas, tal asignatura, tal profesor, pero no a debatir la base del sistema educativo. Habrá que esperar para que cada vez las opiniones se vuelvan más reivindicativas y profundas.

También tendrán aquí cabida las noticias propias de los centros educativos de esta ciudad, a veces incluso con aire de crónica social.

- La sección de corporaciones. Las distintas sociedades de estudiantes de la ciudad, cuando las haya, así como otros centros culturales de la ciudad, publicarán aquí sus actividades y comunicados, así como resúmenes de sus sesiones.
- Los anuncios privados ocupan generalmente las últimas páginas de las revistas. Anuncian productos específicos para escolares como libros, material médico y academias, tanto como otros más generales pero que los estudiantes también consumirían con placer, como dulces, trajes y sombreros y restaurantes, cafés y salones. De este modo las publicaciones intentan completar su financiación, pues únicamente se mantienen de los recursos que sean capaces de lograr, ya que carecen de cualquier tipo de ayuda o subvención ni de la universidad y centros educativos, ni de ninguna institución valenciana.

Estas secciones se mantendrán en las siguientes publicaciones, aparte de características especiales o apartados nuevos. Así en 1883 *La Correspondencia Escolar* viene a llenar la vacante dejada en la prensa escolar por el fracaso de sus predecesores, aportando a las secciones ya vistas como novedad el intento de aumentar las relaciones entre los estudiantes y los ya graduados.

En un intento de incrementar los vínculos entre ambos colectivos, el estudiantil y el profesional, *La Correspondencia Escolar* se ofrece a los médicos en ejercicio, especialmente a los rurales ya que viven las peores condiciones de trabajo, y los profesionales del derecho, primeramente para que se expresen en sus páginas sobre aquello que crean que pueda ser interesante para los estudiantes en condición de futuros profesionales, pero también como lugar de denuncia de los abusos y polémicas que afecten a la profesión.

Sin embargo, la realidad se impone. Graduados y estudiantes se muestran como colectivos demasiado diferenciados y de intereses distintos, de tal modo que la iniciativa de *La Correspondencia Escolar* no será recogida por sus sucesoras hasta bien entrado siglo XX.

Sin embargo, tras esta hornada de publicaciones ya se había fijado el modelo de revista, como muestra *El Estudiante Médico-Valenciano*. Los jóvenes de la estudiantina de medicina de 1884 imprimieron esta cuartilla que imita el formato que se considera típico de las publicaciones escolares. No se trata sino de una caricatura, un imitación humorística de apenas dos cuartillas para repartir entre los jóvenes en tradicional y carnavalesca cuestación a favor de los huérfanos de la Casa de Niños de San Vicente, donde las noticias y artículos se han sustituido por bromas y chistes, pero muestra la consolidación de las secciones y los formatos de las revistas estudiantiles.

Pero tras esta publicación se abre uno de los más amplios periodos en los que, tras su aparición en 1881, las publicaciones escolares parecen desaparecer de la ciudad de Valencia, coincidiendo con un nuevo cambio en el gobierno.

En enero del 1884 vuelve a la presidencia Antonio Cánovas y, en el mismo momento, se interrumpe la vitalidad de la prensa escolar. No se anuló la ley del 1883, pero, como han señalado J. F. Fuentes y J. Fernández Sebastián¹², «el desfase entre las libertades formales

¹² Juan Francisco Fuentes y Javier Fernández Sebastián, *Historia...*, p. 176.

proclamadas por la constitución y por la ley de imprenta de 1883 y el ejercicio real de las mismas estaba en la propia naturaleza del sistema canovista». Un mismo texto legal puede ser interpretado siempre de distintas maneras. Los gobiernos conservadores cuando apliquen la legislación de prensa y de expresión siempre optarán por la interpretación más restrictiva. No se necesita cambiar la ley, que ya quedará vigente hasta 1931.

3. *La intervención de los bachilleres (1889-1895)*

Solamente con un nuevo gobierno liberal, y ya a fines del mismo, vuelve a aparecer la prensa escolar, y lo hace con una singularidad nueva, la intervención de los estudiantes de bachillerato. Si en la etapa inicial la labor e iniciativa periodística había correspondido a los estudiantes de las facultades, ahora son los alumnos de las aulas del instituto general y técnico de Valencia los que parecen asumir aquel activismo abandonado por sus mayores.

Cinco publicaciones conocemos de esta segunda hornada. Es *La Voz Escolar* la que retoma la labor periodística, y en ella la participación de universitarios, aunque existente, es minoritaria frente a los nombres de estudiantes de secundaria. Quizás por la nueva naturaleza de sus redactores es el ocio, en detrimento de la difusión científica, el carácter dominante en esta publicación, en la que pasatiempos y composiciones literarias acaparan el espacio.

Por lo tanto parecen los futuros bachilleres menos intelectuales que sus compañeros universitarios, pero desde luego no son menos ambiciosos, ya que la novedosa característica de su revista es su intención de superar el ámbito de la ciudad de Valencia, término de actuación de las publicaciones anteriores, para proclamar su intención de alcanzar un ámbito nacional, declarándose como la revista de todos los estudiantes españoles.

Sin embargo, las ambiciosas intenciones de estos jóvenes quedaron en nada ante el peso de la fractura vacacional. *La Voz Escolar* parece desaparecer al final de curso, aunque pronto una nueva cabecera llenaría su espacio. Igualmente con gran participación de estudiantes del instituto, bajo el auspicio de su director Manuel Polo y Peylorón se edita, con las secciones clásicas, *El Aula*.

Por el contrario, al año siguiente encontramos una publicación que rompe con la tradicional estructura de los periódicos escolares.

De la mano del también estudiante de secundaria Maximiliano Thous aparece *El Bachiller*, que abandona el esquema de las publicaciones científico-literarias, para hacerse eco del gran éxito que las publicaciones satíricas tienen entre nuestros escolares. De este modo de la pluma de Maximiliano Thous ya no salen artículos sobre la historia y la ciencia, sino caricaturas y chistes sobre cuestiones escolares como las calificaciones. Sin embargo, la propuesta de *El Bachiller* queda como un caso aislado y único.

Un nuevo gobierno conservador vuelve a marcar un lapso vacío de prensa escolar. La iniciativa retomada por los estudiantes a fines del gobierno de Sagasta vuelve a cortarse con el inicio de un gabinete presidido por Cánovas a mediados de 1890 y no reaparecerá hasta el retorno de Sagasta a fines de 1892.

Tras estos años, las dos publicaciones que siguen retornan a la tradicional estructura de las revistas científico-literarias. Pero además con ellas los estudiantes de los centros superiores de educación retoman la iniciativa que habían cedido a favor de los del instituto. Nuevamente escolares de las facultades valencianas están detrás de *La Semana Escolar* en 1892, y de *Heraldo Escolar* en 1895.

La primera de éstas salía pocos días antes del acceso de Práxedes Mateo Sagasta al gobierno. Fue la publicación pionera entre las estudiantiles en recoger la realidad plurilingüe de este país, de tal modo que en ella se admitirán escritos en cualquiera de las lenguas que en España se hablan, sin nombrarlas. Sin embargo, no parece que haya supuesto tal paso un gran éxito, pues en los ejemplares que conocemos no se puede encontrar más que la lengua castellana.

El *Heraldo Escolar* será, por su parte, una de las escasas publicaciones escolares que surgieron durante un gobierno canovista.

4. *Letargo (1896-1909)*

Tras la desaparición del *Heraldo Escolar* viene un tiempo de similar longitud, quince años, en el que solamente conocemos la existencia de tres publicaciones estudiantiles.

Tras 1895 parece agotarse la iniciativa periodística de los escolares valencianos. Siete años serán los que se esté sin ninguna expresión escrita propia. Sólo encontramos la participación de universitarios en otro tipo de publicaciones, no escolares, órganos impresos de agrupaciones políticas, generalmente de sus secciones juveniles.

En 1902, tras siete años de vacío, surge *Los Estudiantes*, que se adscribe perfectamente al tradicional esquema de las publicaciones escolares de carácter científico-literario. Para superar la brevedad de sus antecesoras, *Los Estudiantes* intentó ganarse la atención del público sumando a las secciones tradicionales una «sección productiva» que premiaría con recompensas en metálico a aquellos estudiantes que contesten a sus pasatiempos y jeroglíficos.

Si esto ocurría a inicios del año, ese mismo 1902 aparecía en diciembre otra publicación escolar. Ésta correspondía a un tipo de publicación que no veíamos desde 1881, y que había sido el primero en aparecer, el iniciador de la actividad periodística estudiantil: el de las publicaciones vinculadas a asociaciones de escolares para la profundización del conocimiento. El *Boletín de la Academia Médico-Escolar del Ateneo Científico* era, evidentemente, el órgano impreso de la sociedad de estudiantes de medicina que en los salones de la vieja institución cultural valenciana, ya decadente, se reunían para tratar casos teóricos e historias clínicas con las que completaban y asentaban los conocimientos en las aulas adquiridos.

Pero tras el *Boletín* vuelven los años de vacío. En los siguientes siete años únicamente asistimos a la existencia de una cabecera, *Tribuna Médica*, que durante al menos los años 1907 y 1908 fue el órgano de la Academia Médico Escolar del Instituto Médico Valenciano, y que empezó a publicarse como *Boletín de la Academia Médico-Escolar* en 1907, para cambiar de nombre en noviembre de 1908.

Quizás no deba extrañarnos la escasa productividad de estos años. Con las guerras coloniales, el 98, y los difíciles momentos políticos que vive España en el salto de siglo, no eran los momentos más sosegados. Los «aparatos ortopédicos», como denominó Cánovas a los mecanismos para corregir desviaciones, funcionaron plenamente en este periodo, con numerosas suspensiones de las garantías constitucionales. Varios periodistas y directores pasaron por las celdas en este periodo. Malos años, pues, para los principios de libertad de prensa, como se materializó en el asalto por parte de los militares a las redacciones de *Cu-cut!* y *La Veu de Catalunya*¹³ que lejos de ser corregidas por el gobierno, dieron paso a la ley de jurisdicciones de

¹³ 200 anys de premsa diària a Catalunya. 1792-1992, Fundació Caixa de Catalunya, Barcelona, 1995, p. 290; y Jaime Guillaumet, *Història de la premsa, la ràdio i la televisió a Catalunya, 1641-1994*, La Campana, Barcelona, 1994, pp. 87-93.

1906, que establecía jurisdicción militar sobre los delitos de expresión contra la patria o el ejército, y que aún se pretendió endurecer bajo el gobierno de Antonio Maura con una ley de terrorismo que no llegó a aprobarse por el rechazo de la casi unanimidad de la prensa.

5. *Renacimiento y apogeo (1910-1916)*

Sólo con un largo periodo de gobiernos liberales, de finales de 1909 a 1913, con Segismundo Moret, Canalejas y Romanones sucesivamente en la presidencia, conseguían los escolares recuperar el ritmo de los mejores años de las publicaciones estudiantiles. Casi treinta años habían transcurrido desde el primero de estos periódicos. Ahora volvían con renovado vigor, pero después de tanto tiempo, el estilo ya no iba a ser exactamente el mismo. Con el nuevo empuje aparecen también nuevos contenidos, nuevas presentaciones, nuevas actitudes y nuevas tipologías.

Ya en la publicación que inicia este periodo encontramos algunas de estas novedades. En *Estudios* ya se aprecia un cambio de disposición. Las influencias del Regeneracionismo han llegado a los escolares, y temas generales de moda como las propuestas europeizadoras de Costa logran espacio entre las cuestiones propiamente estudiantiles, que por otro lado se tratan ya de un modo más general. Ya no se habla exclusivamente de la imposición de tal libro excesivo precio, sino de cuestiones amplias de pedagogía y de concepción del sistema educativo.

Ese espíritu regeneracionista, renovador, se materializa tanto en los contenidos como en las cabeceras, y ese mismo año aparece otra publicación con el título de *Adelante*. En ella además encontramos la aplicación en una publicación escolar de las modernas técnicas y modas editoriales: el formato de revista frente los antiguos de periódico y libritos de cuartillas, y sobretodo, la fotografía.

Ese mismo año, unos meses antes, aparece un caso único y especial, una nueva tipología que no habíamos visto antes ni veremos después entre las publicaciones escolares, ya que se debe a un hecho muy concreto y especial. *Pro-Patria* nace como consecuencia de la campaña de recolección de fondos para homenajear a los caídos en la guerra africana. Sus autores son estudiantes, pero como *Órgano en la prensa del Comité Ejecutivo del Monumento a Noval y héroes*

valencianos de la guerra en el Riff, su contenido no es escolar, sino que nace para dar a conocer el heroísmo de los caídos, la labor del comité y los nombres y cantidades de los donantes.

De este modo los estudiantes vuelven a la imprenta después del mayor vacío de revistas escolares con una vitalidad desconocida desde hacía veintinueve años, sólo superada por las energías de las revistas de los primeros estudiantes periodistas que sacaron cinco publicaciones en el año 1881.

Algunos de aquéllos que habían protagonizado este renacer del periodismo escolar hicieron de puente entre promociones al participar en las posteriores publicaciones. En *Boletín Ateneo Escolar*, en 1913, encontramos la herencia de *Adelante* a través de algunos redactores que participan en ambas. Por la experiencia de éstos fue la obsesión, fracasada, del *Boletín* evitar los errores que a su vista habían provocado el fracaso de sus predecesoras.

Sin embargo, también *Boletín Ateneo Escolar* fracasa. Realmente, más allá de sus declaraciones, no aportaba nada nuevo.

El nuevo gobierno conservador, con Eduardo Dato a la cabeza no supondrá ya un freno al vigoroso movimiento periodístico escolar. En contra de la tradición conservadora, el gabinete de Dato suavizó el enfrentamiento y la represión sobre la prensa con medidas como la ley de 5 de diciembre de 1914 que concedía una amplia amnistía a las personas condenadas por delitos de imprenta¹⁴.

Aprovechando estas circunstancias, frente a las tradicionales publicaciones apolíticas, *El Escolar*, que aparece antes de que la amnistía cumpla un mes, viene marcado por una línea mucho más agresiva. Con participación nuevamente de estudiantes de secundaria, las críticas políticas, las arengas a la movilización estudiantil, a la manifestación y la huelga incluso, el rechazo reiterado al ministro Bergamín... son las expresiones del carácter reivindicativo de esta publicación, protegida e inspirada por elementos no escolares, en la que el mundo del espectáculo es la segunda gran dedicación. Varias de sus páginas se dedicarán a recoger noticias de las artistas de baile y la canción, ya no sólo de los grandes literatos, mientras que en sus fotografías, que otros dedicarán a notables pensadores, reproducen los retratos de las más bellas y conocidas de estas artistas.

¹⁴ Josep Lluís Gómez Mompert, *La gènesi de la premsa de masses a Catalunya (1902-1923)*, Barcelona, Portic, 1992, p. 44.

Frente a ella, al año siguiente, 1915, la *Revista Escolar*, que recoge la herencia de las revistas apolíticas de ciencias, noticias y literatura, pero impregnadas del nuevo espíritu de regeneración. Los nombres de Giner de los Ríos, Miguel de Unamuno o Francisco Moliner son los referentes de esta revista, y a ellos dedica sus páginas, reproduciendo y comentando sus textos y concepciones sobre la educación, y ellos son los retratados en sus ilustraciones y fotografías.

Ese interés pedagógico y esos ídolos intelectuales también están presentes, ya en el curso siguiente, en *Atenea. Revista de Juventud*. Igualmente declarando intenciones apolíticas, los nombres del noventa y ocho y de la Regeneración son los referentes de esta revista que, a los temas educativos, dietarios y escolares sumará un interés artístico de la mano de graduados y estudiantes de Bellas Artes.

De la mano de algunos de los antiguos miembros de *Atenea* vendrá como sucesora al año siguiente *Renacimiento*. Con esta publicación se ofrece al lector una revista moderna, que incluía ya las recientes innovaciones que se van implantando en la prensa periódica. En sus páginas se reproducen dibujos en líneas con los nuevos estilos de la ilustración, las fotografías son bastante numerosas en sus páginas y aparece por primera vez la entrevista, o «la interviú» como modo de periodismo, que pasará a ser una sección fija en la revista.

Sin embargo, un factor externo tanto a la comunidad escolar como a los gobiernos de la nación iba a acabar con este florecimiento de revistas estudiantiles: la guerra mundial. La guerra en Europa supuso la ausencia casi absoluta de importaciones de papel. J. F. Fuentes y J. Fernández calculan que los efectos de la guerra sobre el papel triplicaron, junto con el monopolio efectivo logrado por Papelera Española, su valor, al que se sumaban los aumentos generales de la electricidad que movía las rotativas o el gas que calentaba los hornos de la linotipia. La situación era tan grave que el gobierno se vio obligado a intervenir en auxilio de las empresas editoriales, estableciendo anticipos reintegrables a las empresas periodísticas para la adquisición de papel, por el decreto de 26 de septiembre de 1916.

Periódicos firmes y establecidos como *El Pueblo*¹⁵ pasaron notables dificultades en estas situaciones. Desde luego, en estas condi-

¹⁵ Antonio Laguna Platero, *El Pueblo, historia de un diario republicano, 1894-1939*, Valencia, Institució Alfons el Magnànim-Diputació de València, 1999, pp. 215-223.

ciones, los escolares quedaban totalmente privados de emprender cualquier empresa periodística, incapaces de competir en el mercado del papel.

Ni siquiera el fin de la guerra no supuso el retorno de la normalidad, como muestras las variadas disposiciones legales sobre el precio del papel y de los periódicos a lo largo 1919 y 1920, hasta que en 1921 ya se fijaban las condiciones de importación de papel.

6. *Confesionalidad o independencia (1921)*

Cinco años pasan desde *Renacimiento* hasta la vuelta de los estudiantes a las imprentas de Valencia. Lo hacen en 1921 con dos proyectos de carácter totalmente distinto.

Los creadores de *El Estudiante* recogen la vieja línea que huye de las ideologías para intentar abrirse al más amplio colectivo estudiantil. Es un caso atípico en el que una publicación nacida en el instituto logra sobrevivir al paso de sus redactores a la educación superior. Entre estos redactores encontramos la primera mujer que participa en la creación de una de estas publicaciones.

Frente a ello nace el mismo año *Libertas*. Hasta ahora las publicaciones estudiantiles se habían caracterizado por su intención de estar abiertas a toda la clase escolar. Únicamente, en las revistas médicas, los límites de la disciplina que se estudiaba había marcado en algunas ocasiones grupos más reducidos de destinatarios. Para ello muchas habían apostado directamente por una neutralidad ideológica y apolitización. Aunque en algunas de ellas pueda verse una cierta corriente de pensamiento, nunca la ideología había definido explícitamente los márgenes de ninguna publicación. Ahora lo hacían por primera vez los creadores de *Libertas*.

Por lo tanto, nos encontramos por primera vez con la expresión de un colectivo escolar definido por su ideología. No queremos decir que antes los escolares carecieran de ideologización, ya que el estudio del movimiento asociativo y del activismo estudiantil lo desmiente, pero sí que nunca había tenido una expresión impresa propia, prefiriendo para manifestarse las páginas de las publicaciones de las agrupaciones políticas en las cuales bastantes militaban.

Libertas es el órgano de expresión de las asociaciones de estudiantes católicos, es decir, de un colectivo definido además de por

su condición estudiantil, por su confesionalidad explicitada orgulosamente. Era una revista vinculada a la Federación de Estudiantes Católicos de Valencia y con la Confederación de Estudiantes Católicos de España, dos asociaciones que se habían formado a raíz de las reformas de Silió, quien por primera dio participación a los estudiantes en el gobierno de las universidades. Aunque abierta a todas las asociaciones escolares católicas, *Libertas* no cree en la neutralidad:

Si la enseñanza es un problema vital, no puede prescindirse en ella de la religión. La prueba de esto es la campaña sectaria continuamente realizada. Y si se ha hecho campaña contra la Religión católica, ¿por qué no defenderse? Para esto no basta la neutralidad, pues, como decía Montesquieu, para desdoblarse una tabla doblada, fuerza es desdoblarla en sentido inverso¹⁶.

Lejos de ocasionarle problemas, tal posición, con el respaldo de la Federación, le permitió ser una de las publicaciones de más larga existencia, evolucionando en su formato y sus secciones para constituirse como una de las más modernas y diversificadas.

7. Conclusiones

Estas son las revistas elaboradas por estudiantes localizadas en los archivos y bibliotecas. No podemos excluir la existencia de alguna más. Cada una tuvo, como hemos visto, peculiaridades propias, pero asimismo son muchas las características comunes.

Surgen algunas de los escolares de nuestra universidad, a veces de una sola de sus facultades, y otras de los del instituto de segunda enseñanza, pero por lo general no son revistas concebidas con tal división, sino que pretenden alcanzar público entre los alumnos de todos centros educativos.

En origen «el espíritu de indagación, discusión e ideación científica que nos preocupa¹⁷» fue la excusa de su aparición, publicándose en ellas artículos científicos que Rafael Altamira —que parti-

¹⁶ *Libertas*, año 1, n.º 1, Valencia, Imprenta Meliá, 1921, p. 3

¹⁷ *Boletín de la Academia Médico-Escolar del Ateneo Científico*, año 1, n.º 1, (diciembre 1902), Valencia, Imprenta Soto.

ció en ellas— calificó de «puro resumen, como no podía por menos de ser, de lecturas hechas sin verdadera orientación»¹⁸.

Pero pronto la defensa de los estudiantes fue ganando cada vez más peso como su razón de ser, comprometiéndose a «defender, en cuanto este de nuestra parte, los intereses de los escolares», es decir, a ejercer una labor reivindicativa a favor de los estudiantes.

Del mismo modo también la afición literaria fue ganando espacio en las páginas de las diferentes publicaciones, porque:

[...] todo el mundo sabe lo útil que es la literatura para el hombre que, cual sea su estado social, aspire a poseer una completa y sólida instrucción.

Sin embargo, la pugna ideológica no solía tener cabida en ellas. «No trataremos de política ni en broma»¹⁹ dice uno. «Nos despojamos de toda cuestión política»²⁰, dice otro; y expone una tercera:

[...] nada, absolutamente nada, para la política de cuya ardiente arena procuraremos alejarnos todo lo posible, no ocupándonos de ella mientras no nos obliguen los intereses escolares, cuya defensa es el único móvil de nuestra publicación²¹.

Son mayoritariamente publicaciones independientes de cualquier institución, que sólo salen a la luz por el empeño de unos cuantos estudiantes, y que no logran persistir por largo tiempo, brevedad que ya percibió Unamuno²²:

Recibo la carta en que me participa usted, señor mío, el propósito que varios estudiantes de ésta abrigan de fundar una nueva

¹⁸ Rafael Altamira, *Rafael Altamira 1866-1951*, Alicante, Instituto de Estudios Juan Gil-Albert / Diputación Provincial de Alicante, 1987, pp. 7 y 16.

¹⁹ *Los Estudiantes*, (8 enero de 1902), Valencia, Imprenta Menosi, Vilar y Perigüel, p. 1.

²⁰ *La Unión Escolar*, (5 de octubre de 1881), Valencia, Imprenta E. Pascual.

²¹ *La Correspondencia Escolar*, prospecto, Valencia, Imprenta de Ramón Ortega, 1883.

²² *Revista Escolar*, año 1, n.º 1, (9 de enero de 1915), Valencia, Imprenta Hijos de F. Vives, p. 1.

revista escolar. Que durará, me figuro, lo que todas las análogas: lo que flor de primavera.

Una brevedad que no debe resultarnos extraña, ya que es consecuencia lógica del paso de las distintas promociones de estudiantes y de su carácter:

Así será y debe ser. Todas esas obras escolares duran poco. La masa escolar, en todas partes, y más en España, es algo movedizo y sin gran cohesión. Sucédense las generaciones, unas tras otras, con muy débil lazo de tradición común. Ninguna federación escolar ha podido durar. Los que la dirigen, los de la junta, son naturalmente de los últimos cursos y salen pronto de la estudiantina.

Son, por esa misma independencia respecto a las instituciones de la ciudad, publicaciones de las que ha quedado poca huella en los archivos valencianos, conservándose pocos números, muchas veces sólo el primer ejemplar, otras los prospectos que se imprimieron para darla a conocer. Desconocemos por tanto, por lo general, su duración, pero debió ser escasa en casi todos los casos, ya que las listas de prensa nunca recogen la presencia de ninguna de estas publicaciones en dos años distintos²³.

Para solucionar esta corta supervivencia es también don Miguel quien propone la solución: involucrar en la empresa elementos estables, que perduren en el tiempo, de tal modo que constituyan lazos entre promociones, y en la universidad lo más permanente es el profesorado:

Observen ustedes, que las únicas asociaciones de jóvenes estudiantes que perduran algo son la que están dirigidas por elementos de fuera —las llamados Juventudes, los Luises, los requetés, etc.— y busquen ustedes ser dirigidos no por elementos de fuera, extra-universitarios, sino por maestros, por profesores.

Y efectivamente es en buena medida así, ya que la publicación de más larga vida fue justamente aquélla que rechazaba la independencia y se vinculó al movimiento católico y a la Federación Valenciana de Estudiantes Católicos.

²³ Una fuente importante para rastrear las publicaciones periódicas es el *Almanaque de las Provincias*.

Sin embargo, para otros la causa del fracaso era la apatía estudiantil:

Muchas son las sociedades escolares que, tras vivir muriendo, desaparecieron definitivamente sin dejar apenas huellas de su paso; muchos los periódicos de igual índole que, después de fatigosa labor e innumerables tropiezos, murieron también; muchos los individuos que rompieron lanzas en pro de nuestra misión y alzaron su voz pidiendo nuestro mejoramiento y por fin callaron entre el silencio de aquellos por quienes pedían²⁴.

Sin embargo, consideramos que todas estas publicaciones son, por su mero nacimiento, aunque fracasen, muestra de la capacidad organizativa de los escolares, ya que son obra exclusiva de su voluntad e iniciativa, sin contar con ningún tipo de apoyo económico ni por parte de la Universidad ni de ninguna otra entidad. Dependiendo únicamente del esfuerzo de los estudiantes, la financiación se convertía en un aspecto clave, ya que se basaba únicamente en su capacidad para recaudar fondos, con las suscripciones y la publicidad.

El primer aspecto fue siempre problemático. Sobre los diez céntimos se vinieron a vender sus ejemplares, aunque por lo general la suscripción se premiaba con un ligero descuento. Algunos hubo que costaron más, pero otros se vieron obligados a reducir su precio en busca de más compradores.

De que tuviesen lectores fuera de Valencia o en el extranjero dudamos bastante, pese a que voluntariosos siempre incluyan los precios de suscripción para España, ultramar y Europa.

La publicidad debió ser una más constante fuente de financiación. No faltan anunciantes, que suelen llenar sobre una cuarta parte de la publicación, llegando en ocasiones a la mitad. Pastelerías y salones se mezclan con los más escolares anuncios de librerías, academias y material escolar.

Pero no únicamente a cuestiones propias de la pereza o ligereza de los escolares y de su temporalidad, o de financiación de las publicaciones se enfrentaron los estudiantes. Si bien éstos son aspectos que explican la corta vida sus periódicos, su voluntad de contar con revistas propias, como muestra la gráfica, parece constante en el tiempo, pero

²⁴ *Boletín Ateneo Escolar*, (marzo de 1913), Valencia, Imprenta de Manuel Pau.

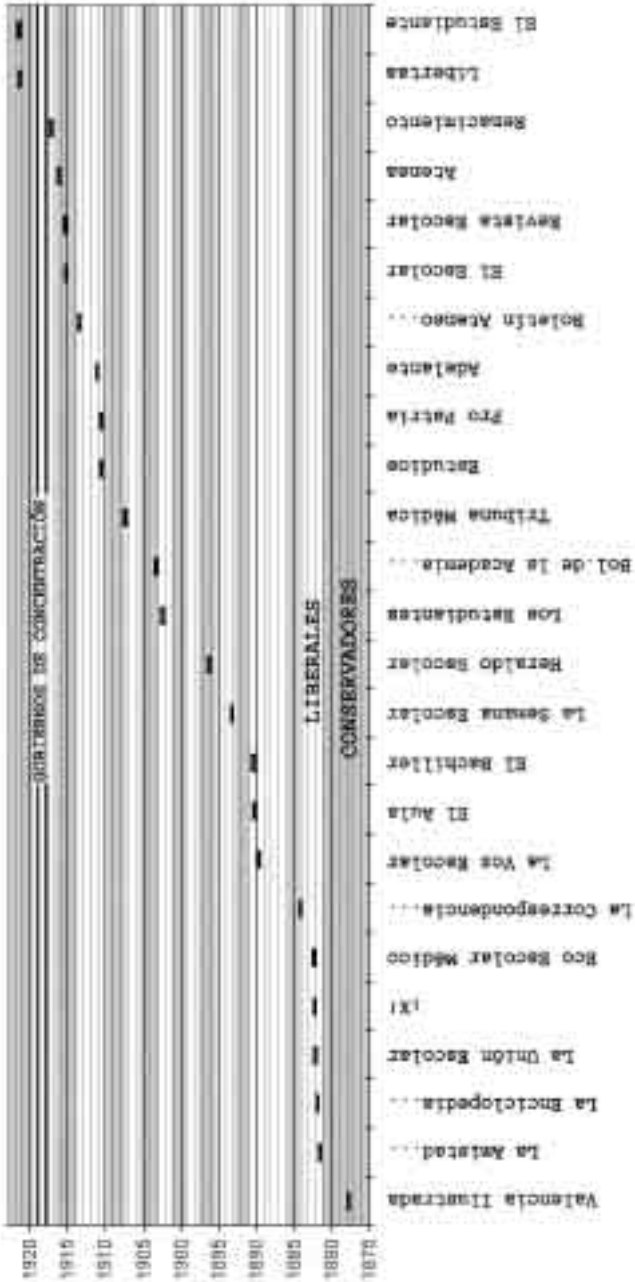
continuamente interrumpidas por cuestiones de política nacional, restricciones de las libertades, conflictos internacionales, etc., que demuestran que la historia del nacimiento de las revistas escolares, lejos de ser de apatía y fracaso, es de voluntad y animosidad pese a las dificultades.

Además, por encima de las asociaciones estudiantiles, que mostraban una notable tendencia a ser unidisciplinarias, estas revistas y publicaciones presentan, mayoritariamente, una pretensión unificadora de la comunidad. Ya no únicamente intentaban superar las divisiones entre las distintas facultades, sino que incluso extendiéndose más allá de la Universidad, y recogieron a los alumnos del Instituto de Segunda Enseñanza, de la Escuela de Bellas Artes y de la Escuela Normal de Maestros. Estas revistas constituyen los primeros intentos de reunir a la clase escolar independientemente de los diferentes centros de enseñanza donde estudien, de creación de un colectivo estudiantil. Por lo tanto en estas revistas se observa el inicio de una conciencia común, del sentimiento colectivo, de grupo.

Pero los tiempos han cambiado mucho desde los inicios de la moribunda Restauración, y con ellos la situación social y la universidad. Las concepciones en las que se movían los pioneros de la prensa escolar ya no son válidas, y los estudiantes serán llamados a jugar otros roles. La empresa periodística, pareja a la asociativa, les ha ido enseñando a reorganizarse, a expresarse, a participar, a la par que han ido comprometiéndose cada vez más con las distintas concepciones que pugnan en la arena política española, primero individualmente y luego colectivamente.

Germán Perales Birlanga
Universidad de Valencia

Publicaciones estudiantiles
Valencia 1875-1923
(Fecha de aparición)



EL PLAN REPUBLICANO EN LA FACULTAD DE DERECHO DE MADRID (1931-1934)*

Sumario: 1. La proclamación de la II República y el plan provisional de Derecho.—2. Las asignaturas prácticas.—3. La división de la cátedra de Derecho internacional público y privado.—4. El impulso de los estudios de Economía.—5. Los estudios especiales de Administración en la Facultad de Derecho.—6. El examen de ingreso en la Universidad.—7. Epílogo: el estallido de la Guerra Civil.—Apéndice.

1. *La proclamación de la II República y el plan provisional de Derecho*

La caída de la Monarquía y el establecimiento de la II República tuvieron inmediatas consecuencias en la política universitaria. No pasó un mes desde la proclamación del nuevo régimen cuando el Gobierno provisional aprobó un decreto¹ el 13 de mayo de 1931, por el que quedaban derogados los planes vigentes de segunda enseñanza y de enseñanza universitaria aprobados durante la Dictadu-

* Este trabajo fue presentado en el homenaje a Mariano Peset celebrado en el campus de Colmenarejo de la Universidad Carlos III, en septiembre de 2003. La mayoría de las intervenciones fueron publicadas en: Adela Mora (ed.), *La enseñanza del derecho en el siglo XX. Homenaje a Mariano Peset*, Madrid, 2004.

¹ Dice el decreto de 13 de mayo de 1931: «[...] Artículo 1.º Quedan derogados, con sus disposiciones complementarias, los planes vigentes de segunda enseñanza y de enseñanza universitaria; Artículo 2.º Queda restablecida para el próximo curso la legalidad anterior a la Dictadura; Artículo 3.º El Consejo de Instrucción Pública propondrá urgentemente la fórmula de adaptación que ha de regir hasta ser aprobado por las Cortes constituyentes el plan definitivo». Este decreto fue aprobado y ratificado por las Cortes Constituyentes por Ley de 4 de noviembre de 1931. *Colección Legislativa de Instrucción Pública*, año 1931, p. 681.

ra y se restablecía para el curso siguiente la legalidad anterior al 13 de septiembre de 1923².

El objeto de estas páginas es precisamente el análisis de la implantación del nuevo plan republicano en la facultad de Derecho de la Universidad de Madrid. La fuente principal son las actas de la Junta de Facultad. Junto a ellas he podido utilizar otras fuentes documentales, entre las que se encuentran algunos expedientes del Archivo Histórico de la Universidad y de los archivos de varias facultades, las diversas revistas y publicaciones periódicas de la facultad de Derecho y de la Universidad en este periodo, las memorias-estadísticas y los discursos de apertura del curso académico. En cuanto a la bibliografía utilizada, he prestado atención a la información proveniente de algunos artículos y trabajos que ya han estudiado algunas facetas de la Universidad de Madrid en aquel periodo³.

Las fechas analizadas vienen marcadas por las actas conservadas de la Junta de Facultad. Ha llegado hasta nosotros íntegro el tomo correspondiente al periodo comprendido entre el 22 de noviembre de 1923 y la del 8 de mayo de 1934. Por tanto, estas actas abarcan las sesiones de aquella Junta desde el curso 1923-1924 hasta el 1933-1934⁴.

La naciente República se proponía revisar y llevar por otro rumbo la enseñanza universitaria, frente a la política llevada a cabo en la época de la Dictadura⁵. El citado decreto de 13 de mayo de

² El 13 de septiembre de 1923 es la fecha de instauración de la Dictadura de Primo de Rivera.

³ Entre otros, los trabajos de M.^a F. Mancebo, *La Universidad de Valencia. De la Monarquía a la República (1919-1939)*, Valencia, Universitat de Valencia, 1984; M. Martínez Neira, *El estudio del Derecho. Libros de texto y planes de estudio en la Universidad contemporánea*, Madrid, Universidad Carlos III/Editorial Dykinson, 2001; A. Molero Pintado, *La reforma educativa en la II República*, primer bienio, Madrid, 1977; o C. Petit, «La administración y el Doctorado: centralidad de Madrid», *AHDE*, LXVII (1977), vol. I, pp. 593 a 613.

⁴ Las actas anteriores y posteriores por el momento se dan por desaparecidas, pérdida que se atribuye a los destrozos de los combates en la Ciudad Universitaria durante la Guerra Civil. Las que aquí utilizamos han permanecido bastante desconocidas hasta la fecha y son prácticamente inéditas. C. Petit, en su trabajo «La Administración y el Doctorado: centralidad de Madrid», ya menciona haberlas utilizado.

⁵ «Durante el periodo que empezó en 13 de septiembre de 1923 y terminó el 14 de abril de 1931, la arbitrariedad dictatorial destacó,

1931 permitía al Consejo de Instrucción Pública proponer unos planes provisionales para cada carrera universitaria hasta que las Cortes Constituyentes aprobasen el plan definitivo⁶. Estas medidas se concretaban en varias normas: el decreto de 11 de septiembre de 1931 y algunas órdenes posteriores, particularmente la del 16 de septiembre del mismo año.

Por el primero⁷ se establecía un plan de estudios provisional para la carrera de Derecho para el curso 1931-1932, que incluía un curso preparatorio y cinco cursos de licenciatura. El curso preparatorio lo habría de organizar la facultad o la sección de Filosofía y Letras, que podía, en caso necesario, utilizar los servicios del catedrático de Latín del Instituto y encargarle el desempeño de la cátedra de lengua latina. Este curso incluiría cinco asignaturas: *Introducción a la Filosofía* (tres horas semanales), *Lengua y Literatura españolas* (tres horas semanales), *Historia de España* (tres horas semanales), *Historia general de la cultura* (tres horas semanales) y *Lengua latina* (seis horas semanales).

El decreto señalaba seguidamente las asignaturas de la carrera de Derecho que tendrían de forma obligatoria todas las facultades de Derecho de España, que conformarían el plan de estudios vigente a partir del curso 1932-1933⁸:

sobre todo, en la obra del Ministerio de Instrucción Pública. Se hizo cuanto no debía hacerse, y de la que era urgente hacer no se hizo nada. En la segunda enseñanza y en la enseñanza universitaria la actividad desaforada llegó a límites de confusión y perturbación que importa corregir radicalmente. [...] Acordar a fin de curso la nulidad de todo lo preceptuado sobre segunda enseñanza y enseñanza universitaria, habría contribuido a aumentar la confusión y perturbación que la Dictadura produjo en la vida académica: permitir que se iniciase el nuevo curso dentro de las normas dictatoriales sería aceptar la complicidad con la perturbación y confusión...». Exposición de motivos del Decreto de 13 de mayo de 1931, *Colección Legislativa de Instrucción Pública*, año 1931, pp. 158 y 159; también aparece publicada la Exposición de motivos en el *Boletín de la Universidad de Madrid*, año III, 1931, pp. 291 y 292.

⁶ Cfr. artículo 3.º del decreto de 13 de mayo de 1931.

⁷ *Gaceta* de 12 de septiembre de 1931.

⁸ *Boletín de la Universidad de Madrid*, año III, julio de 1931, pp. 403 y 404; y *Anuario de la Universidad de Madrid, índice de las enseñanzas para el curso de 1932-33*, pp. 203 y 204.

CURSO	ASIGNATURAS
1.º	Derecho romano (6 horas semanales) Economía política (3 horas) Historia del derecho (6 horas)
2.º	Derecho político (6 horas semanales) Derecho canónico (6 horas) Derecho civil. Parte general (6 horas)
3.º	Derecho civil. Tratados especiales I (6 horas semanales) Derecho administrativo (6 horas) Derecho penal (6 horas)
4.º	Derecho civil. Tratados especiales II (6 horas semanales) Derecho internacional público (6 horas) Derecho procesal I (3 horas) Hacienda pública (3 horas)
5.º	Derecho mercantil (6 horas semanales) Derecho internacional privado (3 horas) Derecho procesal II (3 horas) Filosofía del derecho (3 horas)

Varias órdenes sucesivas aclaraban o rectificaban algunos de los puntos contenidos en el decreto provisional de 13 de mayo. La primera llevaba fecha de 16 de septiembre. En ella se autorizaba a las Juntas de Facultad para que, dentro de las normas generales establecidas en los respectivos planes de estudio, pudieran resolver las incidencias resultantes de la aplicación de dichos planes. También autorizaba esta orden a los bachilleres universitarios que desearan seguir los estudios de la facultad de Derecho, que pudieran optar entre cursar el preparatorio establecido en el plan provisional para el curso 1931-1932, o bien las asignaturas de la facultad de Filosofía y Letras y los idiomas que estaba previsto estudiar en el plan de 1928. Finalmente afirmaba que «aunque el plan de estudios comprende siete años, los alumnos oficiales podrán cursar la carrera en un tiempo mínimo de seis, para lo cual podrán matricularse, en el transcurso de ella, en asignaturas de los cursos inmediatos, siempre que el horario de enseñanzas teóricas y prácticas no presente incompatibilidad y se respete el orden de prelación que la Facultad fije»⁹.

⁹ «El Ministerio de Instrucción Pública ha dispuesto: 1.º Que como aclaración a los decretos de adaptación de estudios de las cinco Faculta-

Una orden de 24 de septiembre¹⁰ aclaró el párrafo 2.º de la anterior orden de 16 del mismo mes. Señaló que la aprobación de los estudios del curso preparatorio sería siempre previa a los estudios propios de la facultad, como requisito *sine qua non* para ingresar en la facultad de Derecho. Esta medida es rectificada apenas dos semanas después, por una nueva orden de 7 de octubre, ante la avalancha de quejas de alumnos que solicitaban, como estaba dispuesto anteriormente, poder simultanear durante la carrera las asignaturas del curso preparatorio del plan vigente para Derecho. La nueva orden deroga lo dispuesto por orden de 24 de septiembre y autoriza cursar estas asignaturas «de una manera simultánea y verificar matrícula de las mismas en cualquiera de los cinco cursos que comprende el mencionado plan»¹¹.

Hubo varias órdenes complementarias más: la de 1 de octubre de 1931, que establece que el que hubiera aprobado la asignatura de *Derecho natural* quedaba exento de matricularse y examinarse de

des universitarias y teniendo en cuenta que su espíritu ha sido el de dar una pauta general para esta adaptación, permitiendo al mismo tiempo que se atiende a la variedad de circunstancias creadas por el régimen de autonomía en el establecimiento de sus planes de estudio de que venían gozando las universidades, y cuyas circunstancias habrán de tenerse en cuenta en cada caso, se autoriza a las respectivas Juntas de facultades para que, dentro de las normas generales establecidas en los indicados planes de estudio, puedan resolver las incidencias resultantes de la aplicación de aquellos planes. —2.º Se autoriza a los bachilleres universitarios que deseen seguir los estudios de la facultad de derecho, para optar entre cursar el preparatorio establecido en el plan provisional de 1931 a 32, o las asignaturas de la facultad de Filosofía y Letras y los idiomas que venían obligados a estudiar según el plan de 1928. —3.º Aunque el plan de estudios comprende siete años, los alumnos oficiales podrán cursar la carrera en un tiempo mínimo de seis, para lo cual podrán matricularse, en el transcurso de ella, en asignaturas de los cursos inmediatos, siempre que el horario de enseñanzas teóricas y prácticas no presente incompatibilidad, y se respete el orden de prelación que la Facultad fije». Orden de 16 de septiembre de 1931, *Colección Legislativa de Instrucción Pública*, año 1931, pp. 532 y 533; también en *Boletín de la Universidad de Madrid*, año III, julio de 1931, pp. 439 y 440.

¹⁰ Gaceta del 26 de septiembre de 1931, p. 2035.

¹¹ Orden de 7 de octubre de 1931 (Gaceta de 8 de octubre de 1931, p. 150).

Filosofía del Derecho; y la orden ministerial de 18 de octubre de 1931 sobre el preparatorio de Derecho. Ésta dispone que continúe el derecho de opción concedido a los bachilleres universitarios en cualquiera de sus dos secciones, cuando deseen seguir sus estudios de la facultad de Derecho. Este derecho les permitía elegir entre cursar el preparatorio establecido en el plan provisional o bien las asignaturas de la facultad de Filosofía y Letras; y los idiomas que venían obligados a estudiar, según el plan de 1928. De esta manera podían simultanear y realizar la matrícula de dichas enseñanzas en cualquiera de los cursos de los estudios de la facultad de Derecho¹².

¿Cuáles son las novedades principales del nuevo plan de Derecho de la II República? Es un plan rígido, con todas las asignaturas obligatorias, en el que a diferencia del plan vigente antes de septiembre de 1923, las universidades no podrán añadir asignaturas propias en uso de su autonomía. El plan además es uniforme para toda España, sin que las facultades estén posibilitadas para añadir ninguna asignatura propia. Tampoco los estudiantes podrán inicialmente configurar su propio *currículum* de estudios, aunque más adelante se rectificará esto en lo referente a las asignaturas optativas del preparatorio.

El plan incluye también en su descripción, con carácter preceptivo y general, el número de horas lectivas semanales que se asigna a la docencia de cada una de las disciplinas, por lo que nuevamente pierde cada facultad las competencias específicas que solían atribuírsele para organizar sus propias enseñanzas. El número de horas lectivas quedan así en quince en los cursos primero, segundo y quinto, y dieciocho en tercero y cuarto. Y el número de asignaturas serán tres en 1.º, 2.º y 3.º; y cuatro en los cursos 4.º y 5.º de carrera, es decir, diecisiete en total.

Por otro lado, se vuelve a un curso preparatorio rígido y previo a los estudios en la carrera de Derecho, aunque, como hemos visto, desaparecerá pronto este curso previo organizado por la facultad de Filosofía y Letras y sus asignaturas podrán también cursarse a lo largo de la carrera.

En cuanto a las asignaturas de la Licenciatura, se suprime en el primer curso la de *Derecho natural* y su hueco lo cubre la de *Eco-*

¹² Orden ministerial de 18 de octubre de 1931 sobre el preparatorio de Derecho, *Boletín de la Universidad de Madrid*, año III, octubre de 1931, p. 522.

nomía política. De esta manera tanto el primer curso como el segundo se quedan con tres asignaturas. El tercer curso será igual al plan anterior, lo mismo que el cuarto. Y en el quinto se añade la asignatura de *Filosofía del Derecho*, que se puede considerar equivalente a la suprimida *Derecho natural*, o las antiguas *Teoría del Derecho* o *Introducción al Derecho*. Prueba de ello es que por una orden de 1 de octubre se puede convalidar *Filosofía del Derecho* cuando se tiene *Derecho natural* aprobado¹³.

Otra novedad de este plan provisional es que se simplifican los nombres de las asignaturas. Así, por ejemplo, *Elementos de Derecho romano* pasa a denominarse *Derecho romano*, o *Procedimientos judiciales* se llamará ahora *Derecho procesal*. Esta nomenclatura —con un breve paréntesis en los últimos años de la II República— será la que pase a los planes de estudio de después de la Guerra Civil y la que se sigue utilizando habitualmente en los planes de estudio actuales.

¿Qué ocurre con los idiomas? De un lado, el decreto de 11 de septiembre de 1931 no menciona la exigencia de idiomas en el plan de Derecho. Ello significa que desaparece el estudio obligatorio de idiomas modernos en la carrera. En los meses siguientes sólo encontramos alguna disposición aislada sobre los institutos de idiomas en las facultades, como es el caso de la orden de 24 de agosto de 1932, que dispone que continúen subsistiendo estos Institutos, y concede a aquéllas una amplia autonomía para ordenar sus enseñanzas en este campo¹⁴.

¿Siguió vigente el plan de 13 de mayo de 1931 en los cursos siguientes o se introdujeron pronto nuevos retoques? No hemos de olvidar que el plan aprobado en mayo de 1931 era considerado provisional. En buena lógica, pronto debería plantearse su revisión. Si empezamos repasando el curso preparatorio, comprobamos que en el curso siguiente, 1932-1933, se vuelve a mencionar el que apareció en

¹³ Orden ministerial de 1 de octubre de 1931 sobre asignatura de Derecho natural. Dispone que «los alumnos que tengan cursada y aprobada la asignatura de Derecho natural, que figuraba en los planes anteriores de las Facultades de Derecho, queden dispensados de la matrícula y examen de la asignatura de Filosofía del Derecho, que forma parte del plan de estudios aprobado por decreto de 11 de septiembre último». *Boletín de la Universidad de Madrid*, año III, octubre de 1931, p. 522.

¹⁴ Orden ministerial de 24 de agosto de 1932.

el decreto de 13 de mayo, con la nota '*sólo es obligatorio cursar dos de las asignaturas que figuran en esta sección*'. Sabemos que este asunto fue estudiado más adelante en la Junta de Facultad de 8 de mayo de 1934. Se habló de la forma de aprobación de aquellas asignaturas en la facultad de Filosofía y Letras. En las actas se dice escuetamente que se acepta *la fórmula propuesta y acordándose que el Sr. Decano se ponga de acuerdo con el de Filosofía y Letras en cuanto al detalle de su aplicación*¹⁵. Comprobamos, por tanto, que las asignaturas del preparatorio continúan organizándose por la facultad de Filosofía y Letras y que los alumnos de Derecho asistían a aquella facultad para cursarlas.

En cuanto a las asignaturas de la Licenciatura, el plan provisional establecido al implantarse la II República va a seguir vigente en años sucesivos con mínimas variaciones¹⁶. Durante el curso 1933-1934, lo mismo que en el anterior, fue exactamente el previsto por el decreto de 11 de septiembre de 1931. Sólo en el 1934-35, aunque las asignaturas son básicamente las mismas, dos de ellas retoman su antiguo nombre: *Derecho romano* recupera su primitivo nombre de *Instituciones de Derecho romano*; y *Derecho canónico* se denomina ahora, como en épocas anteriores, *Instituciones de Derecho canónico*¹⁷. Por tanto, aquel plan que se aprobó como provisional, se mantuvo vigente durante toda la II República.

¹⁵ «También manifiesta el Sr. Decano haber recibido respuesta del de Filosofía y Letras en cuanto a la forma de aprobación de las asignaturas que en esta última Facultad han de cursar los alumnos que aspiren a la Licenciatura en Derecho, aceptándose la fórmula propuesta y acordándose que el Sr. Decano se ponga de acuerdo con el de Filosofía y Letras en cuanto al detalle de su aplicación». *Actas de la Junta de Facultad de 8 de mayo de 1834*, folio 399.

¹⁶ Esto ocurrió también en las demás facultades de Derecho de España. M.^a F. Mancebo lo ha estudiado también para el caso concreto de la Universidad de Valencia. «Entre el 12 y el 17 de septiembre de 1931, una serie de decretos establecían los planes de estudio provisionales para las cinco Facultades: medicina, derecho, filosofía y letras, farmacia y facultades de ciencias. Eran para el curso que se iniciaba 1931-32, pero de hecho se fueron prorrogando a lo largo de la República y en la medida que variaban respecto a los de 1928, sucesivas órdenes fueron aclarando las dudas. En conjunto diferían poco de los anteriores...». M.^a F. Mancebo, *La Universidad de Valencia. De la Monarquía a la República (1919-1939)*, cit., p. 111.

¹⁷ *Anuario de la Universidad de Madrid. Libro del Estudiante año 1935*, pp. 209 a 211.

Antes de continuar con las características de la enseñanza veamos en un cuadro, referido al curso 1934-1935, quienes eran los encargados de impartir la docencia:

PROFESOR	ASIGNATURA	CURSO
Manuel García Moriente, José Gaos y José Zubiri	Introducción a la Filosofía	Preparatorio
Juan Hurtado	Lengua y Literatura españolas	Preparatorio
Antonio Ballesteros	Historia de España	Preparatorio
Andrés Ovejero, Pío Zabala y Antonio Ballesteros	Historia general de la Cultura	Preparatorio
Emeterio Mazorriaga, Alemany Selfa, Agustín Millares, U. González de la Calle y Dr. Zetta	Lengua latina	Preparatorio
José Castillejo y Duarte	Instituciones de Derecho romano	Primero
Antonio Flores de Lemus	Economía política	Primero
Galo Sánchez	Historia del Derecho	Primero
Nicolás Pérez Serrano	Derecho político	Segundo
Eloy Montero	Instituciones de Derecho canónico	Segundo
Federico de Castro	Derecho civil (parte general)	Segundo
Felipe Sánchez Román	Derecho civil (primer curso)	Tercero
José Gascón y Marín	Derecho administrativo	Tercero
Luis Jiménez de Asúa	Derecho penal	Tercero
Felipe Clemente de Diego	Derecho civil (segundo curso)	Cuarto
Antonio de Luna García	Derecho internacional público	Cuarto
Francisco Beceña	Derecho procesal (primer curso)	Cuarto
Agustín Visuales	Hacienda pública	Cuarto
Joaquín Garrigues	Derecho mercantil	Quinto
José Yanguas Messía	Derecho internacional privado	Quinto
Francisco Beceña	Derecho procesal (segundo curso)	Quinto
Pendiente de provisión	Filosofía del Derecho	Quinto

2. *Las asignaturas prácticas*

Las actas de la Junta de Facultad nos hablan de otros asuntos relativos al plan de estudios y a la ordenación de las enseñanzas. Las

del 11 de diciembre de 1930 nos indican que se llevó al orden del día la cuestión de las asignaturas con clases prácticas. Hubo entonces diversas propuestas para que se superase esta distinción entre asignaturas puramente teóricas y asignaturas prácticas, y se pidió a cada profesor que manifestase si su asignatura iba a tener clases prácticas o no. Como sabemos, la declaración de asignatura con clases prácticas llevaba anejo una cantidad adicional —derechos de prácticas— que debía ser abonada junto con los derechos de la matrícula de esa asignatura. Ese dinero se destinaba a abonar los gastos extraordinarios que conllevaba el material utilizado junto con los sueldos del personal que atendía las clases prácticas.

Se acordó en aquella reunión del 11 de diciembre mantener por el momento en aquel curso de 1930-1931 la relación de asignaturas puramente teóricas. Eran asignaturas teóricas de Licenciatura *Derecho natural*, *Derecho romano*, *Economía política*, *Derecho civil 1º y 2º curso*, *Procedimientos judiciales* y *Hacienda*¹⁸. Las demás asignaturas tendrían anejas clases prácticas y tenían así la consideración de asignaturas prácticas. He aquí la crónica del debate suscitado que nos presentan las actas de aquella Junta de Facultad de 11 de diciembre de 1930¹⁹:

El Sr. Decano planteó a sus compañeros la cuestión de las clases prácticas en relación a los derechos de las mismas: invitando a los profesores, que ya no lo hubieran hecho, a que fijasen en definitiva si en sus respectivas cátedras habría o no en el presente curso clases prácticas. El profesor Sr. Castillejo estimó que debían englobarse los derechos de matrículas y los de prácticas para formar en la parte correspondiente el fondo necesario para pagar el material y el personal de esta enseñanza. El profesor Sr. Yanguas dijo que su cátedra no sentía una necesidad inmediata y urgente para estos fines, puesto que del fondo de su sueldo, que no había percibido durante el tiempo que estuvo sin desempeñar la cátedra, había todavía un neto de cuatro mil pesetas. El profesor Sr. Posada opinó que se debía este año todavía cobrar los derechos de prácticas. Y el Sr. Saldaña se convino con esta opinión dándole carácter general a todas las asignaturas de la Facultad.

¹⁸ También había asignaturas teóricas en el Doctorado: *Política social y legislación comparada del Trabajo*, *Filosofía del Derecho*, *Derecho municipal*, *Estudios superiores de Derecho político* y *Estudios superiores de Derecho privado*.

¹⁹ *Actas de la Junta de Facultad de 11 de diciembre de 1930*, folio 215.

El Secretario que suscribe, refiriéndose a la Cátedra de Derecho civil de conjunto, informó que, además de las tres clases semanales teóricas, tenía otras tres clases prácticas en la semana que daba en colaboración con los profesores sus auxiliares don Antonio Sacristán y don Francisco Cifuentes, distribuyéndose entre los tres las tres secciones en que para los efectos de esta clase de repaso había dividido la matrícula general y que hacía notar también que el importe de la acumulación que percibía por esta cátedra lo entregaba mensualmente al Decano de la Facultad, con aspiración de que con ese fondo se pudiesen atender a los varios gastos de los que ocasiona esta enseñanza, si bien hacía constar la insuficiencia de estos recursos para dicho fin; no obstante lo cual no se encontraba inclinado a declarar prácticas las referidas clases, puesto que más que gastos de material propiamente lo que habría era la necesidad de gratificar al personal que le prestaba tan eficaz colaboración; juró que en todo caso quedaba a las órdenes del Decano para que esta cátedra se clasificara entre las enseñanzas puramente teóricas o entre las que se acrediten clases prácticas.

El Sr. Decano propuso, y así se acordó, dirigirse al Ministerio con el sentido de la propuesta del Sr. Castillejo, fijándose los derechos en diez pesetas y que por este curso no paguen prácticas las asignaturas de Derecho natural, Derecho romano, Economía política, Derecho civil 1.º y 2.º curso, Procedimientos judiciales, Hacienda, Política social y legislación comparada del Trabajo, Filosofía del Derecho, Derecho municipal, Estudios superiores de Derecho político y Estudios superiores de Derecho privado.

En la Junta de Facultad de nueve meses después, del 11 de septiembre de 1931, muy cercano ya el comienzo del nuevo curso académico, se estudió nuevamente el asunto de las asignaturas prácticas de la carrera de Derecho. En aquella ocasión se acordó que se mantuviera la misma lista de asignaturas prácticas vigente en el curso pasado, añadiendo a ella la asignatura de *Derecho civil (parte general)*, que explicaba entonces Felipe Clemente de Diego²⁰. Por ello mismo, las asignaturas de licenciatura que tendrían carácter práctico en el curso 1931-1932 serían las siguientes: *Historia del Derecho*,

²⁰ «En lo relativo a las asignaturas que han de tener carácter de prácticas en el curso próximo, se acuerda que subsistan las listas formadas en el pasado curso, añadiendo a ella la asignatura de derecho civil (parte general) que explica don Felipe Clemente de Diego», *Actas de la Junta de Facultad del 11 de septiembre de 1931*, folios 259-260.

*Derecho político, Derecho canónico, Derecho civil (parte general), Derecho administrativo, Derecho penal, Derecho internacional público, Derecho mercantil, Derecho internacional privado y Filosofía del Derecho*²¹.

En la primera reunión de la Junta de Facultad al comienzo de curso siguiente, el 2 de octubre de 1933, se volvieron a determinar las asignaturas que habían de devengar derechos de prácticas y se acordó que fueran las mismas que en el curso anterior, incluyendo también los dos cursos de *Derecho procesal* y teniendo en cuenta la consiguiente rotación de la asignatura de *Derecho civil*²².

Como comprobamos, la tendencia era a ir haciendo prácticas todas las asignaturas. Detrás de esta medida estaban varias razones: el establecimiento de clases prácticas suponía un incremento del número de clases, lo que implicaba también un pequeño suplemento económico y la posibilidad de dotar una plaza complementaria para atender esas clases prácticas. Todo ello también redundaba en una mejor preparación para el alumno, así como en prestigio para la asignatura²³.

3. *La división de la cátedra de Derecho internacional público y privado*

Muy interesante resultó un informe de la Junta de Facultad solicitando del Ministerio el desglose de la cátedra de Derecho internacional público y privado en dos cátedras distintas, una para el público y otra para el privado. Ambas pertenecían a una única materia, *Derecho internacional* y formaban dos asignaturas separadas en los planes de estudio, aunque sin embargo eran impartidas desde su creación desde una cátedra común. La propuesta de separar ambas

²¹ Tres asignaturas del Doctorado tendrían carácter práctico: *Historia del Derecho internacional, Estudios superiores del Derecho penal y Antropología criminal e Historia de las instituciones políticas y civiles de América, Actas de la Junta de Facultad del 11 de septiembre de 1931*, folios 259-260.

²² *Acta de la Junta de Facultad del 2 de octubre de 1933*, folio 380.

²³ Sobre el particular, hace una referencia D. Comas en su trabajo «La enseñanza del Derecho en Valencia durante la autonomía de César Silió (1919-1921)», en A. Mora (ed.), *La enseñanza del Derecho en el siglo XX. Homenaje a Mariano Peset*, cit., pp. 86-87.

asignaturas en sendas cátedras distintas fue debatida y aprobada en la Junta de Facultad del día 3 de noviembre de 1931. Fruto de esta propuesta fue un interesante dictamen que la facultad decidió elevar al Ministerio, en el que se reivindica con diversos argumentos la necesidad de efectuar la división de la cátedra de Derecho internacional público y privado en dos cátedras independientes²⁴.

Se presenta en el orden del día de la Junta la propuesta que se desea elevar al Ministerio, aprovechando para ello el hecho de que la cátedra de Derecho internacional público y privado se encuentra vacante en la Universidad²⁵. He aquí los motivos para esta división²⁶:

La Junta de Profesores de Derecho ha creído de su deber proponer a V. E. que por los altos motivos de conveniencia para la enseñanza y la investigación científica se divida en dos Cátedras distintas y correspondientes a cada una de las dos disciplinas jurídicas que hoy forman el contenido de la mencionada vacante. El progreso ganado en la actualidad por los estudios jurídicos internacionales, su considerable potencia teórica y práctico desarrollo que plasma en tantas instituciones de la sociedad internacional y otras variadas manifestaciones de la actividad legislativa y paccionada de los diferentes Estados de uno y otro continente; la misma complejidad instrumental y técnica de sus vastos programas respectivos; y, en fin, las amplias posibilidades de su investigación, vienen a hacer notoria la necesidad de desdoblar aquella Cátedra que hoy reúne tan extenso contenido. Por otra parte, la dualidad de método jurídico con que ha de actuar el investigador en las respectivas disciplinas internacionales, pública y privada, es tan hondamente diversa que casi cierra la esperanza de formar maestros que puedan rendir el fruto de su inteligente labor en construcciones jurídicas en verdad tan separadas entre sí. Educación jurista, de riguroso análisis y precisión, ha de tener ante todo el internacionalista de derecho privado que ha de levantar sus sistema de derecho comparado sobre la base de un conocimiento cabal de las instituciones civiles, mercantiles y procesales principalmente. De

²⁴ *Actas de la Junta de Facultad del 3 de noviembre de 1931*, folios 268 ss.

²⁵ «Aprovecha la Facultad la ocasión de estar vacante la Cátedra de Derecho internacional público y privado en Madrid, para proponer a la superioridad que se divida dicha cátedra en dos distintas: una de Derecho internacional público y otra de Derecho internacional privado», *Actas de la Junta de Facultad del 3 de noviembre de 1931*, folios 268 ss.

²⁶ *Actas de la Junta de Facultad del 3 de noviembre de 1931*, folios 268 ss.

modo distinto, el internacionalista de derecho público, sin perjuicio de sus calidades de jurista, edifica sus principales construcciones sobre normas de alta política internacional en las que influyen preeminentemente factores económicos y sociales que tantas veces escapan a lo menos en su medida internacional a las funciones concretas y limitadas de la jurisprudencia. Debido a esto, es rarísimo en el mundo de la cultura contemporánea hallar un profesor que aplique con eficacia su trabajo a ambas disciplinas. Y casi con excepción quedaría señalada la Universidad española al mantener todavía la Cátedra única en materia de derecho internacional. Siendo así que la experiencia hasta ahora lograda ha producido, sin duda, en nuestras facultades de derecho, maestros brillantes en una u otra de ambas disciplinas; pero probablemente ninguno que haya servido con igual eficacia el progreso de sus respectivas investigaciones.

Seguidamente renueva la Junta su solicitud de división de la cátedra, por los motivos expuestos, y plantea una fórmula de convocatoria, habida cuenta que la vacante de catedrático de *Derecho internacional público y privado* ya había sido sacada a concurso²⁷:

Por las consideraciones expuestas entiende esta facultad que sería oportuno hacer el ensayo de dividir en la Universidad de Madrid la cátedra actualmente vacante en dos: una de Derecho internacional público y otra de Derecho internacional privado, y puesto que a la hora presente está anunciada la provisión de la vacante, dictar disposición aclaratoria por la que se reservara a los opositores y firmantes de la anunciada cátedra su derecho a opositar en aquella de las dos que por el Ministerio se determine y anunciar la otra a oposición libre para que concurran a ellas cuantos solicitantes lo deseen dentro de las condiciones reglamentarias.

El Ministerio atendió la petición de la Junta de Facultad y se constituyeron dos cátedras independientes, una de Derecho internacional público y otra de Derecho internacional privado, tal y como aparece hoy en día. José Yanguas Messía se quedó como catedrático de la asignatura de Derecho internacional privado y la cátedra de Derecho internacional público la asumió Antonio de Luna²⁸.

²⁷ *Actas de la Junta de Facultad del 3 de noviembre de 1931*, folios 268 ss.

²⁸ *Anuario de la Universidad de Madrid, curso 1934-1935*.

4. *El impulso de los estudios de Economía*

La cuestión social latente en la segunda mitad del siglo XIX y en buena parte del siglo XX, alertó a nuestros gobernantes sobre la necesidad de contar con cualificados expertos en Economía y Sociología, que fueran capaces de abordar las múltiples cuestiones de todo tipo que se planteaban en estos campos. A partir de la crisis de 1929 se observa una considerable preocupación oficial, que queda reflejada en las continuas iniciativas del Ministerio de Instrucción Pública para fomentar especialmente los estudios de Economía en la Universidad. Ahí estuvieron las reformas de Marcelino Domingo en 1931 o de Fernando de los Ríos en 1933. Las actas de la Junta de Facultad de Derecho atestiguan a partir del establecimiento de la República constantes referencias a esta preocupación del Ministerio.

Como es sabido, el ministro de Instrucción Pública del Gobierno provisional, Marcelino Domingo, tenía entre sus planes la creación de una facultad de Economía. El 26 de agosto de 1931 aprueba una orden ministerial en la que pide a la facultad de Derecho que informe antes del 15 de septiembre acerca del proyecto de creación de una nueva facultad de Estudios Económicos²⁹.

En la Junta del 15 de septiembre fue estudiada esta orden ministerial y se presenta un informe en el que se duda de la eficacia de la creación de una facultad de Economía. Tras plantearse la cuestión de si lo que se busca realmente son expertos en Economía o personas capacitadas para la gerencia de empresas, se señala que España ya cuenta con Escuelas Superiores Técnicas y con las de Comercio, y que es privativa de ellas la enseñanza de las diversas técnicas de Empresa. Para los ponentes, se considera un error que la Universidad intente apropiarse de una función que no le es tan propia³⁰. Y que siendo lo más urgente la formación de técnicos, el Estado

²⁹ Cfr. M^a F. Mancebo, «De la economía política a la facultad de ciencias económicas», en L. E. Rodríguez-San Pedro Bezares (ed.), *Las universidades hispánicas: de la monarquía de los Austrias al centralismo liberal*. V. Congreso Internacional sobre historia de las universidades hispánicas, Salamanca, 1998, II, Siglos XVIII y XIX, Universidad de Salamanca/Junta de Castilla y León, Salamanca, 2000, pp. 235-245

³⁰ *Actas de la Junta de Facultad del 15 de septiembre de 1931*, folios 246 a 252.

debe atender con especial interés sobre todo a las Escuelas de Comercio. A la Junta le parece que la enseñanza de la ciencia económica, como ciencia de las llamadas morales, es más propia de formar parte de una facultad de Derecho, por su vinculación con el mundo jurídico³¹. Este interesante informe, que por su interés, reproducimos íntegro en un apéndice documental, será tenido en cuenta por el Ministerio a la hora de posponer el inevitable nacimiento de las futuras facultades de Economía.

El dictamen no termina aquí sino que incluye con un proyecto de plan de estudios de una nueva facultad de Economía, detrás del cual se intuye la mano de Flores de Lemus³². El plan organiza las enseñanzas en cinco cursos e incluye también la ordenación de los estudios de Doctorado, la selección del profesorado y la organización de unos cursos especiales complementarios³³.

El informe³⁴ fue finalmente aprobado en la siguiente Junta del 28 de septiembre de 1931³⁵ y fue remitido al Ministerio. Como sabemos, el proyecto gubernamental no siguió adelante. Tras la aprobación de la Constitución hubo cambio en la cartera de Instrucción Pública y Fernando de los Ríos sustituyó a Marcelino Domingo. Solamente en marzo de 1933, bajo este ministro, hubo un nuevo intento del nuevo ministro de retomar esta iniciativa, con la presentación de un proyecto de ley de bases, publicado en la Gaceta de Madrid de 19 de marzo, que finalmente no llegaría a discutirse en Cortes, y en el que se pretendía crear una sección de Económicas, como una especialidad de la licenciatura de Derecho³⁶.

El rechazo a la creación de una facultad de Economía trajo como consecuencia la búsqueda de vías alternativas para introducir los estudios de Economía en la Universidad. Por ese motivo, el minis-

³¹ *Actas de la Junta de Facultad del 15 de septiembre de 1931*, folios 246 a 252.

³² *Actas de la Junta de Facultad del 15 de septiembre de 1931*, folios 246 a 252.

³³ Vid. Apéndice documental.

³⁴ Este interesante informe fue publicado en el *Boletín de la Universidad de Madrid*, de octubre de 1931.

³⁵ *Actas de la Junta de Facultad del 28 de septiembre de 1931*, folios 252 a 261.

³⁶ Vid. M^a F. Mancebo, «De la Economía política a la Facultad de Ciencias Económicas», cit., p. 243.

tro de Instrucción Pública tuvo contactos en aquel verano de 1932 con diversas personalidades del mundo de las Ciencias Económicas. Entre los convocados se encontraba el catedrático de Economía política de la Universidad de Madrid, Flores de Lemus. En la siguiente Junta de Facultad, del 2 de julio de aquel año, Flores de Lemus informó de esta entrevista. El deseo del Ministerio era que se comenzara a impartir algún curso de Economía en la facultad de Derecho³⁷, en la línea de la propuesta realizada por la facultad de Derecho en su informe del 15 de septiembre. Inmediatamente se planteó en la Junta el problema de recabar los fondos necesarios para sufragar estos cursos y se propuso acudir a una partida del presupuesto titulada 'profesores de curso':

El Sr. Decano interviene para decir que al parecer el antecedente que existe de este deseo es la partida del presupuesto de 75000 pesetas consignadas para 'profesores de curso'. En la junta anterior en la que no estaban presentes ni el Sr. Flores ni el Sr. Olariaga se entendió que esta consignación era para remunerar a los profesores encargados de grupos de estudiantes en aquellas cátedras en las que por la superabundancia de estudiantes, no puede desempeñarla solamente el catedrático ni aun ayudado por el auxiliar de la asignatura»³⁸.

En los debates de aquella Junta³⁹ los profesores se mostraron favorables a la organización de cursos sobre estas materias, pero al mismo tiempo solicitaron que se garantizaran unas cantidades para sufragar los gastos que aquéllos debían conllevar⁴⁰.

Para la organización de los cursos de Economía la Junta considera que el ponente natural debía ser Flores de Lemus, quien más adelante señala que ya hizo al ministro una propuesta o sugerencia, aunque sin saber que la cantidad consignada había sido ya 'bloqueada' por la Junta anterior. Esta propuesta consistía en cuatro cursos de Economía, impartidos por conocidos cuatro profesores⁴¹, en los

³⁷ *Actas de la Junta de Facultad del 2 de julio de 1932*, folios 324 a 328.

³⁸ *Actas de la Junta de Facultad del 2 de julio de 1932*, folios 324 a 328.

³⁹ *Actas de la Junta de Facultad del 2 de julio de 1932*, folios 324 a 328.

⁴⁰ Al haberse asignado la partida presupuestaria 'profesores de curso' a otro fin en la Junta anterior, podría ser difícil contar con esa cantidad, *Actas de la Junta de Facultad del 2 de julio de 1932*, folios 324 a 328.

⁴¹ *Actas de la Junta de Facultad del 2 de julio de 1932*, folio 327.

que se estudiarían temas de *Teoría de la Hacienda pública, política hidráulica, política y administración ferroviaria y dinero y crédito*⁴². Estos cursos propuestos eran los siguientes:

PROFESOR	CURSO
Agustín Visuales	<i>'Intentos de revisión de la teoría de la Hacienda Pública'</i>
Pedro González Quijano	<i>'Política hidráulica'</i>
Juan Barceló (no universitario)	<i>'Política ferroviaria y administración económica de los F.C.'</i>
Francisco Bernés	<i>'Dinero y Crédito'</i>

Los registros de las actas de aquella Junta de Facultad reflejan varios interesantes debates sobre esta materia, en el que intervinieron activamente distintos profesores. He aquí un fragmento entresacado de las actas de la Junta del 2 de julio de 1932⁴³:

Y en materia de Teoría de la Administración, no conociendo a persona preparada le pidió el ministro que le diera algún nombre para que estudiara en el extranjero, dando el Sr. Flores el de su ayudante Sr. Prados Urquijo.

A esto último opone el Sr. Gascón una gran reserva porque dice, porque hoy no se estudia ya la Teoría de la Administración al modo de Ciencia de la Administración. Hoy solamente estudian la Técnica Administrativa de los servicios o el Derecho administrativo.

El Sr. Flores advierte que esto está ocurriendo en todas las disciplinas, también en la Hacienda donde cada vez se separa más la técnica de la hacienda del Derecho tributario.

El Sr. Olariaga quiere hacer notar que en la propuesta debería incluirse personas que están dentro de la facultad.

Después de breve discusión sobre las personas que dentro de la facultad podrían encargarse de cursos de materias económicas, el mismo Sr. Olariaga se ofrece para dar un curso sobre Política monetaria, que ya ha hecho este curso para sus alumnos de Doctorado. Hace constar que respecto al problema económico no se lo plantea porque no desea obtener una compensación económica. Se añade este curso a la propuesta del Sr. Flores [...]

⁴² *Actas de la Junta de Facultad del 2 de julio de 1932*, folio 327.

⁴³ *Actas de la Junta de Facultad del 2 de julio de 1932*, folios 324 a 328.

En la primera Junta del curso siguiente, celebrada el 15 de octubre de 1932, el decano dio cuenta de haber tenido una nueva entrevista con el ministro de Instrucción Pública para tratar de los estudios económicos en la facultad. Tras esta entrevista, el decano se había reunido con los profesores encargados de estos cursos. En su opinión, la facultad debía autorizar a esta nueva Junta de Estudios Económicos para que completase el cuadro de cursos. Propone que se dé alguno de Historia y que se traiga algunos profesores extranjeros de reconocida competencia, siguiendo en esto algunas sugerencias del ministro. La facultad, tras estudiar el asunto, concede la solicitada autorización⁴⁴.

De esta manera, cada año, en los primeros meses del curso académico se estudiaba y aprobaba el listado de cursos especiales y los profesores que debían impartirlos. Normalmente se repetían algunos de estos cursos y se incrementaba el número de los cursos a impartir. Por ejemplo, en el curso 1932-1933, en el listado de cursos aprobados no sólo se repetían varios de ellos, sino que se doblaba su número. Según el *Anuario de la Universidad de Madrid* para ese periodo⁴⁵, los cursos económicos aprobados eran los ocho siguientes⁴⁶:

PROFESOR	CURSO
Juan Barceló	'Política ferroviaria'
Francisco Bernés	'Dinero y bancos'
Ramón Carande	'Historia de la Economía'
Pedro González Quijano	'Política hidráulica'
Esteban Terradas	'Estadística matemática'
Agustín Visuales	'Intentos de revisión de la Hacienda pública'
José Gascón y Marín	'Concesiones administrativas'
Luis Olariaga	'Política monetaria'

Correspondiendo al interés gubernamental, la facultad siguió muy de cerca la organización y funcionamiento de estos cursos. Ello

⁴⁴ *Actas de la Junta de Facultad de 15 de octubre de 1932*, folios 334 a 336.

⁴⁵ *Anuario de la Universidad de Madrid*, curso 1932-1933, p. 203.

⁴⁶ *Actas de la Junta de Facultad de 16 de febrero de 1933*, folios 348 y 349.

implicaba elaborar con tiempo los programas, invitar a expertos extranjeros⁴⁷ u obtener las dotaciones suficientes para sufragar los gastos de los mismos. Las actas de la Junta de Facultad reflejan constantemente este interés⁴⁸, y en este periodo es rara la Junta en la que no hay una referencia explícita a estos cursos económicos o a los administrativos⁴⁹. Así, por ejemplo, en la Junta del 16 febrero de 1933 se hizo un detenido repaso de los cursos y de los profesores que habían de impartirlos el año siguiente. Se informó de que la consignación para los cursos contemplada en los anteriores presupuestos generales del Estado había desaparecido y se había sustituido por una consignación de 60.000 ptas. a favor de la facultad. Sobre esta consignación se acordó consultar al Ministerio. Se propuso prorrogar la situación de sus profesores, a los que se abonaría la cantidad mensual de 500 ptas.

Como hemos ido comprobando, en la organización de estos cursos económicos —lo mismo que los administrativos— participaba activamente el Ministerio de Instrucción Pública⁵⁰ y quedará de manifiesto de diversos modos el interés oficial por su lanzamiento⁵¹. En aquellos meses se anuncian también propuestas de diversos cursos especiales para la formación de militares⁵² o de determinados

⁴⁷ También se anunció entonces que iba a explicar un curso don Daniel Cossio Villegas, profesor de Economía de una universidad de México, *Actas de la Junta de Facultad del 16 de febrero de 1933*, folios 346 a 351; y *Actas de la Junta de Facultad del 23 de marzo de 1933*, folios 352 a 357.

⁴⁸ *Actas de la Junta de Facultad del 16 de febrero de 1933*, folios 346 a 351

⁴⁹ *Actas de la Junta de Facultad del 15 de octubre de 1932*, folio 334; *Actas de la Junta de Facultad del 22 de noviembre de 1932*, folios 337 a 340;

⁵⁰ Unos días después de la Junta del 16 de febrero, el Decano tuvo una reunión sobre la organización de estos cursos con el ministro, a quien informó detenidamente de la marcha de los mismos, *Actas de la Junta de Facultad del 23 de marzo de 1933*, folios 352 a 357.

⁵¹ «Se da conocimiento de una comunicación que remite al Consejo Nacional de Cultura solicitando designe la Facultad de su seno personas a quienes poder consultar acerca de los estudios de Comercio y Económico. Se designa con dicho fin a los Sres. Flores de Lemus y Garrigues, para sustituirles, en su caso, a los Sres. Olariaga y Gascón y Marín, respectivamente», *Actas de la Junta de Facultad de 13 de mayo de 1933*, folios 362 a 367.

⁵² «Dada lectura de un oficio de la Subsecretaría del Ministerio de la Guerra pidiendo la designación de tres catedráticos para dar una serie de conferencias en el curso de preparación de coroneles para el ascenso, sobre

funcionarios. En otras ocasiones se anuncia la visita de prestigiosos catedráticos extranjeros invitados, a iniciativa del ministro, para impartir en la facultad conferencias de Economía⁵³.

Este respaldo oficial continuará bien avanzada la República. También continuaba el elevado número de los cursos impartidos. En el periodo 1934-1935, continúan siendo ocho los seminarios especiales de estudios económicos que organizaba la facultad de Derecho, según se especifica en el *Anuario de la Universidad de Madrid*:

PROFESOR	CURSO
Ramón Carande	'Historia general de la Economía europea a partir de la Constitución de los Estados nacionales a partir del siglo XVIII'

Economía política, Economía social y Derecho de gentes. Se acuerda designar por ahora a los titulares de las respectivas cátedras de Economía Política, Política Social y Derecho Internacional Público, sin perjuicio de que si en la época en que han de darse las conferencias alguno de ellos no pudiese asistir, se designará al sustituto», *Actas de la Junta de Facultad de 14 de enero de 1933*, folio 345. También se impartieron conferencias para militares en el curso siguiente: «Comunica el Sr. Decano a la Junta haberse recibido del Ministerio de la Guerra, como el curso anterior, el ruego de que catedráticos de nuestra Facultad expliquen en el Curso de capitanes varias conferencias sobre temas de Derecho internacional y de Economía política. La Junta de Facultad acuerda acceder gustoso a este ruego y designar como profesor encargado de las conferencias de derecho internacional al Sr. Lima y, en su defecto, al Sr. Gascón y Marín. En cuanto a las de Economía, el Sr. Decano, de acuerdo con los Sres. Flores de Lemus, hará la designación del profesor que haya de explicarlas», *Actas de la Junta de Facultad de 20 de enero de 1934*, folio 387.

⁵³ «El Sr. Flores de Lemus da cuenta de sus gestiones para obtener de los profesores Cassell y Sombart que explicasen cursillos sobre materias económicas en la Facultad, siguiendo la iniciativa del Ministro. El primero se ha excusado, y el segundo pide que se le pague además de la remuneración de las conferencias, los gastos de viaje para él y para su señora, que importarán unas tres mil pesetas. El profesor daría las conferencias en alemán, siendo traducidas inmediatamente por un intérprete. La facultad acuerda aprobar estas gestiones y dar un voto de confianza al Decano para que de acuerdo con el Ministro resuelvan este asunto», *Actas de la Junta de Facultad de 14 de enero de 1933*, folios 345 y 346.

PROFESOR	CURSO
Enrique Rodríguez Mata	'Dinero y bancos'
Julio Tejero Nieves	'Doctrinas sobre el capital e interés'
Luis Olariaga y Pajana	'Política monetaria'
Jesús Prados Arrarte	'Política comercial exterior'
Federico Repáraz	'Política ferroviaria'
Carlos Mendoza	'Apuntes sobre la industria productora de electricidad en sus aspectos económico, social y político'
Manuel Díaz Pedregal	'Las haciendas locales y la regional'

5. *Los estudios especiales de Administración en la Facultad de Derecho*

Si existía un claro interés gubernamental por impulsar los estudios de Economía, otro tanto ocurría con los estudios sobre la Administración. Una de las misiones encomendadas a la Universidad era la formación de cuadros de funcionarios válidos para lograr una Administración más eficaz. Y el medio arbitrado es la impartición de unos cursos especiales administrativos. Parece que al igual que los estudios sobre Economía, a estos estudios administrativos se les da un fuerte impulso a partir del establecimiento de la República.

Con este fin se prevé que la facultad ofrezca también anualmente una serie de cursos especiales. Cada año la Junta mandaba elaborar un proyecto, bajo la coordinación de un catedrático, que debía ser presentado formalmente a la facultad para su aprobación. A comienzos del curso 1931-1932 —en el que se instauraría la República— se encomendó la coordinación de estos cursos al catedrático de Derecho administrativo José Gascón y Marín. Estaba previsto que estos cursos comenzasen el 15 de noviembre y que se prolongasen hasta el 15 de abril. Por ello, en la Junta anterior, de 3 de noviembre, Gascón y Marín presentó un proyecto que constaba de seis cursos. Cada uno de ellos sería impartido un día de la semana distinto, de lunes a sábado, y por profesores distintos. Abarcaba materias de instituciones de Derecho privado, régimen jurídico-administrativo, Derecho administrativo internacional, haciendas locales, grandes municipios e instituciones continentales de Dere-

cho público⁵⁴. Concretamente ésta era la propuesta para el curso 1931-32:

DÍA	PROFESOR	CURSO	FECHA DE COMIENZO
Lunes	Enrique Ramos	'Instituciones de Derecho privado'	25 de noviembre
Martes	Miguel Cuevas	'Régimen jurídico administrativo'	17 de noviembre
Miércoles	José Gascón y Marín	'El nuevo Derecho administrativo internacional'	18 de noviembre
Jueves	Fernando Feijoo	'Haciendas locales'	19 de noviembre
Viernes	Adolfo Posada	'Los problemas en los grandes municipios'	15 de enero de 1932
Sábados	Nicolás Pérez Serrano	'Derecho público.: Instituciones continentales'	21 de noviembre

En la misma Junta, Gascón y Marín señaló que el Ayuntamiento había estado dos veces a punto de conceder consignación para los cursos de funcionarios administrativos y que esa designación había quedado sin efectividad por los cambios y vaivenes políticos. El proyecto de Gascón y Marín fue finalmente aprobado por la Junta de Facultad⁵⁵.

En otra Junta posterior, la del 2 de julio de 1932, Flores de Lemus informó a la facultad de una entrevista mantenida recientemente con el ministro de Instrucción Pública en la que hablaron de la preocupación existente en las autoridades al observar carencias de técnica administrativa en el personal administrativo. Por ello, el ministro proponía que se enviase a algunos alumnos al extranjero a

⁵⁴ *Actas de la Junta de Facultad del 3 de noviembre de 1931*, folio 272; *Universidad de Madrid. Discurso leído en la solemne inauguración del curso académico de 1932 a 1933*, p. 103.

⁵⁵ En el proyecto presentado se añadían más datos sobre la matrícula y la fecha de comienzo de cada curso. En la misma Junta preguntó también Gascón y Marín a la Facultad si quería que continuase sus gestiones en ese sentido. Las actas concluyen de forma escueta: *y así se acordó* (*Actas de la Junta de Facultad del 3 de noviembre de 1931*, folio 277).

estudiar cuestiones como la técnica sanitaria, que entonces estaban servidas por médicos carentes de toda formación jurídica. En general, nuevamente se transmitió la preocupación del Ministerio de prodigar los estudios administrativos en las Universidades. Ya por entonces, en el caso de la Universidad de Madrid, desde hacía tiempo estaba ya funcionando en la facultad de Derecho una sección de estudios administrativos, creada para impartir cursos especiales sobre Administración.

Aquella Junta estudió los deseos del ministro de Instrucción Pública. Si lo que quería el ministro era preparar unos estudios administrativos partiendo de la investigación de sistemas extranjeros, considera la Junta que lo más interesante era enviar algunos alumnos aventajados a estudiar la organización de los Ministerios de la Guerra y de Agricultura de Bélgica y los de Hacienda de Francia y Alemania, en los que se había llevado a cabo la mayor racionalización del servicio.

En una Junta posterior, del 26 de septiembre de 1932, tras aprobarse y ratificarse los acuerdos de la Junta anterior, entre ellos el más importante relativo a los cursos de disciplinas económicas⁵⁶, sus actas hacen referencia a unos cursos especiales de Administración que habrán de impartirse en el curso siguiente⁵⁷. La crónica de las actas nos informa de diversos asuntos sobre el particular:

El Sr. Gascón hace notar que al lado de estos estudios económicos, la Facultad establecerá como otros años cursos sobre estudios administrativos, para cuya organización podría obtenerse una subvención del Ayuntamiento, haciendo una escuela de estudios municipales, pidiéndoselo al actual alcalde. La Junta acuerda que el Sr. Gascón siga sus gestiones en el sentido indicado. El Sr. Pérez Serrano advierte que ha leído en algún periódico una queja de los escolares de que los estudios económicos se preparasen en Barcelona y no en Madrid. Pide a la representación escolar que rectifique [...]

En aquella Junta se propusieron cinco cursos, sobre los temas siguientes⁵⁸:

⁵⁶ *Actas de la Junta de Facultad de 26 de septiembre de 1932*, folio 329.

⁵⁷ *Actas de la Junta de Facultad del 26 de septiembre de 1932*, folios 329 a 330.

⁵⁸ *Actas de la Junta de Facultad de 26 de septiembre de 1932*, folio 329.

PROFESOR	CURSO
José Gascón y Marín	'Lo contencioso-administrativo
Nicolás Pérez Serrano	'El sufragio'
Miguel Cuevas y Cuevas	'El régimen administrativo'
Fernando Feijoo Montes	'Las Haciendas locales'
Román Riaza y Martínez Osorio	'Historia política administrativa'

Aparte de estos cursos, se organizaron también algunos cursos especiales de distintos campos del Derecho, dados todos ellos por profesores extranjeros y a cargo del presupuesto de la facultad: Rudolf Stamler, *Filosofía del Derecho*; Schulten, *La vida en Roma a través del Corpus Iuri*; Mirkine Guetzevitch, *Derecho constitucional*; Francesco Ferrara, *Derecho civil*; Duguit, *Derecho público*; Barthelémy (decano de París), *Derecho público*; Redslob (Estrasburgo), *Derecho internacional*; Maestre, *Derecho administrativo*; Jean Paulin.

Comprobamos que la financiación de los cursos es una preocupación constante en los miembros de la Junta. No en vano, suponían ya de por sí un esfuerzo académico añadido para unos profesores con una gran diversidad de obligaciones docentes. En la Junta del 16 de febrero de 1933 se acordó que los profesores de los cursos administrativos fueran retribuidos con la cantidad de 1.250 ptas., abonable al finalizar los cursos en el mes de abril siguiente⁵⁹. Por otra parte, como el interés oficial es importante, lo mismo que en el caso de los estudios sobre Economía, se va a considerar la posibilidad de dotar algunas becas para ampliar estudios en el extranjero, como la concedida al profesor ayudante de la facultad, Prados Arrarte⁶⁰.

Al acabar el año académico, la facultad hace balance de la marcha de estos cursos y hace planes para continuar con los mismos el curso siguiente⁶¹. Y como será ya habitual, la Junta encomienda al

⁵⁹ *Actas de la Junta de Facultad de 16 de febrero de 1933*, folios 348 y 349.

⁶⁰ También se comunica a la Facultad que se ha becado al profesor ayudante de Economía política Sr. Prados Arrarte para que vaya a Alemania a ampliar estudios sobre organización administrativa y que se han dotado otras becas con el mismo fin *Actas de la Junta de Facultad del 15 de octubre de 1932*, folio 334; *Actas de la Junta de Facultad del 22 de noviembre de 1932*, folios 337 a 340.

⁶¹ «El Sr. Olariaga recaba, también, que se estudien detenidamente los resultados ofrecidos por los cursos Económico Administrativos», *Actas de la Junta de Facultad de 10 de junio de 1933*, folio 372.

decano junto con los profesores Gascón y Marín —para los cursos de Administración— y Flores de Lemus —para los cursos de Economía—, para que organicen estos cursos conforme a las normas de cursos pasados⁶².

Una última referencia a los cursos económico-administrativos en las actas la tenemos de la Junta de Facultad del día 21 de marzo de 1934. En ella, el decano propuso *motu proprio* convertir los actuales cursos económicos administrativos en un Centro Superior de Estudios Económicos y Políticos. Las fuentes se limitan a señalar que la Junta acogió con agrado el proyecto⁶³.

Lo cierto es que estos cursos sobre Administración en la facultad de Derecho continuaron prodigándose hasta bien avanzada la República. En el curso 1934-1935, la facultad organizaba ya diez cursos sobre esta materia, según se especifica en el *Anuario de la Universidad de Madrid* de aquel año:

PROFESOR	CURSO
José Gascón y Marín	El procedimiento administrativo
Fernando de los Ríos	El proceso histórico de la moderna organización e ideología del Estado totalitario
Nicolás Pérez Serrano	La evolución constitucional desde la última guerra
Luis Jordana de Pozas	Régimen jurídico de los seguros sociales
Recaredo Fernández de Velasco	Circunscripciones intermedias entre el Estado y el municipio: regiones y provincias

⁶² «El Decano da cuenta de que la Junta Económica asesora ha acordado organizar, como en años anteriores, los cursos económicos y administrativos, retribuyéndose a los profesores encargados con arreglo a las disponibilidades económicas de la Facultad. Enterada la Junta, acuerda autorizar el Decano para que, en unión y de acuerdo con los Sres. Gascón y Marín y Flores de Lemus, ultime la organización de los mencionados cursos designando a los profesores encargados conforme a las mismas normas de cursos pasados», *Actas de la Junta de Facultad del 2 de octubre de 1933*, folios 379 y 380.

⁶³ *Actas de la Junta de Facultad del 21 de marzo de 1934*, folios 396 y 397.

PROFESOR	CURSO
Román Riaza	Para la Historia de las ideas políticas
Miguel Cuevas	Gobierno y administración en la Ley Fundamental española
Demófilo de Buen	La jurisdicción del trabajo (derecho español y legislación comparada, especialmente legislación alemana, francesa e italiana)
Adolfo González Posada	La Reforma de la Constitución
Goldschmidt	Problemas jurídicos y políticos del proceso penal

El balance de todo este esfuerzo, promovido por el Ministerio y apoyado por la facultad de Derecho, fue el germen de unos estudios sobre Ciencias Económicas y sobre Ciencias de la Administración, que con el tiempo habrían de desembocar en la creación de nuevas carreras y nuevas facultades. Ello ocurriría pocos años después, tras el parón de la Guerra Civil.

6. *El examen de ingreso en la Universidad*

Al acabar el curso 1931-1932, la Universidad de Madrid ha cambiado mucho con respecto a la Universidad que existía en 1919. Una buena prueba de ello es un informe del entonces decano de Derecho, don Adolfo Posada⁶⁴, fechado en ese final de curso y en el que analiza los nuevos fenómenos de la masificación estudiantil, de la utilidad de la carrera de Derecho y de las enseñanzas allí impartidas de cara a una salida profesional. También se observa cómo las autoridades académicas de Derecho continuaban considerando que los estudios de Economía y de ciencias de la Administración debían corresponder a la docencia de la facultad de Derecho. Ante el exceso de licenciados y doctores en Derecho, Adolfo Posada propo-

⁶⁴ Sobre Adolfo Posada y su labor docente, vid. M. Martínez Neira, «La cuestión pedagógica. Adolfo Posada y la enseñanza del Derecho», *Aulas y saberes. VI Congreso Internacional de Historia de las universidades hispánicas*, Valencia, 2003, vol. II, pp. 161 a 172.

ne elevar el nivel de estudios en la Universidad y mejorar los métodos de trabajo⁶⁵:

En efecto, ha aumentado extraordinariamente la población escolar en las facultades de derecho. Hacia el año 1921 yo tenía en mi cátedra de Derecho Político unos noventa matriculados, y al jubilarme, en 1931, dicha cátedra tenía cerca de trescientos, especialmente, según parece, por aumento de la matrícula oficial, respecto de la no oficial.

Para decidir si es excesivo el número de licenciados (y doctores) que al año terminan sus estudios, habría que analizar las causas del aumento observado y las atracciones que socialmente influyen en la elección de la carrera de abogado, lo que pediría un espacio del que no dispongo. Cabe decir que, a mi modo de ver, uno de los motivos del extraordinario aumento de estudiantes de Derecho consiste en la utilidad creciente del conocimiento de las ramas jurídicas para el desempeño, no sólo de funciones de las Administraciones del estado y en las administraciones locales, sino de multitud de profesiones u ocupaciones en el servicio, asesoría, dirección de empresas comerciales e industriales y en oficinas de todo orden. No se olvide que en España las únicas instituciones oficiales de carácter universitario organizadas para los estudios jurídicos y políticos, sociales, económicos, son las facultades de derecho. Creo, sin embargo, aun teniendo en cuenta estas consideraciones, que debe estimarse excesivo el contingente anual de juristas que las Facultades lanzan a la lucha por la vida.

No creo que debe tratarse tanto de contener directamente esa abundancia de abogados y doctores con medidas restrictivas, como procurar que las enseñanzas jurídicas (económicas, políticas y sociales) se organicen al máximo de las apetecidas condiciones de eficacia, seriedad y disciplina social, dentro de la vida universitaria, elevando sin cesar el nivel de los estudios y mejorando sin descanso los instrumentos de trabajo, hasta hacer atractivo y acogedor el hogar universitario.

Contener la abundancia de licenciados con disposiciones artificiosas resultaría arbitrario. Seleccionar el personal futuro, elevando incesantemente el nivel cultural científico y profesional: he ahí el único camino, largo, difícil, sin duda, pero no hay otro.

⁶⁵ Adolfo Posada, «Informe», en *Discurso de apertura de curso de D. Francisco de Castro y Pascual, curso 1932-33*, p. 72.

Y es que, bien avanzado el año 1932, todavía es un tema de permanente debate la reforma universitaria. Era bien conocido el interés del Ministerio de Instrucción Pública por acometer una renovación de la Universidad. Fruto de estos deseos fue el proyecto de ley de bases de marzo de 1933, presentado por el ministro Fernando de los Ríos. Este proyecto estaba formado por 63 bases, de las cuales 18 se referían a cuestiones generales y 20 a las distintas facultades. Aunque el proyecto recibió amplios elogios, lo cierto es que no llegó a debatirse en las Cortes y quedó en un simple intento de reforma⁶⁶.

En todo caso, las Universidades y, particularmente la Universidad de Madrid, tenía muchas cosas que decir en un hipotético intento de reforma universitaria⁶⁷. En aquellos meses, y con este fin, fueron también frecuentes las reuniones de los decanos de las distintas facultades con el ministro de Instrucción Pública. Para el 20 de junio de aquel año fue convocada una reunión en el Ministerio de Instrucción Pública a la que se invitó a todas las facultades a enviar un representante. La facultad de Derecho fue autorizada por el ministro a enviar dos representantes. Debían acudir allí sin mandato representativo, aunque podrían aportar dos mociones —de los Sres. Castillejo y Gascón y Marín⁶⁸—, cuyo criterio podría ser asumido por la facultad de Derecho⁶⁹.

⁶⁶ M.^a F. Mancebo, *La Universidad de Valencia. De la Monarquía a la República (1919-1939)* cit., pp. 112 y 113.

⁶⁷ «El ministro de Instrucción Pública, Fernando de los Ríos, aspiraba a redondear su mandato con una obra de más valor que lamentablemente quedó incumplida. [...] En 1933 De los Ríos envió a la palestra informativa un nuevo Proyecto de Ley de Bases, esta vez de la enseñanza universitaria, que recogía las experiencias ya citadas de la Universidad madrileña, así como los acuerdos de diversos claustros reunidos con este fin. Parecía que, finalmente, la Ley de Instrucción Pública, tan anunciada y prometida de abril de 1931, iba a ser realidad. Pero los embates políticos de que estaba siendo objeto el Gobierno no le permitieron acabar su obra. Un largo periodo de crisis, con relevos sucesivos en la Cartera de Instrucción Pública, acabó con las intenciones de mayor alcance previstas para la enseñanza española». A. Molero Pintado, «La segunda República española y la enseñanza (Primer Bienio)», en *Revista de Educación*, 240 (1975), p. 59.

⁶⁸ Sobre la figura de Gascón y Marín, vid. «Gascón y Marín y el Derecho», *Revista Nacional de Educación*, 53 (1945), pp. 69-70.

⁶⁹ «Se entra en discusión sobre las mociones de los Sres. Castillejo y Gascón sobre reforma de la enseñanza universitaria. El Sr. Decano propo-

Pero sin duda, un tema debatido y que fue particularmente controvertido fue el deseo de implantar un examen de ingreso en la Universidad, lo que se conoce también con el nombre de ‘examen de selectividad’.

Por una orden con fecha de 7 de noviembre de 1934 se organizó una prueba de capacidad para el ingreso de los alumnos en las facultades universitarias. Se trataba de un examen de ingreso para tener acceso a la Universidad en general y no un examen en cada facultad. Estaba previsto que esta prueba se verificara dos veces al año, en enero y en septiembre, ante un tribunal constituido por catedráticos de Ciencias y de Filosofía y Letras. Estos tribunales se formarían en cada Universidad, en el número que el Rectorado considerase conveniente. Excepcionalmente, en el curso 1934-1935 los exámenes se verificarían en los meses de mayo y septiembre.

Según la normativa prevista sobre este examen de ingreso, un alumno que fuera reprobado cuatro veces perdería el derecho a ingresar en la Universidad. Y la aprobación del examen de ingreso sólo surtiría efecto para la Universidad donde se hubiera verificado⁷⁰.

Este decreto fue aclarado en una orden posterior de fecha 24 de noviembre en la que se añadía a las excepciones de la prueba de ingreso a los que tuvieran aprobada alguna asignatura en cualquier facultad. Estos alumnos «se encuentran exceptuados del examen de ingreso en la Universidad y, por lo tanto, en cualquier Facultad, a no ser que éstas tengan régimen de ingreso especial al que necesariamente tienen que someterse los alumnos»⁷¹, régimen especial que, por cierto, no existía en la de Derecho.

ne que estas mociones, que no se contradicen sino que se completan, sean llevadas como criterio de la Junta a la reunión convocada para el día veinte en la Universidad. Claro es que no como mandato imperativo a nuestros representantes sino como criterio que les sirva de inspiración. Así se acuerda. También advierte el Sr. Decano que según le manifestó el Sr. Ministro en la entrevista señalada, no hay ningún inconveniente para que la Facultad nombre dos representantes en vez de uno solo del que habla la orden-convocatoria. Se nombran como delegados de la Facultad a los señores Gascón y Marín y Recaséns Siches», *Actas Junta de Facultad de 17 de junio de 1932*, folio 322.

⁷⁰ Decreto de 7 de noviembre de 1934 (Gaceta de 9 de noviembre). El decreto añade otras reglas adicionales.

⁷¹ Orden de 24 de noviembre de 1934 (Gaceta del 30 de noviembre).

Una nueva rectificación del decreto de 7 de noviembre aparecía por orden del 6 de diciembre. En ella se disponía que los exámenes de ingreso para 1935 se adelantasen al mes de febrero de ese año. Otras órdenes adicionales sobre este examen fueron las de 6 y 10 de diciembre de 1934⁷²; el decreto de 30 de enero de 1935 por el que se exceptuaba también del examen de ingreso a los que poseyeran un título profesional y a los alumnos libres⁷³; y la orden de 28 de enero del mismo año por la que se disponía «que la edad que debe tener el alumno al formalizar la matrícula sea la de quince años cumplidos»⁷⁴.

Sin embargo, la continua sucesión de normas sobre este examen de acceso a la Universidad y, evidentemente, la falta de previsión inicial, llevó a una cascada de rectificaciones y precisiones, que obligaron a aprobar con fecha 23 de abril de 1935 un decreto que refundía todas las disposiciones vigentes sobre este examen: se celebraría en marzo y septiembre, y se confirma que sólo sería válido para la Universidad en que se verificara el examen⁷⁵. Las precisiones y acla-

⁷² Órdenes de 6 de diciembre de 1934 (Gaceta de 17 de diciembre) y Orden de 10 de diciembre de 1934 (Gaceta de 12 de diciembre).

⁷³ Decreto de 23 de abril de 1935 (Gaceta de 24 de abril).

⁷⁴ Orden de 28 de enero de 1935 (Gaceta de 30 de enero). Esta orden es a su vez aclarada por otra orden posterior de 21 de agosto de 1935. En ella se resuelve «que se entienda aclarado el mencionado artículo (artículo 7 del decreto de 23 de abril) en el sentido de que a todo alumno que cumpla los quince años antes del 30 del próximo mes de septiembre se le admita la matrícula para efectuar el ingreso en las Universidades» (Orden de 21 de agosto de 1935, Gaceta de 22 de agosto). También otra orden posterior de 28 de septiembre se exceptúa de esta regla a «los alumnos que, habiendo obtenido premio extraordinario en los exámenes de ingreso en la Universidad, cumplan los dieciséis años después del 30 de septiembre y antes del 31 de mayo». Establece que les sea admitida la matrícula oficial ordinaria en la Facultad en que vayan a cursar sus estudios. Para el resto de los alumnos no se admitirá la matrícula oficial si no han cumplido los dieciséis años de edad (orden de 28 de septiembre de 1935, Gaceta de 30 de septiembre).

⁷⁵ Decreto de 30 de enero de 1935 (Gaceta de 1 de febrero). Este decreto fue complementado con una orden de 23 de abril en la que se dictaban disposiciones para la ejecución de aquel decreto (Orden de 25 de abril de 1935, Gaceta de 26 de abril); y por otra de 1 de julio de 1935, que disponía que en el mes de agosto se admitieran matrículas condicionales para asignaturas del primer año conjuntamente con la de ingreso (Orden de 1 de julio de 1935, Gaceta de 8 de julio).

raciones se sucedieron hasta bien entrado el tumultuoso curso 1935-1936, en el que comenzaría la Guerra Civil⁷⁶.

7. *Epílogo: el estallido de la Guerra Civil*

Las actas conservadas de la facultad de Derecho acaban en junio de 1934. A partir de esa fecha se inicia un nuevo volumen de actas que no ha llegado hasta nosotros. Por tanto, carecemos de datos de los acuerdos de la Junta a partir de septiembre de 1934.

Aunque las fuentes de la facultad callen sobre lo que ocurrió en aquellos últimos meses antes de la Guerra Civil, la Universidad continuó con su actividad, y no se vio paralizada ni la labor legislativa de las Cortes, ni tampoco la labor del Gobierno ni de los ministerios. De hecho, incluso tras el comienzo de la guerra, tuvo nueva vida la actividad normativa del Ministerio de Instrucción Pública y, muy particularmente, en lo relativo a la cuestión de los planes de estudio.⁷⁷

El 8 de octubre de 1936 el subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública remitió un telegrama a todas las facultades de Derecho de España en el que pedía nuevos informes para organizar las enseñanzas de las universidades. También se ordenaba que fueran reunidas las Juntas de Facultad de todas las Universidades situadas en ciudades bajo dominio del Gobierno republicano y que propusiera al Ministerio de Instrucción Pública un plan de las enseñanzas o trabajos que pudieran realizar en relación con las necesidades de la lucha del pueblo español. En la comunicación también se intentaba realizar un control de los profesores que asistían a la reunión. Se pedía que los decanos diesen cuenta de los catedráticos y profesores que hubieran asistido y se incluyeran las razones que alegasen los no presentados para justificar su ausencia.

Pero, evidentemente, poco más se podía hacer en esos momentos. La guerra paralizó las universidades y muchos profesores abandonaron su actividad científica. Cuando comenzó el asedio de

⁷⁶ Cfr. Decreto de 8 de octubre de 1935 (Gaceta de 11 de octubre) y órdenes de 14 y 21 de octubre de 1935 (Gacetas de 18 y 25 de octubre).

⁷⁷ Vid. M. Fernanda Mancebo, *La Universidad de Valencia*, cit., pp. 145-149.

Madrid, también muchos de ellos se trasladaron a la nueva capital de la República, Valencia. Y los alumnos de la facultad debieron mayoritariamente incorporarse a filas y un buen número de ellos perderían la vida durante la guerra. De esta manera, la Universidad fue una víctima más de la Guerra Civil.

José M.^a Puyol Montero
Universidad Complutense

APÉNDICE

Informe de la Junta de Facultad de Derecho sobre la creación de una Facultad de Economía, *Actas de la Junta de Facultad de 15 de septiembre de 1931*, folios 246-252.

La Junta de Facultad de Derecho de la Universidad Central, honrada por la Superioridad con el encargo de informar acerca del anteproyecto de creación de una Facultad de Economía, ha acordado en primer término expresar su gratitud al Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública por la señalada consideración de que la hace objeto con la expresada consulta.

Correspondiendo a ella y expresando su opinión con la sinceridad debida al Gobierno que la requiere y a la cultura nacional, no oculta sus dudas sobre la posible eficacia de la creación de una Facultad de Economía para el logro de los fines perseguidos según el preámbulo del decreto. Y si la disposición de la Superioridad impide inventar alternativas al sistema, la lealtad no permite a esta Junta silenciar su juicio en aspecto tan capital.

Con el debido respeto manifiesta también la Junta su dificultad para interpretar si el deseo expresado en el preámbulo antedicho es la formación de economistas, de hombres que conozcan sistemática y científicamente la materia económica, o de personas capacitadas para la gerencia de empresas. Los técnicos de la Banca, y en la economía rural, y en los transportes, y en la electrificación, y en la racionalización, y en las empresas municipales, y en la vivienda, y en la función de los Sindicatos en el Estado moderno, a que el preámbulo se refiere, pueden tener la una o la otra formación y tanto los unos como los otros, son necesarios al desenvolvimiento económico de las naciones.

Esta Junta podía plantearse el problema de incorporar ese doble criterio a la creación de una Facultad de Economía, pues aún cuando entiende que dicha mezcla de la preparación especulativa y propiamente científica con la técnico-práctica va en perjuicio de la eficiencia del sistema de enseñanza y no responde desde luego al espíritu de la Universidad europea creadora de la cultura moderna, existen, no obstante, instituciones que procuran atemperarla; pero contando España con las Escuelas Superiores Técnicas y con las de Comercio, considera esta Junta que es privativa de las mismas la

enseñanza de las diversas técnicas de la empresa, y que sería un error que la Universidad les disputara una función que le es menos adecuada. Y comprendería, asimismo, que siendo lo más urgente la formación de dichos técnicos, el Estado procurase desarrollar y atender con especial interés sobre todo a las Escuelas de Comercio.

Supone, por tanto, esta Junta que la Facultad de Economía cuya creación se ha decretado, ha de tener por cometido la formación de economistas propiamente dichos, de científicos de la Economía. Desde este punto de vista, no puede menos de subrayar un escrúpulo fundamental y de principio. A juicio de esta Junta, el economista no puede producirse apropiadamente en una preparación espiritual meramente instrumental o técnica sino que ha de tenerse en cuenta la conexión de lo económico con lo jurídico. La ciencia económica, desde que adquirió plenamente rango de tal, fue una ciencia de las llamadas morales, y la materia que la sirve de objeto no vive aislada de una serie de relaciones humanas autónomas, simples y específicas, sino en una serie de relaciones complejas y sustancialmente jurídicas. Y a medida que los tiempos avanzan y esas relaciones van convirtiéndose de privadas en públicas, su sentido jurídico se va destacando de una manera más concluyente y precisa.

Esta observación es uno de los argumentos que han llevado a la Junta informante a comenzar por salvar su opinión sobre la probable eficacia de la creación de una Facultad separada de Economía.

Hechos los reparos y aclaraciones que anteceden, considera esta Junta que los estudios de Economía en una Facultad a ellos expresamente dedicada, tal como ha sido concebida la disposición que se informa, debiera realizarse en cinco cursos y componerse de las siguientes enseñanzas:

Primer curso. Complemento de matemáticas (12 horas semanales. A estudiar en la Facultad de Ciencias). Conceptos fundamentales de Economía Política (6 horas semanales). Historia económica y social —primer curso—. Historia de las Edades Antigua y Media (6 horas semanales). Complemento de lengua francesa (3 horas semanales. A estudiar en la Escuela Central de Idiomas).

Segundo curso: Economía política general (6 horas semanales). Teoría general de la Estadística (3 horas semanales). Teoría general de la Hacienda (6 horas semanales). Historia Económica y Social, segundo curso (desde los descubrimientos geográficos hasta el maquinismo (6 horas semanales). Lengua inglesa —primer curso— (3 horas semanales. A estudiar en la Escuela Central de Idiomas).

Tercer curso: Historia económica y social —tercer curso— (desde la implantación del maquinismo hasta la Gran Guerra. 6 horas semanales). Política económica: agraria, industrial y comercial (6 horas semanales). Teoría especial de la imposición (3 horas semanales). Dinero y bancos (3 horas semanales). Estadística demográfica (3 horas semanales). Lengua inglesa —segundo curso— (a estudiar en la Escuela Central de Idiomas. 3 horas semanales).

Cuarto curso: Historia económica y social —cuarto curso— La guerra y la postguerra (6 horas semanales). Política social contemporánea (3 horas semanales. A estudiar en la Facultad de Derecho). Hacienda pública española, general y local (6 horas semanales). Nociones fundamentales de organización de la empresa privada y concentración de las empresas, con especial consideración de la llamada racionalización (6 horas semanales). Estadística administrativa (3 horas semanales). Lengua alemana —primer curso— (3 horas semanales. A estudiar en la Escuela Central de Idiomas) o Complemento de lengua alemana (3 horas semanales. A estudiar en la Escuela Central de Idiomas).

Quinto curso: Problemas actuales de la organización económica del mundo, con especial consideración de los europeos (3 horas semanales). Cuestiones fundamentales actuales de la Economía pura (3 horas semanales). La coyuntura económica y los métodos de observación y prognosis (6 horas semanales). Hacienda pública de las grandes potencias (3 horas semanales). Estadística económica (3 horas semanales). Lengua alemana —segundo curso— (3 horas semanales. A estudiar en la Escuela Central de Idiomas).

Doctorado: El Doctorado no se estudiará en curso aparte. Consistirá en trabajos de Seminario que organizará la Facultad y podrán ser cursados dentro del periodo de Licenciatura.

Profesorado: Para desempeñar las correspondientes Cátedras habría que contar dentro de la Facultad con cuatro economistas, dos especialistas en Historia económica y social y dos estadísticos. Y para la provisión de dichas Cátedras debiera seguirse, a juicio de esta Junta, el procedimiento legal vigente para la provisión de Cátedras de nueva creación, es decir, la oposición libre entre aspirantes que tengan título de Doctor en la Facultad o título de Escuela Superior Técnica. Esa norma ha de ser aplicable a la selección del profesorado nacional, quedando la Facultad autorizada para contratar libremente la colaboración del personal docente extranjero.

El programa bosquejado es una mera distribución de enseñanzas y no implica incompatibilidades de estudio entre ellas, fuera de las que lógicamente deben reconocerse.

Por otra parte, se trata del cuadro de estudios mínimos y ha de ser complementado por cursos especiales. Por ejemplo, la política monetaria actual de España, la agraria, la ferroviaria, la de la energía hidroeléctrica, etc. La naturaleza de dichos cursos supone: primero, que han de seguirlos únicamente los alumnos a quienes les interese; segundo, que deben ser circunstanciales y quedar fuera del cuadro básico de asignaturas para poder hacer los cambios que se entienda procedentes; tercero, que no debe encargarse su explicación a un profesorado permanente.

En consecuencia, la Facultad debiera quedar autorizada para organizar, con la previa aprobación del Gobierno, cursos complementarios, así como para encargar de la enseñanza de los mismos a personas especialmente competentes.

LA HISTORIA ANTIGUA EN LA ENSEÑANZA: LOS EJERCICIOS PÚBLICOS DE HISTORIA LITERARIA EN LOS REALES ESTUDIOS DE SAN ISIDRO (1790-1791)*

Tradicionalmente se viene asumiendo que los estudios sobre historia antigua en España durante el siglo XVIII no alcanzaron el nivel que esta disciplina comenzaba a tener en otros países europeos, en gran parte debido al retraso con que la historia llegó a los centros universitarios quedando relegada en muchos casos a las aficiones de eruditos, e incluso de los aficionados, que operaban de una manera más rigurosa desde la Academia de la Historia desde 1738¹. Es cierto, por tanto, que la enseñanza de la historia durante este siglo se limita básicamente al ámbito de los estudios secundarios y dentro de éstos se hizo siempre un mayor hincapié en la historia de España, dejando muy poco espacio a la historia universal del mundo antiguo. Por otra parte, también es cierto que la publicación de libros sobre estos temas fue menor en España que en otros países europeos que durante el XVIII sacaron a la luz importantes monografías sobre las culturas de la antigüedad, fundamentalmente Grecia y Roma². Sin embargo, también es necesario destacar durante este siglo el nacimiento de algunas iniciativas que pretendían difundir la cultura en general, y la antigua en particular³. Este es el caso

* Este trabajo ha sido realizado en el seno del proyecto de investigación financiado por el programa Ramón y Cajal: *El uso del mundo clásico en la construcción de modelos ideológicos en España durante los siglos XVIII y XIX*.

¹ Sobre la formación del historiador profesional ya en el siglo XIX, véase: I. Peiró: *Los guardianes de la historia. La historiografía académica de la Restauración*, Zaragoza, 1995.

² M. Romero Recio, «Fondos del siglo XVIII sobre Historia Antigua en la Biblioteca de la Universidad Complutense», *Pliegos de Bibliofilia*, 26 (2004) en prensa.

³ En los últimos años se está reivindicando la figura de Carlos IV y Godoy en este sentido: A. M. Canto, *La arqueología española en la época de*

de los Reales Estudios de San Isidro que desde su Biblioteca y especialmente desde su cátedra de Historia Literaria, prestó una especial atención al ámbito de la antigüedad superando los límites de la historia de España.

En 1770 Carlos III refunda en el antiguo Colegio Imperial los Reales Estudios de San Isidro y potencia la formación de su Biblioteca que se inaugurará en 1785 como un centro público que buscó, incluso compatibilizando sus horarios con los de la Biblioteca Real, favorecer el acceso a todas aquellas personas interesadas en la consulta de sus fondos⁴. Los Reales Estudios nacieron, por tanto, con la intención de potenciar el estudio de disciplinas poco, nada o mal trabajadas en las Universidades. Se dieron clases de Matemáticas, Retórica, Poética, Griego, Árabe, Hebreo, Historia y, en relación con el tema que nos ocupa, Historia Antigua.

Desde el primer momento, y vinculado a la Biblioteca del centro, existió un interés por la antigüedad materializado por una parte, en las enseñanzas que habrían de impartirse en la cátedra de Historia Literaria y, por otra, en el proyecto de creación de un Museo de Monedas que expusiese las colecciones que habían pertenecido a los jesuitas incrementadas con nuevas adquisiciones fomentando, asimismo, la publicación de obras sobre numismática. El segundo bibliotecario, Cándido María Trigueros fue el encargado de catalogar y estudiar el fondo, que inventarió en siete clases, entre las que incluye las imperiales romanas, consulares romanas y medallas antiguas de pueblos, ciudades, reyes y varones ilustres⁵. Desgraciadamente el proyecto fracasó básicamente por las enemistades surgidas entre Miguel de Manuel, primer bibliotecario y Cándido María

Carlos IV y Godoy. *Los dibujos de Mérida de Don Manuel de Villena Moziño*, Madrid, 2001.

⁴ Las cuestiones relativas a la creación de los Reales Estudios de San Isidro después de la expulsión de los jesuitas, así como a las competencias de sus bibliotecarios pueden verse en: J. Simón Díaz, *Historia del Colegio Imperial de Madrid (Del Estudio de la Villa al Instituto de San Isidro: años 1346-1955)*, 2ª ed. actualizada, Madrid, 1992 (la primera edición de este libro —Madrid 1952-1959— comprende dos volúmenes y varía sensiblemente en su contenido); A. Miguel Alonso, *La Biblioteca de los Reales Estudios de San Isidro*, Madrid, 1992.

⁵ A. Miguel Alonso, *La Biblioteca de los Reales Estudios de San Isidro*, p. 104.

Trigueros, aunque sí dejan patente el interés que había surgido en la institución en relación con el conocimiento de la antigüedad.

El 23, 24 y 25 de septiembre de 1790 tuvieron lugar en los Reales Estudios de San Isidro los primeros ejercicios públicos del primer curso de la cátedra de Historia Literaria. Dicha cátedra, por decisión de Carlos III al constituirse en Biblioteca pública en 1785, estaba a cargo del primer bibliotecario que había sido en primer lugar don Francisco Meseguer y Arrufat, pero que en el momento de la celebración de los exámenes era don Miguel de Manuel —jurisconsulto que había sido Secretario, Fiscal, Vicepresidente y Presidente de la Real Academia de la Historia⁶—. Las clases de la cátedra que se habían iniciado en abril de 1787 y que debían prolongarse durante cuatro cursos anuales, tuvieron que ser interrumpidas en mayo de ese mismo año por «indisposiciones» de Meseguer y Arrufat y no fueron retomadas hasta enero de 1789⁷. Parece que en este primer curso se inscribieron ciento cincuenta y cuatro personas.

Como veremos más adelante al detenernos en cada uno de los estudios presentados a los exámenes de la cátedra, los alumnos que acudían a las clases no eran ni mucho menos jóvenes estudiantes en formación. Francisco Meseguer y Arrufat y Miguel de Manuel (entonces bibliotecario segundo) tenían claro a quién irían dirigidas sus clases cuando el 23 de diciembre de 1785 expusieron los objetivos de estos estudios en el *Método para la enseñanza de la Historia literaria*⁸:

Es enteramente voluntaria: porque [la Historia Literaria] no está en el número de aquellas Ciencias que forman lo que se llama Carrera literaria y cuyos Cursos se necesitan para los hombres y más afectos académicos; no se pueden esperar en ella más oyentes que los que traerá la curiosidad, o tal vez la diversión; y aun estos

⁶ J. Simón Díaz, «La Biblioteca, el Archivo y la Cátedra de Historia Literaria de los estudios de San Isidro, de Madrid», *Revista bibliográfica y documental*, 1 (1947) 5, n.º 16.

⁷ Así se indica en *Ejercicios publicos de historia literaria: que tendrán en los Estudios Reales de Madrid los señores En los días 23. 24. y 25. de Septiembre de 1790. A las 3./2 de la tarde en la Biblioteca. Asistidos del Cate-drático de Historia Literaria Don Miguel de Manuel y Rodríguez, Bibliotecario primero de los mismos Estudios Reales*, Madrid, Benito Cano, 1790, p. 2 de la introducción (la numeración es nuestra).

⁸ Texto reproducido íntegramente por Simón Díaz, *Historia del Colegio Imperial de Madrid*, vol. II, 126-128 (AHN, Universidades, leg. 222).

serán por la mayor parte de los mismos que concurran a las demás enseñanzas. Por lo mismo juzgan los Bibliotecarios que estas Lecciones ni deben tenerse todos los días ni en las mismas horas en que están abiertas otras Aulas. Serán, pues, las lecciones de Historia Literaria dos días en la semana, los Martes y los Viernes por la mañana, desde las once horas hasta la una; y durarán todo el tiempo que dura el curso de estos estudios.

Así pues, muchos de los individuos que acudieron a la cátedra de Historia Literaria eran personajes destacados de la vida intelectual⁹, muy vinculados algunos de ellos a los estudios históricos a través de la Real Academia de la Historia o la de Bellas Artes, que encontraron en los Reales Estudios de San Isidro un lugar donde ampliar conocimientos ajenos al ámbito universitario¹⁰. Esta claro, por tanto, que el proyecto del Instituto era ambicioso y pretendía sacar a la luz y, en cierto modo, oficializar unos estudios que habían sido relegados y constreñidos a los intereses de un reducido grupo de eruditos poco conocidos y demasiado mediatizados, la mayoría de ellos, por su condición religiosa. Las palabras de Miguel de Manuel aluden a alguna de estas cuestiones:

Nos lisonjamos de que esta muestra de laboriosa aplicación á todo género de literatura en varios sujetos que frecuentan la Biblioteca de estos Estudios Reales para instruirse privadamente, dará una prueba nada equívoca de que muchos no suelen ser conocidos por falta de oportuna ocasion de serlo: circunstancia notoriamente favorable de este público instituto de la Historia Literaria. Y es de esperar que este loable exemplo anime á otros á manifestar su talento, y coadyuvar con sus luces á desvanecer el concepto de inaplicados á la cultura é ilustracion del espíritu, con que injustamente se calumnia á nuestros Naturales¹¹.

⁹ «De todas clases» como se indica en la introducción a los primeros ejercicios (p. 3).

¹⁰ Sólo a modo de ejemplo, cuando José Isidoro Morales realiza los exámenes tiene 32 años y en 1793 será nombrado Director de Matemáticas de los pajes del Rey. Por su parte, Isidoro Bosarte acude ya con 43 años a las clases impartidas en los Reales Estudios y en 1792 es nombrado Secretario de la Real Academia de San Fernando.

¹¹ *Ejercicios publicos de historia literaria: que tendrán en los Estudios Reales...1790*, p. 3 de la introducción.

Y la demostración más evidente de que existía un afán de difundir estos estudios se plasma en el proyecto que el catedrático tenía de publicar los resultados de los exámenes:

Aunque el público será libre en inquirir estos en el certamen, se procurará imprimirlos más adelante, á fin de que no se prive de una parte tan principal del fruto que hasta ahora ha producido esta nueva enseñanza: la qual, si no nos engaña el halagüeño aspecto que aquí ofrece, nos prometemos, que tal vez podrá ser algun dia el medio mas seguro para restaurar la antigua ilustración Española, que tanto promueve en toda la nacion, á exemplo de su Augusto Padre, nuestro amado Monarca el Señor Cárlos IV, con las luces y auxilios de su sabio Ministerio¹².

No parece extraño que se vinculase la enseñanza de la Historia Literaria a la Biblioteca del antiguo Colegio Imperial teniendo en cuenta, por una parte, que este tipo de estudios no pasarán de la enseñanza secundaria a la Universidad hasta que en 1857 se funde la Facultad de Filosofía en la codificación de Claudio Moyano —si bien se habían realizado algunos intentos en este sentido desde 1843—¹³ y, por otra, que dentro del concepto de Historia Literaria en el siglo XVIII, cobraba una gran importancia, entre otros, el estudio de la bibliografía, es decir, de los mejores libros que habían tratado un tema específico¹⁴. El trabajo de los bibliotecarios quedaba por tanto ampliamente justificado, si tenemos en cuenta, además, la trayectoria intelectual de estos personajes, y adquiere pleno significado si se consideran las apreciaciones que D. Miguel de Manuel realiza en la introducción a los primeros Ejercicios:

Pero la Cátedra de Historia Literaria establecida por el Señor Don Carlos III en la Biblioteca pública de estos Estudios Reales,

¹² *Ejercicios publicos de historia literaria: que tendrán en los Estudios Reales... 1790*, pp. 5 y 6 de la introducción.

¹³ Entre otros: A. Álvarez de Morales, *La ilustración y la reforma de la Universidad en la España del siglo XVIII*, 3ª ed., Madrid 1985; A. Álvarez de Morales, *Génesis de la Universidad española* contemporánea, Madrid, 1972; M. y J. L. Peset, *La Universidad española (siglos XVIII y XIX)*, Madrid, 1974; E. Hernández Sandoica, J. L. Peset, *Universidad, poder académico y cambio social (Alcalá de Henares 1508-Madrid 1874)*, Madrid, 1990.

¹⁴ I. Urzainqui, «El concepto de *Historia literaria* en el siglo XVIII», en *Homenaje a Álvaro Galmés de Fuentes*, III, Oviedo-Madrid, 1987, pp. 581-582.

que restauró en 1770, abraza todavía objetos de mayor utilidad. Su misma institución está diciendo que el fin de esta enseñanza no es solamente la material demostración de los libros buenos, sino mas bien la profunda y fundamental educacion en la serie y genealogía de todos los conocimientos humanos, presentados en sus orígenes, en sus edades y en sus diversos estados. Estas noticias que indispensablemente envuelven en sí la advertencia de todo lo mejor que se ha escrito en cada una de las ciencias y artes, acostumbran á pensar bien; arrebatan de las manos los libros de error, prevaricación y superficialidad; y al cabo forman un sabio sobre los exemplares de los bueno y de lo útil¹⁵.

Según el *Método para la enseñanza de la Historia Literaria*, ésta «se extiende a todos los siglos, a todas las Naciones; y comprende todos los conocimientos humanos; todas las ciencias, todas las obras de arte, y de la naturaleza, todos los seres existentes, posibles y aun imaginables...». En la introducción a los ejercicios públicos, Miguel de Manuel abunda en estos aspectos al afirmar que la cátedra de Historia Literaria tenía como fundamento la «educación en la serie y genealogía de todos los conocimientos humanos, presentados en sus orígenes, sus edades y en sus diversos estados», de ahí que los temas de los ejercicios girasen en torno a cuestiones históricas y no propiamente literarias, si bien se da especial relevancia en algunos de ellos a estas últimas. Efectivamente, hasta bien entrado el siglo XIX se consideraba que la «historia literaria» debía estudiar la historia de los conocimientos humanos y su progreso cultural, con el fin siempre de que el conocimiento del pasado fuese útil en el desarrollo histórico presente¹⁶. Y será a una parte de ese pasado, la historia antigua, al que estarán dedicados todos los ejercicios de la cátedra de Historia Literaria de los Reales Estudios en 1790, puesto que durante el primer curso se habían explicado «en quarenta y dos discursos la cultura de las Naciones bárbaras con la de los Egipcios, Griegos y Romanos hasta la decadencia del Imperio [...] en una instruccion del todo nueva en España, y quizás única en Europa por su método, concurrencia y efectos»¹⁷.

¹⁵ *Exercicios publicos de historia literaria...1790*, introducción, pp. 1-2.

¹⁶ Sobre estos aspectos, véase I. Urzainqui, «El concepto de *Historia literaria...*», pp. 565-589.

¹⁷ *Exercicios publicos de historia literaria...1790*, introducción, p. 3.

Evidentemente, la elección de los temas del primer año se basa en un criterio cronológico que pretendía avanzar en las distintas fases de la historia, pero también denota un interés por temas diversos en torno a la antigüedad, pues en unos estudios que iban a prolongarse durante cuatro cursos, la historia antigua ocupó un año entero, exactamente lo mismo que uno de los temas estrella de la época, el análisis de los textos bíblicos, al que estuvo dedicado el segundo curso¹⁸. Es más, incluso entre los ejercicios del segundo año se retoma uno de los temas que no pudo ser expuesto el primero por «indisposición» de uno de los alumnos, Nicolás Mariano de la Bodega. Se trata de las *Observaciones históricas y literarias sobre los orígenes de la Escritura, y materias que para ella han servido* que serán presentadas por Isidoro Bosarte entre los restantes trabajos relativos a la historia y los textos sagrados.

Tanto en el *Método para la enseñanza de la Historia literaria*, como en el *Discurso sobre el estudio metódico de la Historia Literaria para servir de introducción a los primeros ejercicios públicos de ella, que en los días 23, 24 y 25 se tuvieron en la Biblioteca de los Estudios de esta Corte* realizado en 1790 por el segundo bibliotecario, don Cándido María Trigueros¹⁹ —encargado de sustituir en las clases al primer bibliotecario cuando era necesario y de recabar datos para la preparación de las lecciones de historia literaria— se recomienda como manual un texto redactado en italiano por un jesuita expulso, el padre Juan Andrés, cuya traducción al español corrió a cargo del hermano del autor, don Carlos Andrés. Se trata del *Origen, progresos y estado actual de toda la literatura* (10 vols., Madrid, Antonio

¹⁸ *Exercicios publicos de Historia Literaria que han de tenerse en la Biblioteca de los Estudios Reales de Madrid: dedicados al Rey nuestro Señor Don Carlos IV. Y en su Real Nombre presididos por el Exc.mo Señor Conde de Floridablanca Defenderan las proposiciones los señores ... Asistidos por Don Miguel de Manuel, Bibliotecario Primero Catedrático de Historia Literaria en los mismos Estudios Reales. En los días 10. 12 y sigtes de Diciembre de 1791. Á las tres y ma. de la tarde*, Madrid, Benito Cano, s.a. 1791?

¹⁹ Texto reproducido también por Simón Díaz, *Historia del Colegio Imperial de Madrid*, vol. II, pp. 269-278. En la introducción que realiza D. Miguel de Manuel a los primeros Ejercicios se indica que «a estos Ejercicios públicos se dará principio con un Discurso que leerá el Señor Don Cándido María Trigueros, Bibliotecario segundo, como preliminar al Estudio de la Historia Literaria», p. 6 de la introducción.

de Sancha, 1784-1806), una obra en la que también se hace un especial hincapié en los estudios de Grecia y Roma.

El padre Andrés fue un amante de las antigüedades. Sabemos que fue académico y secretario perpetuo de la Academia Herculanense de Inscripciones y Bellas Artes y que estudió inscripciones y papiros —hallados en las excavaciones que se estaban realizando en Pompeya y Herculano—, monedas y códices²⁰. Además manifestó un gran interés por los restos arqueológicos que pudo contemplar en su viaje por Italia y que conocemos gracias a la publicación de las cartas que envió a su hermano Carlos: *Cartas familiares del abate D. Juan Andrés a su hermano D. Carlos Andrés dándole noticia del viaje que hizo a varias ciudades de Italia en el año 1785, publicadas por el mismo D. Carlos* (Madrid, Antonio de Sancha, 5 vols., 1786-1793). El volumen II, por ejemplo, está dedicado a un itinerario repleto de restos arqueológicos de la antigüedad: Roma-Nápoles-Pompeya-Herculano-Módena-Mantua. Publicó también la *Carta del abate D. Juan Andrés Socio de la Real Academia de las Ciencias, y Letras Humanas de Mantua, al señor conde Alexandro Muraribra, acerca del reverso de un medallón del Museo Bianchini, que no entendió el Marqués Maffei* (Madrid, Antonio de Sancha, 1782), donde el traductor destaca que en su versión italiana fue propuesta por los «Italianos como modelo de Disertaciones de Antiquaria» (p. 11). Mostró asimismo su conocimiento de Virgilio y otros clásicos, así como de la mitología griega y romana en su *Disertacion en defensa del episodio de Virgilio sobre los amores de Eneas y de Dido, dicha en italiano por el abate Don Juan Andrés, en la academia de Ciencias y Buenas Letras de Mantua*, Madrid, Antonio de Sancha, 1788²¹.

Esta aproximación constante a los clásicos y a la antigüedad tendrá su reflejo en *Origen, progresos y estado actual de toda la literatura*, donde, además de tratar en el primer tomo las literaturas orien-

²⁰ Sobre este autor y su obra véase principalmente: M. Batllori, *La cultura hispano-italiana de los jesuitas expulsos españoles, hispanoamericanos, filipinos, 1767-1814*, Madrid 1966, pp. 534 ss.; J. J. Caerols, *Las literaturas clásicas en Juan Andrés, Cuadernos de Eslavística, Traductología y Comparatismo*, 6, Madrid, 1996; J. Andrés, *Origen, progresos y estado actual de toda la literatura*, I, Madrid, 1997, «Estudio Preliminar», J. García Gabaldón, S. Navarro Pastor, C. Valcárcel (eds.), XXIX-CLXVI. También sobre su papel en la historia literaria: Urzainqui, «El concepto de *Historia literaria...*», pp. 572 ss.

²¹ J. J. Caerols, *Las literaturas clásicas...*, pp. 9-14.

tales en menor medida y, con mayor extensión, la griega y la latina, se dedica un apartado a las literaturas clásicas en casi todos los capítulos de la obra que divide en tres clases —Buenas Letras, Ciencias Naturales y Ciencias Eclesiásticas— y una más que precede a las otras tres, la Historia general filosófica de toda la literatura. El primer volumen de su obra está dedicado, por tanto, en primer lugar, a las literaturas orientales —caldea, persa, hebrea, fenicia, árabe, india, china—, en segundo lugar, a las literaturas griega y latina, en tercer lugar, a los cinco primeros siglos de la literatura eclesiástica y, por último, a las literaturas medieval, árabe, renacentista y de los siglos XVI, XVII y XVIII.

No sabemos cuáles fueron exactamente los contenidos de las clases de la Cátedra de Historia Literaria, pero teniendo en cuenta los títulos de los trabajos presentados, no hay duda de que estuvieron muy ajustados al temario del primer tomo de la obra de Juan Andrés.

Los temas desarrollados por los nueve alumnos que leyeron sus ejercicios el primer año fueron los siguientes²²:

- Don José Isidoro Morales, Presbítero, Doctor en Teología y Filosofía, y Opositor a Canonjías de la Real Iglesia de San Isidro: *Sobre la Historia de la educación pública de las Naciones antiguas y de sus Escuelas hasta el establecimiento de la de Alejandría.*
- Don Martín José Ordoqui, Bachiller en ambos Derechos, *Sobre qué utilidad puede acarrear á los estudios modernos la Historia de los estudios antiguos.*
- D. Baltasar Félix de Miñano y Las Casas, Licenciado: *Sobre el estado comparativo de la cultura y saber de las antiguas naciones Asiáticas y Africanas.*
- D. Alfonso de Manuel y Arriola, Abogado del Colegio de Madrid: *Estado comparativo de la cultura literaria de las Naciones Europeas hasta Augusto, exclusas Grecia y Roma.*
- D. José Cornide, Capitán de las Milicias Urbanas de La Coruña, Académico honorario de la Real Academia de la Historia: *Ensayo sobre el origen, progreso y estado de la Historia Natural entre los antiguos anteriores á Plinio.*

²² Incluimos el grado académico y los detalles profesionales que se destacan en *Ejercicios publicos de Historia Literaria... 1790.*

- Isidoro Bosarte: *Observaciones sobre las Bellas Artes hasta la conquista de Grecia por los Romanos.*
- Matías Jorge de Arcas, del Colegio de Abogados de Madrid: *Examen del influxo que las costumbres y constitucion política de los griegos pudo tener ó tuvo en el establecimiento de las sectas filosóficas.*
- D. José López de la Torre Ayllón, Doctor en Teología y Colegial del Sacro Monte de Granada: *Noticia de los Filósofos Griegos anteriores á la Escuela de Alexandría, de quienes tenemos algunas obras, indicando quáles son, y sus mejores ediciones.*
- D. Vicente González Arnao, Doctor en ambos Derechos, del Gremio y Claustro de la Universidad de Alcalá, y Abogado de los Reales Consejos: *Noticia de las Bibliotecas antiguas con observaciones filosóficas sobre las causas de su fundación y de su destruccion.*

Conocemos también otros títulos que no llegaron a ser expuestos por enfermedad de los alumnos:

- D. Agustín de la Calle, Presbítero, Doctor en Teología: *Observaciones históricas sobre la parte del saber, que llamamos Historia Literaria con reflexiones filosóficas sobre los escritos que para su perfección sobran o faltan.*
- D. Nicolás Mariano de la Bodega, Abogado de los Reales Consejos: *Observaciones históricas y literarias sobre la invención de la escritura; sus modos y las materias que sirvieron para ella.*
- D. Benito Rubio y Ortega, del colegio de Abogados de Madrid: *Reflexiones filosóficas sobre la causa de haber escrito en verso todos los primeros Escritores de Grecia, y una noticia de los Poetas Griegos que han llegado a nuestros días.*
- D. Domingo Vázquez Freyre, Maestro de Matemáticas en la Real Academia de Caballeros Guardias Marinas del Ferrol, dice que ha empezado a leer pero no ha finalizado sus *Observaciones filosóficas y literarias sobre el origen y progresos de las ciencias matemáticas puras hasta el establecimiento de las escuelas de Alexandría; con la noticia de los escritos de ellas que tenemos en el día.*
- D. Juan José Heydek, agregado la Biblioteca de los Reales Estudios de San Isidro: *Literatura de los hebreos en todo géne-*

ro de ciencias y artes desde Moisés hasta la destrucción del primer templo, y desde ésta hasta la del segundo, con la serie cronológica de sus escritores y obras legítimas que se conocen ó se citan en los libros del Viejo Testamento, y en los Talmudes Babilónico y Jerosolimitano.

Por lo que respecta a los trabajos abordados en el segundo curso, sabemos que se presentaron los siguientes:

- Isidoro Bosarte, *Observaciones históricas y literarias sobre los orígenes de la Escritura, y materias que para ella han servido.*
- Andrés de Andrés García. Presbítero. Doctor en Filosofía y Teología, y capellán penitenciario de la Real Iglesia de San Antonio de Alemanes de esta Corte. *Sobre el Cónon de los Libros Sagrados de los Hebreos, sus Autores, é Idiomas en que se escribieron originalmente.*
- Juan José Heydek. Profesor de Lenguas Orientales, Agregado á la Cátedra de Hebreo, y á esta Biblioteca de los Estudios Reales. *Sobre la cultura de los Hebreos, estudio de la Lengua Santa, y mérito literario de los Libros Canónicos del Viejo y Nuevo Testamento.*
- Vicente de Chasco. Abogado de los Reales Consejos. *Sobre el origen, objeto, Metros y Poemas de la Poesía Sagrada entre los Hebreos y Christianos.*
- Baltasar Félix de Miñano y Las Casas. Licenciado. *Sobre las causas generales y particulares de la Literatura Sagrada en los primeros siglos de la Iglesia; de sus mayores progresos en el IV.º; y de su decadencia en los siguientes hasta el X.º; con la noticia de los Escritores Eclesiásticos de primer orden que florecieron en todos ellos.*
- José López de la Torre Ayllon y Gallo. *Sobre las obras apolo-géticas de la Religión, que los Escritores Eclesiásticos produ-xéron durante los tres primeros siglos de la Iglesia: influencia que tuvieron en ella; y exámen crítico acerca de su mérito.*
- Juan Antonio Llorente. Presbítero. Doctor en Teología y Canónigo de la Santa Iglesia de Calahorra. *Sobre los planes de restauración de estudios, que se intentaron despues de la deca-dencia de la Literatura Eclesiástica.*
- Vicente González Arnao. Doctor en ambos Derechos. Del gre-mio y claustro de la Universidad de Alcalá, Abogado de los

Reales Consejos, y oficial de la Secretaría de la interpretación de lenguas. *Sobre las colecciones de Cánones Griegos y Latinos que se han formado hasta las que componen el cuerpo del Derecho Canónico en el día; indagación de sus verdaderos AA.: y examen crítico de la autoridad y circunstancias apreciables de cada una.*

Como es posible observar, los temas propuestos en los primeros exámenes se ajustan a lo que el abate incluye en la primera clase: «breve historia general de la Literatura». Esta aborda la totalidad histórica por épocas y civilizaciones dando paso a las historias particulares, de ahí que el primer curso haya estado dedicado a la historia de la antigüedad y, de manera específica, según el concepto de historia literaria de Juan Andrés, a las literaturas orientales, griega y latina. El segundo curso, por el contrario, se centra, siguiendo el primer tomo del manual, en la «literatura eclesiástica», estudiando de manera autónoma todos los géneros literarios derivados de las Sagradas Escrituras a los que se otorga el nivel de «Ciencias». En este sentido apuntan, además, las palabras del catedrático en la introducción a los ejercicios del segundo año:

[los ejercicios] corresponden principalmente á la Literatura sagrada; objeto de nuestras lecciones en el segundo año del Curso Académico, y tanto mas digno de nuestra especulación, quanto es indubitable que sus partes forman un todo preciosísimo, y del mayor interes para el que procura reunir en sí las nobles calidades de sabio y de católico²³.

Miguel de Manuel tenía la intención de publicar todos los trabajos presentados en los primeros exámenes públicos y así lo hace constar, como hemos visto, en la introducción que realiza a las Propositiones de los primeros Ejercicios, pero también en el prólogo del primer estudio publicado —*Observaciones sobre las bellas artes entre los antiguos hasta la conquista de Grecia por los romanos*, Madrid, Benito Cano, 1790-1791 de Isidoro Bosarte—, e incluso en la *Gazeta de Madrid* del martes 2 de julio de 1793 (pp. 627-628) donde Miguel de Manuel anuncia la obra de Bosarte y la de José

²³ *Exercicios publicos de Historia Literaria...* 1791, pp. 1-2 de la introducción (la numeración es nuestra).

Cornide —*Ensayo sobre el origen, progresos y estado de la historia natural entre los antiguos anteriores a Plinio*, Madrid, Benito Cano, 1791— y señala que «esta colección, que se continuará con la posible diligencia, podrá llegar á ser un cuerpo de escritos escogidos sobre los asuntos de mayor utilidad en la historia literaria, y digna del aprecio de la gente de buen gusto que se va aficionando á este estudio sólido y ameno». También anuncia la obra del abate Pedro Estala, que presentó su candidatura para ocupar la cátedra de Historia Literaria en los Reales Estudios de San Isidro —*Edipo tirano, tragedia de Sófocles; traducida del griego en verso castellano, con un discurso preliminar sobre la tragedia antigua y moderna*, Madrid, Antonio de Sancha 1793—, el *Discurso sobre el estudio metódico de la historia literaria* de Cándido María Trigueros que mencionábamos al principio, y el libro del intérprete de lenguas orientales de la Real Biblioteca y Profesor en el Colegio de Santo Tomás así como en los Reales Estudios, Juan Antonio Romero: *Disertación sobre las versiones hechas del griego al árabe, y utilidad que de ella pueda sacarse en el día*, Madrid, Antonio de Sancha, 1793²⁴.

Sin embargo, el proyecto de Miguel de Manuel no llegó a concluirse y sólo se publicaron íntegramente los trabajos de Bosarte y Cornide. De los restantes, únicamente disponemos de los resúmenes, algunos más extensos que otros, recogidos en la publicación realizada por el impresor D. Benito Cano²⁵.

De los ciento cincuenta y cuatro alumnos inscritos llegaron a leer sus ejercicios sólo nueve, aunque en la publicación de Miguel de Manuel también se deja constancia de algunos otros, mencionados más arriba, que no pudieron presentarse por hallarse enfermos, y dos más, por razones profesionales: Don Felipe Amat —Caballero Maltés, de la Real Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona que fue destinado por el Rey a la embajada rusa— y D. Tomás

²⁴ Dado que el tema que nos ocupa es el estudio de la antigüedad en el siglo XVIII, merece la pena señalar que este autor tradujo, adaptó y amplió la obra de Louis Dutens, *Reflexiones sobre el origen de los descubrimientos atribuidos a los modernos en las que se demuestra, que nuestros más célebres filósofos han tomado la mayor parte de sus conocimientos de las obras de los antiguos, y que muchas verdades importantes sobre la religión fueron conocidas por los sabios del paganismo*, Madrid, Benito Cano, 1792.

²⁵ Véase nota 7.

González Carvajal —nombrado oficial agregado en la Secretaría de Hacienda de Indias.

La elección de los temas fue voluntaria, es decir, cada alumno pudo proponer el desarrollo de un estudio —preferiblemente sobre materias amenas e instructivas— que no hubiese sido tratado durante las clases. Todos los trabajos estaban ya propuestos el 20 de enero de 1790, aceptando los estudiantes la condición de que fuesen leídos públicamente y censurados por el «juicio de todo el concurso Académico, que ha sido Juez imparcial en la aprobacion y habilitacion de los que exercitan»²⁶.

El primer estudio en ser publicado fue el de Isidoro Bosarte de la Cruz, como se indica en el prólogo, por haber sido el primero en entregar el trabajo. Nacido en Baeza en 1747, Bosarte quiso estudiar árabe en Roma pidiendo para ello auxilio a Floridablanca que no respondió favorablemente a su petición. Antes de asentarse en Madrid viaja por diversos lugares de Europa entre 1775 y 1786 al servicio del Conde de Aguilar²⁷. En 1790 se le encomienda catalogar los manuscritos de la Biblioteca de los Reales Estudios, aunque abandona esta tarea en 1792 al ser nombrado Secretario de la Real Academia de San Fernando²⁸. También fue nombrado Tesorero de la Real Academia de la Historia en 1800. El interés de Bosarte por el mundo antiguo se plasma de manera evidente en su tarea como Secretario de la Academia de San Fernando y como miembro de la Sala de Antigüedades de la Real Academia de la Historia, pero también en sus publicaciones. Tanto en la *Disertación sobre los monumentos antiguos pertenecientes a las nobles artes de la Pintura, Escultura y Arquitectura que se hacían en la Ciudad de Barcelona* (Madrid, Antonio de Sancha, 1786), como en su más conocido *Viage artistico á varios pueblos de España, con el juicio de las obras de las tres nobles artes que en ellos existen, y épocas á que pertenecen* (Madrid, Imprenta Real, 1804) se deja constancia de la sensibilidad de este autor hacia los monumentos de la antigüedad.

²⁶ *Ejercicios publicos de historia literaria...1790*, introducción, p. 4.

²⁷ Sobre este autor puede verse la introducción realizada por A. Pérez Sánchez a la reedición del *Viaje artístico a varios pueblos de España*, Madrid, 1978.

²⁸ J. Simón Díaz, «La Biblioteca, el Archivo y la Cátedra de Historia Literaria...», p. 6, n.º 21; A. Miguel Alonso, *La Biblioteca de los Reales Estudios...*, p. 101.

No es de extrañar, por tanto, que un individuo con semejantes inquietudes decidiese acudir a las clases de la Cátedra de Historia Literaria y que realizase uno de los trabajos de mayor calidad, donde, además aborda algunos aspectos, como el del arte egipcio, prácticamente desconocidos en la España de la época²⁹. Sin duda sus viajes por Europa habrían puesto a Bosarte en contacto con algunas iniciativas que ya en el siglo XVIII pretendían dar a conocer la historia y el arte de las culturas próximo orientales.

Como se expone al comienzo de las *Observaciones sobre las Bellas Artes hasta la conquista de Grecia por los Romanos*, el autor aborda el estudio de las tres Nobles Artes³⁰, pintura, escultura y arquitectura, entre los griegos —dividida en tres libros— y entre los egipcios, condensado sólo en uno, «por sernos estos casi desconocidos, y sus obras de poca exemplaridad, respecto de las de los Griegos». Prescinde, dada la brevedad que se impone y no por desinterés hacia estos ámbitos, de otros como los etruscos, asirios y cartagineses (pp. 10-11) y recurre para corroborar sus afirmaciones a las fuentes clásicas que menciona con frecuencia (Aristóteles, Filóstrato, Horacio, Cicerón, Plinio, Tertuliano, etc.)³¹.

Bosarte comienza su obra con una introducción general sobre las bellas artes donde deja ya translucir su admiración por el arte griego que considera, en la línea de los autores de la época como el gran filohelenista del XVIII Johann Joachim Winckelmann, a quien curiosamente no cita, en el más alto grado de perfección:

¿Qué causas perfeccionaron la Escultura en Grecia? ¿Qué causas impiden que los modernos se igualen con los antiguos? [...] ¡Estos modernos, digo, aun despues de haber visto una buena parte de lo que hiciéron los antiguos, no poder presentar unas obras que oponer á las de los Griegos, á pesar de todos los esfuerzos que se estan haciendo de tres siglos á esta parte para poder competir con ellos! ¿Habrà no obstante esperanzas fundadas de que alguna nacion moderna pueda igualarse con los Griegos? [...] Puede sin embargo darse como respuesta de congruencia: «Que miéntras los modernos no apuren las razones con que estaban hechas las mara-

²⁹ Ya M. Menéndez Pelayo (*Historia de las ideas estéticas en España*, III, Madrid, 1947, pp. 566-567) destacó este intento.

³⁰ Según su orden natural (p. 65).

³¹ Tampoco Juan Andrés dedica especial atención a estas culturas en su obra.

villosas obras de los Griegos, y trabajen sobre el mismo plan de reglas que ellos trabajáron, es temeridad presumir competir con aquellos antiguos; al modo que es una estúpida satisfaccion jactarse de que los han igualado y excedido (pp. 45-48).

El autor del manual que siguieron Bosarte y sus compañeros durante el curso se expresa en los mismos términos:

solo la Grecia [...] supo llevarse la palma con mucha gloria, no solo en la Filosofía, en las Matemáticas, en la Medicina, en las ciencias útiles y sérias, sino tambien en la Poesía, en la eloqüencia, y en toda suerte de erudición y de filología, igualmente que en la Música, en la Escultura, en la Pintura y en todas las buenas artes³².

Merece la pena destacar la vehemencia con la que Isidoro Bosarte defiende el arte griego —que considera heredero del egipcio³³— pues no es habitual encontrar autores españoles que dediquen demasiada atención a la cultura helena durante el siglo XVIII. Cierzo es que, como ya se ha destacado, el manual empleado en las clases de la Cátedra incide en la importancia de la cultura griega; sin embargo, en la historiografía española de la época se suele dar una imagen bastante peyorativa del mundo griego en comparación con el fenicio³⁴, y además, se dedica poco espacio a narrar su desarrollo tanto en las historias universales como en los compendios sobre historia antigua. De hecho, durante esta centuria no se publican originales en español sobre la historia de Grecia y las traducciones de libros en los que se aborda este tema son bastante escasas³⁵.

Además de en la *Gazeta de Madrid*³⁶, las *Observaciones sobre las Bellas Artes hasta la conquista de Grecia por los Romanos* aparecen

³² Andrés, *Origen, progresos...*, I, pp. 81-82. Éste sí cita a Winckelmann (I, 78) y, como este erudito, defiende que la cultura («literatura») romana es una imitación de la griega (I, p. 137, pp. 140-142).

³³ «De Egipto pasáron las Bellas Artes á Grecia; pero no en cuerpo de sistema, sino como ideas primitivas» (p. 71). Juan Andrés también considera que la cultura griega está en deuda con otras como la egipcia y la fenicia: *Origen, progresos...*, I, pp. 36-37, 43 ss.

³⁴ Véase F. Wulff, *Las esencias patrias. Historiografía e Historia Antigua en la construcción de la identidad española (siglos XVI-XX)*, Madrid, 2003.

³⁵ M. Romero Recio, «Fondos del siglo XVIII...».

³⁶ Martes 2 de julio de 1793, pp. 627-628.

también reseñadas en el *Memorial Literario* donde se destaca la tesis fundamental del autor:

Esta proposición, que es de Ciceron, el arte nace en la naturaleza, y no fuera de ella, conduce al Autor á asentar por basa, que habiendo de examinar las Bellas Artes entre los Antiguos, conviene consultar la naturaleza para establecer lo que á ella se debe como principio inmanente y universal, antes de tomar noticia positiva en los historiadores de los orígenes particulares, y progreso de las mismas artes. Este es el plan que se propone ³⁷.

Bosarte participará también en los ejercicios del segundo curso con un trabajo que, como ya se ha señalado, no fue presentado en los exámenes del primer año por «indisposición» de Nicolás Mariano de la Bodega: *Observaciones históricas y literarias sobre los orígenes de la Escritura, y materias que para ella han servido*. A pesar de que se le encomienda un tema vinculado al mundo antiguo que, por su importancia se incluye en los exámenes del segundo curso que giran sobre otros aspectos, el estudio es de inferior calidad al presentado por el mismo autor en 1790. De este ejercicio se conserva únicamente el resumen de cinco páginas que se edita junto con los demás temas propuestos en la Imprenta de Benito Cano, pero denota un menor conocimiento de la materia abordada, pues poco más que se enuncian las ideas expuestas también por Andrés en el primer tomo de *Origen, progresos y estado actual de toda la literatura*:

Al Comercio se deben los primeros ensayos de la Escritura. Los Fenicios, pueblo el mas antiguo de esta profesión, empezaron á auxiliar la memoria con notas de nombres enteros en los fardos de sus mercaderías, y hacer las facturas con estas notas y las de la Aritmética Literal.

Los Españoles recibimos las letras de los Fenicios. De modo, que para nosotros los Fenicios fuéron los inventores de las letras, y de ellos recibimos esta luz, como de primera mano³⁸.

Bosarte no fue el único alumno que presentó sus trabajos en las dos convocatorias, también lo hicieron otros tres estudiantes: Bal-

³⁷ Diciembre 1790, pp. 520-521.

³⁸ *Ejercicios publicos de Historia Literaria... 1791*, pp. 2.-3.

tasar Félix de Miñano y las Casas, José López de la Torre Ayllón y Vicente González Arnao.

El primero de ellos, Archivero de la Secretaría de Estado, no muestra un especial aprecio por la «literatura antigua» en general y «griega» en particular; dejándose seducir por aquellas corrientes interpretativas que daban mayor relevancia a la cultura de los fenicios por su relación con la Península Ibérica desde época muy antigua:

La Historia profana antigua se halla atestada de fábulas, y desfigurada con la Mitología Griega. Para deducir de ella la verdad es necesario recurrir á la Historia Sagrada. Los Griegos envidiosos y vanos no han transmitido á la posteridad con la fidelidad debida las noticias literarias de las naciones Asiáticas.

La situación física, la constitucion civil y política de los Fenices, sus viages y genio mercantil nos suministran bastantes fundamentos para formar conjeturas favorables á su cultura civil y literaria³⁹.

Miñano se deshace, sobre todo en el tema presentado el segundo año, en halagos al cristianismo en detrimento de las restantes culturas antiguas y, sobre todo, en contra de los emperadores paganos. Presenta así un trabajo plagado de juicios de valor y aseveraciones carentes de una crítica histórica objetiva. A modo de ejemplo se pueden tener en cuenta los siguientes comentarios:

Poseídos [los Filósofos Orientales] del amor propio con una instrucción superficial en los conocimientos elementales que ésta les presentaba acerca del origen del mal, la creación del mundo, las postrimerías del hombre, y otras materias semejantes, retrocedieron ácia sus antiguas opiniones, de las que hicieron como un suplemento á los dogmas del cristianismo, confundiendo las ideas, y dando en mil ridículas extravagancias.

Teodosio puso la última mano á esta importante obra; y la Iglesia se halló al fin del quarto siglo en un estado que hasta entonces no habia conocido; tranquila dentro, triunfante fuera. No se cesaba de arruinar Templos de Idolos, y fundar en su lugar Iglesias y Monasterios⁴⁰.

³⁹ «Sobre el estado comparativo de la cultura ...», pp. 49-50.

⁴⁰ «Sobre las causas generales y particulares de la Literatura Sagrada...», primer texto p. 21, y segundo p. 24.

En el mismo tono que Baltasar Félix de Miñano se expresa José López de la Torre Ayllón, especialmente en el trabajo incluido en el curso dedicado a la «literatura eclesiástica»:

Aunque muchos críticos pretenden disculpar la conducta de los Emperadores Romanos, en quanto á las persecuciones que hicieron sufrir á la Iglesia, sus razones carecen de sólido fundamento, y son de levísima consideración⁴¹.

Mayor objetividad y conocimiento de las materias expuestas encontramos en el estudio realizado por Vicente González Arnao. Además de los cargos ya mencionados, González Arnao fue Catedrático de Alcalá, Encargado de Negocios en Roma, Secretario del Consejo de Estado con José Napoleón, Presidente de la Academia de Legislación, Académico de la Real Academia Española, así como Director y Secretario de la Real Academia de la Historia. Es también conocido por haber vertido al español la obra de Alexander von Humboldt, *Ensayo político sobre el reino de la Nueva España* (París, Rosa, 1822), de la que se hicieron varias ediciones, y por haber realizado un edición abreviada del *Diccionario de la Academia Española* (2 vols. París, Librería de Parmentier, 1826).

Por lo que respecta a los estudios presentados en la Cátedra de Historia Literaria, González Arnao tiene el acierto de elegir unos temas, especialmente el del segundo año, acordes con su formación académica lo cual repercute de manera positiva en la calidad final del trabajo. En el ejercicio expuesto en 1790 aborda un aspecto relevante de la historia literaria, el estudio de las bibliotecas, puesto en primer plano por su aportación a la cultura, pues «las naciones más cultas son las que han tenido bibliotecas más distinguidas»⁴². Ahora bien, siempre desde la perspectiva planteada por Miguel de Manuel: «no es la multitud de libros la que instruye y enseña. Una copiosa Biblioteca, donde sin discernimiento ni eleccion se colocan volúmenes á millares, puede ser el mayor enemigo de los adelantamientos científicos»⁴³.

El ejercicio presentado en 1791 fue publicado en tres volúmenes que abordan respectivamente las colecciones griegas, las coleccio-

⁴¹ «Sobre las obras apologéticas de la religión...», p. 40.

⁴² «Noticia de las Bibliotecas antiguas...», p. 78.

⁴³ Introducción a *Ejercicios publicos de historia literaria: que tendrán en los Estudios Reales...1790*, p. 1.

nes latinas anteriores a Graciano y las colecciones que componen el cuerpo del derecho canónico: *Discurso sobre las colecciones de cánones griegas y latinas que se han formado hasta las que componen el cuerpo del derecho canónico, indagación de sus verdaderos autores y exámen crítico de la autoridad y circunstancias apreciables de cada una*, Madrid, Imprenta Real, 1793. El conocimiento de la materia analizada permite el desarrollo de un trabajo liberado de los condicionantes ideológicos que sí se ponen de manifiesto, como hemos visto, en otros ejercicios.

Dentro del grupo de individuos que presentaron ejercicios tanto en el primer como en el segundo curso debemos mencionar a Juan José Heydek que, si bien no pudo acudir a los primeros exámenes a causa de una enfermedad, sí se presentó a los dedicados a la «literatura eclesiástica» con un título similar al que ya había propuesto el año anterior. Como no podía ser de otro modo, el profesor de lenguas orientales aboga por el conocimiento de éstas a la hora de interpretar los textos bíblicos⁴⁴ que ofrecen la información más fidedigna en todos los ámbitos «sin el vicio de la Mitología»:

La Cronología que se sigue en los Libros Sagrados, presenta todos los caracteres de legítima, testificando de su verdad, y acertado cálculo las observaciones físicas y literarias, sin que pueda tomarse argumento alguno contra su certeza de las variaciones cronológicas que se notan en las versiones de la Biblia⁴⁵.

El primer ejercicio que se consigna en la publicación realizada en la imprenta de D. Benito Cano, es el llevado a cabo por José Isidoro Morales, bajo el título *Sobre la Historia de la educación pública de las Naciones antiguas y de sus Escuelas hasta el establecimiento de la de Alexandría*. La figura de José Isidoro Morales ha sido reivindicada en los últimos años por tratarse de una personalidad destacable en el ámbito de la ciencia y la filosofía durante la Ilustración⁴⁶. Morales es más conocido por su labor como matemático y por su obra *Memoria matemática sobre el cálculo de la opinión en*

⁴⁴ «Sobre la cultura de los hebreos...», p. 11.

⁴⁵ «Sobre la cultura de los hebreos...», p. 9.

⁴⁶ M. J. Lara Ródenas, *José Isidoro Morales, un matemático en la corte de Carlos IV*, Huelva 2001; J. L. García Lapresta, *José Isidoro Morales, precursor ilustrado de la Teoría de la Elección Social*, Valladolid 2003.

las elecciones (Madrid, Imprenta Real, 1797), reflexión sobre la legitimidad de los mecanismos electorales. Presbítero originario de Huelva y formado en Sevilla —doctor en Filosofía y Teología—, pasa unos años en Madrid donde además de acudir a las clases de la cátedra de Historia Literaria, parece que aumenta sus conocimientos matemáticos también en los Reales Estudios y se aproxima a Carlos IV por lo que es nombrado en 1793 Director de Matemáticas de la Casa de Pajes del Rey⁴⁷. Como algunos otros estudiantes de la Cátedra, es incluido dentro del grupo de los afrancesados por su cercanía a José Bonaparte que le conducirá al exilio.

La elección del tema que Morales presenta no es casual. Su preocupación por los temas educativos ya le había llevado a realizar un *Discurso sobre la educación, leído en la Real Sociedad Patriótica de Sevilla en la junta general del día 3 de septiembre de 1789* (Madrid, Benito Cano, 1789) donde arremete contra la enseñanza especulativa y aboga por una reforma de las instituciones.

El estudio de José Isidoro Morales consta de LXVII proposiciones que van de lo general a lo particular. Centrándose en la antigüedad toca un tema frecuente en la época, la educación del pueblo, y que también había abordado en el primer volumen de su obra el abate Andrés defendiendo la propagación de la cultura que había de ser pública y de libre acceso⁴⁸. Morales da también una importancia vital a una cuestión suscitada ya en la obra de Tucídides y que adquiere gran relevancia durante la Ilustración: la utilidad de la historia. El autor cree que para mejorar el sistema educativo es imprescindible realizar una indagación histórica que examine en manos de quién ha estado depositada la educación, qué reglamentos han seguido las escuelas y que importancia ha tenido todo esto en el «bien de los Estados». Defiende que la historia de la Educación pertenece a la Historia Literaria y comienza a abordar el estudio de las escuelas en la Antigüedad por Egipto, aunque éstas no fuesen públicas, «por mas que fuesen sabios sus profesores, y por muchos que se quieran suponer sus conocimientos, sus descubrimientos y sus opiniones, el pueblo no tenian ni aun éstas, se contentaba con creerlos sabios»⁴⁹. La defensa de la extensión de la educación le lleva a

⁴⁷ J. M. Lara Ródenas, *José Isidoro Morales...*, pp. 22 ss.

⁴⁸ Andrés, *Origen, progresos...*, I, pp. 67-68. Cf. Caerols, *Las literaturas clásicas...*, pp. 24 ss.

⁴⁹ «Sobre la Historia de la educación pública...», p. 5.

afirmar que todas las sociedades en las que el conocimiento de las ciencias ha estado reservado a un número reducido de familias, como en las naciones de Oriente, las ciencias no han avanzado⁵⁰.

También como en la obra de Juan Andrés y en la de otros alumnos de la Cátedra como Bosarte, en el trabajo de Morales se trasluce su admiración por la cultura griega y a ella dedica la mayor parte del ejercicio:

Los griegos que les sucedieron en la cultura, fuéron los primeros que por una conseqüencia de su religion, y mucho mas de su gobierno, quitáron estas trabas en que sus antecesores habian tenido aprisionadas las ciencias y su enseñanza. Ni ántes ni despues de ellos ha habido Nacion que haya dexado en mas libertad no solo la profesión sino la enseñanza de ellas. Y en esta parte de las Escuelas, como en tantas otras, los Griegos hacen una época en la historia de la educación pública⁵¹.

También seducido por la «literatura griega» estaba una de las figuras más destacadas en el estudio de la historia antigua durante la segunda mitad del siglo XVIII y que también acudió a las lecciones impartidas en los Reales Estudios. Nos referimos a José Andrés Cornide de Folgueira y Saavedra, miembro de la Real Academia de la Historia con sólo 21 años y Secretario de la misma entre 1802 y 1803⁵². Se trata de uno de los autores que con mayor rigor estudió las antigüedades de la Península Ibérica, documentándose a través de numerosos viajes donde tomaba nota de todos los hallazgos arqueológicos de los que posteriormente daba cuenta en la Academia. Fue un autor prolífico aunque muchos de sus estudios permanecen inéditos en la Real Academia de la Historia. Entre sus publicaciones destacan: *Las Casiterides ó Islas del Estaño restituidas á los mares de Galicia: Disertación crítica, En que se procura probar que estas islas no son las Sorlingas, como pretende en su Britannia Guillermo Cambden; y sí las de la costa occidental del Reyno de Galicia*,

⁵⁰ «Sobre la Historia de la educación pública...», pp. 5-6.

⁵¹ «Sobre la Historia de la educación pública...», p. 7.

⁵² Varias son las publicaciones que aluden a esta figura en los últimos años, entre las que podemos destacar la introducción realizada por M. Vallejo en *Los viajes de Cornide por la Alcarria. Viajes histórico-arqueológicos por las tierras de Guadalajara (1793-1795)*, Guadalajara 1999.

Madrid, Benito Cano, 1790; *Investigaciones sobre la fundación y fábrica de la Torre llamada de Hércules, situada a la entrada del Puerto de la Coruña*, Madrid, Benito Cano, 1792.

El trabajo que Cornide presentó en la Cátedra también fue publicado en la Imprenta de Benito Cano. En él, el autor trata de despejar el origen de algunos de los grandes progresos de la humanidad como el nacimiento de la metalurgia, el cultivo de la botánica y la mineralogía, etc., situando en Asia, la cuna de los grandes conocimientos científicos que pasarían después a Grecia. Cornide aprovecha además para destacar la documentación que se conserva en varios archivos del país y animar a su estudio:

Con los consejos, pues, amigos míos, de tan respetables Maestros me atrevo yo á persuadiros y recomendaros, no solo la lectura de los antiguos que os llevo citados, sino la traduccion y explicación de sus obras, de cuyo contenido se hallan excelentes Códices, no solo en esta Biblioteca de los Reales Estudios, y en la Regia y Escorialense, sino en la Arzobispal de Toledo⁵³.

Muy influido por las tesis de Juan Andrés, que consideraba la cultura griega superior a la romana en todos los capítulos salvo en el de la jurisprudencia⁵⁴, se muestra el trabajo de Martín José Ordoqui⁵⁵. Éste considera que sólo griegos y romanos, al contrario que otras culturas de la antigüedad, han legado documentos suficientes que permiten su estudio:

Por historia de los estudios antiguos entendemos la noticia cierta del origen y progresos que tuvieron las ciencias y artes entre las naciones anteriores á la decadencia del Imperio Romano. Esta noticia solo puede sacarse de los escritos originales de cada nacion; y como es cierto que solo de los Griegos y Romanos se han conservado algunos, por eso únicamente podremos formar idea de la literatura y estudios de estos dos pueblos, y utilizarnos de su historia para los estudios modernos por los artículos siguientes⁵⁶.

Toca además, ya en el título del ejercicio un aspecto importante al que ya hemos aludido, la utilidad de la historia:

⁵³ *Ensayo sobre el origen, progresos...*, p. 146.

⁵⁴ *Origen, progresos...*, I, pp. 138-139.

⁵⁵ «Sobre qué utilidad puede acarrear...», p. 40.

⁵⁶ «Sobre qué utilidad puede acarrear...», p. 34.

[La historia de griegos y romanos es útil] porque nos da á conocer las épocas de su mayor adelantamiento, y nos presenta los exemplos que debemos evitar para no viciarlo, y los que nos debemos proponer para adelantar principalmente en el estudio de las bellas letras⁵⁷.

Ordoqui también se alza en defensa de los autores clásicos de origen hispano y de la monarquía, achacando la ruina de la literatura romana, en definitiva, de la historia de Roma, a la falta de un gobierno de este tipo:

Explicaremos a propósito de las obras de Ovidio las verdaderas causas de la decadencia del buen gusto en Roma y sus Provincias por este tiempo; defendiendo á los Escritores Españoles de aquella edad de la calumnia que les imputan en haber corrompido la lengua Latina, é introducido el mal gusto en el estilo.

Si al perder Roma la forma y gobierno Republicano hubiera pasado á un gobierno meramente Monárquico: si todos sus Xefes hubiesen sido Hadrianos ó Titos; es de creer que dentro de poco hubiera vuelto sobre sí la Literatura, recobrando las fuerzas de su edad viril, y permaneciendo mucho tiempo en vigor. Pero en vez de un gobierno Monárquico sufrió cada día mas un absoluto despotismo, y sus Príncipes fuéron unos monstruos. De aquí nació el no poder convalecer su Literatura, y de su misma virilidad se originó su temprana vejez y decrepitez. El buen gusto del siglo de oro no volvió jamas, y la afeminada afectación que comenzó por Mecenas, y se propagó por los que hacian la corte á este dispensador de todas las gracias de un Despota, se fué aumentando cada vez mas hasta hacerse la corrupción absoluta y general en el tiempo en que el Imperio se dividió⁵⁸.

A favor del absolutismo se muestran con frecuencia los autores que abordan temas relacionados con el mundo antiguo durante el siglo XVIII y su interpretación de los regímenes políticos a través del prisma absolutista suele ir, por tanto, en detrimento de una adecuada valoración de las sociedades antiguas⁵⁹.

⁵⁷ «Sobre qué utilidad puede acarrear...», p. 48.

⁵⁸ «Sobre qué utilidad puede acarrear...», pp. 43 y 48.

⁵⁹ M. Romero Recio, «Religión y política en el siglo XVIII: el uso del mundo clásico», *Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones*, n.º 8 (2003) pp. 127-142.

También Matías Jorge de Arcas⁶⁰ dedica su trabajo al ámbito griego realizando una defensa de la monarquía frente a la democracia.

El progreso de las ciencias no está vinculado en el Republicano, ántes bien nos persuadimos que el Monárquico puede suministrarlas los mismos auxilios y otros; cuya execucion, imposible en la Democracia, la consideramos muy difícil en la Aristocracia⁶¹.

Alfonso de Manuel, en cambio, centra su estudio en algunos de los pueblos que habitaban la Península Ibérica antes de la conquista romana, como Ilergetes, Lacetanos, Celtiberos o Túrdulos de los que se hacen juicios de valor como su desprecio hacia las artes y las ciencias, razón por la cual no usaron la escritura ni la lectura, o la crueldad de sus ceremonias⁶².

También los trabajos presentados por Andrés de Andrés García, Vicente de Chasco y Juan Antonio Llorente en los exámenes del segundo año se muestran anclados en las ideas difundidas por la ideología católica, ajenas a la crítica histórica, que incidían tanto en la mayor antigüedad de los textos hebreos —algo usual en la época⁶³—, como en la preeminencia de estos textos por encima de cualquier otro aunque fuese a costa de la degradación de las «literaturas» griega y romana:

Por Cánón de los Libros Sagrados se entiende el Catálogo de las Obras, escritas por inspiración é iluminación sobrenatural; dirigidas á historiar las maravillas que Dios ha obrado, ya por sí mismo, ya por medio de varios Héroes; y á ordenar los oficios morales de los Hombres á la felicidad eterna⁶⁴.

⁶⁰ Este autor publica en 1814 un breve tratadito titulado: *Memoria sobre la alianza de España con Rusia y la gratitud que los españoles deben al Emperador Alejandro*, Madrid, Impr. Francisco de la Parte.

⁶¹ «Examen del influxo que las costumbres...», p. 74.

⁶² «Estado comparativo de la cultura literaria...», pp. 55-56.

⁶³ El propio Cándido María Trigueros defiende esta tesis en el *Discurso sobre el estudio metódico de la Historia Literaria*. Véase: Romero Recio, «Religión y política en el siglo XVIII...», pp. 130 ss.

⁶⁴ Andrés de Andrés, «Sobre el Cánón de los libros sagrados...», p. 5.

Los Griegos no tienen autor digno de mencion, ni que sea comparable á los Profetas en este género, pues aun ellos confiesan que Apolo Pythio tuvo muy contrarias á las Musas⁶⁵.

Resulta digno de mención que a pesar de estos comentarios se alabe la obra de Virgilio, influido sin duda por la admiración que profesaba a este autor el abate Andrés⁶⁶, si bien Vicente de Chasco llega más allá de lo que nunca hubiese podido imaginar el jesuita atribuyendo al autor de la *Eneida* una vinculación directa con los textos sagrados:

Entre los Latinos solo se encuentra semejante un Poema hermosísimo, que es la Egloga IV.^a de Virgilio, mas no falta fundamento para sospechar que nació de los libros sagrados. Sus sentidos, sus imágenes, y aun su diction son muy congruentes con las de los Profetas⁶⁷.

El conjunto de trabajos presentados en la Cátedra de Historia Literaria durante 1790 y 1791 fue, por tanto, de calidad desigual a pesar de la preparación académica de algunos de sus protagonistas. Sin embargo, esto no debe resultar extraño si tenemos en cuenta que todavía en los años 60 del siglo XIX, ni siquiera las tesis doctorales eran trabajos de investigación rigurosos como se entiende en la actualidad, sino más bien acontecimientos sociales donde se presentaban temas tocados por los profesores en los cursos de doctorado⁶⁸.

La mayor parte de los ejercicios se centraron en aspectos vinculados a la historia de Grecia y Roma. Como no podía ser de otro modo habiendo seguido como manual el libro de Juan Andrés, casi todos alaban la cultura griega. El mismo Cándido María Trigueros menciona en varias ocasiones a lo largo de su discurso la herencia griega y romana que habría servido, según el autor, «para perfeccionar los estudios y el buen gusto de los modernos», pero que se

⁶⁵ Vicente de Chasco, «Sobre el origen, objeto, Metros...», p. 15.

⁶⁶ *Origen, progresos...*, I, p. 132.

⁶⁷ «Sobre el origen, objeto, Metros...», p. 15.

⁶⁸ A. Miguel Alonso, «Los estudios de doctorado y el inicio de la tesis doctoral en España. 1847-1900», en J. R. Cruz Mundet (ed.), *Archivos universitarios e historia de las universidades*, Universidad Carlos III/Editorial Dykinson, Madrid, 2003, pp. 8 ss.

haya, fruto del desprecio, dispersa y carente de un estudio detallado⁶⁹. Sin embargo, también es posible encontrar, en general en los ejercicios de inferior calidad, opiniones en contra de la cultura griega a causa de una excesiva dependencia tanto de la historia sagrada como de la ideología absolutista.

Pero principalmente los ejercicios de historia literaria expuestos en la Biblioteca de los Reales Estudios de San Isidro, lo que denotan es un interés por el estudio de unas disciplinas que permanecían ajenas al ámbito universitario y que necesitaban ser revisadas y estudiadas teniendo en cuenta los movimientos intelectuales europeos. Los trabajos desarrollados se adelantarían en cierto modo a las tesis doctorales, aquellas del siglo XIX que desarrollarán, casi siempre sin demasiado rigor científico, temas de interés suscitados a lo largo del curso. De hecho, los alumnos que acudieron a las clases de la Cátedra lo hicieron por el afán de aprender y sólo algunos de ellos llegaron a tomarse la molestia de preparar un trabajo que pretendía abundar en una temática poco o nada trabajada en España. Desaparecida la Cátedra, no volverá a encontrarse una enseñanza de estas características hasta bien avanzado el siglo XIX, motivo por el cual merece la pena destacar de manera especial la iniciativa promovida desde la Biblioteca de los Reales Estudios de San Isidro.

Mirella Romero Recio
Universidad Carlos III de Madrid

⁶⁹ J. Simón Díaz, *Historia del Colegio Imperial de Madrid*, vol. II, p. 274.

BIBLIOGRAFÍA

En 2003, con la periodicidad anual habitual, se publicó el séptimo número de los *Annali di Storia delle università italiane*. Como también es costumbre, el volumen se organiza en función de seis secciones. En la primera, *Il punto*, se recoge sólo el trabajo de Giuseppe Catturi y Ricardo Musari sobre la financiación del sistema público universitario desde la posguerra hasta la implantación de la autonomía universitaria. El apartado dedicado a *estudios* concentra un total de doce trabajos que, a modo de monografía, analizan la historia de la Universidad de Pavía. La presentación del dossier corre a cargo de Giulio Guderzo y cuenta con las siguientes aportaciones: la de Agostino Sottili sobre la formación de algunos dirigentes europeos precisamente en Pavía y en la que ofrece algunas notas relacionadas con la diócesis de Constanza y la ciudad de Nuremberg; la de Chiara Crisciani donde se analiza la triple dimensión de la ciudad de Pavía como sede universitaria, Corte y ciudad a través del estudio de los más destacados médicos paveses del siglo XV; de Simona Negruzzo sobre el Estado de Milán y su universidad; de Alessandra Ferraressi sobre el gabinete pavés de física experimental en la segunda mitad del siglo XVIII y en la política científica en la época; de Elisabete D'Amico sobre la facultad de leyes de Pavía desde la reforma francesa hasta la Unidad; de Moris Frosio Roncalli sobre la vida colegial en el siglo XIX; de Arianna Arisi Rota sobre el colegio Ghislieri entre 1818-1848, el período de la restauración, y su configuración como escenario de ciertos conflictos frente a las tentativas del control gubernamental; de Paolo Mazzarello sobre la escuela científica de Camillo Golgi; de Elisa Signori sobre los estudiantes de Pavía desde la unidad y su progresiva politización; de Luciano Musseli en relación con la facultad de jurisprudencia de Pavía en el primer siglo de la Italia unida, entre 1860 y 1960; de Donatella Bolech Cecchi, sobre la facultad de ciencias políticas desde su nacimiento hasta su reforma (1926-1968) y, finalmente, de Claudio Baracca y Gigliola de Martini sobre la relación de Pavía y su Universidad.

En el interesante apartado relativo al estudio de las fuentes para el estudio de la Universidad italiana, podemos encontrar las aportaciones de Andrea Daltri, sobre la decoración de las paredes de Archiginnasio de la Universidad como forma de presentación del universo de los estudiantes y de Virgilio Giormani y Alba Veggeti sobre las reformas de los cursos de veterinaria en la Universidad de Padua entre 1779 y 1787.

La cuarta sección se ocupa de observar los archivos, bibliotecas y museos que puedan aportar mayor conocimiento sobre historia universitaria. En ella se integran los estudios de Rosela Biavati sobre los libros raros de matemática de la colección Bortolotti del departamento de Matemática

de la Universidad de Bolonia, de Maria Cassellalas a propósito de las posibilidades de integración de los fondos antiguos en las bibliotecas universitarias; de Salvatore Consoli sobre el nuevo archivo histórico de la Universidad de Catania y de Pierluigi Pizzamiglio sobre la biblioteca de Historia de la Ciencia «Carlos Viganò».

El penúltimo apartado ofrece, de un lado, las reseñas de algunas publicaciones aparecidas en el panorama europeo sobre historia universitaria y un utilísimo listado de bibliografía actual y retrospectiva recopilada por Maria Teresa Guerrini y Diego Paganelli y en el que tiene cabida todas las publicaciones aparecidas en Italia sobre su historia universitaria desde 1997 hasta finales de enero de 2003. Por último, la sección noticias nos pone al corriente de las convocatorias de congresos, cursos, seminarios, proyectos de investigación, tesis y otras revistas sobre historia universitaria originadas en el marco italiano y europeo.

Carolina Rodríguez López

J. Claret Miranda, *La repressió franquista a la Universitat de Barcelona*, Barcelona, Editorial Eumo-Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives, 2002.

Cuando Enric Argullol aún era rector de la Universitat Pompeu Fabra, propuso al Institut Universitari Jaume Vicens Vives, entonces dirigido por el profesor Josep Fontana, realizar una investigación que diera a conocer la identidad exacta de los profesores y profesoras de la Universidad de Barcelona que fueron víctimas de la represión franquista de la posguerra, con la intención de rendirles un sentido homenaje. A su vez, Josep Fontana planteó la investigación a Jaume Claret Miranda¹, que en aquellos momentos cursaba sus estudios de doctorado en historia en dicho instituto universitario, el cual acepto complacido.

El acto de homenaje tuvo lugar, el 2 de abril del 2001, en el patio del edificio Roger de Lluria del Campus de la Ciutadella y consistió en el descubrimiento de un *Memorial*² en el cual se inscribieron el nombre de los 122

¹ Jaume Claret Miranda es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universitat Autònoma de Barcelona y en Humanidades por la Universitat Pompeu Fabra. Colabora habitualmente con la editorial Crítica y es coordinador de la fundación Ernest Lluch.

² El *Memorial* fue diseñado por el equipo de arquitectos del MBM (Josep Martorell, Oriol Bohigas y David Mackay), por el diseñador gráfico Enric Satué y por Josep Maria Civit, que ideó el sistema de iluminación. La obra consiste en una caja circular de vidrio de 4 metros de diámetro y 40 centímetros de altura. La tapadera superior esta compuesta de tres láminas de vidrio en medio de las cuales se ha ins-

docentes que, hasta aquel momento, se sabía, habían sufrido la depuración franquista en la Universidad de Barcelona. El acto contó con la asistencia de algunos profesores/as que vivieron directamente la depuración, como la profesora Núria Folch i Pi, y de decenas de familiares, lo que hizo de la jornada en un día muy emotivo que animó a Jaume Claret a continuar investigando el tema de la represión del profesorado universitario y a convertir este encargo en el trabajo de investigación de sus estudios de doctorado.

Bajo la dirección de Josep Fontana, Jaume Claret continuó la búsqueda de los expedientes de depuración en el archivo de la Universitat de Barcelona y en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares descubriendo nuevos casos de expedientados que ampliaron la lista de depurados hasta 135. El conjunto de la investigación dio lugar al trabajo de tesina que Jaume Claret defendió en enero del 2002, delante de un tribunal formado por los profesores Josep Fontana, Borja de Riquer y Jaume Torras. La trascendencia de la investigación hizo que esta se publicara, en enero del 2003, dentro de la colección Jaume Caresmar, que edita conjuntamente el Institut d'Història Jaume Vicens Vives de la UPF y la editorial Eumo de la Universitat de Vic.

La obra de Claret viene a cubrir un importante hueco bibliográfico, tanto en la historiografía sobre la represión franquista en Catalunya —que hasta el momento se había centrado en otros ámbitos de represión—, como en la historia de la universidad de Barcelona durante la dictadura franquista, que aún espera la realización de más investigaciones en esta dirección que permitan trazar un dibujo preciso de su evolución.

En diversos trabajos precedentes, se había tratado el tema de la represión del profesorado universitario de Barcelona durante la posguerra, pero en todos ellos la investigación había estado condicionada por las limitaciones establecidas por la Ley de Archivos 16/1985 del Patrimonio Histórico Español. La cual establece en 50 años el tiempo que debe transcurrir entre la emisión de un documento que contenga información de carácter personal, como son los expedientes de depuración, y su consulta. Actualmente, este plazo ha caducado para los expedientes de la posguerra que ya pueden ser consultados por los expertos. Esto ha facilitado a los investigadores importantes datos. Pese a todo, siguen existiendo problemas de toda índole en numerosos archivos que dificultan las investigaciones. En este caso, el principal problema para establecer el número exacto de depurados se centraba en la desaparición de expedientes, algunos retirados de forma intencionada, y en la existencia de personas que, por su posición de poder e influencia, fueron capaces de eludir el proce-

crítico, en disposición circular, el nombre de los homenajeados, mientras que la tapa inferior es de vidrio translucido. Los nombres de los profesores son sucesivamente iluminados por un rayo de luz permanente que efectúa un movimiento circular en el sentido de las agujas del reloj.

so depurador. Unos vacíos documentales que Jaume Claret ha sabido suplir con la bibliografía existente, en especial con los libros de memorias y los estudios sobre el exilio y el mundo universitario, científico e intelectual.

La obra se complementa con un resumen de los 135 expedientes de depuración encontrados por el autor, que nos permiten hacernos una idea del perfil del profesor/a depurado/a y que evidencia la impresionante nómina de científicos e intelectuales que la Universitat de Barcelona perdió con aquella intransigente y vengativa depuración.

A su vez, el dibujo de este perfil de profesor/a depurado/a ha permitido al autor resaltar la transformación sufrida por la UB durante el período republicano, inmediatamente anterior, y evidenciar que en esos años la UB había dejado de ser el burocratizado centro de las décadas precedentes, aislado de la sociedad civil barcelonesa, para convertirse en una institución al servicio de la sociedad y la cultura catalanas gracias a un doble proceso de reforma y catalanización emprendido desde la Generalitat de Catalunya y el gobierno del primer bienio republicano-socialista.

De esta manera y según esta obra, el proceso depurador viene a confirmar dos cosas. La enorme vitalidad del estamento docente de la universidad que empezó a desaparecer a partir de julio de 1936 y la grave ruptura que supuso la instauración del régimen franquista para la Universitat de Barcelona, e indirectamente para la ciencia y la cultura catalanas. Un proceso de reforma que, si bien apenas duró 22 meses, demostraría sobradamente en los países de acogida del exilio, que podía haber aportado al país grandes beneficios en el campo de la ciencia y la cultura.

El libro indaga en las motivaciones profundas del proceso depurador, para señalar que su principal finalidad fue acabar con la identificación entre catalanidad, autonomía, democracia y renovación científica y docente que se había ido construyendo durante el período republicano. La finalidad era convertir la Universitat de Barcelona, al igual que otras instituciones científicas y de alta cultura de Catalunya creadas anteriormente por la Mancomunitat, en ideológicamente seguras para el poder político franquista y hacerlas partícipes de la política de substitución cultural emprendida en Catalunya. La ideología elegida para esta substitución fue un nacionalcatolicismo cuyo principal interés era relegar la ciencia y la investigación a un segundo plano e imponer un rígido control y adoctrinamiento sobre el mundo universitario que asegurase su fidelidad. Para llevar a cabo esta transformación era necesario eliminar aquella parte de la administración universitaria identificada con las reformas de la república o, si era posible, convertirla a la nueva fe nacionalcatólica³. En este sentido, la depuración universitaria servía tanto

³ Fernando Valls Taberner es, seguramente, la figura más destacada de todas aquellas que renunciaron a su pasado catalanismo político para abrazar los ideales del *Nuevo Estado* franquista con verdadera devoción. Y como tal, fue recompensado por el nuevo régimen.

para castigar a los desafectos y someter a los indecisos, como para cohesionar y promocionar a los adictos, que encontraron en la política de substitución cultural de las instituciones —principalmente en la Universidad y el CSIC— un auténtico botón de guerra, con el cual ascender en la escala docente y en la administración del Estado. Algunos llegando a ostentar importantes cargos dentro del régimen y formando importantes grupos de poder.

Actualmente, el autor trabaja en la fase final de su tesis doctoral en la que extiende el trabajo realizado sobre la represión del profesorado en la Universitat de Barcelona, al conjunto de universidades del Estado, entre 1936 y 1945. El mismo autor explica que con esta obra intenta acabar con algunos tópicos sobre la represión que, tanto a nivel de Catalunya, como del conjunto de España, continúan existiendo. Como por ejemplo, cuando desde Catalunya se cae en el simplismo de creer que los catalanes fueron los principales perdedores de la guerra. Jaume Claret pretende demostrar, en su futura obra, que la represión también fue muy dura en otras partes del Estado y que también fueron muchos los catalanes que se sintieron parte del bando vencedor. Ni que decir tiene, que los que investigamos temas de universidad y franquismo esperamos, impacientemente, a que este nuevo trabajo vea pronto la luz en forma de libro.

Raúl Aguilar Cestero

J. R. Cruz Mundet, *Archivos universitarios e historia de las universidades*, Madrid, Universidad Carlos III-Editorial Dykinson, 2003, 345 pp.

Aglutina esta nueva publicación del Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad, ponencias y comunicaciones de las jornadas celebradas en mayo de 2002 que dan título a la publicación, en las que convergen las perspectivas profesionales de archiveros e investigadores en busca de un diálogo infrecuente y enriquecedor.

Nos encontramos así con la ponencia de Ascensión Lluch, de la Universidad de Valencia, en la que analizando los fondos, series y tipos documentales de su Institución hace patente su utilidad para el estudio de la historia de las universidades y, a su vez, la utilidad de ésta última en el estudio de la historia social de la cultura.

En la aportación de Andoni Borfo Bach del Archivo de la Universidad Autónoma de Barcelona, encontramos, sobre el establecimiento de unas bases teóricas acerca de la gestión de documentos, planteada la cuestión del modo en como se lleva a cabo en las universidades españolas, sus niveles de éxito, sus condicionantes actuales y retos futuros. Concluye el autor subrayando la necesidad de adaptación de los archiveros y la incuestionable perdurabilidad de la gestión integral de la documentación como solución para las universidades.

Aporta Ángeles Montes Zugadi un recorrido por los ocho años de historia de la Conferencia de Archiveros de Universidades Españolas, a lo largo de los cuales destaca como sello distintivo de su actividad el trabajo conjunto, construido sobre cuatro pilares: la organización, que se sustenta en el establecimiento de un comité ejecutivo, la convocatoria de su encuentro y pleno anual y la redacción de su normativa interna; la información y recopilación de datos sobre los archivos universitarios españoles; la práctica de cooperación a través de sus grupos de trabajo; y la difusión de su papel representativo de los archivos universitarios españoles destacando su reciente integración como grupo de trabajo de su comisión sectorial de Secretarios Generales de la CRUE.

Elena Hernández Sandoica presenta la mirada del investigador sobre las dificultades en los estudios sobre universidades causadas por dispersiones y rupturas a pesar de las cuales se considera satisfactoria la historiografía sobre la Universidad española. Hace un recorrido por esta historiografía desde la ruptura que supone el final legal de las universidades del Antiguo Régimen hasta la contemporaneidad pasando, entre otros, por la guerra civil y el exilio, teniendo siempre presente la historia de su universidad, la Complutense de Madrid.

Constituye el otro gran bloque de la publicación un variado mosaico de comunicaciones entre las cuales encontramos una mirada actual al archivo de la universidad Complutense de Madrid a cargo de su director Carlos Flores Varela, incluyendo su reglamento. Una interesante presentación del proyecto informativo Mapa Web de los archivos de Universidades españolas gestionado desde la universidad de Castilla la Mancha, a cargo de Pilar Gil García. Una aproximación a la historia y los fondos de los archivos históricos de las más antiguas universidades de Bogotá a cargo de María Clara Guillén de Iriarte, del Archivo histórico de la Universidad del Rosario.

Por su parte, Françoise Hiraux, de la Universidad Católica de Lovaina, presenta la experiencia en la formación, desarrollo y gestión de las colecciones audiovisuales de su Institución.

Aurora Miguel Alonso, de la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid nos aproxima a un interesante recorrido histórico por la evolución de la tesis doctoral en España y su significado en la evolución histórica de las universidades.

Por otra parte Lidón Paris Folch, del archivo de la Universidad Jaume I nos acerca a la universidad y a la sociedad valenciana del siglo XVIII a través de un estudio de los graduados universitarios de la provincia de Castellón con especial atención a los graduados en Leyes, Cánones, Medicina y Teología.

La importancia de una gestión archivística adecuada de la documentación generada mediante la actividad científica e investigadora queda patente a través de la comunicación presentada por Carmen M^a Perez-Montes Salmerón y Mar Caso Neira, de la Biblioteca General de Humanidades del CSIC, que nos aproximan a este tipo de fondos y su problemática.

Fernanda Ribeiro y Maria Eugenia Matos Fernández, de la Universidad de Oporto presentan el sistema de información archivística de su institución partiendo de sus premisas teóricas, el contexto y un detallado análisis de la producción documental de la Universidad.

M^a Elena Sotelo Martín y Rogelio Pacheco Sanpedro nos aproximan a una panorámica de la historia del archivo de la Universidad de Alcalá durante los siglos XVI al XIX, desde sus textos fundacionales y mostrando los avatares en este periodo cronológico del que consideran hipotético Archivo Histórico Universitario de Alcalá.

Finalmente, se cierra la publicación con la comunicación de Guillermo Vicente y Guerrero, de la Universidad de Zaragoza, en la que realiza un sintético pero muy relevante repaso por los seis inventarios, cuatro generales y dos parciales, de documentación que se han realizado en el Archivo Histórico Universitario de Zaragoza entre 1603 y 1983.

Pablo Marín Escudero

J. L. Llaquet de Entrambasaguas, *La facultad de cánones de la Universidad de Cervera*, Barcelona, Atelier, 2001, 388 pp.

Esta monografía del profesor Llaquet compendia su tesis de doctorado defendida en la Universidad de Barcelona en el año 2000. Estructurada en ocho capítulos, efectúa un análisis, desde distintas perspectivas, de la facultad canónica de Cervera —la única universidad catalana entre 1714 y 1835.

En el primer capítulo, a modo de introducción, se establecen las coordenadas —políticas, jurídicas e ideológicas— desde las que debe interpretarse el caso que nos ocupa. Ello conduce al autor a plantearse hasta qué punto las eventuales singularidades cervarienses —pensemos sobre todo en la producción y en la influencia de José Finestres— fueron capaces de conformar o no una suerte de *escuela jurídica catalana*, expresión que sería blandida en los años de la codificación civil.

Los capítulos segundo, tercero y cuarto están dedicados al cómo —los métodos de enseñanza— y al qué —las materias y sus cátedras— de la enseñanza canónica. He aquí el epicentro de la monografía, donde el autor evidencia su interés por la reconstrucción historiográfica de dos árduas cuestiones, metodológica una, ideológica otra. Y digo árduas porque sitúan al historiador en el piélago de una materia —la historia de la enseñanza del derecho canónico— apenas surcada, con escasos puntos de referencia y en la que la hegemonía del latín representa una dificultad no menor.

Los tres capítulos siguientes se refieren a los profesores del claustro de Cánones —oposiciones, carrera académica, salarios, ideología y escritos—. En cualquier trabajo de historia institucional procede un análisis de las personas que la integran, que la definen. Los problemas son similares al

de otros Estudios peninsulares: propósitos de cambio, inercias corporativas, absentismo, cortedad de salarios, disensiones claustrales, escasez y medianía de los escritos jurídicos —con alguna oportuna salvedad—. Si bien, dos acontecimientos históricos dejaron una intensa señal, tal vez en mayor medida que en otras universidades: la expulsión de los profesores jesuitas y la adscripción de no pocos docentes a la causa carlista.

En el último capítulo se efectúa una aproximación —en la medida en que los libros de matrícula lo permiten— a la población estudiantil: cifras globales, grados obtenidos, procedencia o estado. La llamada fuga académica —la búsqueda de grados menos gravosos, en tiempo y dinero— también concitó la atención de las autoridades académicas del momento

Nos hallamos, pues, ante una monografía que contribuye a rellenar un ámbito de la historia del derecho canónico —no lo olvidemos, una de las tres vertientes del llamado *derecho común*— todavía escasamente estudiada; y que se edifica sobre la base de una amplia y dispersa documentación —reténgase que el archivo universitario cervariense ha padecido diversos incendios—. Por su parte, entiendo que hubiera sido preferible acotar mejor el objeto de estudio, cuya dilatación —temporal y material— le resta intensidad al conjunto. Asimismo, el texto se resiente de la ausencia de un apéndice documental, que le hubiese evitado la prolijidad de algunos epígrafes —por ejemplo, los expedientes a oposiciones o el listado de los principales catedráticos.

Ramon Aznar i Garcia

M. Martínez Neira, J. M. Puyol Montero y C. Rodríguez López, *La Universidad Española 1889-1939. Repertorio de legislación*, Madrid 2004 [= Biblioteca del Instituto Antonio de Nebrija, núm. 11], 392 pp.

Nos encontramos ante un nuevo libro de la citada Biblioteca o Colección del Instituto, con sede en la Universidad Carlos III, dedicado a los estudios sobre la Universidad, que en poco menos de dos lustros de existencia ya ha editado catorce volúmenes, a lo que hay que añadir los no menos valiosos Cuadernos (que alcanza ya el número de siete) sobre monografías del mismo asunto. Brillante materialización libraria, todo ello, de la significativa labor de investigación que en el citado Instituto se practica bajo la dirección de la Catedrática de Historia del Derecho Adela Mora.

En este caso se trata de un Repertorio de legislación sobre la Universidad Española, acotado entre los años 1889 y 1939, precedido de un Estudio preliminar y completado por un nutrido índice alfabético de materias, además del elenco de los ministros autores o impulsores de las disposiciones repertoriadas y la relación de las fuentes que fundamentalmente han servido para construir el repertorio.

El grueso del contenido del libro, tal y como se refleja en el apellido de la intitulación, es el Repertorio cronológico de legislación, que ocupa en lo que a la paginación se refiere desde la 41 a la 366; en cuanto a lo temporal desde 1889 a 1939; y por lo que afecta a la cantidad de disposiciones seleccionadas, 3778 son referenciadas. Se trata por tanto de la presentación de un tramo de la Universidad española (o tal vez mejor de la Enseñanza Superior), realizada desde el más prolijo y desnudo perfil técnico-jurídico que enfocarse pueda. Comienza concretamente dicho tramo con la Real Orden de 7 de enero de 1889 (pocos meses antes de la promulgación definitiva del Código Civil) mediante la que se declara desierta una Cátedra de Derecho Romano de la Universidad de Oviedo, orden firmada por el Conde de Xiqueña, José Álvarez de Toledo, a la sazón Ministro de Fomento de turno; y termina con la Orden Ministerial del día de los Santos Inocentes del «primer año de la Victoria» (28-12-1939), por medio de la que se dictan instrucciones para la expedición del título en las Escuelas de Veterinaria. Orden, esta última, dictada cuando ya era Ministro de Educación Nacional don José Ibáñez Martín, quien había sustituido desde agosto de este año a Don Pedro Sáinz Rodríguez, primer ministro de Educación de Franco, a partir del 30 de enero de 1938; pues con anterioridad se encargó de estos asuntos la Comisión de Cultura y Enseñanza —dependiente de la Junta Técnica del Estado— de la que fue responsable desde poco después de la sublevación (octubre de 1936) el escritor y vate gaditano, autor de los cánticos sobre la naturaleza divino-mesiánica del Caudillo, don José María Pemán.

Cuál es el porqué de esta aparentemente caprichosa acotación cronológica del Repertorio legislativo: enero 1889- diciembre 1939. Precisamente en la explicación que aducen los autores para ello encontramos las valiosas funcionalidades de este Libro Repertorio. De un lado porque constituye una selección de las disposiciones referidas a la Enseñanza Superior, que se encuentran en los cuarenta y seis tomos de la publicación que desde 1890 aparece con el nombre de Anuario legislativo de Instrucción Pública [Disposiciones de 1889], en el que se contenían todas las normas concernientes, no sólo a la Superior sino también a la primera y a la segunda enseñanza; y que luego a partir de 1910 se denominó Colección legislativa de Instrucción Pública. Y de otra parte porque, gracias al esfuerzo especial de esclarecimiento e identificación practicado por la coautora del libro Carolina Rodríguez, se ha conseguido incluir con precisión la normativa sobre la Enseñanza Superior promulgada durante la Guerra Civil 1936-1939, en ambos bandos, tomando como referencia en la mayoría de los casos, en lo que acontece a la zona sublevada, colecciones privadas de normas sobre la «educación nacional». Colmándose así de una vez por todas la laguna existente sobre la normativa de la Enseñanza Superior durante este trienio bélico.

Pero además de estas funciones primordiales de selección e integración o recuperación de determinada normativa universitaria, perteneciente a

tramos o tránsitos históricos en los que era muy dificultosa su identificación, la obra o Repertorio sirve de referencia, brújula o punto de encuentro, para orientarse en la selvática producción normativa sobre enseñanza promulgada durante los siglos XIX y XX. En efecto como bien dicen los autores del libro, lo acotado cronológicamente en el Repertorio legislativo es, de un lado, el punto de llegada de una producción legislativa sobre la enseñanza, anterior a 1889, que viene de largo, pues el Ministro de Fomento Conde de Xiquena, impulsor del Anuario legislativo, que en esa fecha comienza, dispuso que se recopilase toda la producción anterior, en una obra de seis tomos, que se inicia en 1839. Con lo que «tenemos disposiciones desde 1839, de manera que podemos sumar [por delante] otros cincuenta años a nuestra cronología». Pero también es el punto de partida de una producción legislativa posterior pues «por otro lado, desde 1940 se publica una Colección legislativa, que se ha dotado de unos índices globales (cronológico y analítico) para el periodo 1940-1975», con lo que por detrás de lo acotado en este libro, se pueden añadir treinta y cinco años más de producción legislativa recopilada.

Sumamente interesante, por ello, es el Estudio preliminar (pp. 13-38) en el que de forma exhaustiva y rigurosa se pone orden y se valora la multiplicidad de colecciones normativas (del «antes» del Repertorio actual) que tienen que ver con la enseñanza, aparecidas a lo largo del siglo XIX, hasta el punto de poderse catalogar este Estudio como de breve y fundamental historia de las recopilaciones normativas sobre la instrucción pública de dicho siglo. Cualquier investigador, que quiera moverse o investigar por la legislación acerca de la enseñanza durante la citada centuria, encuentra en el mismo un instrumento muy valioso de ayuda y orientación. Estudio que por demás termina pergeñando el planteamiento de una cuestión muy interesante, que merecería mayor profundización, la diferencia entre «Enseñanza universitaria» y «Enseñanza Superior» (p. 37).

Impresión muy favorable también es la que nos merece el nutrido índice alfabético por materias, en el que se aprecia con profusión que los autores de la obra son especialistas de la Historia de las Universidades, sobre todo por la cabal selección de las entradas que de alguna manera se ven concernidas por la normativa repertoriada. ¡Cuántos trabajos sobre la Historia de la Universidad del primer tercio del siglo XX podrían perfeccionarse o empezar a entretenerse en función de dicho índice temático! Y en efecto las «muchas horas dedicadas a consultar catálogos, visitar bibliotecas, tomar notas... evaluar y discutir la estrategia» que se debía seguir para elaborar este Repertorio ha merecido la pena; pues se ha conseguido un instrumento de trabajo que auxilia en la investigación y da más seguridad, a aquellos que «transitan este territorio de la historia de la ciencia y de la universidad par evitarles algunos escollos y problemas» como pretenden y proclaman los autores.

Antonio Merchán Álvarez

P. Marzal Rodríguez, *Los claustros de doctores y catedráticos del Estudio general (1675-1741)*, Valencia, Universitat de València, 2003, 387 pp. [Col·lecció Cinc Segles, núm. 16]

El *Estudi general* de Valencia fue una universidad municipal. Por ello nunca estuvo dominado por la corporación de escolares y doctores, como Salamanca u otros de fundación medieval. A pesar de ello, y esta es la gran aportación de este libro — explica Mariano Peset en su prólogo—, hubo claustros de profesores —al menos— desde el siglo XVII. Aunque algunas noticias sobre ellos se tenían gracias a la historia de la universidad de Ortí y Figuerola publicada en 1730, es ahora, gracias al trabajo de Pascual Marzal, cuando éstos se dan a conocer.

Las cuestiones tratadas por los claustros valencianos son calificadas en el prólogo de fútiles, si se comparan con Salamanca o Valladolid, pero muestran cierto sentido corporativo, en especial entre los profesores de medicina. Y, como afirma el autor, matizan y completan otras informaciones de la documentación oficial.

Los claustros recopilados hasta ahora se encuentran —en su mayoría— dispersos entre los protocolos de varios notarios junto a escrituras de compraventa, arrendamientos y otro tipo de actos jurídicos pertenecientes a diferentes particulares.

El libro sintetiza así un proceso de recopilación de documentos y estudios relativos a una institución poco conocida en la historia de la Universidad de Valencia. Junto a los claustros de doctores y catedráticos aparecen algunas actas de otras agrupaciones de profesores y algunos documentos que las complementan.

Manuel Martínez Neira

A. Mora Cañada y C. Rodríguez López (eds.), *Hacia un modelo universitario. La Universidad Carlos III de Madrid*. Madrid, Universidad Carlos III/Editorial Dykinson, 2004, 365 pp.

Una universidad innovadora. Tradicionalmente ha existido un claro interés por conocer el origen, formación y gestión de los distintos centros universitarios en España, especialmente de aquellas instituciones de enseñanza superior que, por determinadas circunstancias, han desaparecido o tienen una larga trayectoria docente.

Sin embargo, en las dos últimas décadas son varios los trabajos de investigación que se han realizado con la tarea de llevar a cabo un pormenorizado estudio acerca de los orígenes, creación y puesta en funcionamiento de la universidad española. Por otro lado, es curioso observar cómo estos trabajos se circunscriben en los últimos años sobre todo a las uni-

versidades «jóvenes», es decir, las creadas en la década de los años ochenta y noventa del siglo pasado, cuyo nacimiento en algunas ocasiones fue consecuencia de un dilatado proceso, acompañado a veces de un amplio debate político y social, especialmente largo en el caso de la Universidad de Castilla-La Mancha.

En el marco de la línea de trabajo citada se encuadra el libro editado y coordinado por las investigadoras Adela Mora Cañada y Carolina Rodríguez López, que han realizado una magnífica labor de investigación referida a una joven Universidad ubicada en la zona Sur de Madrid, nacida al amparo de la LRU a finales de los pasados años ochenta y puesta en marcha gracias a un proyecto caracterizado por una filosofía encaminada a desarrollar un nuevo modelo universitario.

Al realizar un estudio sobre una cuestión cercana en el tiempo surge, tal y como señalan las propias editoras, el problema de la posible objetividad de un trabajo referido a un tema respecto al cual apenas hay distancia cronológica. Sin embargo, este trabajo queda alejado de ese posible «problema» por varias razones. La utilización de una amplia documentación, el uso de la fuente oral —dando voz a quienes estuvieron presentes en el proyecto, fundación y desarrollo de esta Universidad— y el análisis de otras fuentes como la prensa, seguido de un minucioso trabajo, evitan la falta de objetividad y demuestran que no es necesario remontarse a períodos lejanos o instituciones ancestrales para hacer un digno y relevante trabajo de investigación, como el que aquí se presenta.

El estudio nació gracias a la iniciativa del propio rector de la Universidad Carlos III de Madrid, Gregorio Peces-Barba, quien encargó al Instituto de Estudios Antonio de Nebrija de la propia universidad, llevar a cabo un trabajo en el que quedara recogida la génesis de la quinta universidad de Madrid. Para conseguir el objetivo marcado, las editoras han contado con la colaboración de catorce acreditados autores, la mayoría profesores e investigadores de la propia Universidad Carlos III.

En los dos primeros capítulos se analizan pormenorizadamente los antecedentes de la creación, imperiosa en la zona sur de Madrid, de la quinta universidad de la Región para conseguir descongestionar la masificación que padecían el resto de universidades del distrito en torno a 1987. Sin embargo, no será hasta dos años después, a raíz de la Ley de 5 de mayo de 1989, cuando se inicie el proceso de creación y puesta en funcionamiento de la Universidad Carlos III.

Fue creada, como se sabe, a instancias del Gobierno Central dentro del marco de la LRU. No se inscribe, como por ejemplo la Universidad de Castilla-La Mancha, en el ámbito de un impulso regional preferentemente amparado por un gobierno autonómico y en gran parte contra el criterio de los diferentes ministros del ramo. Naturalmente, la Comunidad de Madrid nunca fue ajena al proceso de fundación. Así, la ejecución material y su puesta en

marcha se llevó a cabo gracias a los convenios y acuerdos firmados entre el Ministerio de Educación, la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos de Getafe y Leganés. O sea, tres niveles administrativos unidos con el fin de dotar de estudios universitarios a una zona muy poblada que carecía de ellos y en la que los desplazamientos a las otras universidades eran constantes.

Nada más ponerse en marcha la Comisión Gestora encargada de guiar los primeros pasos de esta Universidad surgió la cuestión de la ubicación de sus sedes y la elección de los edificios. Se consiguieron gracias a la idea del entonces gobierno socialista de rehabilitar antiguas dependencias militares. Esto se llevó a cabo gracias al acuerdo sellado entre Narcís Serra, ministro de Defensa, y Eduardo Mangada, a la sazón consejero de Política Territorial de la Comunidad Autónoma de Madrid. Fue el denominado Plan Meta el que hizo posible que la Universidad Carlos III pasara a ocupar y readaptar viejos acuartelamientos de la zona Sur de Madrid con sede, como se sabe, en tres campus: Getafe, Leganés y, más tarde, Colmenarejo.

Por tanto, la elección de la zona Sur para ubicar la quinta universidad estuvo determinada por dos factores: la reorganización de las instalaciones militares y el plan de recuperación de zonas deprimidas. De esta manera se trataba de conseguir un reequilibrio territorial en una de las zonas de mayor crecimiento poblacional de las últimas décadas.

Mas como ha ocurrido con los inicios de otras jóvenes universidades, la creación de la quinta universidad y la elección de su ubicación planteó dudas y debates intensos entre los políticos conservadores y de la izquierda, así como en el seno del propio Partido Socialista, ya que algunos creían que la creación equivaldría a levantar una especie de *ghetto* en el Sur de Madrid.

En los capítulos siguientes se centra el análisis en la configuración interna de la Universidad. A medida que se va leyendo el libro queda patente una realidad en la que las editoras y autoras han hecho especial hincapié, es decir, la búsqueda de la *calidad* como objetivo derivado de cualquier esfuerzo realizado. El nuevo modelo universitario con el que se gestó esta Institución fue refrendado por variadas actuaciones. Entre otras es posible recordar la apuesta por las actividades investigadoras, la atención a la docencia al formarse grupos de alumnos reducidos, el mantenimiento de cuatro convocatorias para aprobar cada asignatura, la formación de un importante sistema bibliotecario, la promoción del asociacionismo estudiantil o la intensificación de los intercambios internacionales. Acciones que la joven Universidad asumió como «banderas» capitales de su proyecto educativo.

Indudablemente tales planteamientos fueron causa de amplias polémicas motivadas por dos razones fundamentales, como bien se indica en el estudio. Por un lado, se empezaba a percibir a la Universidad como un «centro de lujo», donde previamente se llevaba a cabo una «selección» del alumnado. Por otro, debido a que esta filosofía educativa iba a ponerse en

práctica en el denominado «cinturón rojo» de Madrid, es decir, en una de las zonas más obreras de la Comunidad.

En la entrevista que el rector Gregorio Peces-Barba ofrecía al diario *El País* en septiembre de 1990 —todavía como presidente de la Comisión Gestora—, explicaba su visión ante la crítica que se hacía por el número reducido de plazas existentes en los distintos planes de estudio, que para algunos proyectaba la imagen de un organismo «elitista». Su postura era clara y firme al respecto: en el espíritu de la Universidad no estaba el de «competir sino el de evitar errores pasados».

Efectivamente, el proyecto de la Carlos III era novedoso en España, por cuanto abogaba especialmente por unir Universidad y sociedad. Gracias a dicha imbricación los centros universitarios se convertían en un elemento culturalmente activo, con el que no se buscaba la mera rentabilidad económica sino crear un referente cultural, social, e incluso arquitectónico, donde sus propios edificios y sus diferentes actividades fueran una parte importante de la esencia del tejido urbano y social.

Ese espíritu presidió también la creación de otras universidades en la misma época, tales como la Juan Pablo de Olavide, de Sevilla, la Pública de Navarra o la Pompeu Fabra, de Barcelona. Pero como bien se indica en el libro, mientras la Pompeu eligió para su ubicación una zona burguesa por excelencia, el Ensanche de Barcelona, la Carlos III se puso en dos de las localidades más representativas del obrerismo madrileño, Getafe y Leganés, con el fin de ajustar e intentar corregir los innegables aspectos negativos que el rápido crecimiento de la población había supuesto en esta zona de Madrid.

La última parte del libro se centra en mostrar otros importantes aspectos distintivos como su potente actividad investigadora y su cuidada organización de la estructura departamental, en la que el departamento se convierte en un elemento vital de la actividad universitaria que integra docencia e investigación.

Asimismo, se señalan otros servicios que hacen de la Universidad Carlos III una institución pública singular. Es el caso del SIJA, servicio de atención continuada al alumno, al que se le oferta todo un abanico de actividades complementarias para su formación integral y que se dedica a fomentar las relaciones sociales entre todos los miembros de la comunidad universitaria. O, también, el del SOPP, servicio de orientación y planificación profesional.

Finalmente el libro presenta un interesante análisis estadístico, que muestra el crecimiento y consolidación de la Institución, y un apéndice documental con las más importantes normas y disposiciones referentes a la misma.

En definitiva, una interesante aportación, resultado de una reflexión seria y rigurosa, que sirve para conocer la importancia y el significado que la creación de esta Universidad ha tenido para la zona Sur de la Comuni-

dad de Madrid. La Carlos III es, ante todo, una Institución, como indican las editoras en la introducción, que intenta proyectarse hacia la sociedad. Por tanto, se trata de una joven Universidad que apuesta por la calidad, por un nuevo talante y un novedoso programa educativo con el que, como señala su rector Gregorio Peces-Barba, se intenta «sacar de cada joven al mejor estudiante».

*Esmeralda Muñoz Sánchez
e Isidro Sánchez Sánchez*

J. Murilo de Carvalho, *A Escola de Minas de Ouro Preto. O peso da Glória*, Belo Horizonte, Editora UFMG, 2002, 219 pp.

Con la reedición de este volumen, aparecido por vez primera en el mercado editorial brasileño hace algo más de veinte años, la historiografía de ese país y la comunidad científica entera reciben de nuevo un refrescante repaso por la historia de una institución viva en el panorama de docencia e investigación en el nivel superior del país latinoamericano: la Escuela de Minas de Ouro Preto, en el estado de Minas Gerais al norte de Rio de Janeiro.

La investigación elaborada por el autor, en apariencia sencilla, volcada en pocas páginas, condesadas, llenas de contenido y con la contención debida de la erudición, ofrece, en nuestra opinión un modelo y un verdadero ejemplo de las problemáticas (locales y universales, según la ocasión) a las que se enfrenta quien pretende conocer el devenir de una institución de enseñanza superior en una concreta cronología y en un contexto político, económico y social determinados y del que el autor es además profundo conocedor. Dicho de otro modo: Murilo⁴, tras presentar el objeto de su estudio y el tracto cronológico abarcado, sin perderse en asuntos y preocupaciones paralelas o contextualizaciones que pueden ser resueltas a lo largo del relato principal (como así es) se plantea las preguntas pertinentes y los problemas esenciales que una institución de este jaez presenta: cómo y por qué se fundó, cuales fueron las causas de su éxito inicial y las de su posterior declive, qué modelo pretendió instaurarse con su creación y qué posibilidad de perdurabilidad ha tenido éste; qué impronta propia pudo aportar la institución al conjunto de las demás también dedicadas a la enseñanza y la investigación en su más alto nivel; qué resultado pudo ofrecer ésta en términos de cambio económico, científico y tecnológico...

⁴ José Murilo de Carvalho, doctorado en la Universidad de Stanford, especialista en el estudio de las elites políticas en la construcción del Estado en el Brasil imperial, es actualmente profesor titular del departamento de historia de la Universidad de Federal de Río de Janeiro.

Entre las instituciones de enseñanza con mayor importancia en la vida de Minas Gerais destacan la Caraça y la Escuela de Escuela de Minas de Ouro Preto. A ellas se les atribuye un meritorio trabajo en materia de educación, válido por lo realizado en cuanto a la preparación del personal y por la originalidad insertada con ellas en la vida de la zona, tal como señala, Francisco Iglesias en la presentación del volumen. Partiendo de esta importancia Murilo se propone realizar la historia institucional de la Escuela mencionada, creada en 1876, entendiéndola como una institución fundamental para la implantación en Brasil de la ciencia geológica, de la mineralogía, de la metalurgia y para el desarrollo tecnológico de su área de influencia. Y además, la reconoce esencial para la implantación del espíritu científico, gracias a la valoración de la investigación empírica hecha a contracorriente de una muy marcada tradición literaria en el país.

Como otras instituciones brasileñas (el caso del Instituto Oswaldo Cruz es el más próximo) la Escuela de Minas fue un ejemplo de exitosa implantación de lo que había de mejor en la ciencia europea en la época. Ambas instituciones contribuyeron poderosamente a colocar a la geología y la investigación biológica en el puente de lo que viene considerándose el paso de la ciencia colonial a la ciencia nacional, esto es, de la ciencia hecha totalmente en dependencia con investigadores y centros externos, hacia la ciencia realizada en instituciones nacionales por investigadores nacionales.

Dos elementos se constituyen como ejes de este trabajo. El análisis de las causas que impulsaron la creación de las causas de Minas y los motivos de su declive, con cien años vista de perspectiva. El trayecto explicativo que fluye entre ambos puntos extremos es el camino analizado en este libro que, para ello, se divide en tres partes. La primera está dedicada al estudio de las circunstancias en que fue creada la escuela, las razones de la implantación, los obstáculos que tuvo que vencer y los factores del éxito inicial. La segunda trata de su espíritu y finalidad, de su impacto en la ciencia, la tecnología, la economía y la política. La tercera discute la situación en los últimos años, la naturaleza y las causas de su declive, y algunas posibles opciones de renovación. Esta división, intenta abordar los asuntos más importantes si bien no cabe duda de que son las fases más antigua y más reciente las que concentran mayor interés.

Las fuentes primarias utilizadas para las dos primeras partes son de una relevancia excepcional: la correspondencia de Gorceix, el fundador de la Escuela, con el emperador, y con los presidentes de la provincia de Minas Gerais, además de los informes anuales y las anotaciones de los ministros. Para la tercera parte, la más cercana cronológicamente a nuestros días, debe destacarse la utilísima incorporación de las fuentes orales a través de las entrevistas efectuadas por el autor. Destacan igualmente las pertinentes tablas en las que se vuelcan una serie de datos cuantitativos que aligeran y ordenan perfectamente las ideas vertidas en el texto principal.

Atendiendo a las premisas arriba apuntadas debemos señalar las conclusiones a las que el autor llega tras su exposición de datos. El estudio llama la atención, en primer lugar, sobre las limitaciones de un tratamiento funcional-mecanicista de la educación. Es decir, no sirve en este caso partir de la hipótesis de que la educación refleja rígidamente necesidades de orden económico y social. La economía brasileña de 1875 no pedía ingenieros de minas, metalúrgicos o geólogos. Atravesando, como se estaba haciendo en ese momento, un ciclo cafetero floreciente, los técnicos reclamados por esa economía eran ingenieros civiles, constructores de vías férreas y directores de obras públicas, ingenieros agrónomos e incluso ingenieros sanitarios. No cabe duda, no obstante, de que en el mismo Minas Gerais, sede de la febril actividad de los científicos ilustrados en busca de alternativas para la economía colonial en el final del siglo XVIII y comienzos del XIX, existía una preocupación por sus riquezas minerales y por su industria metalúrgica. Las principales minas se encontraban en manos de capitales e ingenieros ingleses, sus fábricas de hierro mantenían la misma escala y las mismas técnicas, ya algo primitivas, incorporadas a principios del siglo XIX y los gobiernos de Minas también se habían rendido a los encantos de los cafetales. Así planteado, la creación de la Escuela de Minas fue, primordialmente, un acto de voluntad política —de política clarividente— capaz de vislumbrar las posibles consecuencias a largo plazo de la formación de mineros, metalurgistas y geólogos. Fue en buena parte fruto de la convicción personal del emperador respecto al valor de la ciencia en sí y de su amplia admiración por la cultura francesa.

La Escuela de Minas, desde que fue creada y en su primer decenio de existencia, contaba con pocos amigos y muchos enemigos: tenía pocos alumnos, que, una vez formados, no encontraban empleo; en el Congreso se consideraba que era un lujo injustificado para un presupuesto nacional modesto; los católicos la acusaban de ser un vivero de materialistas y otras escuelas procuraban sabotear sus esfuerzos. Si no fuese por el constante apoyo imperial probablemente hubiera dejado de existir.

Aunque gran parte de su existencia la Escuela de Minas tuvo que navegar a contracorriente, consiguió perfilar, hasta 1930, la primera generación de geólogos brasileños: los primeros proyectistas de altos hornos, rastreadores de las tierras en busca de recursos minerales, directores y técnicos del servicio geológico, los primeros industriales de la siderurgia, los directores de las vías férreas, secretarios y ministros de Estado. Casi todos los antiguos alumnos se interesaron por la explotación y desarrollo de los recursos naturales del país, de escapar a las ataduras de la economía colonial monocultora y exportadora, de defender los intereses nacionales, de promover el desarrollo económico. La expansión de actividades de ese grupo de ingenieros contribuyó a la transformación económica del país.

En segundo lugar, el autor concluye apuntando las principales causas de su éxito. Como factor esencial de éste destaca sobremanera el apoyo polí-

tico decisivo recibido por el emperador Pedro II. Debe sumarse la autonomía concedida a los responsables de regirla y de administrar sus recursos: la Escuela de Minas diseñaba sus propias normas, reclutaba a su personal, decidía la organización de sus actividades... La situación cambió drásticamente en el momento en que, con su incorporación al Ministerio de Educación y Salud, la Escuela se contagió de la burocracia ministerial. Igualmente, los contactos con el exterior también son considerados aquí con elementos de éxito. La Escuela de Minas incorporó entre su profesorado a extranjeros que impartieron allí sus clases durante largo tiempo lo que permitió la formación de una generación de brasileños para sustituirlos.

La decantación de la Escuela de Minas más hacia la enseñanza que hacia la investigación es otro de los elementos definitorios de su trayectoria. Ouro Preto brilló por el personal que formó y gracias a ello ejerció una influencia más diversificada. La pérdida de equilibrio entre la enseñanza y la investigación, en este caso, con predominio claro de la primera, pueden entenderse causas de su estancamiento si bien consiguió conservar, dada la continuidad de su actividad docente, su aparente vitalidad.

El compromiso del autor con el objeto de estudio es claro. Con el deseo de que la vitalidad de la Escuela se recupere, plantea una serie de elementos imprescindibles para ese fin. Sería necesario, en primer lugar, retirar a la Escuela de Minas de la órbita del Ministerio de Educación, vinculándose a otro ministerio o constituyéndose como órgano autónomo bajo la forma de fundación u otro tipo; también retomar el contacto con el exterior, contratar buenos profesores, atraer investigaciones del gobierno y de la industria, renovar su cuerpo docente y sus métodos de enseñanza, es decir: volver a lo que fue el espíritu original de Gorceix, una y mil veces recordado y reclamado en esta obra.

Carolina Rodríguez López

I. Naso (ed.), *Alma felix universitas studii taurinensis. Lo Studio generale dalle origini al primo cinquecento*, Torino, 2004, x + 356 pp. [= Storia dell'Università di Torino, vol. 1]

La Universidad de Turín sobresale por la atención que ha prestado al estudio de su pasado, manifestada en revistas y monografías, y que ha sido posible por contar con buenos y laboriosos historiadores en su corporación. Ahora, en la celebración de su sexto centenario, hace un alarde de este bagaje emprendiendo la publicación de una historia de la institución.

El primer volumen de dicha obra ha sido coordinado por Irma Naso y abarca el periodo medieval. Se divide en cuatro partes (orígenes, poderes, enseñanza, maestros y libros), salpicadas de abundantes ilustraciones que constituyen una narración paralela.

La bula del papa Luna, Benedicto XIII, fechada el 27 de octubre de 1404, erigía la universidad: Isidoro Soffietti dedica su estudio a este documento. Pero enseguida se sucede la refundación del Estudio mediante privilegio imperial de 1 de julio de 1412 y una segunda aprobación papal. En efecto, como nos cuenta Irma Naso, la ciudad de Turín para superar su crisis económica de finales del siglo XIV consiguió la aprobación de la universidad. Pero la institución tuvo un comienzo difícil, con un funcionamiento intermitente. Ni siquiera el reconocimiento legal por las dos autoridades fue suficiente para aclarar algunos problemas de la dirección de la universidad. De manera que esta precariedad en el funcionamiento continuó por treinta años, y se manifestó en la pobre formación de los profesores.

Carla Frova edita tres documentos de Martín V y hace un análisis de la documentación papal sobre la universidad. Elisa Mongiano se centra en la relación entre los Saboya y la universidad. Particular atención presta a las ordenanzas dadas entre 1424 y 1436 por Amadeo VIII y su hijo Ludovico para la reorganización del Estudio, que coincide con la transferencia de la universidad a distintas sedes. Con estas normas la universidad se convierte en un estudio del príncipe.

Irma Naso cuenta, en otro capítulo, cómo a mitad del siglo XV la existencia del estudio influyó en el desarrollo de la ciudad, que comienza así a despuntar como lugar político-cultural y comercial-industrial. Los conflictos entre la ciudad y la universidad, que se desarrolla en todo el periodo, fueron más intensos a comienzos del siglo XVI.

La facultad de teología es abordada por Ernesto Bellone. A finales del siglo XIV la enseñanza de la teología en Turín eran desarrollada por dominicanos y franciscano. En el seno de la universidad aparece una escuela de teología, que fue reconocida oficialmente en 1440 por el concilio de Basilea. La procedencia de los estudiantes y graduados era muy variada: del Piamonte, de otros territorios italianos, de más allá de los Alpes. Con lagunas, se conservan manuscritos de la enseñanza desarrollada en su seno.

Como explica Francesco Aimerito la enseñanza del derecho estuvo vinculada a la evolución jurídica e institucional de la administración de los Saboyas. Alrededor de 1430, después de un comienzo difícil, distintos juristas sobre todo formados en la Universidad de Pavía acudieron a Turín a dictar distintos cursos. Ya a finales del siglo XV, distintos juristas locales consolidaron la calidad de la facultad. Algunos de ellos aceptan el método humanista pero no modificaron el método de enseñanza.

La facultad de medicina de Turín se constituyó en 1412, pero hasta 1414 no se asignó la primera cátedra. Hasta la llegada de Antonio Cusano, sabemos gracias a Mario Umberto Dianzani, hubo una enorme dificultad de conseguir docentes con prestigio.

Paolo Rosso se detiene en las crecientes interferencias de los poderes aristocráticos en la selección y pago de salarios. Siglo XV los profesores de derecho obtuvieron las cátedras más prestigiosas y mejor pagadas.

En fin, Ada Quazza y Costanza Segre Montel nos introducen en el escaso mercado de la producción del libro que existía en Turín.

Manuel Martínez Neira

M. G. Di Renzo Villata (ed.), *Formare il giurista. Esperienze nell'area lombarda tra Sette e Ottocento*, Milano, Giuffrè, 2004, 641 pp.

El libro ofrece un conjunto de ensayos sobre la formación de los juristas en la Lombardía ilustrada, es decir, en un momento en que aflora un intenso debate sobre los contenidos de la enseñanza y el papel de las facultades jurídicas en los cambios que condujeron al Estado liberal. Ettore Dezza dedica sus páginas al magisterio de Luigi Cremani, Dario Mantovani y Angela Santangelo Cordani al derecho civil, Loredana Garlati Giugni y Cristina Danusso al penal, Sara Parini Vincenti a la nueva concepción científica del derecho, Chiara Valsecchi al derecho matrimonial, Claudia Storti Storchi, Mario Conetti, Elisabetta D'Amico y Alice Reale a algunas revistas jurídicas del ochocientos, en fin, Erika Daggungher a la medicina legal.

La editora abre el volumen con un extenso ensayo —de más de cien páginas—, titulado «La formación del jurista en Italia y la influencia cultural europea entre los siglos XVIII y XIX. El caso de Lombardía». En él Maria Gigliola Di Renzo Villata parte de la crítica lanzada por novatores e ilustrados a la institución universitaria, crítica interesada, y quizá esto se debiera de haber subrayado. Las universidades italianas se encontrarían vacías pues los alumnos habrían emigrado a otras instituciones docentes más eficientes y la enseñanza del derecho sería mediocre, limitándose a repetir una «petrificación de la ciencia medieval».

En esta tesitura emerge la figura de Scipione Maffei que entre 1713 y 1715 formula (*Parere intorno al sistema dell'Università di Padova, e al modo di restituirla al suo antico splendore e concorso* y *Sul migliore ordinamento della Regia Università di Torino*) un conjunto de ideas que dominarán la segunda mitad del siglo. Este precursor, en síntesis, pedía la disminución de las cátedras destinadas al derecho romano y canónico, y su sustitución por otras de derecho propio: erudición legal, derecho público y derecho municipal. A las propuestas de Maffei siguieron las de Francesco d'Aguirre, Celestino Galiano y Di Gennaro, entre otros.

Pero como se sabe, las reformas sólo tomaron cuerpo en la segunda mitad del siglo XVIII. Entre 1771 y 1772 se completa la reforma de la Universidad de Turín, en la que aparecía un cambio notable en el contenido de la enseñanza del derecho canónico y civil, donde se observa una amplia apertura a las grandes corrientes culturales europeas. Lo mismo ocurrió en Cagliari a comienzos de los sesenta. Catania, entre 1778 y 1779, deja

aparte el modelo boloñés para adentrarse en el estudio de los derechos patrio y natural. Orientación compartida por la Academia de Palermo fundada en 1779.

Nápoles sufrió una gran reforma en 1777, cuando entre las materias académicas aparecen los derechos patrio, criminal y natural. En 1757 se crea la cátedra de derecho criminal en Módena y en 1767 el público, es decir, el derecho natural. En 1773 se dan nuevas constituciones a la universidad, en las que se recogen nuevas materias. Para Parma los nuevos reglamentos surgen a finales de los sesenta. En 1761 se reordenan las materias en la Universidad de Pádova, entre las que aparece la enseñanza del derecho natural. En Toscana los numerosos intentos de reforma no llegan a buen puerto. Las reformas de Pavía habían llevado el derecho natural ya en 1738 y a la *Historia iuris civilis* en 1747. El plan general de reformas se realizó en 1757 y culminó en sendas disposiciones de 1771 y 1773.

Sobre esta ordenación ilustrada se producen las reformas napoleónicas. La restauración supuso en general una solución ecléctica entre las novedades francesas y el acervo ilustrado. Las materias estudiadas en Pavía durante la restauración, los manuales seguidos en la enseñanza (con la paralela prohibición de apuntes) y un repaso a las revistas jurídicas de la provincia concluyen estas primeras páginas. Con ellas la obra adquiere unidad y se convierte en mucho más que un conjunto de estudios singulares. En efecto, éstos encuentran su significado más profundo a la luz de las claves interpretativas que se ofrecen en la introducción.

Manuel Martínez Neira

C. Schoukens (ed.), *Archives, universités, monde étudiant: une mémoire en construction*, Actes de la Deuxième Journée des Archives organisée les 17 et 18 avril 2002 par le Service des Archives de l'Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Bruylant Academia, 2003, 129 pp.

El mayor acierto de esta publicación, pequeña en su formato, grande en sus logros, es la elección del tema sobre el que versó la duodécima jornada de trabajo organizada por los archivos de la Universidad Católica de Lovaina. Si pocos son los estudios que han elegido la vida y el movimiento estudiantil como perspectiva desde la que abordar el mundo universitario, aún menos lo han sido las publicaciones archivísticas que han centrado su atención en los fondos que reflejan un ámbito tan atractivo como éste. Los trabajos se estructuran en tres líneas: las aportaciones de los teóricos, las cuestiones metodológicas y los estudios de caso.

Las actas se abren con la intervención de una de las figuras más relevantes de la archivística internacional y, por supuesto de la francofonía, el profesor canadiense Carol Couture, quien centra su ponencia en los com-

ponentes de las políticas de gestión de archivos. En una línea asimismo teórica y doctrinal el también profesor canadiense Marcel Caya pone el acento en las especificidades y los aspectos originales que presentan los archivos universitarios. A partir de aquí las aportaciones vienen de la mano de archiveros universitarios, que se ocupan con agudeza crítica de los aspectos metodológicos sobre la gestión de los documentos de los estudiantes (D. Devriese) y un estudio referido a la creación de documentos audiovisuales como memoria de la vida académica (F. Hiraux); siguen los estudios de caso de la Universidad de París X-Nanterre (F. Douat) y de los archivos-museo de la vida estudiante flamenca (M. Derez), así como sendos sobre fuentes documentales para el estudio del movimiento estudiantil en Francia (S. Méchine y J-Ph. Legois).

Se trata en definitiva de una obra apreciable, que bien puede animar a otras comunidades profesionales a trazar un panorama sobre la capacidad de los fondos universitarios para documentar la vida de los estudiantes y de sus movimientos sociales.

José Ramón Cruz Mundet

E. Signori, *Minerva a Pavia. L'ateneo e la città tra guerre e fascismo*, Milán, Cisalpino-Istituto Editoriale Universitario, 2002, 346 pp.

Después de la publicación de al menos tres artículos tanto a propósito de las diferentes etapas cronológicas que comprende este libro, como de los perfiles personales, políticos y académicos de algunas de las personalidades analizadas en el mismo, en 2002 vio la luz este nuevo trabajo de Elisa Signori. Dividido en dos partes perfectamente diferenciadas, éste nos sumerge en los cambios efectuados en la Universidad de Pavía entre los años de las dos guerras mundiales. El tracto cronológico es sumamente significativo tanto para la suerte de las universidades italianas en su conjunto como para la de este centro que pasó en ese tiempo de ser la única universidad de Lombardía a tener que compartir sus tareas con la Universidad de Milán, creada por el gobierno fascista tras la Ley Gentile de 1923.

La cronología elegida por la autora pone de manifiesto uno de los procesos más trascendentes de la historia de la Universidad italiana: los proyectos previos a la instalación del ideario fascista. La etapa giolittiana, los años próximos a la primera guerra mundial, ofrecen el comienzo y la consolidación de la relación entre ciencia y política, entre las instituciones de investigación y el poder, entre la elite culta y la clase dirigente en un momento de la historia italiana en la que iba fraguándose un proyecto de nuevo modelo universitario y en el que se experimentaban específicas formas de integración político-ideológica de la comunidad académica. Moviéndose así en un interés tanto por la historia cultural como por la his-

toria política, lo que ya se sabe de este período muestra la dinámica del desmantelamiento de la libertad de enseñanza y de la autonomía de los centros hasta llegar al culmen del proceso en los años de la reforma Gentile y de la Carta de la escuela. Son años pues de discusión y de acentuación de la relación dialéctica entre la autonomía y la dependencia de la administración central en lo que acabaría observándose como la *cuestión universitaria nacional*, de debate sobre la implicación la ciudad con su Universidad y, en definitiva, de pérdida —con la llegada del fascismo— del secular monopolio de Pavía como la única universidad lombarda lo que otorgaba a Milán el papel de motor de desarrollo económico y de centro de la iniciativa política y reservaba a Pavía la tranquila laboriosidad de los estudios. Se abrió a partir de ahí una duradera disputa entre ambas universidades, empeñadas en redefinir sus vocaciones y roles respectivos.

El título mismo del trabajo evoca precisamente una de las problemáticas apuntadas. Al levantar una estatua dedicada a Minerva, en 1939, a la entrada a la ciudad, el gobierno intentaba reconocer, siquiera simbólicamente, la centralidad de la vida académica en la comunidad ciudadana dada la tradicional y difícil interacción entre la comunidad universitaria y los ciudadanos.

El objetivo de la autora es aportar un primer trabajo en el que además de atender a los conflictos mencionados no se descuide, como tampoco parecía hacerse en ese momento, los debates de índole científico, máxime cuando en el período fascista se promocionaba la creación, de una vez, de una ciencia italiana verdaderamente autárquica.

El trabajo puede ser leído bien como las intervenciones autónomas de unos y otros protagonistas del proceso o como el seguimiento de todo ese mismo recorrido en su dimensión cronológica. Si optamos por la primera posibilidad nos encontramos con los periplos personales de Luigi Credaro (el más alejado a la cronología señalada pero especialmente implicado en la discusión sobre la libertad académica), Mariano Maresca y Plinio Fraccaro, destacados docentes pavianos los tres, aportadores de interesantes reflexiones sobre las reformas necesarias para la Universidad y con intensas andaduras en el tránsito político seguido hacia el fascismo. La segunda de las posibilidades sugeridas sitúa al lector en medio los conflictos surgidos en Pavía ante las sucesivas reformas planteadas desde los años diez del siglo: las disputas por la conservación de la tradición y la irrupción de algunos cambios se combinan con la institucionalización ya aludida de la Universidad de Milán, y los progresivos intentos de fascistización de la Universidad de Pavía. En este último punto destaca el análisis de la implantación de las leyes raciales en este centro y la instalación del espíritu marcial entre las aulas de mano de las actividades de los GUF.

Los archivos visitados para este trabajo son tan variados como demuestra la complejidad misma del tema: desde la documentación del archivo de la Universidad de Pavía (fondo de estudiantes, expedientes personales de

los docentes, actas del consejo y del senado académico), el archivo central del Estado de Roma (fondos de los ministerios de interior, instrucción pública y educación nacional, de cultura popular, del Partido Nacional Fascista, de la secretaría particular del Duce...), del Museo del Risorgimento de Milán, además de los archivos de distintas fundaciones. A pesar de esta disponibilidad, la autora reconoce que el desconocimiento de la historia contemporánea de las universidades italianas (solventado mucho mejor para la edad moderna, por ejemplo), se debe fundamentalmente a la dificultad planteada por las fuentes. Como muestra de ello (o también como causa). Signori apunta la inexistencia en la Universidad de Pavía de un archivo ordenado para los siglos XIX y XX con el que pudiera hacerse, por ejemplo, trabajos de indagación serial y cuantitativa. Se podría conocer así la carrera académica, los currículos de los estudiantes, los destinos profesionales de los mismos, los balances de la gestión, los escalafones administrativos y burocráticos, la actividad de los órganos de gobierno... Se esa forma la autora nos ofrece su investigación como una primera contribución con análisis sectoriales y sondeos preliminares, a la espera de estudios más sistemáticos —estadísticos y prosopográficos— y de reconstrucciones de conjunto. Un primer paso, pues, ante todo lo que quedaría pendiente.

Con todo, *Minerva a Pavía*, es un claro y muy loable trabajo de investigación que observa de manera muy precisa los vericuetos del ordenamiento legal de las universidades y sus contestaciones entre la comunidad académica, sin descuidar a los protagonistas de los debates planteados.

Carolina Rodríguez López

VARIA

ACTIVIDAD DEL INSTITUTO

Proyectos de investigación

A lo largo del año 2004 el Instituto ha concluido el proyecto de investigación sobre los *Orígenes y evolución de la Universidad Carlos III* que ha dado lugar al libro titulado *Hacia un modelo universitario: la Universidad Carlos III de Madrid* y editado por Adela Mora Cañada y Carolina Rodríguez López. Junto a los textos redactados por las dos editoras aparecen las colaboraciones de diversos especialistas.

Igualmente, durante este curso algunos miembros del Instituto han seguido colaborando en el proyecto de investigación (DGESIC PB98-1471) dirigido por el profesor Mariano Peset desde la Universidad de Valencia y que lleva por título: *Ciencia y doctrina en las universidades españolas y su relación con América y Europa (ss. XVI a XX)*.

Publicaciones

Además de la aparición de estos *Cuadernos* que ya hacen el número siete de la colección, en 2004 vieron la luz los volúmenes diez, once, doce, trece y catorce de la *Biblioteca* del Instituto. El primero, bajo el título *La enseñanza del derecho en el siglo XX. Homenaje a Mariano Peset*, recoge, bajo la coordinación de Adela Mora, los trabajos (ponencias y comunicaciones) presentados al seminario que, con el mismo nombre, este Instituto organizó en Colmenarejo (Madrid) en septiembre de 2003.

En el volumen decimoprimer, Manuel Martínez Neira, José M.^a Puyol Montero y Carolina Rodríguez López, ofrecen en *La universidad española 1889-1939*, un repertorio de legislación en el que se recopilan todas las normas que en materia universitaria los distintos gobiernos españoles redactaron en la cronología señalada.

El libro que distinguimos con el número doce, *Hacia un modelo universitario*, ya ha sido abordado en el aparatado anterior. Por su parte, el volumen decimotercero de la *Biblioteca* ofrece al lector las actas del VII congreso internacional sobre Historia de las Universidades Hispánicas que con el título *Manuales y textos de enseñanza en la universidad liberal* edita Manuel Ángel Bermejo Castrillo abar-

ca las grandes áreas de conocimiento ya tradicionales en la Universidad: Economía, Derecho, Filosofía, Historia, Medicina y Ciencias.

Por último, ha visto la luz el trabajo de Susana Guijarro González, *Maestros, escuelas y libros. El universo cultural de las catedrales en la Castilla medieval*. El ámbito espacial y cronológico de este libro se centra en las nuevas catedrales de lo que fueron del reino de Castilla y León, hasta su unión en 1230 bajo el reinado de Fernando III, desde el siglo XI al XV: Astorga, León, Salamanca, Segovia, Zamora, Ávila, Burgo de Osma, Palencia y Valladolid.

Asuntos varios

Durante el año 2004 ha continuado la dotación de la beca de investigación de la que viene disfrutando la doctora Carolina Rodríguez López.

También han continuado los trámites para la conversión del Instituto Antonio de Nebrija en Instituto Universitario de Investigación a la luz de la Ley Orgánica de Universidades (6/2001 de 21 de diciembre).

El Instituto sigue dedicando una importante partida de su presupuesto a la adquisición de obras para los fondos bibliográficos sobre historia de las universidades.

Por último, Gian Paolo Brizzi y Dámaso de Lario se han incorporado al Consejo Científico.

Próximas actividades del instituto

Seminario permanente Instituto Antonio de Nebrija

El Instituto Antonio de Nebrija pretende retomar una de sus preocupaciones desde sus orígenes: la posibilidad de convertirse en centro de referencia, exposición discusión y difusión de los trabajos de investigación (en curso, en fase avanzada de elaboración o ya publicados) en relación con la historia de las Universidades. Heredero de las *Jornadas sobre Ciencia y Universidad* que este centro organizó desde 1997, el Seminario Permanente que ahora se presenta retomará esencialmente el espíritu y forma que éstas presentaron.

El Seminario será organizado en las fechas puntuales que irán siendo anunciadas. Para el curso 2004-2005 el tema elegido es el de

la enseñanza del derecho y las letras en la Universidad liberal. A lo largo de cada sesión, el investigador invitado podrá presentar su trabajo ante los asistentes para después darse paso al debate correspondiente. Con el ánimo de que estas reuniones sean dinámicas y participativas, tres semanas antes de la celebración de cada seminario se colgará en el web del instituto el resumen del trabajo que el autor vaya a presentar para que así, con el conocimiento previo de todos los asistentes, el debate se agilice. Igualmente, los miembros del consejo científico podrán valorar los trabajos y ofrecer los comentarios que estimen oportunos.

A lo largo del curso 2004-2005 está prevista la participación de: Mirella Romero, Laura Beck, Ricardo Fonseca, Manuel Martínez Neira, Ana Maria Merico-Stephens, Ramon Aznar i Garcia, Manuel Bermejo y María José María e Izquierdo.

Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija

El número 8 de los *Cuadernos del Instituto* se cerrará en la primera semana de septiembre de 2005, por lo que a lo largo del curso podrán enviarse artículos y colaboraciones propuestas al consejo de redacción, así como reseñas bibliográficas y noticias.

RESÚMENES*

C. Carrasco García, *La historia del derecho romano de Castillejo. A propósito de su reimpresión*

Resumen: La autora aborda el estado de la enseñanza del derecho romano en el primer tercio del siglo XX en las facultades de derecho de España y su relación con otros países occidentales. Toma como pretexto para sus notas la reedición de la historia del derecho romano publicada en 1935 por Castillejo.

Palabras clave: Derecho romano, España, Segunda República

Summary: The author describes the standing of Roman law teaching in Spanish law schools during the first part of the XX century and how it relates with its teaching in other western countries. She bases her discussion of this topic on a new edition of Castillejo's 1935 book, *The History of Roman Law*.

Key words: Roman Law, Spain, Teaching, Second Republic.

C. Hornero Méndez, *El doctorado en derecho privado en la Universidad de Sevilla. La lógica del presente sobre los hechos del pasado*

Resumen: Este trabajo se propone presentar y analizar los estudios de doctorado en derecho privado en la Universidad de Sevilla, en el período comprendido entre 1955 y 1985 y atendiendo a dos sectores esenciales: el derecho civil y el derecho mercantil.

Palabras clave: Doctorado, Universidad de Sevilla, derecho civil, derecho mercantil.

Summary: This work presents and analyzes the doctoral program in private law offered by the University of Sevilla between 1955 and 1985. It focuses on two essential components of this program: civil law and commercial law.

Key words: Doctorate, University of Sevilla, Civil Law, Commercial Law.

* Esta sección ha sido coordinada por Ana María Merico-Stephens.

A. López Vega, *La Universidad de Marañón*

Resumen: En este trabajo se pretende estudiar la trayectoria de Gregorio Marañón en el mundo universitario y, especialmente, su pensamiento acerca de la Universidad de su tiempo —pensamiento desarrollado y referido, fundamentalmente, a la Universidad durante el *Primer Franquismo*—. Para ello, se analiza su participación en algunos de los principales debates académicos de la época y las diferentes influencias que su *pensamiento universitario* recibió. Consecuencia de su análisis de las principales deficiencias de la situación universitaria española, abogó por la creación de un *espíritu universitario*. Marañón participó en la corriente intelectual que, tras la guerra civil, trató de recuperar la tradición liberal española que había quedado truncada con la llegada del General Franco al poder.

Palabras clave: Universidad, Marañón, espíritu universitario, debates académicos

Summary: This work endeavours to study the course taken by Gregorio Marañón in the academic world and, especially, his thoughts on the University of his time —thoughts that, fundamentally, developed during the *First Franco Years* and speak to the University of that period—. It thus analyzes his participation in some of the principal academic debates of the time, as well as the various influences his *thoughts about the academy* received. Marañón advocated the creation of a university spirit, which sprung from his analysis of the main deficiencies suffered by the academy. Marañón participated in the intellectual movement that, tried to recover the liberal Spanish tradition that had been cut short with the coming to power of General Franco after the civil war.

Key words: University, Marañón, academic spirit, academic debates.

M. J. María e Izquierdo, *Contexto doctrinal de las primeras cátedras de derecho del trabajo en España*

Resumen: El Derecho del trabajo como disciplina universitaria autónoma tiene en España apenas sesenta años de vida, aunque venía siendo objeto de atención de juristas, economistas, sociólogos

y políticos desde mucho tiempo atrás. Su gestación fue larga y controvertida y antes de que aparecieran en nuestro país las primeras cátedras de esta rama jurídica se desarrolló una rica y polémica doctrina con respecto a la realidad jurídico-social que provocó su nacimiento, no sólo docente, sino también científico. Un breve análisis de todo esto es el contenido de este artículo, así como un primer acercamiento a esas cátedras que se mencionaban al principio. En especial, la primera de ellas, ocupada por Eugenio Pérez Botija en 1947 en la facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Palabras clave: Derecho del trabajo, derecho laboral, autonomía científica de derecho del trabajo, cátedras de derecho del trabajo, contrato de trabajo.

Summary: Labor and Employment Law as an autonomous subject has emerged only recently in the Spanish university. It is sixty-years young, though it has been the object of attention by lawyers, economists, sociologists and politicians for a long time. Its incubation period was lengthy and controversial; a rich and controversial scholarship, regarding the legal and social realities that promoted its educational and scientific birth, evolved long before the creation of the first tenured positions in this area of the law. This article offers a brief analysis of this phenomenon, and it provides original insights about the people hired to fill these tenured positions and the disciplines themselves. A special focus is on the chair Eugenio Perez Botija occupied in 1947 at the University's Social and Politics Sciences Department.

Key words: Labor Law, Employment Law, Chairs in Labor and Employment Law,, Scientific Autonomy, Labor and Employment Contracts.

M. Martínez Neira, *Sobre los orígenes de la enseñanza de la historia del derecho en la universidad italiana*

Resumen: El estudio aborda la creación de las primeras cátedras de historia del derecho italiano y la evolución de estos estudios hasta la llegada del fascismo. El autor distingue tres períodos en la configuración de esta disciplina y puntualiza la función que tuvo en los planes de estudio y en la formación del Estado unitario.

Palabras clave: Enseñanza del derecho, siglo XIX, Italia.

Summary: This research addresses the creation of the first chairs in Italian Legal History and traces the evolution of this subject matter from its inception through the onset of fascism. The author identifies three periods in the development of this discipline and highlights the role that it played in the curriculum and in the formation of the Unitary State.

Key words. Teaching of Law, XX century, Italy, Unitary State.

A. M. Merico-Stephens, *Notas sobre la historia de la enseñanza del derecho en Estado Unidos*

Resumen: En estas notas, la autora describe, concisamente, la historia de la enseñanza del derecho en Estados Unidos desde sus orígenes hasta los tiempos modernos. La autora relata los obstáculos que hubo que superar para establecer una cátedra de derecho dentro de la universidad, la influencia que los colegios de abogado y la asociación de facultades de derecho tuvieron en este desarrollo, el establecimiento de la metodología del caso como vehículo pedagógico principal, y la función que tienen los abogados dentro de la sociedad. Estas notas concluyen con una breve descripción de los requerimientos actuales para cursar una carrera de derecho en una universidad acreditada americana.

Palabras clave: Enseñanza del derecho, Estados Unidos, Método del Caso, Curso de Derecho de Post-grado, American Bar Association, Colegio Nacional de Abogados.

Summary: In this brief essay, the author describes the origins of American legal education and situates it within the role that lawyers play within American society. The essay explains the development of the profession from the apprenticeship system to the modern day requirement of a graduate degree and a bar exam. The essay also covers the creation of the first full-time teaching positions, the teaching innovations introduced by C. C. Langdell, the influence of the American Bar Association and the Association of American Law Schools in the movement toward the institutionalization of legal studies. It concludes with a brief account of the modern requirements to enter a program of legal studies at an accredited law school.

Key words: American Legal Education, History of Legal Education, Case Method, American Bar Association, Law School Requirements

G. Perales Birlanga, *El nacimiento de la prensa estudiantil en la ciudad de Valencia*

Resumen: A fines del XIX los estudiantes universitarios comenzaron a elaborar publicaciones realizadas por y para ellos. En este artículo se trata el caso valenciano. Estas revistas se enfrentaron a las limitaciones propias de la condición escolar: son breves y producen pocos números. Además hay relación directa entre la política generalmente restrictiva de los gobiernos conservadores y la más permisiva de los liberales, en cuyos gobiernos se diversifican las revistas. Son publicaciones de carácter profesional que se van politizando, tanto de católicos, más desarrollados, como de carácter liberal.

Palabras clave: Prensa escolar. Universidad de Valencia. Estudiantes universitarios.

Summary: By the end of the XIX century, university students began to publish their work for their own consumption and use. This paper discusses the student publications in the journals of Valencia (Spain). These journals confronted the limitation inherent in scholarly publishing in a particular institution: the issues are brief and the number of publications is limited. Furthermore, because of the relationship between the restrictive conservative government policies and the more permissive liberal ones, the publications had to diversify [its content?] to accommodate the competing views. These student scholarly presses gradually became politicized and acquired a Catholic slant as well as a liberal one.

Key words: School press. Valencia University. University students.

J. M. Puyol Montero, *El plan republicano en la facultad de derecho de Madrid*

Resumen: El autor estudia las vicisitudes del plan republicano de 1931 en la facultad de derecho de Madrid haciendo hincapié en algunos aspectos novedosos: las enseñanzas prácticas, la división de la cátedra de derecho internacional, el interés por los estudios de economía y los estudios especiales de administración. La existencia de la documentación fundamental utilizada —el libro de actas de la Junta de facultad— marca el período abordado, 1931-1934.

Palabras clave: facultad de derecho, Segunda República, España.

Summary: The author addresses the vicissitudes of the 1931 republican plan of adopted by the Law School of Madrid, providing novel insights into some of its aspects, like practice courses and its teaching, the split of the chair in international law, the rising interest in economic studies and in special administration studies. The author bases his research on a document titled «el libro de acta de la Junta de facultad —which covers the period between 1931 and 1934.

Key words: School of Law, Second Republic, Spain

M. Romero Recio, *La historia antigua en la enseñanza: los ejercicios públicos de Historia Literaria en los Reales Estudios de San Isidro*

Resumen: En este artículo se mostrará el interés que suscitó el estudio de mundo antiguo en España durante el siglo XVIII a través de los estudios abordados en la Cátedra de Historia Literaria en los Reales Estudios de San Isidro. El objetivo principal será determinar cuáles fueron los temas predilectos de los estudiantes y por qué. El estudio también tratará de mostrar la existencia de diferentes interpretaciones de las culturas antiguas en función de los intereses ideológicos de los autores de los exámenes.

Palabras clave: Historia antigua, Historiografía, Educación, Siglo XVIII.

Summary: This article addresses the interest that arose during 18th century Spain in the study of the ancient world through the Literary History Cátedra in Reales Estudios de San Isidro. Its main aim is to to assess which topics of this classical history were reviewed for the students and why. The study also discusses the different interpretations that exist about ancient cultures and their relationship to the ideological interests of the exam writers.

Key words: Ancient History, Historiography, Education, 18th century..

PUBLICACIONES RECIBIDAS

- S. Cassese (ed.), *Il testo unico delle norme sull'Università*, Bolonia, CLUEB, 2002, 215 pp.
- B. Cores Trasmonte, *Os senadores da Universidade de Santiago*, Santiago de Compostela, CSIC, 1998.
- Cronos*, Cuadernos valencianos de Historia de la Medicina y de la Ciencia, n.º 5-6, (2002-2003), 358 pp.
- Entre o passado e o futuro. Universdiade Federal de Minas Gerais. 75 anos*, Belo Horizonte, 2003.
- L. Giacardi (ed.), *Francesco Faà di Bruno. Ricerca scientifica, insegnamento e divulgazione*, Turín, Deputazione subalpina di storia patria, 2004, 671 pp.
- T. F. Glick, R. Ruiz y M. A. Puig-Samper (eds.), *El darwinismo en España e Iberoamérica*, Madrid, CSIC-Doce calles, 1999.
- J. L. Guereña (dir.), *Famille et éducation en Espagne et en Amérique Latine*, Tours, CIREMIA-Publications de l'Université François Rabelais, 2002, 686 pp.
- Françoise Hiraux y Françoise Mirguet, *Collection de cours manuscrits de l'Université de Louvain 1425-1797*, Louvain, Publications des Archives de l'Université Catholique de Louvain, 2003, 585 pp.
- J. M. López Piñero, *El grabado en la ciencia hispánica*, Madrid, CSIC, 1987.
- F. Michavila y J. Martínez (eds.), *La profesión de profesor en la Universidad*, Madrid, Consejería de Educación, 222 pp.
- A. Miguel Alonso, «Nuevos datos para la historia de la biblioteca Universidad Complutense. La librería del Colegio Máximo de Alcalá, de la Compañía de Jesús», *La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América*, Tomo II, Madrid, 2004, pp. 459-481.
- E. Muñoz e I. Sánchez, *La Universidad, un reto de Castilla-La Mancha*, Ciudad real, Almud, 2003, 341 pp.
- Paramillo*, Revista de la Universidad Católica del Táchira (Venezuela), n.º 21 (2001).
- A. Poppi, *Presenza dei francescani conventuali nel collegio dei teologi dell'Università di Padova. Appunti d'archivio (1510-1806)*, Padova, Centre Studi Antoniani, 2003, 222 pp.
- A. Poppi, «La scientificità del discorso teologico nella scuola padovana del seicento», en G. Paiaia (ed.), *La presenza dell'aristotelis-*

- mo padovano nella filosofia della prima modernità*, Roma-Padova, Editrice antenore, 2002, pp. 339-370.
- A. Poppi, «Profilo storico-istituzionale della teologia nello studio di Padova (1363-1806)», *Quaderni per la storia dell'Università di Padova*, n.° 35, (2002), pp. 3-46.
- A. Poppi, «Studenti inglesi «graziati» dal Collegio dei teologi nello studio di Padova: una integrazione», *Quaderni per la storia dell'Università di Padova*, n.° 35, (2002), pp. 181-184.
- A. Poppi, «Note sul Collegio dei teologi «antiquissimi Studii patavini» (sec. XVI)», *Atti e memorie dell'Accademia Galileiana di Scienze, Lettere e Arti già dei Ricovrati e patavina*, Padova, 2001, pp. 63-79.
- J. del Rey Fajardo, SJ, *Catedráticos jesuitas de la Javeriana colonial*, Bogotá, CEJA, 2002, 394 pp.
- J. del Rey Fajardo, SJ y G. Marquínez Argote, *Denis Mesland. Amigo de Descartes y maestro javeriano (1615-1672)*, Bogotá, CEJA; 2002, 225 pp.
- A. Romano (ed.), *Dagli annuari della Università di Messina 1928-1929 e 1929-1930*, Messina, Presso l'Ateneo, 1996, 294 pp.
- J. M. Sánchez Ron (coord.), *La Junta para Ampliación de estudios e investigaciones científicas 80 años después*, Madrid, CSIC, 1988, 2 vols.
- G. Terenna (ed.), *Le donazioni di strumenti scientifici e medici*, Siena, Centro servizi tutela e valorizzazione dell'Antico patrimonio scientifico senese, 2003, 255 pp.
- Universidad Politécnica de Madrid, *Curso 2001/2002. Memoria*, Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, 2003, 254 pp.

Los *Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija* tienen por objeto los estudios sobre la historia de la universidad y de la ciencia, sobre todo en el contexto de la civilización occidental.

Quieren ser un vehículo que facilite el conocimiento de investigaciones en marcha, bibliografía, reuniones científicas y otras noticias.

PRESENTACIÓN DE ORIGINALES

Los trabajos presentados deberán ser inéditos. Los autores enviarán su colaboración en disquette o por correo electrónico a la redacción. Cada número se cierra en la primera semana completa de septiembre. Junto al trabajo debe aparecer un resumen en castellano e inglés de una extensión máxima de cien palabras así como las palabras clave que estime oportunas el autor o la autora.

En la redacción no se usará negrita ni subrayado. Tampoco se utilizarán textos en mayúsculas para títulos o epígrafes.

Las citas deberán ir a pie de página. La bibliografía se citará con el siguiente orden: autor (nombre de pila y apellidos), título de la obra en cursivas, ciudad y año. Para separar estos datos se utilizará la coma. En el caso de artículos, éstos irán entre comillas. Los títulos de revistas no irán abreviados y se pondrán en cursiva, el número de la revista en arábigos y el año entre paréntesis. Cuando se cite la misma referencia varias veces, se hará completa la primera vez y abreviada en las restantes, sin utilizar locuciones latinas.

El nombre del autor y la institución a la que pertenece aparecerá al final de la colaboración.

La redacción acusará recibo de los originales, que serán sometidos a la valoración de dos lectores anónimos miembros del consejo asesor. Su publicación podrá ir condicionada a la introducción de modificaciones de acuerdo con los criterios de los evaluadores y la redacción.

Asimismo se informará de las publicaciones recibidas que podrán ser recensionadas.

INSTITUTO ANTONIO DE NEBRIJA

PUBLICACIONES

CUADERNOS

- Vol. 1 (1998)
- Vol. 2 (1999)
- Vol. 3 (2000)
- Vol. 4 (2001)
- Vol. 5 (2002)
- Vol. 6 (2003)
- Vol. 7 (2004)

BIBLIOTECA

1. *Estado de la Universidad de Alcalá (1805)*
Estudio preliminar de José Luis Peset
Edición de Diego Navarro
2. *La investigación en la universidad*
Edición de Carmen Merino
3. *Orientalismo y nacionalismo español*
Aurora Rivièrè
4. *El estudio del derecho. Libros de texto y planes de estudio*
Manuel Martínez Neira
5. *Autonomía y reformas en la Universidad de Valencia*
Daniel Comas Caraballo
6. *La Universidad de Madrid en el primer franquismo: ruptura y continuidad (1939-1951)*
Carolina Rodríguez López

7. *Cánones y Leyes en la universidad de Alcalá durante el reinado de Carlos III*
Ramon Aznar i Garcia
8. *Consecuencias educativas de la expulsión de los jesuitas de América*
Enrique Villalba Pérez
9. *Archivos universitarios e historia de las universidades*
Edición de José Ramón Cruz Mundet
10. *La enseñanza del derecho en el siglo XX. Homenaje a Mariano Peset*
Edición de Adela Mora Cañada
11. *La Universidad española 1889-1939. Repertorio de legislación*
Manuel Martínez Neira, José M.^a Puyol Montero y Carolina Rodríguez López
12. *Hacia un modelo universitario: la Universidad Carlos III de Madrid*
Edición de Adela Mora Cañada y Carolina Rodríguez López
13. *Manuales y textos de enseñanza en la Universidad liberal*
Edición de Manuel Ángel Bermejo Castrillo
14. *Maestros, escuelas y libros. El universo cultural de las catedrales en la Castilla medieval*
Susana Guijarro González